

CUARTO TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO

RIT 98-2021

RUC 1700398060-K

Santiago, lunes trece de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO.

PRIMERO. *Intervinientes y tribunal.* Que ante esta Sala del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, integrada por las magistrados doña Geni Morales Espinoza, quien presidió, doña María Inés Collin Correa y doña Isabel Espinoza Morales, en las audiencias de los días 28 y 29 de octubre, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 de noviembre del actual se llevó a efecto el juicio oral en causa RIT 98-2021, RUC 1700398060-K, seguida en contra de **MARÍA ELIZABETH SOSA AQUINO**, cédula de identidad para extranjeros N°24.629.438-0, nacida en Paraguay el 28 de enero de 1982, de actuales 39 años, soltera, con estudios superiores técnicos, de oficio corredora de propiedades, domiciliada en calle Santa Rosa N° 170, departamento 704, comuna de Santiago, en esta ciudad; quien compareció a estrados asistido por las abogadas defensoras privada doña Cecilia Acuña Núñez y doña Dominique Legisos Soto.

Sostuvo la acusación, las fiscales del Ministerio Público doña Carolina Suazo Schwencke y doña María Victoria Boccanegra Navarro; compareciendo también la abogada querellante particular y adherente a la acusación fiscal, doña Carolina Torres Bascur, -en representación de las víctimas doña Samantha Araceli González Rivero, ciudadana paraguaya, soltera, cédula nacional de identidad para extranjeros N°26.998.615-8 y doña “S.CH.”, ciudadana paraguaya, soltera, cédula de identidad civil N° 4.789.359, y de doña “H.CH.”, ciudadana paraguaya, soltera, cédula de identidad civil N° 5.276196, y; el querellante institucional y acusador particular, Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) representado por los profesionales doña María José Castillo Oñatt y doña Paulina Pérez Zapata.

SEGUNDO. Acusación del Ministerio Público y querellante particular. Que, conforme al auto de apertura de fecha siete de abril del año en curso, los hechos de la acusación fiscal -a los cuales se adhirió íntegramente la parte querellante particular- son los siguientes:

“Relación de los Hechos: Antecedentes Preliminares.

Al menos desde el mes de febrero de 2017 al 27 de noviembre de 2019, la imputada María Elizabeth Sosa Aquino, desde distintos departamentos ubicados en Av. Santa Rosa N° 170, de la comuna de Santiago, principalmente desde el departamento 704 del mismo edificio, ha promovido y facilitado la entrada a Chile de mujeres de nacionalidad paraguaya para que ejerzan la prostitución en nuestro país. En algunos casos, aprovechando la situación de vulnerabilidad de las víctimas, las ha recibido y acogido con fines de explotación sexual. Para ello arrendó primero un departamento ubicado en Av. Santa Rosa N° 170, Depto. 1005, comuna de Santiago. En el mes de julio de 2018 arrendó con la misma finalidad el departamento ubicado Luis Thayer Ojeda N° 127, depto. N° 902, comuna de Providencia y finalmente en julio del año 2019 la casa ubicada en calle Ruiz de Gamboa N° 029, de la comuna de Providencia, manteniendo además durante todo ese tiempo el departamento de Av. Santa Rosa N° 170, Depto. 1005, comuna de Santiago. Una vez que promovía o facilitaba el ingreso a las víctimas a Chile o cuando las recibía o acogía con fines de explotación sexual, las inscribía en la página web sexo.cl y en otros sitios web, con la finalidad de ofrecer sus servicios sexuales, los que eran prestados en alguno de los domicilios antes indicados o en el lugar que la imputada determinara, manteniendo sólo ella el primer contacto con los clientes, acordando con ellos el tipo de servicio sexual que cada una de las víctimas debía prestar. Para ello se hacía pasar por las víctimas, avisándoles a ellas con posterioridad lo que debían hacer. De la misma forma controlaba y vigilaba a las víctimas a través de cámaras de seguridad, debiendo prestar servicios sexuales todos los días de la semana por un valor de entre \$30.000 a \$50.000.- la hora, en los domicilios indicados o en los lugares donde la imputada determinara, generalmente en las comunas de Santiago o Providencia, evento en que el pago era de \$65.000 la hora. En el caso que los servicios sexuales se prestaran a domicilio la imputada trasladaba a las víctimas en el vehículo utilizado por ella correspondiente al vehículo Kia PPU JFPB 26, cobrándole a las víctimas por ello.

Las víctimas debían entregar al menos la mitad de los valores indicados a la imputada, además del valor del traslado, si correspondía. De la misma forma en los casos en que la imputada compraba los pasajes de las víctimas para su viaje a Chile, éstas debían pagar la deuda que cobraba la imputada por el pasaje, antes de recibir algún tipo de pago por los servicios sexuales que debían prestar.

PRIMER HECHO.

El día 04 de febrero de 2017, la imputada recibió a las víctimas de nacionalidad paraguaya de iniciales Y.C.F. de 19 años y de iniciales L.J.D. de 20 años a esa fecha, luego de haber promovido y facilitado sus ingresos a Chile para que ejercieran la prostitución en nuestro país. En efecto la imputada le envió a la víctima de iniciales Y.C.F. a Paraguay \$138.928 con fecha 02 de febrero de 2017, esto es, dos días antes del viaje a Chile. Luego la imputada publicó con fecha 15 de febrero de 2017, los datos de ambas víctimas en la página web sexo.cl, con la finalidad de que ejercieran la prostitución, en nuestro país, principalmente en el departamento N°1005, de Av. Santa Rosa N°170, Santiago y respecto de la víctima de iniciales Y.C.F. con posterioridad también en el domicilio ubicado en Luis Thayer Ojeda N° 127, depto. N° 902, comuna de Providencia.

Para ello señaló como nombre de fantasía para Y.C.F. “Rossana” y para L.J.D. “Mini Barby”.

SEGUNDO HECHO.

El día 09 de diciembre de 2017, la imputada recibió a la víctima de nacionalidad paraguaya de iniciales N.T.P. de 20 años a esa fecha, luego de haber promovido y facilitado su ingreso a Chile para que ejerza la prostitución en nuestro país. En efecto la imputada le envió a Paraguay la suma de \$167.280 con fecha 07 de diciembre de 2017, esto es dos días antes del viaje a Chile. El día 17 de enero de 2018, la imputada publicó los datos de la víctima en la página web sexo.cl, con la finalidad de que ejercieran la prostitución, en nuestro país, principalmente en el departamento N°1005, de Av. Santa Rosa N°170, Santiago.

Para ello señaló como nombre de fantasía de la víctima “Jacky”.

TERCER HECHO.

El día 17 de enero de 2018, la imputada recibió a la víctima de nacionalidad paraguaya de iniciales C.F.S. de 20 años a esa fecha, luego de haber promovido y facilitado su ingreso a Chile para que ejerza la prostitución en nuestro país.

En efecto la imputada el día 24 de enero de 2018 publicó los datos de la víctima en la página web sexo.cl, con la finalidad de que ejerciera la prostitución, en nuestro país, principalmente en el departamento N°1005, de Av. Santa Rosa N°170, Santiago. Para ello señaló como nombre de fantasía de la víctima “Micky”.

CUARTO HECHO.

El día 30 de junio de 2018, la imputada recibió a las víctimas de nacionalidad paraguaya de iniciales N.V.T. y M.O.B. de 24 y 26 años de edad a esa fecha, respectivamente, luego de haber promovido y facilitado sus ingresos a Chile para que ejerzan la prostitución en nuestro país.

En efecto la imputada el día 04 de julio de 2018, publicó los datos de las dos víctimas en la página web sexo.cl, con la finalidad de que ejercieran la prostitución, en nuestro país, principalmente en el departamento N°1005, de Av. Santa Rosa N°170, Santiago. Para ello señaló como nombre de fantasía de la víctima N.V.T. “Miley” y de la víctima M.O.B. “Jade”.

QUINTO HECHO.

El día 20 de julio de 2018, la imputada recibió a la víctima de nacionalidad paraguaya de iniciales M.B.A. de 20 años a esa fecha, luego de haber promovido y facilitado su ingreso a Chile para que ejerza la prostitución en nuestro país.

En efecto la imputada el día 24 de julio de 2018 publicó los datos de la víctima en la página web sexo.cl, con la finalidad de que ejerciera la prostitución, en nuestro país, principalmente en el departamento N°1005, de Av. Santa Rosa N°170, Santiago. Para ello señaló como nombre de fantasía de la víctima “Palomita”.

SEXTO HECHO.

El día 28 de julio de 2018, la imputada recibió a la víctima de nacionalidad paraguaya de iniciales L.V.A. de 21 años a esa fecha, luego de haber promovido y facilitado su ingreso a Chile para que ejerza la prostitución en nuestro país.

En efecto la imputada el día 01 de agosto de 2018 publicó los datos de la víctima en la página web sexo.cl, con la finalidad de que ejercieran la prostitución, en nuestro país,

principalmente en el departamento N°1005, de Av. Santa Rosa N°170, Santiago. Para ello señaló como nombre de fantasía de la víctima “Barbie”.

SÉPTIMO HECHO.

El día 17 de agosto de 2018, la imputada captó y trasladó a la víctima de nacionalidad paraguaya de iniciales H.C. de 22 años a esa fecha, aprovechando la situación de vulnerabilidad en que se encontraba específicamente una importante necesidad económica al tener un hijo menor de edad. En efecto la imputada compró los pasajes de la víctima desde Asunción a Santiago con fecha 13 de agosto de 2018, esto es cuatro días antes del viaje. El día 20 de agosto de 2018, la imputada publicó los datos de la víctima en la página web sexo.cl, señalando para ello como nombre de fantasía de la víctima “Pao”, con la finalidad de explotarla sexualmente, debiendo prestar servicios sexuales con los clientes que decidía la imputada, siendo vigilada y controlada por ella, incluso respecto de las propinas que recibía de los clientes.

Todo ello principalmente en el departamento N°1005, de Av. Santa Rosa N°170, Santiago y en calle Ruíz de Gamboa N°29, Providencia.

OCTAVO HECHO.

El día 01 de septiembre de 2018, la imputada recibió a la víctima de nacionalidad paraguaya de iniciales A.G.S. de 30 años a esa fecha, luego de haber promovido y facilitado su ingreso a Chile para que ejerza la prostitución en nuestro país.

En efecto la imputada el día 05 de septiembre de 2018 publicó los datos de la víctima en la página web sexo.cl, con la finalidad de que ejercieran la prostitución, en nuestro país, principalmente en el departamento N°1005, de Av. Santa Rosa N°170, Santiago. Para ello señaló como nombre de fantasía de la víctima “Mini Barbie”.

NOVENO HECHO.

El día 06 de octubre de 2018, la imputada recibió a la víctima de nacionalidad paraguaya de iniciales A.D.J.O. de 28 años a esa fecha, luego de haber promovido y facilitado su ingreso a Chile para que ejerza la prostitución en nuestro país.

En efecto la imputada el día 12 de octubre de 2018 publicó los datos de la víctima en la página web sexo.cl, con la finalidad de que ejerciera la prostitución, en nuestro país,

principalmente en el departamento N°1005, de Av. Santa Rosa N°170, Santiago. Para ello señaló como nombre de fantasía de la víctima “Yayita”.

DÉCIMO HECHO.

El día 20 de octubre de 2018, la imputada recibió a la víctima de nacionalidad paraguaya de iniciales L.P.M. de 24 años a esa fecha, luego de haber promovido y facilitado su ingreso a Chile para que ejerza la prostitución en nuestro país.

En efecto la imputada el día 26 de octubre de 2018 publicó los datos de la víctima en la página web sexo.cl, con la finalidad de que ejerciera la prostitución, en nuestro país, principalmente en el departamento N°1005, de Av. Santa Rosa N°170, Santiago. Para ello señaló como nombre de fantasía de la víctima “Adela”.

HECHO 11.

El día 07 de enero de 2019, la imputada recibió a la víctima de nacionalidad paraguaya de iniciales A.L.G. de 21 años a esa fecha, luego de haber promovido y facilitado su ingreso a Chile para que ejerza la prostitución en nuestro país. En efecto la imputada compró los pasajes de la víctima desde Asunción a Santiago con fecha 02 de enero de 2019, esto es cinco días antes del viaje.

El día 09 de enero de 2019, la imputada publicó los datos de la víctima en la página web sexo.cl, con la finalidad de que ejerciera la prostitución en nuestro país, principalmente en el departamento N°1005, de Av. Santa Rosa N°170, Santiago. Para ello señaló como nombre de fantasía de la víctima “Barbie”.

HECHO 12.

A principios del mes de abril de 2019, la imputada recibió a la víctima de nacionalidad paraguaya de iniciales S.G.R., de 19 años de edad, quien había ingresado recientemente al país, esto es, el día 30 de marzo de 2019, para acogerla en el inmueble ubicado en Luis Thayer Ojeda N° 127, depto. N° 902, comuna de Providencia, aprovechando la situación de vulnerabilidad en que se encontraba, toda vez que no tenía donde vivir y necesitaba sustento económico.

De esta forma, la víctima debió prestar servicios sexuales con los clientes que decidía la imputada, siendo vigilada y controlada por ella. Con la finalidad de explotar sexualmente a la

víctima, la imputada publicó sus fotografías el día 11 de abril de 2019 en el sitio web www.sexo.cl indicando como nombre de fantasía de la víctima “Pamela”.

HECHO 13.

El día 13 de julio de 2019, la imputada recibió a la víctima de nacionalidad paraguaya de iniciales A.C.C. de 18 años a esa fecha, luego de haber promovido y facilitado su ingreso a Chile para que ejerza la prostitución en nuestro país. En efecto la imputada el día 18 de julio de 2019 publicó sus datos en la página web sexo.cl, con la finalidad de que ejerciera la prostitución, en nuestro país, principalmente en el departamento N°1005, de Av. Santa Rosa N°170, Santiago. Para ello señaló como nombre de fantasía de la víctima “Monse”.

HECHO 14.

El día 31 de agosto de 2019, la imputada recibió a la víctima de nacionalidad paraguaya de iniciales J.M.D. de 21 años, luego de haber promovido y facilitado su ingreso a Chile para que ejerza la prostitución en nuestro país. En efecto la imputada compró los pasajes para que la víctima viajara a Chile además de enviarle US 300 con la finalidad de exhibirlos a la autoridad migratoria, instruyéndola para que indicara que venía a visitar una madrina a Chile, es decir para simular la calidad de turista que no tenía.

El día 10 de octubre de 2019, publicó los datos de la víctima en la página web sexo.cl, con la finalidad de que ejerciera la prostitución, en nuestro país, en el departamento N°1005, de Av. Santa Rosa N°170, Santiago y en la casa ubicada en calle Ruíz de Gamboa N°29, Providencia. Para ello indicó como nombre de fantasía de la víctima “Jany”.

HECHO 15.

El día 7 de septiembre de 2019, la imputada recibió a la víctima de nacionalidad paraguaya de iniciales A.I.G. de 18 años, luego de haber promovido y facilitado su ingreso a Chile para que ejerza la prostitución en nuestro país. En efecto la imputada compró los pasajes para que la víctima viajara a Chile además de enviarle US 300 con la finalidad de exhibirlos a la autoridad migratoria, instruyéndola para que indicara que venía donde una tía a Chile, es decir para simular la calidad de turista que no tenía.

El día 10 de septiembre de 2019, publicó los datos de la víctima en la página web sexo.cl, con la finalidad de que ejerciera la prostitución, en nuestro país, en el departamento N°1005, de

Av. Santa Rosa N°170, Santiago y en la casa ubicada en calle Ruíz de Gamboa N°29, Providencia. Para ello indicó como nombre de fantasía de la víctima “Mirna”.

HECHO 16.

El día 19 de octubre de 2019 la imputada captó y trasladó a la víctima de nacionalidad paraguaya de iniciales S.E.C. de 27 años a esa fecha, aprovechando la situación de vulnerabilidad en que se encontraba específicamente una importante necesidad económica al tener un hijo menor de edad. En efecto la imputada compró los pasajes de la víctima para que viajara desde Asunción a Santiago el día 18 de octubre de 2019.

La imputada publicó los datos de la víctima en la página web sexo.cl, señalando para ello como nombre de fantasía de la víctima “Arelis”, con la finalidad de explotarla sexualmente, debiendo prestar servicios sexuales con los clientes que decidía la imputada, siendo vigilada y controlada por ella, incluso respecto de las propinas que recibía de los clientes. Todo ello principalmente en el departamento N°1005, de Av. Santa Rosa N°170, Santiago y en la casa ubicada en calle Ruiz de Gamboa N° 029, de la comuna de Providencia.

HECHO 17.

El día 02 de noviembre de 2019, la imputada recibió a la víctima de nacionalidad paraguaya de iniciales L.E.A. de 29 años, luego de haber promovido y facilitado su ingreso a Chile para que ejerza la prostitución en nuestro país. En efecto la imputada compró el pasaje para que la víctima viajara a Chile y le envió la cantidad de US 300 con la finalidad que los exhibiera al momento de ingresar a Chile, instruyéndola para que indicara a la autoridad migratoria una finalidad de turismo que no tenía. Luego, a su llegada a Chile le entregó los US 300 previamente enviados por la imputada. Todo ello con la finalidad de que ejerciera la prostitución, en nuestro país, principalmente en el departamento N°1005, de Av. Santa Rosa N°170, Santiago. Para ello señaló como nombre de fantasía de la víctima “Mirna”.

A juicio de la fiscalía y de la querellante particular, los hechos individualizados como N°7, 12 y 16 son constitutivos de los **delitos consumados y reiterados de trata de personas con fines de explotación sexual**, previstos y sancionados en el artículo 411 quáter del Código Penal, en tanto que todos los demás casos, esto es, hechos N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 y 17, son constitutivos de **delitos consumados y reiterados de**

trata de personas con fines exclusivos de prostitución, ilícitos previstos y sancionados en el artículo 411 ter del Código Penal.

En todos los delitos, los acusadores le atribuyen participación a la acusada SOSA AQUINO en calidad de autora, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal.

En cuanto a circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, la fiscalía y la querellante particular sostienen que concurre únicamente la circunstancia minorante de irreprochable conducta anterior, prevista en el artículo 11 N°6 del Código Penal, sin que existan agravantes que la perjudiquen.

Por ello, solicitan se le impongan a la acusada las siguientes penas: la de *trece años de reclusión mayor en su grado medio y multa de 100 U.T.M.*, en tanto autora de los delitos consumados y reiterados de trata de personas con fines de explotación sexual (artículo 411 quáter del Código Penal) y la *de siete años y un día de reclusión mayor en su grado mínimo y multa de 20 U.T.M.*, por su responsabilidad como autora de los delitos consumados y reiterados de trata de personas con fines exclusivos de prostitución (artículo 411 ter del Código Penal), además de las sanciones accesorias legales, comiso de las especies incautadas y el pago de las costas de la causa.

TERCERO. Acusación del querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos. Que por su parte, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) en su calidad de querellante institucional dedujo acusación particular en los siguientes términos:

“I.- Relación de los hechos: Antecedentes Preliminares:

Al menos desde el mes de febrero de 2017 al 27 de noviembre de 2019, la imputada María Elizabeth Sosa Aquino, desde distintos departamentos ubicados en Av. Santa Rosa N° 170, de la comuna de Santiago, principalmente desde el departamento 704 del mismo edificio, ha promovido y facilitado la entrada a Chile de mujeres de nacionalidad paraguaya para que ejerzan la prostitución en nuestro país.

En algunos casos, aprovechando la situación de vulnerabilidad de las víctimas, las ha recibido y acogido con fines de explotación sexual. Para ello arrendó primero un departamento ubicado en Av. Santa Rosa N° 170, Depto. 1005, comuna de Santiago.

En el mes de julio de 2018 arrendó con la misma finalidad el departamento ubicado Luis Thayer Ojeda N° 127, depto. N° 902, comuna de Providencia y finalmente en julio del año 2019 la casa ubicada en calle Ruiz de Gamboa N° 029, de la comuna de Providencia, manteniendo además durante todo ese tiempo el departamento de Av. Santa Rosa N° 170, Depto. 1005, comuna de Santiago.

Una vez que promovía o facilitaba el ingreso a las víctimas a Chile o cuando las recibía o acogía con fines de explotación sexual, las inscribía en la página web sexo.cl y en otros sitios web, con la finalidad de ofrecer sus servicios sexuales, los que eran prestados en alguno de los domicilios antes indicados o en el lugar que la imputada determinara, manteniendo sólo ella el primer contacto con los clientes, acordando con ellos el tipo de servicio sexual que cada una de las víctimas debía prestar. Para ello se hacía pasar por las víctimas, avisándoles a ellas con posterioridad lo que debían hacer. De la misma forma controlaba y vigilaba a las víctimas a través de cámaras de seguridad, debiendo prestar servicios sexuales todos los días de la semana por un valor de entre \$30.000 a \$50.000.- la hora, en los domicilios indicados o en los lugares donde la imputada determinara, generalmente en las comunas de Santiago o Providencia, evento en que el pago era de \$65.000 la hora. En el caso que los servicios sexuales se prestaran a domicilio la imputada trasladaba a las víctimas en el vehículo utilizado por ella correspondiente al vehículo Kia PPU JFPB 26, cobrándole a las víctimas por ello.

Las víctimas debían entregar al menos la mitad de los valores indicados a la imputada, además del valor del traslado, si correspondía. De la misma forma en los casos en que la imputada compraba los pasajes de las víctimas para su viaje a Chile, éstas debían pagar la deuda que cobraba la imputada por el pasaje, antes de recibir algún tipo de pago por los servicios sexuales que debían prestar.

HECHO N°7 de la acusación del Ministerio Público.

El día 17 de agosto de 2018, la imputada captó y trasladó a la víctima de nacionalidad paraguaya de iniciales H.C. de 22 años a esa fecha, aprovechando la situación de vulnerabilidad en que se encontraba específicamente una importante necesidad económica al tener un hijo menor

de edad. En efecto, la imputada compró los pasajes de la víctima desde Asunción a Santiago con fecha 13 de agosto de 2018, esto es cuatro días antes del viaje. El día 20 de agosto de 2018, la imputada publicó los datos de la víctima en la página web sexo.cl, señalando para ello como nombre de fantasía de la víctima “Pao”, con la finalidad de explotarla sexualmente, debiendo prestar servicios sexuales con los clientes que decidía la imputada, siendo vigilada y controlada por ella, incluso respecto de las propinas que recibía de los clientes. Todo ello principalmente en el departamento N°1005, de Av. Santa Rosa N°170, Santiago y en calle Ruíz de Gamboa N°29, Providencia.

HECHO N° 12 de la acusación del Ministerio Público.

A principios del mes de abril de 2019, la imputada recibió a la víctima de nacionalidad paraguaya de iniciales S.G.R., de 19 años de edad, quien había ingresado recientemente al país, esto es, el día 30 de marzo de 2019, para acogerla en el inmueble ubicado en Luis Thayer Ojeda N° 127, depto. N° 902, comuna de Providencia, aprovechando la situación de vulnerabilidad en que se encontraba, toda vez que no tenía donde vivir y necesitaba sustento económico. De esta forma, la víctima debió prestar servicios sexuales con los clientes que decidía la imputada, siendo vigilada y controlada por ella. Con la finalidad de explotar sexualmente a la víctima, la imputada publicó sus fotografías el día 11 de abril de 2019 en el sitio web www.sexo.cl indicando como nombre de fantasía de la víctima “Pamela”.

HECHO N° 16 de la acusación del Ministerio Público.

El día 19 de octubre de 2019 la imputada captó y trasladó a la víctima de nacionalidad paraguaya de iniciales S.E.C. de 27 años esa fecha, aprovechando la situación de vulnerabilidad en que se encontraba específicamente una importante necesidad económica al tener un hijo menor de edad. En efecto, la imputada compró los pasajes de la víctima para que viajara desde Asunción a Santiago el día 18 de octubre de 2019. La imputada publicó los datos de la víctima en la página web sexo.cl, señalando para ello como nombre de fantasía de la víctima “Arelis”, con la finalidad de explotarla sexualmente, debiendo prestar servicios sexuales con los clientes que decidía la imputada, siendo vigilada y controlada por ella, incluso respecto de las propinas que

recibía de los clientes. Todo ello principalmente en el departamento N°1005, de Av. Santa Rosa N°170, Santiago y en la casa ubicada en calle Ruiz de Gamboa N° 029, de la comuna de Providencia”.

A juicio del INDH estos hechos son constitutivos del delito de *trata de personas con fines de explotación sexual en carácter de reiterado*, previsto y sancionado en el artículo 411 quáter del Código Penal, en el que corresponde a la acusada MARÍA ELIZABETH SOSA AQUINO, C.I. participación en calidad de autora, según lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado.

En cuanto a circunstancias modificatorias de responsabilidad penal reconoce únicamente la concurrencia de la atenuante prevista en el artículo 11 N°6 del Código Penal, es decir, irreprochable conducta anterior.

Conforme estos antecedentes y citas legales que indica, pide que se condene a la acusada SOSA AQUINO a pena de quince años de reclusión mayor en su grado medio y multa de 100 UTM.

CUARTO. Demanda civil. Que la querellante particular Carolina Torres Bascur, actuando en representación convencional de las víctimas Samantha Araceli González Rivero, ciudadana paraguaya, soltera, cédula de identidad para extranjeros N°26.998.615-8, de doña “S.CH.”, ciudadana paraguaya, soltera, cédula de identidad civil N° 4.789.359, y de doña “H.CH.”, ciudadana paraguaya, soltera, cédula de identidad civil N° 5.276196, todas con domicilio reservado por motivos de seguridad, dedujo demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de la acusada MARIA ELIZABETH SOSA AQUINO, ciudadana paraguaya, soltera, cédula de identidad para extranjeros 24.629.438-0, actualmente privada de libertad en CPF de San Miguel, y en favor de sus representadas, de acuerdo a las siguientes consideraciones de hecho y derecho, que proceden a citarse:

“I.- LOS HECHOS:

1.- Respecto a Samantha González Rivero, señalo que llegó a Chile el 30 de marzo del año 2019, proveniente de Paraguay donde su situación económica y familiar era precaria, y no obtenía ingresos que le permitieran solventar sus gastos en aquel país. Por ello decide viajar a Chile en busca de mejores oportunidades laborales, y situación económica. Viajó a Chile por vía terrestre, específicamente en Bus desde Asunción, Paraguay el día 30 de marzo de 2019.

En el bus conoce a una connacional quien se presenta como “Yeruti”, quien le ofreció trabajo ejerciendo el comercio sexual para una ciudadana paraguaya de nombre María Sosa quien tenía varios departamentos en Santiago en donde desarrollaba esta actividad. En un primer momento la víctima se niega a acceder, sin embargo, luego de algunas semanas contacta a “Yeruti”, pues se había quedado sin alojamiento en Santiago, y no contaba con dinero para buscar algún hotel o residencia, tampoco contaba con redes familiares o sociales en Santiago o en Chile.

Es así como la imputada acompañada de un niño menor de edad y “Yeruti” llegan a la comuna de Huechuraba donde se encontraba la víctima, y la trasladan de inmediato al departamento 902, de un inmueble ubicado en la calle Luis Thayer Ojeda, esquina de Providencia. Durante el trayecto la acusada instruyó a la víctima sobre lo que debía hacer, esto es ejercer el comercio sexual; señalándole que, no le cobraría la estadía ni luz ni agua, pero que la mitad de la paga debía entregárselo a ella. Al llegar al departamento había otras chicas jóvenes de nacionalidad paraguayas, quienes también trabajaban para María.

Al día siguiente la trasladó a las oficinas donde se publicaban las fotos para estar disponibles en la página web www.sexo.cl, donde le tomaron varias fotografías en ropa interior, y las publicaron bajo el nombre de fantasía de “Pamela”. Posteriormente al llegar de vuelta al departamento debió comenzar a trabajar, atendiendo a los hombres que llegaban. Debía atender cuantos hombres llegaran a pedir servicios sexuales, en extensas horas, sin jornadas de descanso, y los 7 días a la

semana de lunes a lunes desde alrededor de las 9.00 am hasta las dos de la madrugada. Vivían todas las mujeres en el mismo departamento donde eran explotadas sexualmente y la mayor parte del dinero que recibían debían entregarlo a la acusada quien además cobraba multas sin motivo ni justificación. Además, debían comprar su propia comida y útiles de aseo y preservativos pues la acusada solo pagaba el arriendo y las cuentas básicas. El trato dispensado era hostil y autoritario y la acusada se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de la víctima pues esta no contaba con redes familiares o sociales en Chile, ni el dinero para poder trasladarse a otro lugar. Además, se aprovechaba de su edad, pues era la más joven del grupo, tenía 19, y las demás entre 21 y 27 años. Trabajaban con mínimas condiciones de higiene, sin descanso, y sin seguridad.

María Sosa, la acusada en esta causa, era quien coordinaba las citas, pues manejaba los diversos teléfonos celulares, los contestaba haciéndose pasar por las mujeres residentes en los departamentos, y les avisaba a un grupo de WhatsApp que ella misma creó indicando que tal persona iba subiendo y tal chica debía atenderlo. Los servicios tenían un costo de \$30.000, o \$40.000 pesos dependiendo si pagaban por sexo normal, o full con todo, el cual incluía sexo anal. María también ofrecía servicios de trío, o domicilio, que ella misma transportaba de ida y vuelta; este servicio era más caro, pues María cobraba \$60.000. En el caso de Samantha González Rivero llegó a atender 10 a 12 hombres por día. Todas las noches de la semana María cobraba su porcentaje esto es el 50%, del dinero que los clientes pagaban, incluidas las propinas que recibían; y en varias ocasiones cobraba “multas”, o cobros inexistentes, y se quedaba con el dinero de las víctimas. La acusada tenía todo el control de las personas que entraban y salían, y del servicio cobrado, pues no solo se hacía pasar por las víctimas, sino que además, éstas eran constantemente grabadas por cámaras que tenía instaladas en los departamentos, por lo que estaban siempre vigiladas.

En una ocasión la víctima sostuvo una discusión con ella por un domicilio al que fue trasladada y el cliente se encontraba completamente drogado y agresivo por lo

que la víctima se asustó y llamó de inmediato a María para que la recogiera. La acusada de vuelta le respondió que debía quedarse y cumplir con el servicio, y que nada le pasaría. A raíz de esta situación es que la acusada le sustrajo a la víctima la cantidad de \$800.000 pesos de los ahorros que tenía guardados. Esta situación fue denunciada a la PDI, ocasión en que la víctima denunció tanto la sustracción de su dinero, como la explotación a la que fue sometida un par de meses en el departamento de calle Luis Thayer Ojeda en la comuna de Providencia. Además, informó sobre el modo de captación de las mujeres en Paraguay. María las contactaba directamente o a través de conocidas, luego les ofrecía el pago del pasaje a Chile, y luego las recibía en Santiago, y las trasladaba a los distintos departamentos. Les enviaba los pasajes en bus o por avión, y luego se los cobraba (en exceso) al llegar a Chile. Posteriormente las hacía ejercer el comercio sexual, sin horario, ni descanso, y en condiciones bastante precarias de higiene y seguridad, y además debían entregar la mayor parte de su dinero a María, quien se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad en especial de la situación económica que había en Paraguay, y porque la mayoría de las demás chicas tienen hijos que mantener en Paraguay. Muchas veces la víctima se sintió utilizada y deshumanizada, dado que el trato que recibía era el de un bien con el que se podía transar de la manera más cruel posible y sin consideración a su voluntad y dignidad.

2. Respecto a H.CH., es contactada por la acusada María Sosa, quien conocía a la hermana de la víctima, y a quien le ofrece el pago de los pasajes a Chile donde tenía un negocio de servicio de escort y le ofreció trabajo en donde ganaría mucho dinero. Esta situación le llamó la atención pues la situación en general en su país era muy precaria, en especial en el tema económico, y con un hijo de 4 años a quien apenas podía mantener. Contaba con un trabajo esporádico, y muy mal pagado, alrededor de \$130.000 pesos mensuales; por lo que pensó que esta oportunidad le ofrecería mejores expectativas laborales, e ingresos y de esta forma podría mantener en buenas condiciones a su hijo y a su hermana quien quedó a cargo del niño en Paraguay. La acusada le comentó que en Chile podría ganar alrededor de \$900.000 mensuales y con ese dinero podría mantener en muy buenas condiciones a su hijo y familia en

Paraguay. También le comentó que no le cobraría la estadía ni las cuentas básicas. Solo que debía entregarle el 50% de sus ganancias.

Es así, como el 17 de agosto del año 2018, María le comenta que no solo pagaría por su pasaje, sino que la acompañaría pues ella estaba en Paraguay viajaba el mismo día. Se reunieron en el aeropuerto donde le entrega su pasaje, no sin antes decirle que debía devolverle el dinero con su trabajo. La acusada y demandada civilmente, realizó todas las gestiones en el aeropuerto y en Extranjería al llegar a Chile, pues la víctima era primera vez que salía de Paraguay, y no llevaba dinero consigo.

Al llegar a Chile, fue transportada en forma inmediata al departamento 902 ubicado en calle Thayer Ojeda en la comuna de Providencia. En aquel departamento había otras 3 chicas de nacionalidad paraguaya de entre 20 y 25 años. El departamento tenía dos habitaciones en donde debían trabajar y dormir como podían. María instruyó a la víctima que debía ejercer el comercio sexual, con la condición de entregarle el 50% de lo que ganara, incluyendo las propinas.

A las pocas semanas María la traslada al departamento 1005 de calle Santa Rosa 170, en el Centro de Santiago. El mismo día le sacaron fotografías en ropa interior, señalando que debía publicarla en una página web. Al otro día comenzó a trabajar y ser explotada sexualmente. Los horarios eran extenuantes con pocas horas de descanso y de lunes a lunes. Ella coordinaba las citas mediante los celulares y le avisaba al grupo creado por ella en WhatsApp. No podían negarse a trabajar ni tenían la posibilidad de elegir a los clientes, pues María las regañaba en exceso si lo hacían y les respondía de vuelta que ellas sabían a lo que venían, y que esa era la forma de hacer dinero en Chile y solo así podían mantener a sus hijos en Paraguay. La víctima no contaba con redes en Chile, ni amigos o conocidos a quienes acudir, además de no contar con su situación migratoria al día. Esta situación derivó en un desgaste crítico emocional y físico pues trabajaban en exceso, y si no lo hacían eran amenazadas por

María que las echaría a la calle, o denunciadas a la PDI por no contar con la visa correspondiente. Ninguna de las víctimas tenía donde ir, y debían mantener a sus hijos que estaban en Paraguay por lo que se mantuvieron en aquel lugar a pesar de ser explotadas sexualmente, pues la mayor parte de las ganancias las llevaba la acusada, quién, además, les cobraba multas por hechos inexistentes y no les proporcionaba comida, elementos de aseo, tampoco les entregaba preservativos, ni contaban con seguridad ante alguna agresión o violencia de la que pudieran ser víctima. Para mantenerlas vigiladas constantemente, el departamento tenía instaladas varias cámaras de vigilancia en diversos lugares. Las mujeres tenían su libertad de movimiento restringida, pues las pocas veces que salían al supermercado en busca de comida o cosas para limpiar, la acusada las llamaba constantemente por celular para ver dónde estaban y a qué hora llegarían de vuelta.

Los servicios tenían un costo de entre \$30.000 \$40.000 pesos dependiendo del servicio, y cada una atendíamos entre 4 a 8 hombres algunos días. La acusada diariamente se dirigía al departamento a cobrar su parte, es decir el 50% y algunas multas sin motivo. Ella llevaba las cuentas no solo porque las vigilaba por las cámaras sino por la coordinación que hacía por celular con los clientes, y varios libros donde debían anotar los servicios y el pago recibido.

A fines de ese año la víctima viajó a Paraguay, pues extrañaba mucho a su hijo y no lo veía hacía meses. Deseaba dejar la vida que llevaba en Chile. La situación en Paraguay seguía siendo muy precaria laboral y económicamente. Buscó trabajo donde solo laboró un par de meses y fue desvinculada por necesidades de la empresa, y nuevamente se vio desempleada, sin dinero y con un hijo que mantener. Por otro lado, la acusada María Sosa, siempre estaba en contacto con mi representada diciéndole que volviera, que estaría mejor allí, y que de esa forma podría enviar dinero a Paraguay, a su hijo y familia. Nuevamente viajó a Paraguay, siendo pagado el pasaje aéreo por la acusada Sosa Aquino, para volver a Chile en marzo del año 2019. Del aeropuerto la trasladó al departamento 902 de calle Thayer Ojeda, donde estuvo hasta junio

trabajando bajo las mismas condiciones que lo había hecho anteriormente. Nada cambió, ni los horarios, ni lo que debía pagársele a María Sosa Aquino, ni ninguna otra condición. Ahí conoció a Samantha González, quien tuvo un problema con María Sosa Aquino por que la llevó a un domicilio con un hombre totalmente drogado, razón por la que Samantha le dijo que no la llevara más en esas condiciones. A principios de junio fue trasladada de vuelta a Santa Rosa al departamento 1005, siempre en las mismas condiciones.

En septiembre la acusada la llevó a una casa ubicada en la calle Ruiz de Gamboa 029, en la comuna de Providencia donde había otras 3 chicas, todas de nacionalidad paraguaya. En este lugar solo permaneció una semana pues no llegaban clientes, por lo que fue devuelta al departamento 1005 de Santa Rosa 170 en el centro de Santiago, para luego ser trasladada nuevamente a la casa de Ruiz de Gamboa donde permaneció hasta noviembre de 2019, cuando la PDI llegó a la casa en Providencia, y fueron trasladadas a una Casa de Acogida para víctimas del delito de trata de personas donde permaneció algunas semanas antes de su regreso a Paraguay.

En la casa de Ruiz de Gamboa en Providencia, también se encontraba su hermana S.CH., quien llegó a Chile, el 19 de octubre de 2019. Fue contactada por la acusa María Sosa quien coordinó con ella su venida a Chile, le pagó los pasajes, la recibió y la trasladó a uno de los departamentos pues debía trabajar con las demás en las mismas condiciones. La hermana de mi representada también es madre soltera de un niño de meses de edad quien asimismo quedó a cargo de su hermana Beatriz en Paraguay.

3. Respecto de S.CH., llegó a Chile el día 19 de octubre de 2019, proveniente de Paraguay donde vivía con su hijo de 10 meses. Trabajaba como manipuladora de alimentos en un sanatorio donde tenía una remuneración de aproximadamente \$200.000 peso chilenos al mes. Esta suma de dinero apenas le alcanzaba para satisfacer las necesidades de su hijo pequeño y aporte a la casa donde vivía con otros hermanos.

Su situación económica era bastante precaria. Hilda su hermana le comentó que ella trabajaba para María Sosa Aquino en Chile como escort. María la contactó de inmediato, y le ofreció pagar por sus pasajes para trabajar en Chile como escort cuestión que no conocía pues nunca antes había ejercido el comercio sexual. Le comentó que ganaría mucho dinero, y que su única condición era que el 50% de lo que ganara debía dárselo a ella. Además, le señaló que no pagaría arriendo, ni cuentas de luz, ni nada pues ella se haría cargo de aquello. Era tal su necesidad económica, en especial ahora con un bebe de 10 meses, que aceptó el ofrecimiento.

Fue así que viajó por vía terrestre cuando María Sosa Aquino le envió los pasajes en Bus. Llegó al terminal de buses en Chile el 19 de octubre, la acusada la esperaba para trasladarla al departamento 1005 de Santa Rosa. Allí, le repitió que el 50% de lo que recibiera debía entregárselo a ella, y que los servicios costaban entre \$30.000 y \$40.000 pesos, o más dependiendo si era domicilio; que el horario era de 09:00 am hasta las 02:00 de la madrugada y que se trabajaba todos los días. Le indicó también que debía sacarle unas fotos para publicarlas en una página web, y que el nombre de fantasía sería “Arelis”.

Luego de un par de semanas fue trasladada a una casa en la calle Ruiz de Gamboa en la comuna de Providencia, donde continuó con el trabajo, junto a otras chicas todas de nacionalidad paraguaya, quienes también trabajaban para María. La mayoría tenían hijos pequeños, y una muy precaria situación económica en su país de origen. Algunas eran de localidades rurales por lo que solo hablaban entre ellas en guaraní. Todas eran explotadas de la misma forma por la acusada, debían trabajar largas horas al día con poco descanso, precarias condiciones de salubridad, pues debían dormir como podían donde mismo trabajaban, y debían comprar la comida, útiles de aseo y preservativos ellas mismas. Existían estos cobros injustificados, por lo que finalmente sus ganancias no eran tales como les había mencionado al principio cuando eran captadas y se les ofrecía más dinero del que realmente recibían. Es más, a

esta víctima le cobró más de lo que había costado el pasaje, pero como no tenía conocimiento del valor, no pudo decir nada al respecto.

Finalmente, el 27 de noviembre del año pasado llegó la PDI a la casa de Ruiz de Gamboa y fue trasladada junto a otras chicas a una Casa de Acogida para víctimas del delito de trata de personas. En este lugar recibió ayuda psicosocial, y reparativa ante los hechos de los cuales fue víctima.

María trataba a las víctimas con desdén y de mala forma, las consideraba solo mercancía con la cual hacer dinero fácil y rápido, no le importaba si se sentían bien o mal, o necesitaban descansar, solo le importaba hacer más dinero explotándolas.

Este daño moral tiene, por un lado condicionantes temporales, para cada una de las víctimas; la primera Samantha González, al igual que S.CH. fueron explotadas por la acusada por alrededor de dos meses cada una en los distintos departamentos. Mientras que la víctima H.CH. lo fue por más de un año y medio.

Otro factor a considerar para el quantum de la indemnización es el daño psicológico que significó para cada una de ellas el ejercer el comercio sexual en las condiciones que lo hicieron; sin protección, ni seguridad, expuestas a hombres drogados, y agresivos, en condiciones precarias de higiene, y sometidas a extensas jornadas de trabajo. Se vieron en la necesidad urgente de acceder a ser sometidas y explotadas pues todas mantenían una mínima situación económica en su país de origen. Todas ellas desarrollaron sentimientos de deshumanización constante y cosificación tanto en la esfera sexual como social, porque la explotación las reduce a una mercancía u objeto, que solo eran útiles para complacer los placeres de otros, y la codicia de la acusada quien tomó el beneficio económico de su conducta por el tiempo indicado sin que la dignidad, honra y salud mental de las víctimas tuviera algún peso en sus decisiones.

II.- EL DERECHO:

Las conductas aquí relatadas y ejecutadas por quienes captan, acogen, trasladan y reciben a las mujeres, coinciden con aquellas que el legislador nacional ha descrito y sancionado al regular el tipo penal sobre trata de personas en el Art. 411 quáter del Código Punitivo, el que señala: “El que mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra capte, traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a ésta, o extracción de órganos, será castigado con la pena de reclusión mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales. Si la víctima fuere menor de edad, aun cuando no concurriere violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, se impondrán las penas de reclusión mayor en su grado medio y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales. El que promueva, facilite o financie la ejecución de las conductas descritas en este artículo será sancionado como autor del delito.” El referido delito de trata de personas se incorporó al derecho positivo chileno el año 2011 en razón de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.507 (estatuto legal que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal). Dicha norma legal surge en respuesta al compromiso del Estado de Chile frente a la comunidad internacional al suscribir la “Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional” (Palermo, Italia, año 2000) y, en consecuencia, al ratificar también el “Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños”. Se trata entonces ésta de una norma internacional que forma parte del ordenamiento

jurídico chileno y que amerita ser reconocida y aplicada por los distintos intervinientes del sistema penal (Art. 5º, inciso 2º, Constitución Política de la República).

Por otro lado, el artículo 5º de la Constitución Política del Estado, establece expresamente en su inciso 2º que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Pero, además de la responsabilidad penal, de toda acción constitutiva de delito nace una acción civil para reparar el daño patrimonial y moral que puedan haber sufrido las víctimas. Es así que el artículo 2284 del Código Civil señala: “Las obligaciones que se contraen sin convención, nacen o de la ley, o del hecho voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella”. Agrega su inciso cuarto “Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito”.

A su turno el artículo 2314 del Código Civil establece: “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”.

En este caso, la existencia de un delito, de extrema gravedad, justifica de forma clara y precisa la obligación de indemnizar los perjuicios que recae sobre la demandada. Ella, como responsable de la comisión de estos graves hechos, debe ser también la responsable de los daños que su actuar doloso ha provocado en las víctimas. Como S.S. bien sabe para justificar el pago de una indemnización de perjuicios debe existir un hecho que ha producido un daño, debe existir nexo causal entre ese hecho y el daño que se reclama y debe existir obligación de repararlo. Todos esos requisitos se dan en este caso, habida cuenta de que la sola ocurrencia del delito, y el carácter de víctimas que poseen mi representadas, justifica suficientemente el título

para reclamar la indemnización de perjuicios, y la participación de autora establece tal y como lo señala la ley, su obligación de indemnizar los perjuicios que sus acciones han provocado.

En cuanto a la cuantía de la indemnización, se debe considerar el dolor causado, el daño físico y psicológico que han experimentado mis representadas, todos ellos resultados de la explotación a la que fueron sometidas por meses y que son indemnizables en nuestro régimen de daños y que tradicionalmente han sido englobados bajo la denominación de “daño moral”, esto es, la indemnización por el dolor o aflicción causados. Así, si en el juicio oral se establece que las actoras civiles han sufrido daño moral a consecuencia del actuar de la demandada, entendiendo dicho daño como la aflicción o dolor que éstos les causaron en sus sentimientos, que en justicia debe ser al menos intentado compensar o mitigar, este Tribunal deberá acceder a la indemnización de perjuicios solicitada, la que se regulará prudencialmente atendida la gravedad del daño y el pronóstico incierto del mismo en las tres demandadas.

Además, dispone el artículo 2329 del Código Civil: “Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta”. Por lo anterior, el daño moral es un ítem que debe ser reparado al igual que el daño material si es que este existiera.

En este caso vengo en tasar prudencialmente el daño en \$15.000.000 para cada una de las víctimas.

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1, 11 N°6 y 9, 14 N°1, 15 N°1, 24, 25, 26, 30, 31, 49, 50, 68, 292, 293, 294, 411 quáter del Código Penal; 1, 45, 47, 295, 296, 297, 324, 325, 326, 328, 340, 341, 342, 344, 346, 347, 348 y 351 del Código Procesal Penal, 1698 y 2314 del Código Civil, así como la normativa internacional y Acuerdos suscritos por Chile; solicitando a S.S tener por interpuesta demanda civil por responsabilidad derivada del delito de Trata de

Personas en contra de MARIA ELIZABETH SOSA AQUINO, y se la condene al pago de una indemnizaciones de perjuicios en favor de SAMANTHA ARACELI GONZALEZ RIVERO, S.CH, e H.CH., ya individualizadas en la presente causa, que ascienda a la suma de \$15.000.000 para cada una de las víctimas o en subsidio, lo que S.S. determine que en derecho corresponde, con expresa condena en costas”.

QUINTO. Alegatos de apertura del Ministerio Público. Que en sus alegatos de inicio el Ministerio Público señaló que este juicio versará sobre mujeres, las migraciones y la prostitución, sobre los derechos de las mujeres y por cierto, sobre la erradicación de la violencia en contra de la mujer, considerando que la trata de mujeres, la explotación de la prostitución es una de las formas más graves de discriminación en contra de la mujer de acuerdo sobre la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

Se deberá necesariamente atender al fenómeno de las migraciones en un mundo globalizado, porque resulta imperioso además reconocer que en el mundo de hoy las personas buscan y tienen derecho a buscar horizontes para su vida, para subsistir y también para proveer de subsistencia a sus familias. Latinoamérica no es una excepción a esta realidad, en nuestro continente las personas migran y por cierto, las mujeres también lo hacen. Ellas llegan a Chile muchas veces a trabajar en lo que sea, para enviar dinero a sus hijos, hijas y familia que dejaron en sus países de origen. En este juicio, ese país de origen es Paraguay, en donde prácticamente en todos los casos, todas las víctimas tienen nacionalidad paraguaya, solo que un caso se trata de una víctima que había llegado escasos días antes de la captación de parte de la acusada a nuestro país, y el resto de los casos dicha captación se realizó desde Paraguay, país que mantiene una situación económica precaria que implica que sea un reconocido país de origen de víctimas de trata de personas.

Respecto de lo planteado en este juicio, la discusión sobre la prostitución no es relevante, toda vez que la fiscalía no acusa a mujeres que han ejercido la prostitución

en nuestro país de manera forzada o no, sino que acusa a quien promovió y trasladó a Chile a las víctimas para explotarlas sexualmente o bien, para promover o trasladar a las víctimas al interior de Chile para explotarlas sexualmente, como se da en el caso del hecho N°12, respecto de Samantha de iniciales S.G.R. Se plantea desde este modo, puesto que en los hechos 7, 12 y 16 las víctimas se vieron forzadas a ejercer la prostitución en condiciones de explotación sexual, violentándose su voluntad y teniendo la acusada un claro beneficio económico producto de ello, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Esto fue un negocio respecto de la acusada y para la acusada desde el año 2017 y hasta el día de su detención el 27 de noviembre de 2019, y aquello será acreditado durante el desarrollo de este juicio.

Esta última circunstancia, esto es, la situación de vulnerabilidad, es un presupuesto que la fiscalía reconoce no es concurrente en relación a las demás víctimas, para cuyo caso se ha efectuado la calificación jurídica prevista en el artículo 411 ter del Código Penal, teniendo en consideración que en todo caso el legislador estableció un tipo penal distinto, que corresponde a la promoción o facilitación del ingreso de mujeres para la prostitución obteniendo la imputada importantes ganancias en todos los casos, arrendando varios departamentos, incluso una casa para que las víctimas fueran explotadas sexualmente, es decir, respecto del artículo 411 ter del Código Penal se entiende que existe una situación de vulnerabilidad de base que será acreditada durante el juicio y entendiendo además que existió una situación de explotación de todas estas víctimas.

Este juicio oral versa sobre las mujeres, dado que la prostitución es una cuestión de género, ya que la ejercen de forma mayoritaria mujeres y no hombres, de ahí que se considere que es una forma de discriminación y violencia en contra de las mujeres. En efecto, en nuestro país solo mujeres han sido víctimas de esta clase de delitos. No corresponde juzgar las razones que tuvieron las mujeres para venir a Chile a desarrollar esta actividad. Probablemente los motivos son los mismos por los que las personas migran, a saber, una búsqueda de mejores oportunidades en su vida, contar con una fuente económica para poder alimentar a sus familias, a sus hijos, hijas, madres,

padres, hermanos, o simplemente para subsistir. Podemos compartir o no la circunstancia de que el ejercicio de esta actividad representa una oportunidad en sus vidas, pero esta es una cuestión que queda en el fuero interno de las mujeres, de acuerdo a sus condiciones particulares, a su vida y por cierto, a su historia vital. La estigmatización social que afecta a las mujeres que ejercen la prostitución provoca sin duda su aislamiento, hace que éstas no le comunican a sus familias la actividad que desarrollan y por ello muchas veces no quieren participar en el proceso penal, ni menos plantear cual es esa actividad a la que se vieron forzadas de realizar, sin tener ninguna otra alternativa real y posible de ejercicio de alguna otra actividad, que les permita mantenerse y subsistir adecuadamente tanto ellas, como sus familias. Estas mujeres saben que serán juzgadas por sus conductas y que esto les va a acarrear problemas en su vida. Esta estigmatización será evidente en este juicio, sea por el temor a declarar, porque no ha sido posible su ubicación, porque ya se encuentran en su país de origen (Paraguay), porque quieren olvidar los hechos vividos en Chile, porque no quieren decirles a sus familias sobre lo ocurrido o no quieren asumir derechamente la calidad de víctimas en algunos casos, incluso como mecanismo de sobrevivencia, absolutamente concordante con la fenomenología del delito.

A pesar de la alta probabilidad de que no todas las víctimas declaren en este juicio, el Ministerio Público confía que con la prueba reunida a lo largo de toda la investigación permitirá acreditar todos los hechos de la acusación contenidos en el auto de apertura y la participación de la imputada en los mismos, porque resulta básico entender que no es posible hacer recaer como única prueba, o como eje fundamental de la prueba, únicamente la declaración de las víctimas, sin embargo, todos esos relatos estarán presentes en el desarrollo de las audiencias de juicio oral, por medio de la incorporación de variados medios de prueba.

Resulta necesario explicar al tribunal explicar cómo se inició esta investigación, que data del año 2017, que tiene ciertas particularidades y en donde desde el comienzo se da el rasgo de estigmatización y el sesgo respecto de víctimas que ejercen la prostitución en nuestro país. En efecto, la primera denuncia que se recibió respecto de

la acusada fue el 28 de abril de 2017, cuando el administrador de un edificio -de nacionalidad francesa-, le pareció que la actividad de uno de los departamentos de Avenida Santa Rosa N° 170, el N° 1005, arrendado por la imputada, registraba una cantidad no habitual de visitas, todos hombres, quienes concurrían por un tiempo determinado, pudiendo ver a mujeres jóvenes, quienes no salían prácticamente del departamento. Se inicia así una primera parte de la investigación, trabaja esta parte el OS-9 de Carabineros, y son ellos quienes piden a la fiscalía solicitar la interceptación del teléfono de la imputada (el que mantuvo con posterioridad), sin embargo, el tribunal en esa dijo que no existían antecedentes suficientes para acoger esa medida, o esa técnica especial. Continuaron las diligencias de investigación y en el año 2018, el 16 de febrero se presentó una segunda denuncia, y -en un evento bastante poco frecuente- esta vez aquella denuncia la realizó un cliente de prostitución que se refiere a la misma dirección de Avenida Santa Rosa N° 170, departamento 1005, señalando que al momento de adquirir esos servicios sexuales le pareció que las víctimas se encontraban en malas condiciones, y le pareció que podía existir una situación de trata. En esta oportunidad, comienza a trabajar la investigación la Brigada Investigadora de Trata de Personas. Cuando se encontraban realizando las primeras diligencias, solicitan a la fiscalía la interceptación telefónica del teléfono de la acusada y nuevamente, no se otorga la autorización judicial para la utilización de esta medida.

Luego, el día 19 de abril de 2019 una víctima “Samantha”, de iniciales S.G.R., realiza una denuncia por un delito de hurto o supuesto robo de dinero, pero quienes tomaron la denuncia en esa oportunidad se dieron cuenta que había indicadores de la existencia del delito de trata de personas, y es ahí cuando se cursa la denuncia en la Fiscalía Oriente, porque en esa oportunidad, la víctima fue trasladada a un departamento en Providencia, es decir el negocio ya se había ampliado, a calle Luis Thayer Ojeda. Sólo ahí la Brigada investigadora de trata de personas se da cuenta que tanto la denuncia del año 2018 como la denuncia del año 2019 se refieren a la misma persona, esto es la acusada presente en esta audiencia. Es ahí como se continua la investigación, ahora con las denuncias agrupadas, y donde se despliegan técnicas y medidas como la

utilización del agente encubierto, interceptaciones telefónicas, las que permiten determinar que incluso el negocio continuaba siendo tan rentable, que permitió que la acusada adquiriera un nuevo inmueble, que corresponde a la propiedad ubicada en calle Ruiz de Gamboa. Se gestiona de esta forma la orden de detención ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la que se otorga el día 26 de noviembre de 2019, pero continúan sucediendo diversos eventos. Es así como el día 27 de noviembre de 2019, en circunstancias que la Brigada Investigadora de Trata de Personas tenía en su poder la orden de detención, con la finalidad de darle cumplimiento, ese mismo día, un funcionario de Carabineros concurre al departamento de la acusada y le informa que existe una orden de detención vigente a su respecto, sin embargo, no la detiene, sino que la imputada es quien va al tribunal, en conocimiento de la información que le había entregado el funcionario de Carabineros. De esta forma se realiza un procedimiento con la finalidad de ubicar a las víctimas, que estaban en los distintos inmuebles. Las víctimas son encontradas en calle Ruiz de Gamboa, en el departamento N° 1005 de Avenida Santa Rosa, indicando lo que la imputada les tenía instruido decir si llegaba la PDI, esto es, que dijeran que el inmueble estaba arrendado. Es entonces, en este punto que surge la necesidad de rescatar a las víctimas trasladándolas a la Casa de Acogida, y luego la necesidad de gestionar su retorno asistido a Paraguay, pudiendo recibirse la declaración anticipada de al menos dos víctimas, las que retornaron incluso con intervención de la Embajada de Paraguay en Chile.

A través de los relatos prestados por las víctimas, de evidencia y pruebas objetivas encontradas durante el transcurso de la investigación, por medio de las vigilancias, de la técnica especial del agente encubierto, a través del análisis de diversa evidencia, la que incluye incluso el levantamiento del secreto bancario, sumado a las declaraciones de testigos, de peritos, y de los documentos que serán presentados a la audiencia de juicio oral, el Ministerio Público espera probar fehacientemente los hechos materia de la acusación, por lo que pide se dicte una sentencia condenatoria a las penas allí indicadas.

SEXTO. Alegatos de apertura de la querellante particular. Que en sus alegatos de inicio la parte querellante particular, expresó que durante el desarrollo de este juicio se logrará acreditar sin lugar a duda la responsabilidad penal que le cabe a la imputada en la comisión de hechos que configuran el delito de trata de personas, todos cometidos en contra de las víctimas de nacionalidad paraguaya. Asimismo, se acreditará en este juicio que la acusada, también de origen paraguayo, captó a las víctimas aprovechándose de la precaria situación en que ellas se encontraban, pues en su calidad de connacional conocía la situación del país y conocía también el hecho de que muchas de las mujeres captadas eran madres solteras, con hijos pequeños y familias que mantener, sin trabajo o con trabajos muy precarios, todo esto sumado además a factores culturales y estructurales que favorecen la desigualdad entre hombres y mujeres, y la baja escolaridad que la mayoría de ellas tienen, como darán cuenta los testimonios de las víctimas, lo que las hace aún más vulnerables a ser captadas y explotadas como fue en este caso.

Por ello, no llama la atención que cuando la acusada las captaba o las reclutaba, les ofrecía una posibilidad real de obtener dinero rápido, ejerciendo el trabajo sexual en Chile y así de esta forma, poder mantener a sus familias, cuestión que accedían fácilmente ante esta tentadora oferta, independiente de la labor que pudieran estar realizando en su país de origen, como también se acreditará, cuyas remuneraciones fluctuaban entre los \$100.000 o \$200.000 mensuales. Ellas si consintieron en venir a Chile, a ejercer el trabajo sexual, pero en condiciones muy distintas a las que le fueron ofrecidas en un principio. Éstas fueron modificadas al llegar a su lugar de destino, por lo tanto, este consentimiento entregado en un contexto de vulnerabilidad está absolutamente viciado. El hecho del cambio de las condiciones ofrecidas significó horarios extenuantes, atención de hombres sin descanso, habitar en condiciones inhumanas, descuentos y multas por parte de la acusada, cobros de útiles de aseo y cobros por el costo de los viajes, todo ello acentúa aún más este delito. Sin embargo, muchas mujeres no se consideran a si mismas víctimas, puesto que ellas sabían el destino del viaje, pero no del cambio de las circunstancias, ni de la explotación a la que

fueron sometidas. Asimismo, el hecho que hayan asentido y tomar la decisión de aceptar esta oferta las pensar que “se lo buscaron”, o que les pasó por crédulas, por lo tanto, es su culpa, y de allí que muchas de estas mujeres víctimas no se sientan como tal, sino como una parte del delito y que además sea sumamente difícil que ellas denuncien, que relaten los hechos abusivos a los que fueron sometidas. Por ello abordar las distintas esferas de la atención que requieren estas mujeres resulta un hecho muy complejo, porque lo primero es trabajar con ellas para que conciencia de que fueron vulneradas en sus derechos, en su dignidad humana, es decir, que fueron víctimas del delito de trata. Luego de este proceso, cuando la mujer se logra posicionar de esta forma, se puede comenzar un trabajo terapéutico reparatorio. En este sentido, la mujer que fue parcialmente engañada, pues al principio se le ofrece algo, pero al llegar a destino, las cosas son muy distintas a lo acordado, no se sienten víctimas, puesto que señalan que ellas sabían a los que venían. La mujer siente que al consentir sobre la actividad que va a ejercer, no sientes que fueron engañadas, ni que se aprovecharon de su vulnerabilidad, al saber a lo que venían. Todas estas circunstancias serán probadas durante el juicio, especialmente las condiciones personales de las víctimas, la que se probará con la prueba pericial pertinente. Finalmente, cabe hacer mención que frente al peligro y riesgo que estaban corriendo estas mujeres, de ser recaptadas o contactadas para no declarar, es que todas las víctimas fueron derivadas – como medida de protección adoptada por la fiscalía- a una Casa de Acogida, es decir, a una residencia protegida para su atención e intervención, donde pudieron recuperar y su autoestima, y donde se sintieron protegidas por primera vez, cuidadas tras haber sido víctimas de una abusiva explotación sexual por parte de la acusada.

SÉPTIMO. Alegatos de apertura de la querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos: Que en sus alegaciones de inicio, la querellante INDH señaló que en este juicio se conocerá sobre una de las formas de esclavitud modernas más lucrativas del mundo, cuyas víctimas son principalmente mujeres y niñas, por lo que es considerada además una de las expresiones más graves de la violencia de género. Se presenciará una forma delictual compleja, que no se agota en si misma, sino que implica una

continuidad de acciones, todas encaminadas a la explotación de mujeres migrantes de nacionalidad paraguaya. Se observará como se configura un delito de traspasa las fronteras y como se materializa una forma de violencia extrema en la cual el enriquecimiento ilícito tiene como contrapartida el sufrimiento invisible de las víctimas, su pérdida de dignidad y la pérdida de derechos inherentes a todo ser humano.

Hizo una invitación al tribunal a ponderar críticamente la desigualdad de género como elemento que propicia una forma de violación grave de los derechos humanos basada en la relación asimétrica de poder y la dependencia que ésta genera. Hace un llamado a analizar los hechos y subsumir la norma atendiendo todos los elementos que se incorporarán mediante la prueba de este juicio.

La trata de personas es un delito que viola gravemente los derechos humanos. La persona tratante limita o elimina todos los derechos inherentes al ser humano consagrados en sendas convenciones internacionales, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otras específicas que se nombrarán. La víctima se convierte en un objeto de comercio sin libertad física o volitiva. La situación fáctica que se conocerá en este juicio, va a satisfacer justamente el tipo penal nacional de trata de personas, modificado por la ley 20.507, en abril del año 2011, a objeto de armonizar la legislación nacional con las obligaciones internacionales del Estado de Chile en la materia, en específico, el Protocolo para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente la de mujeres y niñas, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra de la Delincuencia Organizada, que se ha denominado Protocolo de Palermo, en cual fue adoptado en el año 2000 y ratificado por Chile en el año 2004.

Existe consenso internacional que la trata de personas, tal como el nombre en su protocolo lo indica, tiene como principales víctimas a las mujeres y a las niñas, siendo consideradas una de las principales barreras que les impiden disfrutar de sus derechos humanos, por lo cual transgrede además los derechos consagrados en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación en contra de

la Mujer, destacando el artículo 6° de esta convención, que señala que los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, e incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de la trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.

Según el último informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre la trata de mujeres y niñas del año 2020, alrededor del 77% de las mujeres detectadas son víctimas de la trata con fines de explotación sexual, el 14% para el trabajo forzoso y el resto, para otras formas de explotación. La trata de personas es una expresión de la violencia contra de las mujeres, tal como lo señala el artículo 2° de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujer. Este tipo de violencia tiene sus raíces en la desigualdad de género, y la discriminación sistémica y estructural derivada de las relaciones de poder que refuerza patrones de género que ubican a las mujeres en un estatus de subordinación, especialmente la trata con fines de explotación sexual. La explotación sexual se sostiene en la construcción cultural de la sexualidad, de los cuerpos de las mujeres, y de los cuerpos de las mujeres como objeto para satisfacer el placer, el ejercicio del poder y el beneficio de algunos varones, el poder y el control de quienes las explotan y se lucran con el sometimiento de ellas. Por tales razones, pidió respetuosamente a este tribunal que estos hechos sean apreciados desde la norma penal, pero con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, entendiendo que ambos elementos constituyen un binomio indisoluble a la hora de sancionar y erradicar este tipo de conductas.

Afirmó que resulta importante también recordar que en el delito de trata de personas el consentimiento de la víctima a los requerimientos de la persona tratante no es relevante. La trata se basa precisamente en el abuso de poder. Este fenómeno se manifiesta en las diferentes formas de violencia que utiliza la persona tratante para reclutar, manipular y controlar a las víctimas. La mayor parte de las víctimas tiene una historia anterior de abuso u otras formas de violencia, o a veces, literalmente son engañadas utilizando situaciones de vulnerabilidad como la pobreza o el bajo nivel educativo. Uno de los factores que favorece el acercamiento de la persona tratante a las

víctimas, es precisamente esta relación de poder o de confianza que existe en las víctimas. Puede tratarse familiares, amigos, otras personas conocidas que se acerquen a las víctimas, pero también puede tratarse de connacionales, o personas del mismo sexo, como es el caso materia de este juicio.

Hizo presente que Paraguay es un país con un índice de pobreza muy alto, con educación precaria, donde el desempleo y la falta de oportunidades afectan especialmente a las mujeres, a veces madres o responsables del cuidado de familias enteras. Esta situación evidentemente conlleva a la migración en búsqueda de mejores ofertas laborales, con el objetivo de progresar económicamente y brindar nuevas oportunidades a sus hijos y a sus familias. En este sentido, no es casualidad que la acusada tratara a mujeres de su misma nacionalidad. María Sosa conocía perfectamente el contexto político, social y económico del país de origen de las víctimas de esta causa, no siendo necesario que ésta tuviera un conocimiento acabado de sus situaciones personales, las que por cierto, se encuentran marcadas por la violencia sistémica, la pobreza extrema, el bajo nivel educativo, la maternidad temprana, y otros tipos de violencia que serán expuestos por los peritos que las evaluaron y declararán en este juicio. La acusada, aprovechando la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas de iniciales H.C de 22 años, SGR de 19 años y SEC de 27 años, desarrolló una o más conductas de las conductas descritas en el tipo penal, con el objeto de explotarlas sexualmente, sometiéndolas a extensas jornadas de trabajo sexual sin descanso, bajo condiciones de insalubridad y de control.

Actualmente la tecnología es una de las herramientas más poderosas tanto para atraer al público a caer en esta trampa, como para coordinar el traslado y la acogida. Pero también para concretar la explotación de las víctimas y para mantener el control de las mismas, facilitando con ello la comisión del ilícito. Lo que se verá durante este juicio es precisamente el uso de la tecnología como elemento clave para la comisión del delito de trata de personas. La captación de las víctimas de iniciales S.E.C. y H.C. la acusada la llevó a cabo a través de la red de comunicación “WhatsApp”, asimismo

como la coordinación del traslado y la acogida de la víctima S.G.R., lo que se acreditará mediante sus declaraciones, la reserva de pasajes aéreos de distintas víctimas fue realizada a través del correo electrónico de la acusada María Sosa Aquino, mientras que el ofrecimiento de servicios sexuales se realizaba mediante la publicación que efectuaba la acusada Sosa Aquino de las fotografías de las víctimas en diversas páginas web dedicadas al ofrecimiento de este tipo de servicios sexuales, asociándolas a números de teléfono de su propiedad, los cuales administraba y respondía ella misma, manejando de esta forma los servicios que prestaban las mujeres. Pero además, se conocerá a través de la transcripción de las escuchas telefónicas, de los mensajes de WhatsApp, audios, videos, declaraciones de funcionarios policiales, peritos e incluso un cliente de prostitución, como la acusada María Sosa Aquino controlaba la libertad de movimiento de las mujeres a través de un grupo de WhatsApp y mediante cámaras instaladas en los domicilios en los que las víctimas vivían y ejercían el comercio sexual, las cuales vigilaba a través de su teléfono personal.

Por último, aseveró que será gracias a los medios de prueba que serán incorporados durante el juicio, que los hechos de la acusación serán acreditados más allá de toda duda razonable, por lo que pidió que se dictara una decisión de condena a las penas por su parte solicitadas.

OCTAVO. Alegatos de apertura de la defensa. Que la defensa de la acusada María Sosa Aquino solicitó la absolucón de su representada fundada en las siguientes consideraciones.

En un primer capítulo, alegó que de la propia prueba del Ministerio Público quedará en evidencia la existencia de una vulneración de garantías, específicamente a aquellas consagradas en el artículo 19 N°5 de la Constitución Política de la República en relación con el artículo 205 del Código Procesal Penal, respecto de la diligencia de entrada y registro e incautación de especies realizada en los domicilios de Santa Rosa N°170, departamento 1005 y 704, ambos de la comuna de Santiago, así como también ubicado en calle Ruiz de Gamboa N° 029, Providencia. Indicó que lo autorizado por el tribunal finalmente era la detención de la imputada, no existiendo autorización ni de

entrada y registro, ni tampoco de incautación de especies. Entonces, en este caso al no existir una autorización judicial, correspondía que el dueño, encargado o titular del derecho y de la propiedad respecto de los inmuebles y especies en que se pretende realizar las diligencias de que se trata, sin embargo, a lo largo del juicio se podrá acreditar que jamás concurrió la voluntad de su representada para efectos de llevar a cabo aquellas diligencias o gestiones de carácter investigativo, y que las autorizaciones fueron otorgadas por aquellas que no tenían ningún tipo de facultad para los efectos de otorgarlo, pero es más. Con posterioridad y a fin de salvar aquellas gestiones y diligencias realizadas, se pide una autorización judicial, pero ya para ese momento en que se obtiene la autorización las diligencias habían sido realizadas. Se hizo presente que esta vulneración de garantías se hizo presente por la defensa en la audiencia de control de detención y en la de preparación de juicio oral, reiterando que su defendida no autorizó la entrada, el registro ni la incautación de especies y, en consecuencia, toda la evidencia obtenida por esa vía deberá ser declarada ilícita.

Posteriormente, se formula una segunda alegación, encaminada a observar la situación específica de la acusada. Indicó que después de escuchar los alegatos de apertura de las acusadoras, se puede llegar a pensar -al escuchar el nombre del acusada- de que ella es un monstruo, que lo que ha hecho es abusar de otras, explotarlas sexualmente, enriquecerse a costa de estas, en el fondo lo que habría hecho María Sosa, es aprovecharse de un grupo de víctimas con la finalidad de enriquecerse.

El Ministerio Público, hace un análisis de quien es María Sosa, pero obvia mencionar algunas circunstancias relevantes. En primer lugar, su representada es una ciudadana paraguaya, que tiene su situación migratoria al día y regularizada, con residencia chilena, pero ¿cómo llega María Sosa a Chile? Se debe tener presente, al efecto que su representada es tan paraguaya como las víctimas y a quedado expuesta a las mismas circunstancias que han sido destacadas por la fiscalía y las querellantes. Ello es relevante, porque María Sosa migra desde su país bajo las mismas condiciones que aquellas personas que se presentan en este juicio como víctimas. Efectivamente, sale de su país siendo madre soltera, con padres enfermos, con una condición

económica que no le permitía mantenerse, ni a ella ni a su hija pequeña después de quedar viuda. María Sosa también vivió bajo condiciones de extrema pobreza en su país de origen, también vivió situaciones de violencia extrema, por lo que decide salir y migra, para la búsqueda de mejores condiciones para su familia. ¿Qué trabajos ejerce?, la prostitución, al igual que las víctimas de esta causa. Como se ha señalado por las acusadoras, no se puede criticar que las víctimas ejerzan la prostitución voluntariamente, porque en la condición en la que se encontraban, lo que se buscaba era mejorar una condición de vida. Pues bien, María Sosa hizo exactamente lo mismo. Ella sale de su país, siendo viuda, madre soltera, con una hija pequeña y ejerce la prostitución en Chile y en otros países, lo que le permitió mejorar sus condiciones, pero para ello tuvo que pasar por explotación sexual, violencia no sólo física sino también psicológica, sexual y agresiones, tal y como lo relatará su defendida cuando preste declaración. Pero ello no es importante en este juicio. Tampoco lo es, que durante el periodo en que se desarrolló la investigación de este juicio María Sosa era agredida verbal, psicológica y físicamente de manera sistemática y reiterada por el padre de su hijo menor, hechos que fueron conocidos por el Ministerio Público por medio de las interceptaciones telefónicas que se practicaron.

Luego, cuestionó el hecho de que durante la investigación se le informara que todas las personas sindicadas como víctimas se encontraban disponibles para declarar, sin embargo, en las aperturas se adelantó que muchas de ellas no concurrirían por su situación de vulnerabilidad y miedo, por lo que la defensa se pregunta ¿miedo a qué?, ¿temor a qué?, si María Sosa lleva presa casi dos años. Muchas de ella se encuentran en su país de origen, ¿temor a qué? ¿al tribunal? Indica entonces, que la verdadera situación en la que nos encontramos es que las víctimas -el día en que se practicó la detención- son llevadas por el Ministerio Público, pero existiendo en todas ellas el temor de que fueran juzgadas por su condición de trabajadoras sexuales, migrantes irregulares y que no pudieran volver a su país. Entonces se les ofrece tramitar un regreso asistido, permitiendo que vuelvan a su país, dejando atrás todo lo vivido en Chile y liberándose de participar en un proceso penal.

Llama la atención, a juicio de la defensa, que su representada enfrente un juicio, en donde lo que se pide es que sea condenada a más de 20 años de cárcel, sólo con la prueba que va a aportarse con la declaración de funcionarios policiales y con los peritajes que se realizaron. Le llama la atención también, que para poder condenar por un delito de trata de personas, en cualquiera de las hipótesis que el Ministerio Público plantea (del artículo 411 ter o del artículo 411 quáter del Código Penal), lo que se pide, es que con prueba que no es la viviente, que no es la víctima, se llegue a la convicción de una condena bajo esas circunstancias.

Así mismo, cuestiona la realización de las declaraciones anticipadas efectuadas en este proceso, en relación con dos víctimas. Señaló que si bien en tales declaraciones hay preguntas orientadas a establecer el delito por el cual se acusó, lo cierto es que hay algo que no se dice, a saber, que después de que las víctimas declaran al día siguiente tenían asegurado que las víctimas se devolvían a su país de origen. Al día siguiente, las víctimas sabían que regresaban a su país, pero ésta era la última parte del trato. Lo que se les ofreció es hacer esa declaración, pero sólo para los efectos de que se puedan regresar a su país. No de todas las víctimas hay declaración anticipada video grabada, ya que de otras tantas sólo existe una declaración prestada en dependencias de la Policía de Investigaciones, y el Ministerio Público intentará suplir esas declaraciones a través de un “PDI”, pero esa prueba impidió que la defensa pudiera contrastar lo dicho por las víctimas, y en tales declaraciones, sólo se efectuaron preguntas tendientes a establecer los hechos que hoy se pretenden acreditar. La defensa jamás tuvo la posibilidad de preguntar y contrastar a dichas víctimas respecto que hechos que son relevantes y en definitiva, si dichas personas no se presentan, se impide nuevamente la posibilidad para su parte de contrastar tales testimonios.

Insistió que la acusada Sosa fue también una mujer víctima de violencia, que ha tenido una vida dura y que ha tenido que sacrificarse para poder avanzar en su vida y así conseguir mejores condiciones, pero no puede por ello ser considerada como una delincuente a cargo de una red de prostitución, como se quiere establecer desde hace ya mucho tiempo por el Ministerio Público, ya que efectivamente, ésta es una

investigación del año 2017, en donde por casi dos años se desarrolló una investigación desformalizada y casi otros años de investigación formalizada.

Para la defensa, lo cierto es que su defendida jamás captó a ninguna víctima, porque para captar debió haber sido ella quien fuera y ofreciera algún tipo de servicio. Doña María jamás engañó a ninguna de las víctimas, jamás ofreció ningún tipo de condición. Ella, ejerciendo el mismo negocio que otras connacionales, lo que hizo fue tender la mano, sin saber que aquella ayuda implicaba para ella la comisión y participación en un ilícito de esta naturaleza, porque desde su ignorancia y en su calidad de connacional, otras personas, amigas y/o conocidas de ella, supieron que estaba ejerciendo el comercio sexual en este país y que efectivamente su condición aquí había mejorado. Fueron ellas quienes tomaron contacto con su presentada para preguntarle si podían venir a hacer lo mismo que ella estaba haciendo aquí, y en ese contexto -habiendo sido doña María víctima de delitos en las mismas condiciones, que vivía en la extrema pobreza, en una situación de vulnerabilidad, madre soltera también- tiende la mano y dice si, no hay problema, puedes venir. Eso no significa que ella haya ofrecido la realización de algún negocio. Cada víctima vino a ejercer la prostitución y fueron ellas quienes la ubicaron y la contactaron. En ese escenario, su representada acoge a las víctimas en el domicilio y ese aspecto, no ha sido negado.

Ahora, lo que dice relación con el tema de los “supuestos cobros”, es tajantemente negado por la defensa. Expresó que los dineros eran destinados para los pagos de la casa donde las mismas víctimas vivían, y para cada uno de los gastos que ellas mismas generaban, no existieron cobros de los dineros que finalmente doña María utilizara para ella, no existían cuestiones tales como multas ni ninguna especie de enriquecimiento ilícito del comercio sexual que las víctimas ejercían voluntaria y libremente. Las mismas víctimas de manera voluntaria, fueron las que se ofrecieron en páginas web. Su representada lo que hizo fue acompañar y se acreditará con la misma prueba del Ministerio Público que para inscribirse en aquellas páginas y subir fotografías las víctimas deben concurrir personalmente y firmar una autorización, por lo tanto, no podía su defendida suplir aquel requisito ni siquiera de manera obligada.

No hubo jamás violencia por parte de su representada, ni retención de documentos, no existió ni la posibilidad siquiera, de coartar la libertad de circulación de alguna de las víctimas, ni al interior del inmueble ni fuera de éste, ni de imposibilitar el retorno al país de origen.

Lo que la defensa pidió al tribunal es que, el perjuicio que existe cuando se escucha que en este juicio se ventilará un delito de trata de personas sea dejado de lado, para efectos de recibir la prueba de manera libre, entendiendo que efectivamente aquella que está acusada, también es una mujer en situación de vulneración, que ejerció la prostitución hasta antes de ser detenida, que es ella la que se presenta ante el tribunal, que ha declarado ante un tribunal en más de una oportunidad para aclarar cuál fue su participación, que efectivamente se presenta al tribunal, y es raro, porque se indica que el fundamento para otorgar la autorización de detención en contra de la imputada (originalmente negado por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago), es el supuesto peligro de fuga. Sabiendo que tenía una orden de detención, en vez de huir como lo manifestó el Ministerio Público, lo que hace su defendida es venir al Centro de Justicia, presentarse y entregarse, porque de esa forma es detenida. A juicio de la defensa, la actitud de la acusada y el mérito de su declaración permitirá que este tribunal conozca y comprenda en qué situación se encontraba María Sosa, porque se ve envuelta en estos antecedentes y cuál ha sido su intención respecto de aquellas que hoy día se mencionan como víctimas y por qué motivo ella decide ayudarlas.

Por estas razones, la defensa pidió que se dictara una decisión absolutoria a favor de su representada, respecto de lo todos los hechos por los cuales ha sido acusada y que además de ello, se rechacen las demandas indemnizatorias de perjuicios que se han entablado, considerando que no será posible acreditar el quantum de los montos que en dichas acciones se demandan.

NOVENO. Autodefensa. Que, habiendo sido informada y advertida de sus derechos en los términos del artículo 326 del Código Procesal Penal, la acusada **MARÍA ELIZABETH SOSA AQUINO** señaló que deseaba hacer renuncia de su derecho a guardar silencio y en consecuencia, prestar declaración.

Expresó que era su intención contar su historia, y al efecto, relató que en su país fue pobre y que vivió necesidades dado que tenía hijos pequeños, quedó viuda y sus padres se encontraban enfermos. En Paraguay, tenía empeñada su casa. Anteriormente había viajado a España por la misma situación y señaló que pasó muchas cosas malas en España, era prostituta allá, y ya no quería volver. Luego, ante la posibilidad de viajar a Chile, dijo que era tanta la desesperación y la necesidad de dinero, que optó por venir a Chile para buscar dinero. Vino en bus, y buscó al llegar un lugar en donde podía quedarse y ofrecer sus servicios.

Es así, que en compañía de un taxista llegó a un lugar ubicado en avenida El cerro 098, cerca “del Costanera”, en donde había una agencia y las chicas de dicho recinto la recibieron. Empezó a ejercer la prostitución ahí por largo tiempo. Un día decidió salir de ahí para independizarse, y arrendó un departamento, por día. Ahí ejercía la prostitución y publicó sus servicios en la página “sexo.cl”. Agregó que en tal actividad le fue bien y resultó ser un negocio rentable. En ese momento su papá falleció y con ejerciendo el comercio sexual es que pudo solventar los gastos de sus hijos, haciendo presente que es mamá soltera.

Refirió que en el año 2017 arrendó el departamento N° 1005, y que siguió trabajando sola. Señaló que no le enorgullece decir que es prostituta y que no había dicho antes porque tenía miedo de que le quitaran a su hijo, pero ahora, que perdió todo lo que tenía, considera que es hora de decir la verdad. Relató que la conocían como una mujer que ejercía la prostitución desde España y que trabajaba sola. Por ello, varias chicas la contactaron y le preguntaban cómo le iba y ella respondió que le iba bien. Ellas querían venir, pero trabajando para ellas. Les dijo entonces que no hay problema, pero les podía arrendar la habitación que tenía, ya que en el departamento le sobraba un dormitorio. Ella, por su parte, tenía la experiencia, ya tenía cuenta para publicar y tenía sus documentos legales. Les dijo que se podían publicar, y fue así como unas a otras se fueron corriendo la voz que acá le iba bien, y después empezó a arrendar más. Por ello, arrendó el inmueble de Luis Thayer Ojeda, por las habitaciones. Después, concordó con las chicas -dado que ella tenía la experiencia para

poder publicarse- la parte que le pasaban. Así, de \$30.000 las chicas le pasaban \$15.000, agregando que “nunca era el mismo monto de lo que se hacía”.

Señaló que hubo varios momentos en que atendía los teléfonos, y ello se debe a que la publicación, ellas iban y les preguntaban (“ellos les preguntaban”) que es lo que hacen y que es lo que no hacen, es decir, si es sexo oral, vaginal, anal, si sexo con hombres o mujeres, etcétera, y en dicho lugar, ellas deben ir con su documento para poder publicar.

Luego, dijo que ha pasado por muchas cosas, abusos, muchas cosas malas, por eso mismo las encaminó a las chicas, para que no pasaran lo mismo. Insistió en que ella pasó por muchas cosas cuando llegó a este país y no quería que pasaran por eso, porque se trataba de sus compatriotas. Una de ellas traía a la amiga, y le decía que no tenía plata, entonces ella les prestaba, pero si hubiera sabido que eso le iba conllevar estar presa y estar alejada de su hijo, jamás hubiera hecho lo que hizo. Añadió que en España nunca fue condenada ser prostituta. En su país es igual, en su país son muy pobres. Como prostituta, en su país era pobre. Muchos le dicen acá, que es la peor del mundo, pero eso no es así. Las que realmente tienen que hablar, les da miedo que se les condene, que tengan represalias, “que estén presas igual que yo” expresó. Refirió que una de las chicas es su amiga de Paraguay, Paola, y la considera muchísimo. Su hermana, Marcia, le pidió -la conoce desde España- que se quería ir junto a ella. Le dijo “que se vaya primero mi hermana, hazle el favor, porque está sola y tiene hijos”, y como ella sabe lo que es sufrir, lo que es no poder darles alimento a los hijos, quería ayudarla y le dijo que no había problema, que la podía recibir. Su amiga le preguntó si le podía prestar dinero para el pasaje, y le dijo “no hay problema yo le presto”. Le dijo que justo estaba en Paraguay y le ofreció irse con ella, para que no se fuera sola. Ella fue la única que viajó junto a ella. La considera hasta ahora y cree que todo lo dijo en este juicio fue por presión, porque era su amiga y hacían tríos juntas.

Hace poco se enteró, porque su familia está en Paraguay, que fue con lágrimas en los ojos a decir que todo lo que dijo fue por presión, le dijeron que tenía que venir a declarar y que cosas debía que decir “si o si”. También se enteró hace poco que su hija

del medio, que cumplió 18 años, vino a Chile para ayudarla en su proceso, le lleva cosas, sus hermanos le pasan dinero y su hija le lleva cosas. Pese a todo, no le guarda rencor y le tiene cariño.

Con la otra niña que es su hermana, de nombre “Arelis”, Paola le dijo que su hermana quiere venir. Ella se llama Sonia. Le dijo que quería venir porque necesitaba. Le preguntó que como se llevaba con su hermana, “es un poco caprichosa” le respondió y le dijo que no tenía plata para venir, por lo que le informó a su amiga que le pasaría dinero. En sus declaraciones anteriores, sabe que dijo otra cosa, pero fue porque estaba nerviosa. Como siempre manda encomiendas por el único bus que va a Paraguay, ropa, platita a su hermana, se confundió y dijo que le pasó dinero al bus, pero no es así, le pasó dinero a Paola. Porque varias veces le prestaba plata a Paola, para extensiones, para su hijo. “Con las amigas uno actúa así”, aseveró, “uno está ahí cuando las amigas la necesitan”. No recuerda como hicieron para enviarle plata a su hermana, si por bus, por Western, no recuerda bien.

Afirmó que cada una de las chicas tenía llaves, del portón de las casas, cada una tenía sus documentos, su plata. Incluso ella trabajaba ahí a escondidas del papá de su hijo, que es chileno, que la conoció trabajando. Pero él también la vio hacer cursos de corretaje, de administración, sin embargo, no le alcanzaba con la plata que él le daba, porque tiene más hijos y su mamá enferma. Ahora, que le quitaron hasta su hijo, es la razón de porque está diciendo la verdad. Lamentó mucho si hizo daño a la sociedad paraguaya, a la sociedad chilena. Señaló que, si sale, “lo suyo” no lo hará nunca más. Siempre hizo lo mismo, ser prostituta y con eso pudo solventar todo.

Luego, señaló que cada chica que estaba ahí trabajaba para cada una. Si quizá le pasaron plata, era para administrar y pagar las publicaciones que estaban a su nombre. Dijo “si tienes muchas publicaciones te cobran menos, si vas de una te cobran más”. En los computadores, había varios correos, porque todas podían ingresar en ese computador y cuando ella estaba ocupada, las chicas atendían el teléfono, añadiendo que cualquiera puede publicar. Afirmó “si se sabe que fulana no hace anal, eso no se hace, y si tiene una compañera que sí, es porque lo hacía ella u otra”.

Indicó que cada chica tenía sus anotaciones en los cuadernos, porque ellas no tenían residencia en Chile, y porque la cuenta la tenía ella, entonces, al otro día ella iba al cajero y les pasaba su plata. Nunca se quedó con plata que no era de ella. La única persona que denunció es porque se enojó con ella. Les decía siempre a las chicas, acá no se consume drogas, porque las drogas matan a las personas. Pamela era el nombre de fantasía de esa chica, su nombre real era Samantha, y expresó que solo estuvo ocho días, no meses como están diciendo. Su amiga Yerutí, le dijo que había una compatriota que estaba siendo obligada a que se acostara con el esposo de la señora donde está, que la tenían sin comer, en la calle, trabajando con cartera, pero en pésimas condiciones. Le preguntó a Yerutí si la conocía y ella respondió que si, por lo que decidieron ir a ayudarla y entonces la fue a buscar. Acudió en compañía de su hijo y de Yerutí en el auto. A Samantha la vio demacrada, le dio pena. La trajo y le dijo que se duchara, que almorzara. Yerutí le había dicho que ella trabajaba para ella. Le preguntó y le dijo que tenía un lugar en Luis Thayer Ojeda. Después de un tiempo dijo que quería también ejercer, porque vio que las chicas estaban ejerciendo. Le dijo vamos entonces, Samantha le dijo que necesitaba plata, “vamos entonces” fue su respuesta. Justo llamó un cliente para ella (acusada), y decidió llevarla. Cuando estaba sola, tenía que ir de madrugada, por eso mismo la acercó junto al señor. Luego, Samantha llamó y le dijo que este señor estaba drogado. Ella le contestó que estaba en Las Condes, en un servicio, pero que iría por ella, advirtiéndole que estaba en Las Condes, “no fue un ratito, ni como dicen que le habría dicho que se quedara”.

Luego, dijo que quería relatar sobre otra circunstancia, y que consistía en admitir que fue una persona golpeada. Tampoco dijo eso con anterioridad por miedo de que le quitaran a su hijo, dado que era “par” de las chicas. Pasó por todo y nunca obligó a nadie a hacer cosas que no querían, al contrario, el cliente que denunció fue porque no se le dio en el gusto. Él quería hacer cosas que la chica no quería, por eso se enojó ese cliente, quería abusar y hacer cosas que la chica no quería, él no la puede obligar, y por eso se enojó y fue a denunciar.

Luego, indicó que las cámaras están en la entrada, pero jamás en las habitaciones, y aquello también fue de acuerdo con las chicas. Todas hablaron en relación con poner cámaras en la entrada de la puerta, porque recibían a los clientes, pero no sabían quiénes son. Con las cámaras al menos se tiene la cara de la persona, y si hacía algo, se podía tener su cara y denunciarlo. Supuestamente en las habitaciones había cámaras, pero eso jamás pasó. Había gente que fue, de la investigación, “y no sabes que es de la investigación” afirmó, “que van y no dicen que son de la investigación, va y se atiende conmigo y hacen muchas preguntas”. Relató que un día atendió a una persona, hizo sus servicios, y él decía que estaba investigando. Dijeron que tenía un amigo “PDI”, pero eso era mentira. Sabía que la estaba investigando, pero ella pensaba que no estaba haciendo nada malo, ya que en su país es normal.

Indicó que un día llegó una persona a detenerla, le dijo “vengo a detenerte” y ella le preguntó por qué, pero él no le dio ninguna razón. En esa oportunidad, ella estaba con su hijo chico y le dijo que se presentaría al tribunal. Luego, le dijeron porque te fuiste a entregar, y ella respondió que porque no estaba haciendo nada malo. Fue a Rondizzoni, con su hijo chico, hizo fila, sacó número y se entregó. Nadie le dijo ándate, escóndete. Recordó que la persona que la fue a detener le dijo “si usted no se va a entregar, vamos a venir mucho más fuerte y te vamos a llevar a la fuerza”, por eso se subió al taxi y fue a Rondizzoni.

Luego, a las *preguntas que le hiciera su defensa*, expresó que es madre de cuatro hijos, tres mujeres de 23, 18 y 12 años y un niño de 5 años. Indicó que no terminó la enseñanza media en su país y que llegó a lo que en Chile sería el tercero medio, sin embargo, en nuestro país realizó cursos de administración de empresas y corretaje de propiedades.

Además, señaló que estuvo residiendo en España cerca de ocho años y que en dicho periodo ejerció la prostitución. Luego, decidió volver a Paraguay y posteriormente, venir a Chile. Cuando llegó, reiteró que prestaba servicios sexuales en una agencia y que decidió irse de allí por las cosas y circunstancias que vivió en dicho lugar. La maltrataban, no hacía sola sus cosas, dependía de otras personas, pasó malos

momentos, la mandaban de madrugada a hacer domicilios, iba y regresaba sola, todo lo cual, hizo que tomara la decisión de independizarse. Entonces, se cambió a calle Arturo Prat N° 300, en la comuna de Santiago, donde comenzó a ejercer la prostitución sola, no recuerda el año, pero señaló que puede ser en el 2014. Luego, comenzó a arrendar departamentos. Le arrendaba a Darío Espinoza y él le daba la autorización para subarrendar por pieza. Aquel departamento es el que ubicado en Santa Rosa N° 170, departamento 1005, arrendado el año 2016. Ahí, seguía ejerciendo la prostitución a escondidas del papá de su hijo. Agregó que su hijo nació hace 5 años, pero la relación era tóxica desde un principio, “de un día si y al otro no” expresó.

Agregó que, durante el año 2017, comenzó a subarrendar las habitaciones, que en esa época las chicas la contactaron, debido a que sabían a lo que se dedicaba, y no podían estar en su departamento donde ella trabajaba, y ofrecía sus servicios, por eso, comenzó a subarrendar, y en dicho lugar, las chicas ejercían la prostitución.

Se le preguntó a la acusada Sosa que diera explicación sobre que era y en qué consistía el sistema de pagos, cuánto cobraba por el arriendo de las habitaciones, y ella respondió que cobraba una suma diaria de \$25.000. Indicó que ella se hacía cargo del pago de todos los servicios básicos, refiriendo que el arriendo ascendía a \$500.000, \$50.000 por gasto común, cerca de \$20.000 por consumo de luz, también pagaba el agua y el internet que costaba \$39.990, todo eso correspondía a los gastos del departamento 1005. Expresó que, al principio, iba subarrendando, pero luego, como las chicas le decían que había días que les iba mal y otros bien, le ofrecieron, “como se todo” si les hacía el favor de publicarlas, cuestión a lo que ella accedió. Indicó que podía quedarse con la mitad de lo que ellas hacían, porque al fin y al cabo, la que tenía experiencia en el tema, era ella. Las cuentas y los gastos mencionados, al principio fueron por los arriendos, pero al final las chicas le pasaban la mitad de lo que hacían, podía ser \$15.000, \$20.000, “ellas decidían qué hacer, cuánto cobrar, ellas cobraban en la habitación” aseveró.

Refirió también que ella se hacía cargo de los pagos por las publicaciones en determinadas páginas web. Así, pagaba \$1.250.000 en la página “sexo.cl”, \$750.000 en

la página “miprivado.cl”, y que además se encargaba del hostel, esto es, la casa que estaba haciendo (para eso estaba programado, aclaró) en la calle Ruiz de Gamboa 029, de la comuna de Providencia, cuyo arriendo ascendía a \$1.600.000.

Luego, indicó que el día que llegó la PDI estaban nueve personas en total, y que cada una de ellas le pasaba \$15.000 y de esa plata pagaba todo, quedaba un saldo aproximado de \$200.000 o \$300.000 que lo usaba para ir a cenar a las comidas peruanas, asados, hacer fiestas, comprar cervezas, todo eso. Añadió que ella vivía con lo que ella generaba, con lo que hacía con su cuerpo, porque no tenía dinero antes, vivía el día a día con lo que ella ganaba. Señaló que la casa que tiene en su país fue la que se compró con su trabajo en España, cuando tenía 23 años, y que un poco después quedó viuda, relatando que actualmente esa propiedad “se está cayendo”. Negó que lo que generara acá en Chile fueran millones de pesos, afirmando que acá “no tiene ni peso”.

Fue consultada para que contara sobre los cuadernos con anotaciones y dijo que las chicas llevaban por su propia cuenta sus anotaciones, “cada una tenía su agendita para cada una manejar sus cuentas” señaló. En esos cuadernos, se apreciaban cuentas respecto de los clientes que se atendían. Obviamente, había clientes que les pagaban en transferencia entonces, ella al día siguiente iba al cajero y le pasaba a cada chica su plata. Ella pasaba su cuenta a las chicas que no tenían Rut ni cuenta bancaria. Había chicas que si tenían Rut y los clientes les transferían directamente.

A continuación, en relación con el departamento 1005, indicó que en ese inmueble existen dos habitaciones, una sala, un comedor, cocina y un baño, y que en ese lugar estaban su sobrina y la amiga de ésta, es decir, Jessica Beatriz Sosa (sobrina) y Naomi. El departamento “ya no funcionaba para esas cosas” añadió, ya que cuando en el centro pasó el estallido, ya no llegaban clientes. En esa época, ella estaba preparando el hostel, intentó con todas sus formas de hacer un hostel, y para ello le pidió un préstamo de \$20.000.000 al papá de su hijo e hizo arreglos en la casa. Por su parte, las chicas le dijeron que no llegaban clientes y le pidieron que las llevara a otro lugar, entonces fueron todas a probar a Ruiz de Gamboa y cada una tenía sus clientes.

Expresó “las chicas podían estar solas en su habitación, pero ellas querían dormir así. Hacían lo que querían, si quieren duermen juntas, arriba, cada una tenía sus cosas, su espacio, su televisión”.

Se le preguntó sobre cuál era la dinámica con las chicas y sobre qué era lo que tales mujeres hacían y la acusada indicó que, al despertar, ella se iba para allá, que cada una de las chicas se despertaba a la hora que querían, a las 10, “era como su casa, por ejemplo, había chicas que decían que querían trabajar y otras se iban al mall, como lo que pasó ese día” aludiendo con ello al día de su detención. Indicó que algunas de las chicas le decían que iba a atender porque necesitaba plata y cuando ella estaba ocupada las chicas atendían el teléfono.

Refirió que ella y las chicas tenían un grupo de WhatsApp, en que decían, por ejemplo, “voy llegando en 15 minutos, llegará mi cliente pero no lo atiendan que es especial, díganle al cliente que llego pronto”. Ella también atendía a clientes. En ocasiones, si una chica decía voy a ir a “Western” a enviar dinero a mi familia, y no estaré toda la tarde, esa información era la que se le daba al cliente. De esta manera “la que quería iba y atendía”.

Se le preguntó qué pasaba si alguien llamaba y esa llamada no era para usted y la acusada respondió que ella se hacía pasar por esa otra persona, “todas lo hacían” señalando que las paraguayas tienen la misma forma de hablar, y contestaba la llamada diciendo “si mi amor, aquí estoy en Ruiz de Gamboa”.

En relación con los servicios o prestaciones sexuales, declaró que se sabía qué servicios hacía cada chica, quien hacía anal, “americana”, doble penetración o solo compañía. Así también sabía que había chicas que no hacían anal. Estos servicios solo estaban en las páginas de internet. Había otras páginas, estaba “lo canto”, “sexo.cl”, “miprivado.cl”, varias páginas y todas ellas solicitan autorización de las personas para ser publicadas. En esas páginas, se publicaban los nombres de fantasía, las fotos - agregando que “uno puede bajar y subir la foto cuando quisiera”-, los servicios que hacía cada persona, en qué dirección, se ponía “full time” pero en realidad el horario era lo que cada chica trabajaba, no era de 9 de la mañana a 2 de la madrugada, todo el

rato atendiendo a hombres, como se ha dicho, “por ejemplo, en un día una hora, o con suerte, dos hombres al día, media hora” expresó, negando que existiera algún día en que se trabajara de 9 de la mañana a las 2 de la madrugada. Señaló que en las publicaciones no se indicaba nada en relación con los días y que conforme se producían las llamadas, se decía si una chica estaba disponible o no.

Otorgando más detalles sobre las “páginas”, María Sosa Aquino explicó que era cada persona la que iba con su cédula de identidad a dar su autorización, para subir sus fotos. También, se debía indicar que hacía y que no, y sin esa autorización, no se podía publicar. Expresó que su rol concreto respecto de las páginas se asociaba a su experiencia. Así, como ella empezó con su trabajo, hay una publicación de ella en “sexo.cl”, en “mi privado.cl”, y son las personas de dichos sitios quienes le habían dado un correo para que se pudieran efectuar los pagos y refirió que había diferencias en los montos, dependiendo del número de publicaciones. “Por ejemplo, si quiere publicarse sola, son \$200.000 al mes, si va con una amiga le cobran \$160.000 por las dos” señaló, insistiendo en que salía mucho más barato mientras más publicaciones se hicieran, considerando además que los costos dependían del lugar en que la foto se apreciara en el sitio, si arriba, abajo o al medio.

Se le preguntó luego sobre las medidas de seguridad que existían en los domicilios y contestó que en el domicilio de Santa Rosa 170, departamento 1005, había un sistema de seguridad, en la entrada, donde se recibe a la gente, consistente en una cámara. Lo anterior, porque se dieron algunos altercados con un señor y se puso una cámara en la entrada para seguridad de todas. En Ruiz de Gamboa ocurría lo mismo, en la entrada y en el pasillo donde ingresaba la gente, existían cámaras de seguridad.

Consultada si sabía sobre el hecho de que la estaban investigando contestó que sí lo sabía, dado que “el cliente PDI que entró” así se lo informó directamente, agregando que a ella le tocó atender a un cliente que dejó ahí su pistola. Este hombre le dijo que se estaba investigando en el lugar, pero como en su cabeza, en su cultura no estaba haciendo nada malo al ejercer la prostitución, pensó que no había problema

alguno, ya que no estaba haciendo nada malo. Asimismo, dijo que nunca le filtraron información.

Se le preguntó si sabía cómo habían llegado a Chile las chicas que vivieron en los inmuebles de Santa Rosa y Ruiz de Gamboa y la acusada contestó que aquello era relativo. Afirmó que, lo que pasa es que había chicas que ya estaban en Chile y la contactaban acá. Otras, la conocían en Paraguay, y la contactaron porque sabían a que se dedicaba, aseverando que ella nunca vendió ilusiones. Si bien dijo no recordar nombres, afirmó que “la Nicol, la Jessica, la Blanca, ya estaban aquí”. Señaló que a las chicas nunca les pidió nada, solo el tema de la droga, esto es, que no ingresaran o consumieran droga, porque mata y hace daño a todos, ese era el único requerimiento, ellas hacían su vida, si querían ir al parque, al gimnasio, a jugar, al mall, ellas manejaban sus tiempos, porque trabajaban para ellas mismas.

En el año 2017, cuando subarrendaba el departamento N° 1005 de Santa Rosa 170, ella vivía en calle Ejército 521, departamento 417, en la comuna de Santiago. Posteriormente, cuando quedó embarazada y dado que su relación con Luis Alexis Araya era tóxica, decidió que ya no quería vivir más en calle Ejército con él, puesto que Araya era muy inestable, entonces, cuando tuvo a su hijo, le dijo a Luis que se quería alejar y él compró el departamento “por el bien de su hijo”. Él sacó un préstamo hipotecario y así adquirió el departamento 704 de Santa Rosa 170. En cuanto al pago del dividendo, la acusada señaló que algunos meses ella pagaba el dividendo, arreglándoselas con la plata que Araya le pasaba por su hijo Bruno, y en otras ocasiones lo pagaba él.

Se le consultó sobre si trasladaba a algunas personas en un vehículo y la encartada Sosa respondió que sí, que aquello lo hacía en el auto que le pasó el papá de su hijo para usarlo en las actividades con su hijo pequeño, pero además reconoció que lo usaba para sus cosas. Dijo que Luis Araya lo compró en el año 2016 y era un vehículo del año 2017 de color plateado, sin embargo, a veces se movilizaba en Uber o en taxi.

En relación con “Samantha”, la acusada indicó que efectivamente tuvo un problema con ella. Indicó que un día Samantha le comentó que quería ir a trabajar y salió un domicilio para ella y otro para Samantha. Sin embargo, esta mujer se encontró con una persona que no quería atender. Por su lado, la acusada se encontraba en Las Condes, en un servicio. Luego de realizar dicho trabajo en Las Condes, pasó por Samantha y al subir al auto le dijo había consumido cuatro gramos de droga y que se drogaba cuando quisiera. Ella le recomendó que no lo hiciera. Cuando llegaron a casa, Samantha le dijo que “le iba a dejar la cagada”, luego le habló un abogado de nombre Francisco Pino y le pidió \$2.000.000 y que para ello tenía dos horas, y que, de lo contrario, le iba a dejar la “cagada con la Samantha”. Que, si no lo haría, la denunciaba, porque tenía una movida en la fiscalía. Esta mujer empezó a acosar a todas las chicas, diciéndoles que denunciaran. Entonces, fueron a hacer una denuncia y Samantha dijo que ella se había quedado con \$800.000 y eso nunca fue así, destacando que ella tiene una conducta anterior irreprochable.

Luego, negó que fuese cierto el hecho de que Samantha tuviera en su poder esa suma de dinero, porque durante esos días, Samantha pedía muchos deliverys, se compraba sus cosas, ni siquiera atendió a gente, uno o dos quizá por algunos días, pero jamás pudo haber juntado tanta plata en esa semana, “eso es mentira” insistió. Agregó que todas las chicas fueron testigo de que ella no entró al lugar en donde Samantha dijo que estaba la plata, “ahora pide \$15.000.000 y no tengo de donde” expresó. Indicó que Samantha dijo que le podía sacar plata a los hombres como sea. Negó rotundamente que le haya robado, ya que nunca sacó plata de nadie, y no hay cosa que le duela más que la acusen de cosas que no es. No niega que es prostituta, aunque le duela decirlo, pero robar, nunca.

Por último, se le consultó sobre el día 27 de noviembre de 2019. Indicó que ese día fue al Centro de Justicia, subió en taxi con su hijo menor Bruno, esperó en la fila y tomó un número, esperó mucho rato y cuando por fin la atendieron le informaron que tenía una orden de detención y ella quería saber por qué. Pensó que era por una deuda con “la Católica” que tenía por su hijo. La hicieron pasar y tuvo que volver a esperar.

Le dieron lápices a su hijo para que no se aburriera. Luego, le preguntaron quién se podía llevar a su hijo, por lo que llamó a su sobrina, o a otra chica, no lo recuerda con exactitud. La persona que la atendió le indicó que le pasara sus cosas a la persona que recogería a su hijo, porque ella estaba con su cartera, su celular, pero le dijeron que no la entregara, no le dijeron nada, que, al contrario, se lo pasara a quien recogería a su hijo. No recordó si fue Lucía o su hija quien finalmente llegó y se llevó a su hijo, y además se llevaron su bolso. Agregó que las chicas le decían “la jefa”. Cuando se entregó, nunca dio autorización para que sacaran sus cosas. Un día le dijo a su exsuegra, que quería que le dieran autorización para que su hijo pudiera salir de Chile, por todas las cosas que le habían pasado acá, incluso no tiene dientes. Por eso se quería ir, pero no porque sabía que tenía una orden de detención. Una de las tantas veces que el papá de su hijo le pegó, le quebró sus dientes. Se quería ir del país, con su hijo. No quería irse sin él. No sabía que estaba siendo investigada. Los golpes eran casi siempre, no puede precisar tal fecha, incluso un día, cuando la vecina de abajo del departamento 1005, le reclamó porque las chicas hacían ruido, dijo “qué ruido”, y la mujer la agarró del pelo, le pegó, añadiendo que de ese episodio debió quedar registro en las cámaras. Eso lo hizo, -aclaró- porque siempre protegió a las chicas. No quiso denunciar, porque quería salir, pero lo quería hacer con su hijo. Hoy día, dijo que lleva casi dos años sin ver a su hijo, el que se encuentra con su papá Luis Araya y su abuela Saida Espinoza.

Al *contra examen del Ministerio Público*, la acusada indicó que desde que llegó a Chile ejerció la prostitución y lo hizo hasta su detención, solo suspendiendo dicha actividad en un periodo por el embarazo de su hijo y hasta por 4 meses después de que éste nació. Indicó que no ejercía la prostitución en el departamento 704, porque ahí vivía con su hija y su hijo menor, pero que, si lo hacía en el departamento 1005, o en Ruiz de Gamboa o en el departamento de Luis Thayer Ojeda. Reconoció que el 23 de enero del año pasado declaró en fiscalía, al igual que el 23 de noviembre de 2020 y que en esas declaraciones previas no había señalado que había prestado servicios sexuales, porque sentía miedo, siento ésta la primera vez que declara que se prostituía.

En relación con los servicios sexuales y la forma en que se coordinaban vía telefónica, la acusada señaló que cualquier persona podía contestar los llamados para coordinar tales prestaciones, usando para ello 15 teléfonos. Indicó que las chicas, cuando no tenían teléfono, podía ser el mismo teléfono, y en otros casos, con otras tarjetas de memoria que ponían en los teléfonos. No sabe si esos teléfonos fueron encontrados en el departamento 704, y que, al efecto, ella no dio ninguna autorización. El día de su detención, no recuerda si estaba Tania Oviedo, que esa la persona que mencionó como “Lucía”. Se le preguntó si Tania o Lucía vivía con ella y respondió que no específicamente, pero que si venía todo el tiempo. Se le preguntó si Tania (Lucía) le ayudaba con el cuidado de su hijo y la acusada dijo que no, pero que dicha mujer estaba muy apegada tanto a ella como a su hija. Afirmó “para evitar esas cosas, que me decían jefa y todo, iba con ella siempre, donde ella iba, por la cercanía que teníamos”. Indicó que en broma le decía a Tania que la adoptaría porque le tenía mucho cariño, insistiendo que no era efectivo que estuviera a cargo del cuidado de su hijo. Tania fue por su hijo al tribunal el día 27 de noviembre y fue a ella a quien le hizo entrega de su cartera y de dos teléfonos. Se le preguntó si en la audiencia dijo dónde estaban esos teléfonos y la acusada respondió que no. Agregó que previo a eso, la persona que la atendió en el tribunal le dijo “no, eso mándalo para afuera”, puesto que ella estaba entregando los celulares. Afirmó también, que no recordaba si en la audiencia dijo que los celulares se los pasó a Tania Oviedo.

En cuanto a los departamentos de Santa Rosa 170, reiteró que vivía en el 704 y que arrendaba el 1005, agregando que también estaba arrendando la casa de Ruiz de Gamboa en Providencia. Tanto la casa de Ruiz de Gamboa como el departamento 1005 los tenía destinados a la prestación de servicios sexuales. Se le preguntó si en julio de 2018 arrendó el departamento de Luis Thayer Ojeda para la misma finalidad y la acusada contestó “para mí”. Indicó, además, que en ese lugar prestaban servicios sexuales otras mujeres paraguayas. Expresó que no recordaba la fecha exacta en que arrendó la casa de Ruiz de Gamboa, pero que probablemente fue después de julio de 2019, quizá desde el mes de agosto.

Reconoció en las llamadas que recibía se hacía pasar por las chicas, y que ofrecía a mujeres para que hicieran “domicilios”, como también se ofrecía ella misma, “como cualquiera podría haberlo hecho”, precisó.

Se reprodujo la interceptación telefónica de 15 de octubre de 2019, contenida en el CD 3 de la **Prueba Material N°5**, en que se escucha a una mujer y a un hombre hablar de nombre Víctor. Se le pregunta por éste si tiene alguna chica para mandar, la mujer le pregunta si tiene efectivo y al responder que sí, la mujer le dice que le llevará una “chiquitita y bien pechugoncita”. El hombre le dice que tiene “60 por ahora” y que la mande “al tiro”. La acusada indicó que no estaba segura si era ella la mujer que se escuchó en dicha llamada, puesto que podía ser otra persona.

Se le preguntó sobre el vehículo marca Kia y María Sosa indicó que lo usaba para los servicios conocidos como “domicilios”, agregando que dicho automóvil era propio, aunque estaba a nombre de Luis Araya.

Luego, se reprodujo la interceptación telefónica de 24 de noviembre de 2019, (desde el minuto 45 en adelante), contenido en el CD aportado como **Prueba Material N°6**. En dicho audio, se escucha a dos mujeres conversar, en donde una de ellas dice que el auto “está a nombre de él, pero tengo que hacer la transferencia”, haciendo alusión que el mismo trámite debía realizar con el departamento. Luego, a las preguntas que le hacía su interlocutora, la primera mujer aclara que el departamento no está a nombre de él, ya que él solo fue su aval, pero que debe hacer los papeles primero, “es mío el departamento y lo estoy pagando”, señala. La segunda mujer le aconseja que todo lo que tenga con él, debe quedar a nombre de ella.

Se le preguntó entonces, si tanto el vehículo Kia como el departamento 704 son de su propiedad y la acusada dice que el automóvil es suyo y que el departamento está a nombre de él y que ella pagó algunas cuotas.

Se le consultó posteriormente, si envió dinero a Yerutí a Paraguay, antes de que ella viajara a Chile, y la acusada contestó que no lo recuerda. Tampoco puede precisar en qué fecha llegó (se le preguntó si Yerutí ingresó el día 4 de febrero de 2017), que, si

llegó en el 2017, aunque no está segura. Si recordó que la recibió en el departamento 1005 y que, en dicho lugar, Yerutí ejerció la prostitución.

Sobre si recordaba que Yerutí llegó con “Lida” de iniciales “LJD”, la acusada dijo que no lo podía precisar ya que Yerutí viajó varias veces y que Lida puede ser una mujer apodada como “Barbie”, paraguaya, a quien recibió en el departamento 1005, lugar en donde ejerció la prostitución.

En relación con “Norma” indicó que no sabía quién era ella. Se le preguntó si conocía a una mujer de nombre “Jacky” y contestó que sí. Indicó que no recordaba haberle mandado dinero a Paraguay previo a su viaje a Chile, ya que cree que su prima de nombre “Marisa” fue quien la trajo. Con todo, indicó que recibió a Jacky en el departamento 1005, en donde ejerció la prostitución.

Sobre “Hilda”, de iniciales “H.C.”, la acusada reconoció que le pagó el pasaje desde Paraguay a Chile y que viajaron juntas, ya que, en esa oportunidad, ella se encontraba en Paraguay. Indicó que también la recibió en el departamento 1005, la primera vez y la segunda vez, estuvo en el departamento 1005 y en la casa de Providencia.

Se le preguntó luego sobre “Arnal” de iniciales “ALG” y la acusada reconoció que en relación con esta mujer efectivamente le pagó el pasaje para venir a Chile, aunque no recuerda en qué fecha fue, no pudiendo precisar si fue el 7 de enero de 2019, porque está perdida en las fechas, rectificando que tampoco recuerda si en el año 2019 le pagó el pasaje a Arnal, porque no recuerda quien es ella, debido a que usaban nombres de fantasía y se puede confundir. Se le preguntó si recordaba a Barbie y la acusada indicó que hubo como tres “Barbie”, como la amiga de Yerutí de nombre Lida. Se le preguntó si a Lida le decían “Mini Barbie” y María Sosa respondió que en “sexo.cl” se llamaba “Mini Barbie” y en “mi privado.cl” se llamaba “Barbie”. Sobre otras mujeres asociadas al nombre “Barbie”, como, por ejemplo, Arnal o Laura de iniciales LVA, la acusada reiteró que no recordaba a Arnal y que en relación a Laura puede ser que se trate de “Noemí”.

Consultada sobre “Jannyré” o “Jany”, indicó que no recordaba haberle mandado pasajes ni 300 dólares.

Sobre si conocía como contacto a una persona que trabajaba en la compañía de buses que realizaba viajes desde Paraguay a Chile, indicó que sí conocía a un auxiliar de bus de nombre Eduardo. Se le preguntó si le pidió a ese auxiliar entregar dinero, 300 dólares a mujeres en Paraguay, y contestó que no, que solo le pidió entregar a su hija o a su hermana encomiendas que les enviaba.

Se le preguntó si recordaba haber instruido o haber dicho a mujeres paraguayas que en el control migratorio chileno tenían que decir que venía a casa de una tía o una madrina y la acusada contestó que puede ser que le haya dicho eso solo a su sobrina.

Luego se le consultó por Araceli y dijo que no la recordaba.

Consultada por Sonia, negó haberle comprado pasajes a Sonia, si a Paola. Se le preguntó si sabía que Sonia llegó a Chile el 19 de octubre de 2019 y la encartada contestó que puede ser que sí, aunque no está segura. De contrario, recordó que, si la recibió en el departamento 1005 y que la llevó luego a la casa de Ruiz de Gamboa, donde estaba su hermana.

Se le preguntó si recordaba haber comprado los pasajes a Chile de Laura de iniciales L.E.A., a lo que la acusada respondió que recordaba a Laura como una amiga de su sobrina Jessica. De igual manera respondió que era efectivo que Laura había llegado a Chile el 2 de noviembre de 2019 y que la recibió en el departamento 1005, en donde ejerció la prostitución por un corto tiempo.

Fue consultada, a continuación, sobre sus teléfonos un iPhone y un Nokia, y si éstos tenían clave, y María Sosa afirmó que nunca ha tenido un iPhone y que el Nokia si era de ella, pero que no recordaba que con anterioridad le hayan preguntado por su clave. Con un ejercicio dispuesto en el artículo 332 del Código Procesal Penal, se le exhibió una declaración prestada en fiscalía el 23 de noviembre de 202 en donde indicó “no recuerdo si los teléfonos tenían clave. Mentí en mi otra declaración por recomendación de mi otro abogado”. Sobre el punto, insistió en no recordar las claves de los teléfonos, añadiendo que, si encontraron un iPhone de color blanco, no era de

ella, ya que le pertenecía a Luis Araya. Se le preguntó si el teléfono Nokia tenía clave y la acusada respondió que no lo sabía, dado que había varios teléfonos de esa marca, no recordando si el de ella tenía clave.

Finalmente, se le consultó sobre su hija Sheila y la acusada indicó que era efectivo que ella se encontraba en Chile el año 2019, pero que había venido a escondidas a ejercer la prostitución con una prima. Cuando le preguntó sobre aquello, su hija le habría contestado que de igual manera lo iba a hacer porque ya tenía 19 años “no podía atajarla” expresó, añadiendo que en su país es algo normal dedicarse a la prostitución. Agregó que su hija vivía con ella en el departamento 704 y ejercía el comercio sexual en el departamento 1005.

Al contra examen efectuado por la querellante particular, indicó que tanto en Santa Rosa como en Luis Thayer Ojeda vivían cerca de 3 a 4 chicas, las que dormían dos en una habitación, haciendo presente que eran habitaciones grandes, y que en dicho lugar dormían y también ejercían la prostitución “para ellas”.

Agregó que cada una de las chicas tenía libertad para hacer lo que cada una quería. Si trabajaban o no, era cosa de ellas, ya que no tenía como retenerlas y todas hacían una vida normal.

En relación con los horarios de trabajo, indicó que se coordinaba con los clientes en un periodo de tiempo que podía ir entre las 9 y las 2 de la madrugada, pero que en ocasiones las chicas se iban. Por teléfono se daba la información de ese horario, ya sea por ella o por alguna de las chicas, ya que todas decían lo mismo.

Sobre las publicaciones, la acusada señaló que ella iba a la página, acompañando a las chicas, pagaban juntas, porque ella tenía toda la experiencia, tenía el correo y las cuentas. Luego, con el dinero que las chicas le pasaban, se pagaban las publicaciones. Indicó que “de vez en cuando” iban las chicas sin ella a publicarse, puesto que no las acompañaba todo el tiempo. Añadió que en “sexo.cl” tenía cuenta, pero personalmente no la conocían, y que durante un mes asistía solo en una oportunidad para efectuar los pagos.

Sobre las cámaras de seguridad en los inmuebles, dijo que no tenía acceso a ellas, ya que en la entrada existía una pantalla y un aparato y que todas podían acceder. Luego, aclaró que desde su teléfono también podía tener acceso a las cámaras.

Se le consultó sobre la forma en que llegaban las mujeres a ella, cómo la contactaban y la acusada refirió que tenía muchas amigas en común, o bien se trataba de amigas directas, como fue el caso de Paola. Se le preguntó luego sobre qué era lo que les comentaba a las mujeres, y explicó que les comentaba sobre su experiencia, que le iba bien, “pero no ilusionaba a nadie con eso” aseveró. Indicó que no comentaba exactamente lo que ganaba, ya que era muy relativo, a veces ganaba desde \$300.000 a \$900.000 o un millón de pesos, en un mes bueno. Agregó que tenía gastos que cubrir, por ejemplo, con relación al departamento 1005 debía pagar \$500.000 en arriendo y el arriendo de la casa. Se le preguntó, cómo solventaba los arriendos si en un mes bueno lograba obtener un millón de pesos, y la acusada explicó que las chicas le pasaban el 50%, y eso ella lo destinaba pagar las páginas, los arriendos, los gastos, al fin y al cabo, quedaban \$300.000, haciendo presente que cuando indicó ganar un millón de pesos era por lo que producía ella individualmente con su cuerpo, por lo que ella hacía. Reiteró que lo que le pasaban era para poder publicarlas, para poder ayudarlas en todo, con su sueldo no. Se le consultó entonces cuánto era el monto que las chicas le pasaban, y ella respondió que dicho monto era relativo, porque ellas cobran a sus clientes adentro y cada una podía cobrar lo que quisiera por sus servicios. Inclusive, afirmó que había meses en que las chicas no le pasaban nada, y de lo que sobraba del mes anterior tenía que pagar todo. Afirmó que cuando ocurrió el “estallido” no iba nadie. Ejemplificó señalando que en un mes los gastos eran de \$4.750.000, y las chicas le pasaban \$5.000.000, con lo que restaba, ella les hacía comidas y fiestas y las llevaba a la comida peruana y a otras actividades. Indicó también que los gastos de cada chica eran “aparte” o independiente, y los gastos que debía cubrir por ellas, era el lugar donde vivían, luz, agua, internet, movilidad y publicaciones. Agregó que, si en un mes había gastos sin cubrir, ella los solventaba con su dinero, porque tenía un poco de dinero guardado, puesto que lleva bastante tiempo trabajando de escort.

En el *contra examen que hiciera el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)*, la acusada expresó que no recordaba la fecha que llegó al país, probablemente en el mes de abril de 2013 y que se debió prostituir por necesidad económica, ya que ese año 2013 fue particularmente duro. Se le preguntó si durante el año 2013 había efectuado cuatro viajes a Paraguay y respondió que era posible. También admitió con un “puede ser” tres viajes a Paraguay (dos de ellos en avión) en el año 2017, tres viajes al mismo destino el año 2018 (vía LATAM) y un viaje a Paraguay en el año 2019, atendido a que mantenía contacto regular con su familia en Paraguay.

Luego, se le preguntó por los departamentos de avenida Santa Rosa, admitiendo que arrendó dos inmuebles, en dicha dirección, el departamento 1005 y el 1011, ambos a Darío Espinoza, con quien mantuvo una buena relación. Dijo no recordar la fecha de celebración del contrato de arrendamiento del departamento 1005, por lo que la querellante institucional exhibió la prueba **Documental N°3**, consistente en el aludido contrato, de fecha 22 de marzo de 2017.

Se le preguntó si era efectivo que se dedicaba a subarrendar las habitaciones y si se dejó constancia de ello en el contrato, a lo que la acusada contestó que si, por cuanto se había acordado fines habitacional y comercial. Luego, con un ejercicio del artículo 332 del Código Procesal Penal y por medio de la lectura de las cláusulas sexta y octava del contrato de arrendamiento presentado como prueba Documental N°3, se dio lectura a que el fin autorizado es el habitacional, y al establecimiento de la prohibición de destinar el inmueble a un objeto distinto del pactado.

Se le consultó luego sobre la forma en que se relacionaba con las chicas en el departamento 1005, y la acusada relató que a dicha dirección un día llegó un cliente que tuvo un problema con una de las chicas, de nombre “Caty”. Esa persona rompió una botella, quería robarle y no tenían como ver quien era. El hombre fue bajado a la conserjería y se enojó. Hablaron con las chicas y acordaron que se pondría una cámara para proteger a las chicas. Ella también estaba ahí y se sintió amenazada, con temor a que esta persona pudiera agredirla. Pese a ello, dijo que no denunció este hecho.

Agregó que las cámaras de seguridad estaban al ingreso de la propiedad y que ella tenía control de las cámaras desde su teléfono celular, por medio de una aplicación. Dijo que podía ver lo que ocurría en los lugares en que estaban dispuestas las cámaras, quien ingresaba y salía y por cuanto tiempo, pero no estaba pendiente todo el rato, sólo cuando se daba algún problema.

Insistió que las chicas tenían libertad para moverse y no era necesario que le avisaran de sus salidas, así como tampoco era cierto que le pidieran permiso para movilizarse. Se exhibió, en el contexto de un ejercicio del artículo 332 del Código Procesal Penal, parte de una declaración anterior, prestada en fiscalía el 23 de enero de 2020 en que señaló “Ellas incluso me pedían si poder hacer algo más”, a lo que la acusada afirmó que existe un malentendido, porque lo que dijo fue que las chicas le pedían que ellas pudieran recibir a más gente, porque en la semana no había movimiento de clientes. Las chicas le pedían recibir más gente y más tarde, no tenía relación con poder salir.

Se le preguntó si tenía con las chicas un grupo de WhatsApp y la acusada contestó que sí, pero que no recordaba el nombre con precisión, “súper poderosas”, “emprendedoras”, algo así. Afirmó que, en dicho chat, todas se avisaban de la llegada de un cliente. Se le consultó si daba instrucciones a las chicas respecto de los servicios y la acusada contestó que sí, de acuerdo con lo que ellas querían hacer.

Afirmó que los servicios sexuales se podían pagar en dinero en efectivo o por medio de transferencias y que algunas de estas transferencias fueron realizadas a su hermana Miryam o a su expareja Luis Araya Espinoza. Este último, tenía una cuenta en el Banco Santander que mantenía para recibir transferencias y su hermana mantenía una cuenta del Banco Estado en que se recibían pagos por los servicios sexuales.

Reiteró que Luis Araya había sido violento con ella, ya que le propinó diversos maltratos. Indicó que hace cuatro años atrás dicha persona fue quien le compró el departamento y un auto para que ella lo usara, y que, en relación a la manutención de su hijo, la cancelaba “relativamente”.

Explicó que el día de su detención le avisaron de la orden en su contra, durante la mañana de ese día en una conversación. Se le indicó que le darían la oportunidad para poder presentarse, voluntariamente, hasta el día siguiente. No obstante, teniendo un día para decidir, fue al tribunal el mismo día con su hijo. Pudo haber coordinado con Lucía, pero ella lo fue a buscar. En el domicilio del departamento 1005, estaba su sobrina o alguna de estas chicas, y cuando llamó por ayuda, una de ellas va al tribunal.

Aclaró que la atención a la que aludió previamente, con relación a un cliente de la PDI, fue en septiembre, antes del estallido, pero que esta persona no le habría contado de la existencia de una investigación. Dicho cliente preguntó si en el lugar había gente obligada, hizo averiguaciones, y luego se atendió sexualmente con ella. Se le preguntó si esa persona fue la misma que le informó de la orden de detención y la acusada contestó que no, negando que quien le informó de la orden haya sido conocida de ella de manera previa.

Asimismo, negó el haberles contado a las chicas sobre su detención, ni que le instruyera a Tania sobre bajar las publicaciones de las chicas, con motivo de su detención. Sobre este punto, se realizó un nuevo ejercicio permitido por el artículo 332 del Código Procesal Penal en donde se exhibió parte de su declaración anterior de 23 de noviembre de 2020, en donde se estampó que “también le había dicho a Tatiana que bajara las publicaciones por el tema de los costos y en ningún momento le dije a ella cosas que las chicas tenían que decir”. Finalmente, indicó no saber ni recordar si tomó contacto con Tatiana el día de su detención.

Luego, en el contexto del interrogatorio que permite el *artículo 329 del Código Procesal Penal*, la *defensa* de María Sosa Aquino le formuló nuevas preguntas.

La acusada indicó entonces, que la persona que fue a recoger a su hijo el día que quedó detenida era Lucía, cuyo nombre real es Tatiana, tratándose el de “Lucía” de un nombre de fantasía.

Se le preguntó si al momento de entregar a su hijo le otorgó alguna facultad respecto de sus departamentos y la acusada contestó que no.

Sobre los teléfonos que llevaba consigo el día de su detención, reiteró que eran dos, uno Nokia, personal, y uno marca Samsung que era utilizado por su hijo. Agregó que tiene entendido que el Nokia también estaba con clave, pero que por el tiempo que lleva presa, no recuerda la contraseña y que cuando le preguntaron aquello en la fiscalía ya llevaba cerca de un año privada de libertad.

Indicó también que tanto el departamento 1005 como la casa de Ruiz de Gamboa tenían cámaras, y que en el departamento 1005 fueron instaladas los primeros días del año 2018, mientras que en Ruiz de Gamboa fue cerca del mes de septiembre, agregando que el destino de ese domicilio era hacer ahí un hostel.

Se le consultó por la razón de sus viajes a Paraguay y la acusada contestó que eran debido a su familia. Al principio, su mamá y su papá estaban enfermos y quería estar con ellos. Su papá ya está fallecido y su mamá es enferma crónica. Indicó que debido al cambio de plata de aquí, es que tiene más facilidades para poder viajar.

Sobre el vehículo Kia, dijo que legalmente el dueño es Luis Araya Espinoza.

Se le preguntó sobre la segunda interceptación telefónica que reprodujo el Ministerio Público (la de 24 de noviembre de 2019) y dijo que la mujer con la que sostuvo aquella conversación era Leslie Palma, ex pareja de Luis Araya. Indicó que Leslie siempre lo denunciaba por pensión de alimentos, por dinero, por más aumento, por lo que quedó con Luis Alexis que, si llamaba ella, le dijera que las cosas eran propias. En algún momento, se quería quedar con el auto, porque lo usaba ella y, pagaba las cuotas, agregando que cuando ella pagaba las cuotas él le pasaba dinero, más plata, o bien, a veces ella no pagana y Luis le pasaba más plata por Bruno.

Por último, ante la última pregunta del *Ministerio Público*, indicó que en el inmueble de calle Luis Thayer Ojeda también existían cámaras de seguridad.

DÉCIMO. Prueba del Ministerio Público y las querellantes. Que para acreditar que los hechos contenidos en la acusación fiscal y las demás acciones de las querellantes, las acusadoras aportaron las siguientes probanzas:

I. PRUEBA MATERIAL:

1. 1 libro de control de visitas folio N°01 al N°200, correspondiente al Edificio ubicado en Avenida Santa Rosa N°170, Santiago, que incluye fechas de visita desde el 21/02/2017 al 06/04/2017 **NUE 2900628.**
2. 3 DVD-R que contiene interceptaciones telefónicas de los Nros. 62590551, 77820729, 86314127, 46305509, 63227532, hasta el día 07 de octubre de 2019 **NUE 5941190.**
3. 3 DVD-R que contiene interceptaciones telefónicas de los Nros. 953342629, 953859650, 63227532 **NUE 5941234** (Informe 316 de fecha 02/12/2019).
4. 01 DVD-R que contiene interceptaciones telefónicas del Nro. 63227532, utilizado por María Sosa Aquino **NUE 5941255.**
5. 1 DVR marca Digital Video con su respectivo cargador y 01 mouse, **NUE 5941240.**
6. 20 preservativos marca CONDOMGUSTO **NUE 5941237.**
7. 1 agenda marca Rhein modelo Design, de diferentes colores con escritos a mano alzada de sumas de dinero **NUE 5941239.**
8. 1 agenda color negro con la leyenda “Itau” que contiene información y cuentas bancarias de prestación de servicios **NUE 5941239.**
9. 1 agenda color azul con la leyenda “Cooperativa Universitaria Ltda. 2018” **NUE 5941239.**
10. 1 caja de color café con el logo “Agta” que en su interior mantiene gel lubricante color azul, condones, hilo y aguja **NUE 5941247.**
11. 1 cuaderno universitario marca Proarte con diseño en su portada, en su interior mantiene escritura **NUE 5941248.**
12. 1 cuaderno morado marca LAVORO color morado, cuadriculado **NUE 5941248.**

**13. 1 cuaderno pequeño color celeste y rosado con diseño de mariposa en su portada
NUE 5941249.**

**14. 1 teléfono marca Nokia, color negro, sin carcasa y sin cargador utilizado por María
Sosa NUE 5941242.**

15. NUE 5941250

(24.1) 1 notebook marca Samsung color rojo y negro

16. 1 libreta con diseños de sandía NUE 5941251

17. NUE 5941252

(.1) 01 teléfono marca Samsung color gris oscuro con tarjeta SIM sin cargador

(.2) 01 teléfono marca Sony color blanco sin tarjeta SIM y sin cargador

(.3) 01 teléfono marca LG color negro y gris con la leyenda “Dual SIM” con tarjeta
SIM, sin cargador

(.4) 01 teléfono marca Apple Iphone color blanco y gris sin tarjeta SIM y sin cargador

(.5) 01 celular marca VIRZO color negro con la leyenda estampada “Yani” sin tarjeta
SIM y sin cargador

(.6) 01 celular marca NOKIA, color negro en mal estado

(.7) 01 celular marca AZUMI, color negro, sin tapa trasera, sin tarjeta

SIM y sin cargador

(.8) 01 teléfono marca AZUMI color negro con papel blanco en su parte posterior, sin
cargador y sin tarjeta SIM

(.9) 01 teléfono marca ZTE, color negro y rojo que en su parte
posterior se observa la leyenda “YERU” sin tarjeta SIM y sin cargador

(.10) 01 teléfono marca HUAWEI color negro con pantalla quebrada, sin tapa trasera,
sin tarjeta SIM y sin cargador

- (.11) 01 teléfono marca Motorola color negro sin tarjeta Sim y sin cargador, con clave de acceso
- (.12) 01 teléfono marca Nokia modelo X3 color negro sin tapa trasera, sin tarjeta SIM y sin cargador
- (.13) 01 teléfono marca Motorola con la leyenda “moto” color gris, sin tapa trasera, con tarjeta SIM Claro, sin cargador
- (.14) 01 teléfono marca Motorola color plateado con pantalla rota, sin tarjeta SIM y sin cargador
- (.15) 01 teléfono marca Samsung color blanco con pantalla quebrada sin batería, sin tarjeta SIM, sin tapa trasera y sin cargador
- (.16) 01 teléfono marca Samsung color negro sin tapa trasera, sin tarjeta SIM y sin cargador
- (.17) 01 teléfono sin marca y modelo visible con la leyenda S.O.S. en el botón principal, color negro, sin tapa trasera, sin tarjeta SIM y sin cargador

Todos teléfonos y tarjetas de propiedad de María Sosa Aquino

II. PRUEBA DOCUMENTAL

- 1. 1 contrato de arriendo entre Darío Herald Espinoza Riquelme (arrendador) y María Sosa Aquino (arrendataria) de fecha 22 de marzo de 2017, respecto a la propiedad ubicada en Santa Rosa N°170, depto.1005, Santiago.
- 2. Ficha de residente extranjero de María Sosa Aquino
- 3. Ficha de residente extranjero de la víctima de iniciales N.T.P.
- 4. 1 Certificado de viajes de María Sosa Aquino, Luis Araya Espinoza, S.G.R, Y.C.F., H.C., A.L.G., María Gloria Figueredo Candia, Cris Paola Aguilar Cantero, y N.T.P., de fecha 27 de junio de 2019.

5. Correo electrónico de fecha 01 de julio de 2019 que informa número telefónico asociado a María Elizabeth Sosa Aquino correspondiendo el Nro. 56963227532
6. 1 ficha de identidad paraguaya de la víctima de iniciales A.D.J.O.
7. 1 ficha de identidad paraguaya de la víctima de iniciales A.L.G.
8. 1 ficha de identidad paraguaya de la víctima de iniciales H.C.
9. 1 ficha de identidad paraguaya de la víctima de iniciales Y.C.F.
10. Oficio de LATAM de fecha 21 de junio de 2019 suscrito por Matías Cristi Aldonso, abogado LATAM Airlines Group S.A. que informa respecto a pasajes a nombre de H.C. y A.L.G.
11. 6 copias de boletas de recibo de gastos comunes y otros ingresos de la Comunidad Edificio “Nueva Providencia” Luis Thayer Ojeda N°127, Providencia, de fecha 30 de julio, 09 de octubre, 12 de diciembre de 2018 y 19 de febrero, 01 de abril y 02 de mayo de 2019
12. Ord. N°431 de la Brigada Investigadora de Trata de Personas de fecha 24 de julio de 2019 dirigido a LATAM Airlines
13. Correo electrónico de fecha 25 de julio de 2019 de Fabián Lillo Valenzuela Sub Gerente Security Chile Latam Airlines Group dirigido a doña Nicole Salinas que remite información de pasajes respecto de María Sosa Aquino
14. Correo electrónico de fecha 08 de noviembre de 2019 remitido por lis-global@google.com cuyo destinatario corresponde salinass@investigaciones.cl con datos adjuntos.
15. Datos adjuntos a mail de fecha 8 de noviembre de 2019 de lis-global@google.com dirigido a nsalinass@investigaciones.cl respecto del e-mail manisosa1331982@gmail.com
16. Transcripción y resumen de audios de WhatsApp, emanadas de extracción de información de teléfono entregado por la víctima de iniciales J.M.D. entre el 20 de

octubre de 2019 al 04 de noviembre de 2019 de fecha 20 de octubre de 2019 (02 audios), de fecha 21 de octubre de 2019 (10 audios) de fecha 22 de octubre de 2019 (08 audios), de fecha 25 de octubre de 2019 (03 audios), de fecha 26 de octubre de 2019 (02 audios), de fecha 27 de octubre de 2019 (04 audios), de fecha 28 de octubre de 2019 (01 audio), de fecha 29 de octubre de 2019 (11 audios), de fecha 02 de noviembre de 2019 (05 audios), de fecha 04 de noviembre de 2019 (03 audios) (incautado bajo NUE 5941238).

17. Correo electrónico de fecha 12 de noviembre de 2019 remitido por fotos@sexo.cl a Nicole Salinas, informando publicaciones realizadas con pagos de MARIA SOSA AQUINO y documentación adjunta a dicho correo electrónico.

18. Archivo adjunto a mail de fecha 12 de noviembre de 2019 remitido por fotos@sexo.cl a Nicole Salinas correspondiente a planilla con listado de las acompañantes publicadas con pagos realizados por MARIA SOSA AQUINO.

19. Correo electrónico y su respectivo historial, de fecha 12 y 13 de noviembre de 2019 remitido por fotos@sexo.cl a Nicole Salinas, informando publicaciones realizadas en dicha página web.

20. Listado de mujeres vinculadas la agencia “Preciosas” de MARIA SOSA AQUINO.

21. Certificado de dominio y anotaciones vigentes respecto del vehículo PPU HTZV 83-4

22. Certificado de dominio y anotaciones vigentes respecto del vehículo PPU JFPB 26-4

23. Consulta Tributaria integrada de Servicio de Impuestos internos de fecha 21 de noviembre de 2019 correspondiente a la contribuyente MARIA SOSA AQUINO (07 páginas)

24. Copia de tarjeta única migratoria respecto de la víctima S.C. de fecha de control 19 de octubre de 2019

25. Foto de cédula de identidad de República del Paraguay por ambos lados, de víctima S.C.
26. Copia de cedula de identidad por ambos lados de víctima A.I.G. de República del Paraguay
27. Fotocopia de boleto de venta N° 0010016 de Pullman del Sur Internacional por un valor de \$800.000 guaraníes origen Asunción destino Santiago respecto de la víctima A.I.G. y copia de comprobante de equipaje de Pullman Sur Internacional, de fecha 6 de septiembre de 2019.
28. Copia por ambos lados de cédula de identidad de República de Paraguay respecto de la víctima J.M.D.
29. 06 Hojas de conversaciones de WhatsApp aportados por la víctima J.M.D. realizadas entre el 27 y el 28 de noviembre de 2019 entre la víctima y “LUCÍA”.
30. Fotocopia de Boleta de venta N° 0010175 de Pullman del Sur Internacional por un valor de \$800.000 guaraníes origen Asunción destino Santiago respecto de la víctima L.E.A. de fecha 01 de noviembre de 2019, y copia comprobante de equipaje de Pullman Sur Internacional
31. Copia por ambos lados de cédula de identidad de República del Paraguay de víctima L.E.A.
32. Oficio N°06/2020 de fecha 11 de febrero de 2020 de Banco Estado dirigido a Fiscalía Alta Complejidad Fiscalía Metropolitana Centro Norte que remite información en relación con la cuenta RUT N°329-7-179738-9 de María Elizabeth Sosa Aquino que adjunta 78 páginas.
33. Oficio N°06/2020 de fecha 11 de febrero de 2020 de Banco Estado dirigido a Fiscalía Alta Complejidad Fiscalía Metropolitana Centro Norte que remite información en relación con la cuenta RUT N°329-7-256414-1 de Miryam Agustina Sosa Aquino que adjunta 14 páginas.

34. Correo electrónico de fecha 15 de abril de 2020 que reenvía correo de la misma fecha remitido por Víctor Hugo Moreno Pizarro, abogado coordinador jefe Subgerencia Legal Judicial Fiscalía Banco Estado que remite detalles de todas las transferencias recibidas y efectuadas desde la cuenta Rut N° interno 32972564141 SOSA AQUINO MIRYAN AGUSTINA Rut 26.252.005-6 entre el periodo de 01/01/2015 a la fecha; detallando en cada archivo si las mismas fueron realizadas a través de Internet en Banco Estado u otros Bancos, o si se efectuaron a través de la APP. Adjunta los siguientes documentos:

- (.1) 01 consulta de datos persona natural respecto de Miryam Sosa Aquino del Banco Estado
- (.2) Transferencias electrónicas realizadas a través de la APP (01 hoja)
- (.3) Transferencias electrónicas realizadas a través de internet (04 hojas)
- (.4) Transferencias realizadas otros Bancos (01 hoja)
- (.5) Transferencias recibidas otros Bancos (02 hojas)

35. 03 cartolas Banco Estado Ahorros de fecha 13 de mayo de 2020 de la cuenta N°05760170056 de María Sosa Aquino que contienen información desde el 21 de febrero de 2019 hasta el 03 de marzo de 2020

36. Oficio Dirección General de Migraciones República de Paraguay de fecha 17 de diciembre de 2019 que informa y adjunta movimientos migratorios e información de las siguientes personas:

- (.1) Información de pasajero y movimientos migratorios respecto de S.C.
- (.2) Información de pasajero y movimientos migratorios respecto de H.C.
- (.3) Información de pasajero y movimientos migratorios respecto de L.E.A.
- (.4) Información de pasajero y movimientos migratorios respecto de A.I.G.
- (.5) Información de pasajero y movimientos migratorios respecto de J.M.D.

(.6) Nota N°37/2020 de 07 de enero de 2020 del Departamento de Informática Policía Nacional de Paraguay.

37. Oficio electrónico UCIEX N°521/2020 de fecha 30 de julio de 2020 que contiene los siguientes documentos adjuntos:

(.1) Oficio N°456 de la Dirección de Asuntos Internacionales de Asistencia Jurídica Externa del Ministerio público de Paraguay de 21 de julio de 2020

(.2) Nota MP/DAI/AC N°456/2020 de 21 de julio de 2020 de Ministerio Público República de Paraguay

(.3) Nota N°223 de 15 de julio de 2020 de Ministerio Público República de Paraguay

(.4) Nota N°07/2020 de 27 de febrero de 2019 de Ministerio de la Mujer República de Paraguay

(.5) Nota N°242/20 de 06 de julio de 2020 de Unidad Especializada de la Lucha contra la Trata de personas y explotación de NNA de Ministerio Público República de Paraguay.

(.6) Informe de gestión de la misma unidad.

38. 01 correo electrónico de fecha 14 de mayo de 2020 enviado por Víctor Hugo Moreno Pizarro abogado coordinador jefe Subgerencia Legal Judicial Gestión oficios y reclamos Banco del Estado de Chile, remitido a doña Karen Guzmán abogada asesora de la Fiscalía Nacional que remite complemento de información bancaria vinculada a María Sosa Aquino y adjunta:

(.1) Resolución del Séptimo Tribunal de Garantía de fecha 21 de abril de 2020 que complementa autorización de levantamiento de secreto bancario otorgado con anterioridad.

(.2) Requerimiento de información (ampliación) remitido por la Fiscalía de fecha 21 de abril de 2020.

(.3) Cartola ahorro cliente de fecha 13 de mayo de 2020 (06 hojas).

(.4) Cartola N°1 a N°58 correspondiente a la cuenta RUT Banco Estado Nro. Interno 32971797389 (Cuenta RUT 24629438) de fecha 15 de abril de 2015 hasta 30 de marzo de 2020.

39. 01 certificado de nacimiento de B.A.A.S. donde aparece que su padre es Luis Alexis Araya Espinoza C.I. 15.417.915-1

40. Oficio N°410/2020 de fecha 15 de octubre de 2020 de Gendarmería de Chile, que remite información de visitas recibidas por María Sosa Aquino y adjunta informe de visitas de María Sosa Aquino de fecha 13 de octubre de 2020

41. Informe de visitas de María Sosa Aquino de fecha 13 de octubre de 2020, de Gendarmería de Chile

42. Oficio de Chilexpress que contiene detalle de giros y envío de dinero de María Sosa, Miryam Sosa, Cris Aguilar Cantero, Andrea Britez, Dayana Del Valle Alfonso, Lorena Saucedo, Yessica Beatriz Sosa, Blanca Benítez Benítez.

III. Prueba Testimonial.

1.- Declaración testimonial de la víctima de iniciales S.G.R.

2.- Declaración testimonial de Frédéric Léopold André Liabeuf.

3.- Declaración testimonial de doña Cassandra Avilez Hernández.

4.- Declaración testimonial de Francisco Javier Pino Faundez.

5.- Declaración testimonial de doña Nicole Salinas Salinas.

6.- Declaración testimonial de doña Carolina Gatica Urra.

7.- Declaración testimonial de don Juan Carlos Oliveros Narea.

8.- Declaración testimonial de don Álvaro García Velozo.

9.- Declaración testimonial de don Juan Santelices Rivera.

10.- Declaración testimonial de don Javier Cárcamo Quezada.

IV.- Prueba Pericial.

- 1.- Declaración pericial de doña Milena Rojas Balsells, perito psicóloga, del Instituto de Criminología.
- 2.- Declaración pericial de don Gonzalo Horstmeier Garote, perito psicólogo, del Instituto de Criminología.
- 3.- Declaración pericial de doña Karen Schmidt Díaz, perito psicóloga, del Instituto de Criminología.
- 4.- Declaración pericial de don Héctor Rodríguez Escárate, perito de Ciber crimen, ingeniero en gestión informática.

V.- Otros Medios De Prueba.

1. 01 imagen obtenida desde el sistema Google Maps de la ubicación del edificio Santa Rosa N°170
2. 01 fotografía del edificio ubicado en avenida Santa Rosa N°170, Santiago
3. 06 fotografías del piso del 10 del edificio ubicado en Santa Rosa N°170 y de los departamentos N°1005 y N°1011
4. 03 fotografías correspondientes al sistema de gestión policial GEPOL control fronteras respecto de la acusada
5. 04 gráficos que contienen análisis de datos consignados en libro de control de visitas del departamento N°1005 de avenida Santa Rosa N°170, Santiago, en el período comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 06 de mayo de 2019 (Informe BRITRAP N°184 de fecha 14 de junio de 2019).
6. 03 fotografías del libro color azul marca Orgarex correspondiente al libro de visitas del edificio Energy Santa Rosa I, Santiago (Informe BRITRAP N°184 de fecha 14 de junio de 2019)
7. 06 fotografías correspondientes a imágenes captadas desde las cámaras de seguridad del edificio ubicado en Santa Rosa N°170, Santiago: 04 de fecha 01 de enero de 2019 y

02 de fecha 07 de mayo de 2019 (Informe BRITRAP N°184 de fecha 14 de junio de 2019)

8. 04 fotografías obtenidas del perfil público de Facebook “Elizabeth Sosa” (Informe BRITRAP N°184 de fecha 14 de junio de 2019)

9. 03 fotografías obtenidas del perfil público de Facebook “Elizabeth Aquino” (Informe BRITRAP N°184 de fecha 14 de junio de 2019)

10. 02 fotografías obtenidas del sitio web “Mundo Chileno” relacionadas con el teléfono de María Sosa Aquino (Informe BRITRAP N°184 de fecha 14 de junio de 2019)

11. 03 fotografías obtenidas desde el perfil de Facebook de la víctima Y.C.F. (Informe BRITRAP N°184 de fecha 14 de junio de 2019).

12. 01 fotografía del perfil de Facebook de la víctima de iniciales A.D.J.O.

13. 03 fotografías del perfil de Instagram de la víctima de iniciales A.D.J.O.

14. 02 fotografías del perfil de Facebook de la víctima de iniciales H.C

15. 01 fotografía del perfil de Instagram de la víctima de iniciales H.C.

16. 02 fotografías obtenidas del perfil de Facebook de la víctima de iniciales Y.C.F.

17. 03 fotografías obtenidas del perfil de Facebook de la víctima de iniciales Y.C.F.

18. 04 capturas de imagen desde la página www.sexo.cl correspondiente a ofrecimiento sexual de “Pao” teléfono de contacto 946305509, donde aparece la víctima de iniciales H.C., valor de los servicios y horario full time

19. 02 captura de pantalla de la página web <https://tusamantes.cl> con el nombre “Barbi” “Servicios completos atención a parejas 962590551 y fotografías de la víctima de iniciales A.L.G.

- 20.** 02 capturas de imagen desde la página www.sexo.cl correspondiente a ofrecimiento sexual de “Rossana” teléfono de contacto 962590551, donde aparece la víctima de iniciales Y.C.F., valor de los servicios y horario full time
- 21.** 02 imágenes capturadas desde cuenta de instagram de Y.C.F. y página www.sexo.cl, donde se visualiza tatuaje de “hoja de cannabis en ambas fotografías”.
- 22.** 03 captura de pantalla de www.skokka.cl, www.sexo.cl e Instagram en que aparece la víctima de iniciales Y.C.F.
- 23.** 02 captura de pantalla de www.sexo.cl y www.skokka.cl donde aparece Y.C.F. en compañía de escort bajo seudónimo de “Barbie” con teléfono de contacto 986314127 en sector Metro Universidad de Chile
- 24.** 01 imágenes capturadas desde la página www.skokka.cl, publicación de servicios sexuales de una mujer con el nombre de “Bella”, que corresponde a la víctima de iniciales A.L.G., metro Santa Lucía y domicilios. Teléfono 977820729
- 25.** 13 fotografías correspondientes al seguimiento realizado por funcionarios de la Brigada de Trata de personas el día 28 de julio de 2019 en el aeropuerto Arturo Merino Benítez ubicado en Avenida Armando Cortínez s/n, comuna de Pudahuel
- 26.** 09 fotografías correspondientes al seguimiento realizado por funcionarios de la Brigada de Trata de personas el día 12 de agosto de 2019 en calle Ruíz de Gamboa N°029, comuna de Providencia
- 27.** 06 fotografías correspondientes al seguimiento realizado por funcionarios de la Brigada de Trata de personas el día 13 de agosto de 2019 entre las 09:00 y las 13:00 hrs. en calle Ruíz de Gamboa N°029, comuna de Providencia
- 28.** 01 fotografía correspondiente al seguimiento realizado por funcionarios de la Brigada de Trata de personas el día 13 de agosto de 2019 entre las 16:00 y las 19:00 horas en calle Ruíz de Gamboa N°029, comuna de Providencia

29. 05 fotografías correspondientes al seguimiento realizado por funcionarios de la Brigada de Trata de personas el día 16 de agosto de 2019 en calle Ruíz de Gamboa N°029, comuna de Providencia
30. 04 captura de pantalla de la página www.miprivado.cl publicación de ofrecimiento sexuales de una mujer bajo el seudónimo “Mimosa”, teléfono de contacto 986900090
31. 03 capturas de pantalla de la página www.miprivado.cl publicación de ofrecimiento sexuales de A.L.G. bajo el seudónimo de “Padhila”, teléfono de contacto 941510446, 01 fotografía del Registro Civil de A.L.G y 01 fotografía de Facebook de A.L.G.
32. 04 capturas de pantalla de la página www.miprivado.cl publicación de ofrecimiento sexuales de A.D.J.O. bajo el seudónimo de “Yayita”, teléfono de contacto 941510741, 1 fotografía del Registro Civil de A.L.G y 01 fotografía de Facebook de A.D.J.O.
33. 08 fotografías correspondientes al seguimiento realizado por funcionarios de la Brigada de Trata de personas el día 26 de agosto de 2019 en Edificio Santa Rosa Energy I, ubicado en calle Santa Rosa N°170, Santiago.
34. 02 capturas de pantalla de la página www.miprivado.cl publicación de ofrecimiento sexuales de “Pao” correspondiente a H.C., teléfono de contacto 972469314, horario full time en “Metro Santa Lucía” y 01 fotografía obtenida de Facebook de la víctima de iniciales H.C.
35. 04 capturas de pantalla de la página www.sexo.cl publicación de ofrecimiento sexuales de “Pao” correspondiente a H.C., teléfono de contacto 972469314, en “Metro Santa Lucía”
36. 02 capturas de pantalla de la página www.miprivado.cl publicación de ofrecimiento sexuales de “Carla” correspondiente a H.C., teléfono de contacto 972469314, en “Metro Santa Lucía”

37. 01 captura de pantalla de la página www.miprivado.cl publicación de ofrecimiento sexuales bajo el nombre “Mirna” teléfono de contacto +56967529076, en “Providencia”, donde aparecen fotografías de la víctima de iniciales A.I.G.
38. 02 capturas de pantalla de la página www.sexo.cl publicación de ofrecimiento sexuales bajo el nombre “Mirna” teléfono de contacto +56967529076, en “Metro Salvador”, donde aparecen fotografías de la víctima de iniciales A.I.G.
39. 10 fotografías de fecha 27 de noviembre de 2019 correspondientes a la recepción de conserjería ENERGY SANTA ROSA 1, ubicado en Santa Rosa 170, Santiago, obtenidas desde cámaras de seguridad del edificio
40. Cuadro grafico demostrativo compuesto por 23 imágenes que dan cuenta de vehículo incautado con fecha 27 de noviembre de 2019 PPU JFPB26 y especies encontrados en su interior.
41. Set fotográfico compuesto por 12 fotografías de especies incautadas en procedimiento realizado en Santa Rosa 170 departamento 704 comuna de Santiago correspondiente a las NUE 5941250, NUE 5941251 y NUE 5941252
42. Set fotográfico compuesto por 12 fotografías del procedimiento de entrada registro e incautación realizada en el domicilio RUIZ DE GAMBOA N° 29 de la comuna de Providencia y de las especies incautadas en dicho domicilio.
43. 03 fotografías de celular entregado en NUE 5941245 a la víctima de iniciales L.E.A.
44. 122 fotografías obtenidas desde WhatsApp de teléfono entregado por la víctima de iniciales L.E.A.
45. 04 imágenes obtenidas de análisis de evidencia incautada correspondiente a libreta con diseños de sandía (NUE 5941251)
46. 06 imágenes obtenidas de análisis de evidencia incautada correspondiente a cuaderno pequeño color rosado con diseño de mariposa y flores (NUE 5941249)

- 47.** 08 imágenes obtenidas de análisis de evidencia incautada, correspondiente a un cuaderno universitario marca proarte con diseño (NUE 5941248)
- 48.** 10 imágenes obtenidas de análisis de evidencia correspondiente a una libreta de notas con diseño de animales, color rosado y verde y una libreta de notas color rojo, ambas con diversas anotaciones en sus hojas, y 01 acercamiento de una de estas imágenes. (NUE 5941243)
- 49.** 06 imágenes obtenidas de análisis de evidencia incautada correspondiente a una agenda color rojo año 2019. (NUE 5941243)
- 50.** 01 captura de pantalla de cartola bancaria de cuenta RIT banco Estado de Myriam Sosa Aquino.
- 51.** 23 imágenes de transferencias de dinero y comprobantes de depósito realizadas por María Sosa a servicios digitales Spa, contenidas en el anexo de investigación N°05 de fecha 14 de octubre de 2020.
- 52.** 10 imágenes de 09 de diciembre de 2017 entre 15:30 y 17:00 horas, obtenidas de las cámaras de seguridad del Edificio ubicado en Avenida Santa Rosa N°170, Santiago.
- 53.** 52 fotografías obtenidas desde las cámaras de seguridad del domicilio ubicado en calle Ruíz de Gamboa, Providencia
- 54.** 03 fotografías de ticket aéreo aerolínea LATAM respecto de la víctima H.C. encontradas en el notebook LENOVO (NUE 5941244)
- 55.** 01 imagen de liquidación de sueldo de Luis Araya Espinoza para el período de mayo de 2017.
- 56.** 01 comprobante de transferencia desde la cuenta RUT de María Sosa hacia la chequera electrónica Banco Itaú de Luis Araya Espinoza, de fecha 21 de junio de 2017.

57. 01 pendrive que contiene declaración anticipada de la víctima de iniciales S.C. realizada ante el Séptimo Tribunal de Garantía de esta ciudad con fecha 12 de diciembre de 2019.

58. 01 pendrive declaración anticipada de la víctima de iniciales H.C. realizada ante el Séptimo Tribunal de Garantía de esta ciudad con fecha 13 de diciembre de 2019.

59. 01 imagen y 32 cuadros contenidos en informe pericial N°156/20 de fecha 09 de noviembre de 2020.

60. 36 fotografías correspondientes al domicilio ubicado en calle Ruíz de Gamboa N°029, Providencia y evidencia encontrada en el mismo el día 27 de noviembre de 2019.

UNDÉCIMO. Prueba de la defensa. Que, para apoyar sus alegaciones, la defensa ofreció y rindió prueba testimonial consistente en la declaración de Bernardina Chávez Ferreira; incorporó como otros medios de prueba un set con 8 fotografías y, de acuerdo a lo previsto en el artículo 336 del Código Procesal Penal, aportó como prueba nueva, un video en que se apreció una noticia de 3 de mayo de 2021 asociada al fallecimiento de la víctima de iniciales L.V.A.

DUODÉCIMO. Alegatos de clausura de la fiscalía. Que durante sus alegaciones de cierre el Ministerio Público insistió en su pretensión de condena, debido a que -a su juicio- se rindió prueba suficiente para acreditar cada uno de los presupuestos de la acusación.

En efecto, la fiscal Suazo explicó que con el mérito de las probanzas que se incorporaron a juicio se logró acreditar cada uno de los presupuestos de los delitos por los cuales se presentó acusación, es decir, por los tipos penales previstos en los artículos 411 ter y 411 quáter del Código Penal, ambos delitos consumados y en calidad de reiterados.

Indicó que para los efectos de su alegato de cierre, efectuaría un análisis centrado en los requisitos de los delitos materia de este juicio comenzando por la finalidad o elemento de “explotación sexual” previsto en el artículo 411 quáter, por la

relevancia que éste tiene (en tanto intención trascendente) pero también por su vinculación con los hechos que se calificaron como delitos del artículo 411 ter, en donde si bien, se acreditó la facilitación o promoción de ingreso al país para que las afectadas ejercieran la prostitución, también se pudo comprobar que también en el caso de ellas, estuvieron afectadas a la misma explotación a instancias de la acusada Sosa, quien se aprovechó y obtuvo ganancias económicas debido al ejercicio de la prostitución ajena.

Así, a juicio del persecutor, la acusada no solamente promovió y facilitó el traslado de mujeres paraguayas a nuestro país, captando unos casos en Paraguay y en uno de los casos (Samantha) en nuestro país cuando recientemente había ingresado a Chile trasladándola a distintos departamentos, inmuebles donde efectivamente se acreditó que se ejercía la prostitución. Ello considerando que la evidencia y la prueba rendida durante el desarrollo de la audiencia permite establecer claramente que esto era un negocio para la acusada.

En efecto, la prueba documental bancaria, del análisis de los ingresos de la acusada Sosa en las cuentas que ella mantuvo en el Banco Estado (cuenta vista y cuenta de ahorro) entre los años 2015 y 2020 estuvo cerca de noventa millones de pesos por los pagos de servicios sexuales de las mujeres que administraba en el negocio de la prostitución. Está claro que este es el origen de los dineros, pues la acusada no tenía otras actividades lícitas remuneradas. Ello, solamente analizando la información que se obtuvo con el Banco Estado porque sin duda agregar además la siguiente información: los pagos en efectivo de parte de los clientes que se pudo establecer tanto con las declaraciones de las víctimas como por las escuchas telefónicas y las declaraciones testimoniales de los funcionarios policiales. Se deben considerar además los depósitos realizados a otra cuenta, la del Banco Santander correspondiente al padre del hijo menor de la acusada -Luis Alexis Araya Espinoza-, tal como refirió doña Nicole Salinas incluso a una pregunta de la defensa respecto a si se había considerado en estos ingresos los gastos que tenía en arriendo la imputada. Es necesario sin duda considerar, no solamente las transferencias que se realizaban por pagos de servicios

sexuales a la cuenta vista del Banco Estado de la acusada y de su hermana Miryan Sosa, sino además las que se realizaban a la cuenta en este caso del padre del hijo de la acusada.

Se debe considerar además en este punto, el envío de dinero realizado por la acusada vía “Chilexpress”, destacando que, si solo se considera incluso marzo y abril del año 2019 María Sosa Aquino envió más de cuatro millones de pesos a una persona en Paraguay llamado Venancio Cohener Moreno tal como acredita la prueba documental 72 leída en esta audiencia de juicio oral.

Señaló que se debe considerar también, que le imputaba no realizaba otra actividad, tampoco el comercio sexual. De acuerdo con la información obtenida acerca de las rutinas de la imputada, aparece claramente que ella no ejercía el comercio sexual durante el periodo investigado, esto es, entre febrero del 2017 y el 27 de noviembre del año 2019. Es más, cabe tener presente respecto de las actividades de la acusada, que en el propio Servicios de Impuestos Internos la acusada tenía iniciación de actividades por venta de ropa, actividad que evidentemente nunca existió.

Todo aquello resulta además consistente con la información obtenida a través de las víctimas, sea por su relato directo en este juicio, por sus declaraciones anticipada o por la información que entregaron claramente durante el desarrollo de la investigación.

La explotación sexual de las víctimas era un negocio y por cierto implicó importantes ganancias para la acusada.

El delito de trata de personas del artículo 411 quáter del Código Penal sólo puede ser cometido con dolo directo y requiere esta tendencia interna trascendente, que es la finalidad de explotación que no solamente existió en los hechos, sino que además se completó y las víctimas sufrieron una real situación de explotación. Lo dicho hasta aquí, permite confirmar incluso lo que define la Real Academia Española acerca del concepto de explotación, la utilización de una persona para el provecho económico de otra. Aquello, recuerda inmediatamente las declaraciones de las profesionales psicólogas del CAVAS quienes hablaron de la instrumentalización de las

víctimas y por cierto, no se puede olvidar las declaraciones que prestaron las víctimas en estos hechos. Tampoco es posible dejar de recordar la declaración de uno de los clientes de prostitución, un abogado, quien valientemente concurrió a esta audiencia de juicio oral, refiriendo los hechos de los que tomó conocimiento de forma directa, o a través de la víctima de nombre Samantha.

Luego, refirió que el “ánimo de lucro” es consustancial al concepto de explotación, y por ello es tan clara la concurrencia de este elemento en este caso en particular y de acuerdo con la prueba rendida, ello conforme no solamente a lo que indica el tipo penal que se analiza, sino de acuerdo a distintos pronunciamientos realizados por distintos tribunales Orales en lo Penal, citando a modo ejemplar, la sentencia de 1 de abril de 2021 en la causa RUC 1700264150-K dictada por este tribunal. Pero aquello también resulta como coincidente con la doctrina que se refiere a lo que se entiende por el contenido de prostitución y de la explotación sexual y de la vinculación entre ambos. Así Gustavo Aboso define a la prostitución como servicios sexuales a cambio contraprestación económica y explotación sexual, además de la prostitución, la participación forzada de las víctimas en show eróticos, striptease, etcétera y en la producción de pornografía adulta. En el mismo sentido, Esteban Pérez Alonso quien indica y conceptualiza la explotación sexual señalando que corresponde a la utilización de mujeres, jóvenes y niños en la industria del sexo, es decir, en pornografía, espectáculos exhibicionistas, turismo sexual, y sobre todo, en el ejercicio de la prostitución. De esta forma la prostitución sin duda está contenida en el concepto de explotación sexual. Y al efecto, la testigo doña Carolina Gatica señaló que el administrador del edificio de Santa Rosa N°170, don Frederic declaró que le llamaba la atención que la acusada tuviera un departamento y un vehículo casi del año sin tener un trabajo fuera. Se reprodujo de la misma forma, las escuchas de fecha 24 de noviembre de 2019 en la que María Sosa deja claro que el auto de es ella, que ella lo pagó y que le pedirá al padre de su hijo que lo transfiera, lo mismo, el departamento. Declaró además la misma testigo, que María Sosa no trabajaba fuera del lugar. Ella

estaba siempre en el departamento 704 y arrendaba el departamento 1005. En el mismo sentido, declaró el testigo Juan Carlos Oliveros.

De la misma forma, la testigo Carolina Gatica indicó que cuando estaban en la etapa inicial de la investigación en el departamento 1005 lograron establecer a través del análisis de los libros de visitas, que entraron 568 personas, dentro de los cuales 567 eran hombres, es decir, había sólo una mujer. La muestra analizada desde el 1 de enero al 6 de mayo del año 2019. De acuerdo con aquello, evidentemente se ejercía el comercio sexual en dicho lugar, unido al tiempo en que dichas personas permanecían además en el referido departamento.

De acuerdo a la prueba rendida además, quedó claro que las víctimas atendían varios clientes al día, Carolina Gatica indicó incluso seis clientes diarios, en horarios de atención, en esto las víctimas fueron contestes, en señalar a través de la información que entregaron en la fiscalía o a los funcionarios de la PDI que tomaron contactos con ellas, que el horario era todos los días, entre 9 y 2 de la mañana y el fin de semana entre 9 y 4 de la mañana, sin perjuicio de la información que también entregaron dichos funcionarios respecto al trato preferente que tenían otras personas que no fueron presentadas por cuanto no corresponden a víctimas, por cuanto no existió una promoción o facilitación del ingreso al país para el ejercicio de la prostitución, estatus especial que correspondía a la sobrina de la acusada Jessica Sosa y a su amiga de nombre Élida, de acuerdo a la información aportada.

La funcionaria Carolina Gatica además declaró que a través de las escuchas que analizó, María era la que contestaba todos los teléfonos y disponía los servicios sexuales, las posiciones, besos, caricias, sexo oral, vaginal y anal. Se reprodujo la escucha de fecha 6 de agosto del año 2019 a las 19:13 horas, que permitió establecer y aportar antecedentes en el mismo sentido; y lo mismo se corroboró, a través de la utilización de la técnica del agente encubierto.

Se acreditó además la coordinación que María realizaba a través de distintos grupos de WhatsApp, el último de ellos, aquel llamado “Chicas súper poderosas” que administraba María según declaró la funcionaria Carolina Gatica y que además este

tribunal pudo acceder y conocer directamente producto de la información contenida en el teléfono de Laura, una de las víctimas encontradas el día que fue rescatada el día 27 de noviembre del año 2019. Se estableció que María era la que contestaba el teléfono, haciéndose pasar por las víctimas, a excepción de escasas oportunidades en que lo hacía Lucía, quien era su mano derecha o alguna de las víctimas, siendo la prueba muy clara en indicar que las víctimas sólo habrían contestado excepcional y únicamente cuando sonaban todos los teléfonos a la vez, recordando y relacionando en este punto la cantidad de teléfonos utilizados por la acusada para el ofrecimiento de servicios sexuales por parte de las víctimas, indicando incluso el señor Oliveros que había teléfonos que no resultó posible recuperar, de acuerdo a la información entregada por él y producto de su ocultamiento. Ello también, relacionando necesariamente, que la información contenida en un teléfono de la acusada no se pudo acceder, porque no se tuvo acceso a la clave y por cierto en esta audiencia también la acusada indicó no recordar si su teléfono tenía clave.

Se reprodujo también la escucha del día 1 de agosto del año 2019 a las 00:21 horas y una segunda escucha de 11 de octubre también, en donde se puede oír a María habla con un cliente y nuevamente se hace pasar con las víctimas, en una de ellas se hace pasar por la víctima cuyo nombre de fantasía corresponde a Mirna, esto es, Araceli, que coincide con el periodo en donde estaba siendo explotada sexualmente la víctima de nombre Araceli, quien había ingresado a nuestro país el día 7 de septiembre del año 2019. Señala además que se trabajaba hasta las 4 de mañana, indicando la misma acusada, el horario de funcionamiento de prestación de servicios sexuales. También se reprodujo la escucha de fecha 5 de agosto del año 2019, en que un cliente llama para pedir un domicilio, pudiendo acreditar entonces lo que señaló la testigo Nicole Salinas, en términos de la prestación de servicios sexuales o en los departamentos dispuestos por la acusada para ello o en la casa de la comuna de Providencia, por valores que fluctuaban entre \$40.000 la hora, \$30.000 la media hora, con adicionales dependiendo de la prestación de servicios y la cantidad de contactos que son penetraciones, si a la penetración vaginal se le agregaba la penetración anal o

bucal, se aumentaba el precio y si se trataba de un domicilio, pudiendo establecer que hubo varios durante el periodo investigado, se cobraba la suma de \$65.000, aclarando incluso las víctimas que debían pagar a la acusada quien las trasladaba desde el lugar donde les mantenía, la casa de Providencia o el departamento 1005, o el departamento de Thayer Ojeda antes de ello, hasta el lugar donde debían prestar los servicios sexuales, en hoteles, moteles y otros, y las víctimas debían incluso pagar ese traslado a la propia acusada.

De la misma forma, se leyeron las cartolas del Banco Estado donde además de observarse las transacciones por los servicios sexuales por los montos -tan claro de acuerdo con la lectura que se dio de esos documentos-, y por los valores también que corresponde a cada una de las prestaciones de los servicios sexuales, se obtuvo también la información conforme a lo indicado por doña Nicole Salinas que había 109 personas que hicieron transferencias. Eran montos de más de \$35.000.000 de pesos, había transferencias de María Sosa a Luis Araya por más de \$19.000.000, es decir, no solamente había en las cuentas ingresos producto de los servicios sexuales, sino también había movimientos de dinero entre las distintas cuentas, recordando también que existen plazos máximos de montos o montos máximos en las cuentas vistas en este caso del Banco Estado. Asimismo, doña Carolina Gatica declaró que también determinaron el control y coordinación de la prestación de servicios sexuales, María decidía a que lugares iba el cliente, tenía el control sobre las chicas, se demostró que tenía el WhatsApp ya indicado, las escuchas telefónicas aportan información en el mismo sentido. Y respecto a la información obtenida del WhatsApp, sólo recordar las horas de los mensajes. En uno de los casos, se informa que va subiendo un cliente para una víctima que se retiran las 19:31 horas, y María a las 19:34 ya le indica que llegó un nuevo cliente para ella, es decir, tres minutos después del anterior cliente. También se deben analizar los horarios en relación con cuando terminaban las comunicaciones, en ese grupo de WhatsApp, a altas horas de la madrugada y a las 8 o 9 de la mañana del día siguiente ya se estaban despertando nuevamente para prestar servicios sexuales.

La funcionaria Carolina Gatica declaró que el agente encubierto fue al departamento de Santa Rosa 170, departamento 1005, y allí lo recibió “Pao”, que efectivamente se pudo establecer que corresponde a Hilda. Ella lo lleva a la habitación y ahí habla con más confianza y allí ella le explica y le dice que tuvieron problemas con las propinas. Aquello fue corroborado por la información entregada por el testigo Álvaro García y por cierto fue relacionado claramente en la declaración anticipada prestada por la víctima respecto al problema surgido producto de las propinas, por cuanto no solamente tenían que entregar la mitad de los servicios sexuales o del dinero que obtuvieran producto de los servicios sexuales prestados, sino además de las propinas.

Por su parte “Sonia” declaró que realizaba servicios sexuales en el domicilio de Ruiz de Gamboa y también en el departamento y aquí nuevamente una manifestación acerca no solamente del control, sino también de la explotación y de la instrumentalización. La fiscalía llama a que se recuerde como las víctimas, por ejemplo, Samantha dijo “me quería llevar al departamento 1005”, Sonia e Hilda indicando “me llevó del departamento 1005 a la casa de Ruiz de Gamboa, luego me llevó, me trasladó” eran prácticamente cosas. Existía permanentemente un cambio entre los lugares donde se ejercía la prostitución. Indicó Sonia, además, como se sacó fotografías, lo que resultó corroborado con las declaraciones de las víctimas para efectuar las publicaciones en sitios dedicados justamente al ofrecimiento de servicios sexuales.

Luego, hizo presente que la acusada dijo en su declaración que las mujeres le ofrecieron quedarse con la mitad de lo que ganaban por los gastos y que ella recibía únicamente lo que le entregaban. ¿Podemos encontrar algún otro ejemplo en que alguna persona libremente decida entregar a otra, en este caso, a un supuesto empleador o jefe, en forma libre el 50% de su sueldo?, ¿existe algún otro caso imaginable que no sea un contexto de una trata de personas? La fiscalía cree que francamente esos ejemplos no existen.

La acusada señaló que sabía que la estaban investigando, pero para su ignorancia ella no estaba haciendo nada malo, pues en su país la prostitución es normal, pero en su país la prostitución no es normal, ya que también se sanciona a las personas que lucran con la prostitución ajena, y además se debe recordar la escucha de fecha 2 de agosto, de las 16:47 horas, en que María en conversación en español -lo que alcanzamos a entender porque el resto de la conversación estaba en guaraní- indica que Freddy quería hacer negocios con María, esto es, Freddy un sujeto paraguayo quería hacer negocios con María, presentarle mujeres y María le dice que “sólo podría darle comisión”. Nuevamente, se está en presencia de un negocio, porque se estaba cambiando de casa y que no podían hablar por teléfono. La fiscalía pregunta si, todo aquello era legal y era algo completamente aceptado, porque no lo podían hablar por teléfono.

Se reprodujo en el mismo sentido escucha de fecha 10 de noviembre del año 2019 a las 18:41 horas en que María señala que tuvo problemas con una vecina y que no puede denunciar “porque le pisan la cola”, ¿por qué?, ¿por qué no hizo la denuncia?, qué temor tenía de realizar una denuncia, si estaba realizando una actividad que supuestamente y conforme a lo que indicó al tribunal se trataría de una actividad lícita. Refirió a continuación, lo que refiere el Código Penal paraguayo, respecto a la rufianería, en tanto se sanciona a quien explota a una persona que ejerce la prostitución, aprovechándose de las ganancias de ella, y en el mismo sentido las normas referidas al delito de trata de personas.

“Sonia” también declaró que trabajó para pagarle el pasaje a María y se quedó sin nada de dinero, se demoró en pagarle y no quedó con nada dinero. En efecto, su hermana Hilda tuvo que proporcionarle comida. También declaró que debía darle la mitad del dinero de los clientes y que se sintió mal porque al final vino a Chile solo a hacerle ganar dinero a María. Estas palabras provienen de la propia víctima en su declaración anticipada. Señaló que María sólo trabajaba con paraguayas porque las otras no aceptaban sus reglas y aquí volvemos nuevamente a la exigencia de entrega del 50% de lo que obtuvieran producto de los servicios sexuales. Dijo a María que

quería devolverse, y ella le contestó que primero tenía que devolverle lo que le pagó por el pasaje.

En el mismo sentido, “Samantha” señaló que fue publicada como “Pamela” y que las publicaciones se las descontaría en cuotas y así, sucesivamente, todas las víctimas que entregaron información se refirieron a la misma forma de pago y a la misma situación de explotación. Todas las víctimas indicaron que en el departamento y casa había cámaras de vigilancia por medio de las cuales las controlaba María, y que las dormían y dormían todas, en el mismo lugar donde ejercían la prostitución. El tribunal además pudo visualizar las imágenes reales del período en que las víctimas estaban siendo explotadas sexualmente y como las cámaras de seguridad, obviamente del periodo que fue posible rescatar, en atención al tiempo en que se mantienen dichas imágenes en la cámara de seguridad. Todos estos antecedentes y en especial el control a través de cámaras de seguridad que, dicho sea de paso, la propia acusada reconoció que podía controlar incluso desde su celular, la entrega del 50% del pago de los servicios sexuales, contestar el teléfono haciéndose pasar por las víctimas, permiten establecer que esto no era en favor, y muy por el contrario, era un negocio de la acusada y las víctimas no se encontraban ejerciendo libremente la prostitución. Dicho sea de paso, no tenemos ningún inconveniente con que personas en situación de libertad puedan ejercer esa actividad, sin embargo, eso no ocurrió en este caso, no había una situación de libertad por parte de las víctimas, respecto de ninguna, ni de las del artículo 411 quáter del Código Penal, ni tampoco respecto a las víctimas del artículo 411 ter, aun cuando el tipo penal no lo exige y cree que este aspecto quedó plenamente establecido.

La defensa señaló que la acusada también es mujer y que también tiene una historia del ejercicio de la prostitución, sosteniendo que a su respecto hay que considerar el género. Sobre este punto es relevante indicar que en los casos de trata sexual esto es absolutamente habitual, y se describe incluso en la fenomenología y como opera finalmente el delito de trata personas, porque se trata del conocimiento acerca del negocio, se trata de mujeres que han ejercido la prostitución en el pasado y

por lo tanto conocen el negocio. Esto es lo que aconteció con la acusada, ella conocía este negocio, estuvo en España ejerciendo la prostitución, y efectivamente, pudo visualizar que se obtenían importantes ganancias, comenzó su propio negocio en Chile, cree mucho antes. La fecha que pudo acreditar la fiscalía es entre febrero de 2017 y el 27 de noviembre del año 2019 al menos, pero lo hizo aprovechándose de la vulnerabilidad de sus connacionales, todas mujeres y en otros casos promoviendo y facilitando el ingreso a Chile, sea a través de la compra del pasaje, dando instrucciones al momento del ingreso al país, entregando incluso dinero para que ingresaran al país y acreditaran una condición de turista, pero no venían a hacer turismo, sino que venían derechamente a ejercer la prostitución, pero no libremente, sino para la acusada. Las víctimas en este caso son las mujeres que trajo la acusada a Chile para ejercer la prostitución, o a quien captó, en el caso de Samantha, en nuestro país con la misma finalidad y ello con la finalidad de generarle ingresos. No es la acusada quien sabiendo cómo era el negocio de la prostitución, la que ejercía la prostitución, sino que en conocimiento de este negocio -pues lo había ejercido con anterioridad- montó un negocio propio en nuestro país, para obtener los ingentes ingresos ya relatados a lo largo de este alegato.

Posteriormente, la fiscalía se refirió al punto “consentimiento” de las víctimas, expresando que se referirá al consentimiento del artículo 411 quáter del Código Penal, indicando que, al efecto, el Protocolo de Palermo en su artículo tercero dice que “el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta”. Cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado y que, uno de los cuales corresponde al aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad que la Fiscalía ha fijado, y ha podido acreditar que fue precisamente el medio comisivo utilizado por parte de la acusada para captar, trasladar, acoger, recibir a las víctimas y finalmente destinarlas a la explotación sexual. Nuestro legislador sanciona, sin embargo, y haciendo referencia a las situaciones del artículo 411 ter a quien promueva o facilite la entrada de hombres o mujeres, de personas, en este caso

mujeres, -y dicho sea de paso, todos los casos de 411 ter en nuestro país han sido víctimas mujeres-, todos, para ejercer la prostitución. Pero el legislador hace referencia y así lo ha indicado la doctrina, en este caso, precisamente se considera que existe consentimiento para el ingreso con la finalidad de ejercer la prostitución y eso se encuentra obviamente en el tipo penal, se estima que se hace un reproche y así lo ha señalado la doctrina también, a esta conducta pues con ella se aprovecha también una situación desmejorada de mujeres por eso es que se sanciona respecto de mujeres extranjeras y no se sanciona respecto de mujeres chilenas. Se sanciona entonces y se entiende que debe concurrir en el artículo 411 ter el consentimiento, pues lo que se sanciona únicamente es la promoción o facilitación del ingreso ilegal, pero se entiende de todas formas que existe una situación desmejorada, un aprovechamiento la situación desmejorada de las mujeres. Insistió que, de acuerdo a la prueba rendida se pudo establecer además una situación de aprovechamiento, lucro y sin duda, en consecuencia, de explotación respecto de las víctimas también del artículo 411 ter.

Se formuló luego, alegaciones en relación con cada delito por separado. Así, en cuanto a los delitos previstos en el artículo 411 quáter, y habiéndose referido ya a la finalidad de explotación sexual, se explayó sobre los otros dos ejes, conducta y medios comisivos.

En este primer análisis, de este primer grupo de delitos, se estimó por la fiscalía que, de acuerdo a la prueba rendida, claramente se pudo establecer la captación por parte del acusada, respecto de las víctimas de nombre Hilda, Samantha y Sonia, las tres de nacionalidad paraguaya. Y no es casualidad que las tres tengan nacionalidad paraguaya, es aquello justamente lo que se vincula derechamente con la captación de las víctimas y con la confianza en la acusada, en relación a viajar a un país distinto en el caso de Hilda y Sonia, con una persona que esa amiga, incluso de una de las hermanas, tal como indicó la propia testigo de la defensa, quien desde ya indica que, si bien se refirió latamente a la relación de amistad que tenía con María Sosa, dijo que sus hermanas nunca le habían contado paso a paso lo que habían ellas efectivamente vivido en nuestro país. Y es así como la captación debe ser analizada, respecto de

Hilda, en relación con la información que ella entregó y respecto a que la acusada la contactó por WhatsApp, sin que tenga relevancia en este punto quién habló primero y quién habló después. La relevancia de la captación es justamente generar en la víctima la decisión del traslado, que puede ser interno, cuando nos encontramos en presencia de la trata interna, o puede ser transfronterizo, como el caso de Hilda y Sonia. Lo que tiene relevancia es la generación de la confianza que justamente implica el traslado y tanto más si existe incluso pago de pasajes de por medio. Tanto Hilda como Sonia refirieron cómo fue que la acusada les pagó el pasaje para viajar a Chile, eso es prueba indubitada y ampliamente refrendada durante el desarrollo de este juicio. Consta respecto de Hilda incluso del oficio de la línea aérea Latam donde aparece la compra del referido pasaje. Y respecto de Sonia, claramente refirió como fue que la acusada le compró el pasaje, que tuvo que ella únicamente retirar desde la ventanilla del terminal Pullman Bus en Paraguay, para luego viajar y que además la acusada le dio instrucciones acerca de lo que tenía que indicar al momento de ingresar a Chile, y es más, le hizo llegar USD\$ 300 a través del auxiliar del bus en que viajaba, indicándole que eran de parte de María para que los mostrara y exhibiera a la autoridad migratoria al momento de ingresar a Chile. Esta situación fue ampliamente acreditada además con el relato de las restantes víctimas que viajaron en la misma época en que viajó Sonia, en el segundo semestre aproximadamente, del año 2019, en que la acusada les compraba el pasaje, ellas lo retiraban en la ventanilla del terminal en Paraguay y luego recibían durante el viaje la cantidad de 300 dólares para poder indicar una situación o para poder acreditar una situación de turismo, que, por cierto, no tenían.

La funcionaria Nicole Salinas declaró en el mismo sentido, la prueba documental ya mencionada por supuesto que aporta en el mismo sentido, Hilda refiere la forma en que llegó a Chile, quien la acogió, donde fue trasladada y en el mismo sentido, Sonia señaló que María fue quien la fue a buscar al terminal de buses cuando llegó a Chile, menciona el vehículo gris tantas veces citado, Kia, que era efectivamente usado por la acusada para trasladar a las víctimas, para recibirlas cuando llegaban al país, como para trasladarlas a los domicilios cuando prestaban servicios sexuales en

domicilios distintos. Refirieron las víctimas también, respecto a la captación que ocurría cuando llegaban y luego respecto al traslado al lugar donde efectivamente eran llevadas por parte de la acusada.

Sin embargo, en el caso del Samantha, la captación es diferente, por cuanto ya había tenido contacto en primera instancia contacto con Yeruti, y luego, cuando ingresa a nuestro país y sufre una situación desagradable en el lugar donde efectivamente ejercía la prostitución, y aquí hace una distinción entre ejercer la prostitución en forma libre, en que ella se publicaba, y luego la situación de explotación sexual que efectivamente vive por parte de la acusada. Porque, dicho sea de paso, no es requisito del tipo penal que una víctima nunca haya ejercido la prostitución con anterioridad. Respecto de esta captación, Samantha explica claramente cómo toma contacto con Yeruti, y acá hizo presente que el lenguaje surge como tan decisivo, por cuanto Samantha refiere que Yeruti le dijo que tenía que consultarlo con doña María, con su “jefa” si es que la puede recibir. Es, en ese contexto, que se da la captación de víctimas, considerando además que la acusada hacía constantemente recambio de víctimas, de acuerdo incluso lo declarado por el testigo Frederic Leopold, respecto al referido recambio ya en el año 2017.

Luego, en relación con el traslado que realiza la acusada directamente, nuevamente en el automóvil Kia, y va a buscar a la víctima recientemente llegada al país, a Huechuraba, a un lugar en donde obviamente que la víctima no conocía, en tanto, no sabía cómo llegar al departamento de Luis Thayer Ojeda. Va a buscarla entonces la acusada, y la traslada al departamento de Luis Thayer Ojeda.

En este punto, destacó la objetiva declaración del testigo Francisco Pino, quien, desde el inicio de la investigación, sin tener nada que ganar, muy por el contrario, indicó incluso a este tribunal “me da vergüenza, me da vergüenza contarlo”, pero relacionó claramente los hechos, tanto referidos por Samantha, como lo que él derechamente visualizo.

A continuación, efectuó conclusiones sobre los medios comisivos, en específico, la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Hizo presente en primer término, la

declaración de Francisco Pino, testigo que fue claro en indicar las condiciones en que él mismo vio la situación de explotación en que se encontraba Samantha y se hizo cargo aquí de las continuas preguntas relacionadas con el tiempo que habría permanecido la víctima en situación de explotación, si fue uno o dos días, o una semana, lo cierto es que ni la propia víctima recuerda bien cuanto fue ese periodo, se tiene claro que fueron días en que la víctima estuvo sometida a una situación de explotación sexual en que justamente, por la misma situación que vivió, es absolutamente creíble que no recuerde cuántos días habría sufrido esa situación de explotación sexual. El tipo penal lo que exige es la finalidad de explotación, no que la víctima haya permanecido en situación de explotación por un determinado tiempo, sino que haya existido efectivamente dicha situación, lo que lamentablemente en este caso en particular, duró efectivamente varios días, desde el traslado de la víctima que se encontraba en la comuna de Huechuraba, hasta que fue trasladada por parte de la acusada hasta el departamento de Luis Thayer Ojeda. Aquí el testigo fue claro en mencionar que existió un control y señala incluso que la víctima tenía que hacer domicilios, visitaba hoteles y le tocó atender a un sujeto “duro” con cocaína. Esos son servicios sexuales eran distintos a los publicados, señaló incluso a una de las preguntas que hiciera la defensa. Si era obligada a hacer cosas que no querían, llegaban personas en estado de ebriedad, drogadictos, no se hacía un derecho de admisión, “gallos duros con cocaína eran los clientes y tenía que atenderlo”. Agregó también a una pregunta relacionada y formulada por parte de la defensa, si fue humillada, “todas las cosas que tuvo que pasar para salir de esa situación”, se fue finalmente por la pérdida del dinero y por la discusión con María y por la situación de traslado al domicilio por parte de uno de los clientes, para él supuestamente prestar servicios sexuales, pero se encontraba en situación de drogadicción, por lo tanto no es efectivo lo que señaló la imputada que se preocupaba y protegía a las víctimas, sino muy por el contrario, las exponía a situaciones como las que describió en esta audiencia la víctima de nombre Samantha.

Esta situación de vulnerabilidad implica que las víctimas no tenían otra opción verdadera más que someterse a la situación que estaban viviendo, situación de vulnerabilidad que fue latamente relacionada por los peritos doña Karen Schimdt, en el caso de Sonia, quien refirió también a este tribunal a través de la declaración anticipada que cuando María la recogió al llegar a Chile, le preguntó si hacía lesbianismo, parejas, o sexo anal, y al responderle Sonia que ella sólo haría sexo normal, la acusada le dijo que entonces, no iba a ganar nada, sino hacía esas cosas. Sonia señaló que no hacer sexo anal porque tenía una fisura anal y no estaba preparada para hacerlo. Sonia declaró que María le pagó el pasaje y también, tuvo que devolver con trabajo el pasaje que le había pagado María, indicándole también, que le pasó un cliente cuando estaba con su periodo y le dijo “sabes bien para que viniste, no te hagas la tonta, así no me sirves”, nuevamente aparece acreditada la situación de vulneración de la víctima, de instrumentalización de las víctimas, y evidentemente, aprovechando la situación de vulnerabilidad, tanto de Sonia como de Hilda, en relación a las necesidades económicas e imperiosas, también fueron referidas por su hermana, durante la prueba de la defensa, en el desarrollo de este juicio.

Respecto de Samantha, ella indicó claramente que no tenía dónde ir, así lo refirió también la perito doña Milena Rojas, quien indicó que a Samantha le daba miedo el único lugar donde tenía techo y comida, y no podía perderlo. Se remitió también a la lata declaración que realizó Samantha en este mismo juicio oral.

Todas estas alegaciones, son consistentes, además, con el hecho de tratarse de un delito pluriofensivo, que afecta la libertad, la seguridad y sin duda, la libertad sexual y la salud de las víctimas.

Luego, el Ministerio Público apoyándose en doctrina de Matus y Ramírez, indicó que el concepto de “promover” significa inducir o inclinar a otro hacia la realización de un determinado comportamiento, en este caso, el ingreso a Chile o el traslado desde Paraguay a Chile para la prostitución, y respecto del término “facilitar”, alude a cualquier acto de cooperación que haga posible justamente este traslado, como ocurrió en el caso en particular, compra de pasajes, entrega de dinero, aporte de

departamentos, de casa, para que ejercieran la finalidad de prostitución. Se extraen en consecuencia, dos ideas básicas respecto a la prostitución, la primera, el componente económico de lucro, ya aludido, y en segundo lugar, que el servicio sexual consista en una conducta connotación sexual, sin duda, queda aquello claro también.

En este punto, de la facilitación y la promoción al ejercicio de la prostitución, se debe recordar la prueba material, encontrada no cualquier parte, sino en el automóvil utilizado por la acusada, en el que se pudo conectar un pendrive que contenía información de la PDI, información relacionada a movimientos migratorios e información de migración de la PDI. El hecho de que se haya utilizado “online”, “offline”, aun cuando la propia testigo doña Nicole Salinas indica que efectivamente podía utilizarse “offline” y que justamente aquello ocurrió con el Paso Los Libertadores, que por gran cantidad de tiempo estuvo a disposición de la acusada, se usó offline, independiente de eso, se debe considerar que las víctimas ingresaron de acuerdo a los movimientos migratorios, justamente por el Paso Los Libertadores, que era precisamente el paso o frontera nacional, donde se utilizaba información migratoria, a través de un sistema offline, dadas las condiciones geográficas. Pero, no solamente eso, ya que fue claro el perito al momento de declarar, el perito ingeniero en ejecución informática del Ciber crimen, en referir cuál era la información migratoria del manual que aparecía ahí. El tribunal pudo ver que justamente aparecía la pantalla y los campos que deben ser llenados por parte de los policías que realizan el control migratorio y aquello resulta en este caso plenamente coincidente con el envío de dinero de los 300 dólares y las instrucciones de la acusada respecto a lo que debían señalar, que venían a ver una tía, o a una madrina. Aquella información resulta clara, precisa y categórica en términos de establecer la promoción o facilitación del ingreso de víctimas a nuestro país.

La acusada señaló luego, que las víctimas se publicaban solas, no obstante, se reprodujo la escucha de fecha 22 de noviembre del año 2019, en que se acredita que María era quien realizaba todos los trámites, hacía los pagos y además las publicaciones, haciéndolas a través de la agencia “Preciosas”, que estaban vinculadas

al correo electrónico de la imputada, de acuerdo a la información adaptada por Google y que incluso aparecían vinculados a “Mani Sosa” que era parte del nombre del correo electrónico utilizado por ella, presentándose prueba documental número 32 y 33 sobre este punto, y presentándose prueba documental también relacionada con el nombre de las mujeres paraguayas asociadas a la agencia “Preciosas”, que publicó la imputada indicándose además la fecha de publicación, por cierto, cercana -de acuerdo a las declaraciones de los testigos- de los movimientos migratorios presentados al tribunal, en un tiempo muy cercano a la fecha de publicación.

A continuación, la fiscal Suazo hizo un análisis de cada uno de los hechos descritos en la acusación. En relación con el hecho 1, la funcionaria Carolina Gatica señaló que por medio de las diligencias practicadas como del análisis migratorio de las mujeres y las publicaciones efectuadas en páginas de comercio sexual, identificaron en una primera instancia a “Yeruti”, que recibió un envío de dinero por parte de la acusada el día 2 de febrero del año 2017 y el 4 de febrero ingresó a Chile y el 15 de febrero fue publicada bajo el nombre de Rossana. Esta forma de operar es clara incluso en el resto de los hechos constitutivos del artículo 411 ter, y en el mismo sentido, declaró la funcionaria Nicole Salinas. Junto a Yuruti ingresó “Lida” que trabajaba con el nombre de fantasía “Mini Barbie”. La funcionaria Nicole Salinas indicó que aproximadamente el 2 de febrero María envió cerca de \$138.000 a Yeruti, dinero que en todo caso consta en la prueba documental y del análisis migratorio, aparece justamente el ingreso a solo días después de aquella fecha. Viajaron en un bus, de la empresa Pullman Sur, como turistas, tanto Yeruti como Lida, pasando por el paso Libertadores, venían juntas, pero respecto de la segunda de ellas, no hubo envío de dinero. Yeruti también es mencionada por Samantha, indicando incluso que viajó con ella desde Paraguay a Chile en marzo del año 2019 y que ella refirió que ella le dijo que era la segunda o tercera vez que venía, porque se dedicaba a la prostitución, en un departamento en Providencia, y trabajaba para la señora María, por lo tanto, claramente se dan todos los elementos del tipo penal para dar por acreditado este hecho.

Respecto del segundo hecho, la funcionaria Carolina Gatica señaló que lograron a través de las diligencias practicadas, el análisis migratorio, y el análisis de páginas de comercio sexual, lograron identificar a “Norma”, quien el día 7 de diciembre del año 2017, recibió dinero por parte de la acusada y el 9 de diciembre de ese mismo año ingresa al país, ella fue publicada el 17 de enero de 2018, bajo el nombre de “Jacky”, y justamente las filmaciones entregadas por parte del edificio relacionadas con el testigo Álvaro García, hablan y se refieren justamente al ingreso en la misma fecha, de una mujer paraguaya que venía con una maleta. Que, estos dos hechos ocurridos el 2017, tenemos necesariamente que relacionarlo con la declaración del administrador del edificio de calle Santa Rosa 170, quien describió que cuando asumió como administrador del edificio de calle Santa Rosa 170, indicó que efectivamente él se dio cuenta de la situación que ocurría, tanto por la información que le dieron los integrantes del comité como vecinos del edificio, e indicó que para él los libros eran una prueba irrefutable de la presencia de hombres, agregando varias veces que llegaban jóvenes mujeres, de 20 a 25 años, salían muy poco o acompañadas, señaló además que no las veía como personas libres. Destacó lo llamativa de esta afirmación, y que se trataba de un testigo completamente objetivo, en tanto, no tenía nada que ganar declarando en este juicio. Refirió que le había señalado una vecina del edificio, supuestamente amenazas por parte de la imputada. Agregó que, respecto de estas mujeres, que no se veían como personas libres, ellas no se registraban, sólo las visitas, que correspondían evidentemente a clientes, indicando que nunca pudieron tener nombres ni apellidos de aquellas muchachas. Si bien se intentó solicitar medidas intrusivas en ese momento, no se obtuvo la autorización judicial respectiva. Otro antecedente importante que aportó, incluso a una pregunta de la defensa, es que las muchachas se quedaban poco, a veces las cambiaba y existía un recambio de muchachas. Aquello fue corroborado por la declaración de la funcionaria policial doña Cassandra Avilez, quien se refirió a las diligencias que como departamento OS-9 realizaron en esa investigación.

En relación al hecho 3 -ya del año 2018- la funcionaria Carolina Gatica declaró que por medio de las diligencias practicadas, como el análisis de las mujeres y nuevamente las publicaciones, pudieron identificar a “Catalina”, quien ingresó el 17 de enero de 2018, fue publicada el 24 de enero de 2018, bajo el nombre de “Micky”, y en el mismo sentido, declaró doña Nicole Salinas. Considerando además la declaración de don Frederic, quien indicó que con posterioridad al año 2017 no hubo cambios y continuaron con el negocio refiriéndose al negocio por ciento de la acusada, y considerando, además, la vinculación de la imputada con la misma víctima, de acuerdo el envío de dinero entre los años 2018 y 2019, de acuerdo con la prueba documental número 72.

En cuanto al hecho 4, la funcionaria Carolina Gatica indicó que lograron a través de las diligencias practicadas, como el análisis migratorio de las mujeres y las publicaciones en páginas de comercio sexual, identificar a “Nilda” y “Marisel”, que ingresaron a Chile el 20 de junio del 2018 y el 4 de julio María las publicó. Nilda es “Miley” y Marisel es “Jade”. Respecto al nombre de fantasía “Miley” la testigo lo señaló incluso al momento de exhibirle fotografías de las agendas incautadas que corresponde a Nilda.

En relación con el hecho 5, la funcionaria Carolina Gatica señaló que lograron, a través de las diligencias practicadas, análisis migratorios de las mujeres, las publicaciones en las páginas de comercio sexual, identificar a “María”, que ingresó el 20 de julio de 2018, el 24 de julio fue publicada bajo el nombre de “Palomita”, en el mismo sentido, doña Nicole Salinas. Y, por cierto, aparece claramente de la prueba documental 72 el envío de dinero por parte de la acusada a la víctima de \$ 211.000 el día 19 de julio de 2018, esto es, un día antes de su ingreso a Chile el 20 de julio del año 2018.

Sobre el sexto hecho, nuevamente a través de las referencias formuladas por doña Carolina Gatica señaló que, análisis migratorio, sumado al análisis de las publicaciones, identificaron a “Laura” (LVA), quien ingresó el 28 julio de 2018 y fue publicada el 1 de agosto de 2018 con el nombre de “Barbie” o “Mini Barbie”. Que el

video que contiene una noticia respecto a la muerte de la víctima en el mes de mayo recién pasado, presentado como prueba nueva por parte de la defensa, refuerza y acredita la condición de pobreza de la familia de la víctima, y el contexto sin duda de vulnerabilidad en que se encontraba, falleciendo en las condiciones ya indicadas. Respecto de esta víctima, y con el mismo modo de operar, de acuerdo con la prueba documental 72, la acusada le envió \$132.262 el 26 de julio de 2018, esto es, dos días antes del viaje, ingresando a Chile el 28 de julio de 2018.

Sobre el hecho octavo, la funcionaria Nicole Salinas nuevamente da cuenta del análisis migratorio relacionado con publicación, indica que “Ana” es publicada como “Mini Barbie” el 5 de septiembre de 2018, ingresó a Chile cuatro días antes, es decir, el primero de septiembre. Consta además de la prueba documental 72 que envió dinero la acusada a la misma víctima el 30 de agosto de 2018 específicamente la suma de \$208.075, esto es, dos días antes de su ingreso.

Respecto del hecho nueve, la funcionaria Nicole Salinas, del análisis migratorio nuevamente, respecto a la publicación, estableció que “Analía” también había sido identificada, que su nombre de fantasía era “Yayita”, se publicó el 12 de octubre e ingresó seis días antes a Chile, se exhibieron fotos referidas justamente a las publicaciones y se nuevamente se acreditó a través de la prueba documental 72 el envío de dinero por parte de la acusada a Analía, específicamente la suma de \$168.957 el día 4 de octubre de 2018, esto es, dos días antes de su ingreso a Chile.

Respecto del hecho 10, se refleja el mismo modo de operar en relación con la víctima “Liz”, quien ingresó a Chile el 20 de octubre de 2018 siendo publicada por la acusada el 26 de octubre del mismo año.

Hasta aquí, esto es, hechos del año 2018 deben ser relacionados forzosamente con la declaración de los funcionarios Carolina Gatica y Juan Carlos Oliveros, quienes refirieron la denuncia formulada por un cliente, cuestión que surge como algo muy poco frecuente, y respecto de esa declaración, refirieron que tanto en la denuncia como en la declaración de ese testigo prestada tanto en sede policial como en la fiscalía, presenciada por doña Carolina Gatica, señaló que era cliente de lugares donde se

ejercía la prostitución, dándose cuenta que las mujeres se encontraban en una situación de esclavitud, donde trabajaban también dormían y precisamente, uno de esos lugares, era el departamento ubicado en calle Santa Rosa 170. En declaración de la fiscalía señaló que el departamento correspondía al 1005, fue en tres oportunidades a ese departamento, no a otro, aunque habló también de otros inmuebles, agregando que las muchachas hablaban en guaraní, notó que estaban hacinadas, dormían y comían allí, indicando que siempre estaban bajo el cuidado de una proxeneta y trabajaban en horarios extensos. Esto claramente refleja y contribuye a la acreditación de los hechos ocurridos de promoción o facilitación realizadas a través de las conductas ya mencionadas, especialmente el envío de dinero, el ingreso, el análisis migratorio y la publicación por parte de la acusada, vinculada a la agencia “Preciosas”, en el sitio sexo.cl. Ello, sin considerar los otros pagos que la acusada realizaba en otras páginas, como “mi privado” y que también el tribunal tuvo acceso a esa información.

En relación con los hechos acaecidos el año 2019, en el hecho 11 la empresa Latam, informó sobre la compra de pasajes para la víctima “Arnal”, de acuerdo a la lectura de la prueba documental N°18, se refirió a lo mismo la funcionaria Nicole Salinas, indicando además que fue publicada por María Sosa en la agencia “Preciosas” el 9 de enero de 2019 y ella ingresó dos o tres días antes a Chile, previa compra del pasaje, del ticket aéreo por María Sosa, de acuerdo con lo informado por la Latam. Fue publicada en el sitio “sexo.cl”, en “lo canto”, en “chimbis” y se incorporaron además los otros medios de prueba que permiten establecer y acreditar esas publicaciones. También se debe tener presente la escucha de fecha 8 de agosto del año 2019, a las 21:17 horas, en que María se hace pasar por “Bebota”, pero el cliente quiere a “Barbie”, que es precisamente “Arnal”, que de acuerdo con la información antes entregada se encontraba precisamente en Chile, y había ingresado el 7 de enero a nuestro país. Se presentaron todas las publicaciones que permiten establecer la prestación de servicios sexuales y la finalidad de prostitución que exige el tipo penal.

Sobre el hecho 12, respecto de la víctima “Ana”, indicado por doña Nicole Salinas, quien declaró nuevamente sobre el análisis migratorio, se estableció que Ana

era “Monse” y fue publicada por parte de la acusada en la página “sexo.cl”, vinculada a la agencia “Preciosas”, el día 13 de julio del año 2019.

En relación con el hecho 14, “Jannyré”, corresponde a una de las víctimas encontradas en el domicilio de Ruiz de Gamboa donde debía ejercer la prostitución. Se debe recordar acá, necesariamente la declaración de doña Nicole Salinas, quien estuvo presente su declaración y quien indicó que previo a su viaje se comunicó con María, le indicó que comprara el pasaje en bus, que le iba a mandar con un tercero 300 dólares para que los exhibiera en el control fronterizo y le dice que tenía que decir que venía a visitar a una madrina, y que toda esa comunicación tenía que ser borrada una vez realizado el viaje. Luego señala que debió pagar un valor mucho más alto por la compra del pasaje. Aquí ya se puede establecer una variación respecto a situaciones anteriores, en cuanto a que se compren pasajes en bus, para ser retirados en la ventanilla de la oficina de la empresa Pullman en el terminal de Paraguay, lo mismo que ocurrió con la víctima Sonia, ratificando por lo tanto sus dichos, también en esta parte.

Explicó que se debe considerar también el audio extraído desde el celular de Jannyré, en que la transcripción señala que la locutora justamente habla María Sosa y le da órdenes respecto de un cliente y pide que se apague la luz de abajo. En el mismo sentido, la prueba documental 54 que se refiere a las conversaciones aportadas, en este caso por otra de las víctimas, entre el 27 y 28 de noviembre entre ella y Lucía, quien aparece como la mano derecha de María, de acuerdo con lo ya referido.

Hecho número 15, “Araceli”. El relato de la víctima Araceli se incorporó a través de la declaración del funcionario policial Juan Santelices quien le tomó declaración el día 27 de noviembre del año 2019 y la declaración de doña Nicole Salinas. Ella señaló que llegó a María a través de Jannyré, quién le dio su número de contacto, esto ratifica cuál era la forma de captación, no solamente respecto de los hechos del artículo 411 ter, sino también respecto de los del artículo 411 quáter, sabía que venía a ejercer la prostitución a Chile, María le compró los pasajes, viajó por cerca de 33 horas en bus y al terminar, la fue a buscar María, quien luego la publicó en

páginas de comercio sexual. Se incorporó incluso la copia del pasaje que aún tenía la víctima en su poder, cuyo origen era Asunción y su destino, Santiago, de fecha 6 de septiembre del año 2019. Doña Nicole Salinas declaró además que presencié la declaración de Areceli, quien indicó que previo a su viaje hay comunicaciones por WhatsApp con María, en donde le informa que le comprará el pasaje, que le enviará con un tercero 300 dólares y una vez en Chile debe entregárselos a María. Llegó el 7 de septiembre y el 10 de septiembre es publicada en páginas de prestación de servicios sexuales. Ella emprende su viaje desde Asunción a Santiago de Chile por vía terrestre y en el terminal, es recepcionada por María junto a Jannyré y ahí la traslada inmediatamente al domicilio de Ruiz de Gamboa, y ahí está hasta octubre. Se exhibieron además los otros medios que permite, no solamente establecer los datos de la publicación, sino además los teléfonos asociados a los mismos, apareciendo también el valor de los servicios sociales en algunos de ellos, y apareciendo el nombre de fantasía utilizado por ella. Ese es el contexto en que llega otra de las víctimas del artículo 411 quáter, de nombre Sonia.

Por último, en relación con el hecho N° 17, respecto de la víctima de nombre “Laura” (LEA). El relato de Laura se incorporó a través de la declaración del funcionario Javier Cárcamo quien le tomó declaración el día 27 de noviembre del año 2019. Ella señaló que se contactó con María Sosa a través de una prima lejana -Jessica- y que era su segundo viaje a Chile. Cabe recordar que el artículo 411 quáter y tampoco el artículo 411 ter, indica la necesidad de establecer que es la primera vez que se ingresa, sin embargo, señala que se contactó con María Sosa a través de una prima lejana Jessica y que en su segundo viaje a Chile había sido María Sosa quien había financiado este viaje. Mencionó que llegó el 2 de noviembre de 2019, prestó pocos servicios sexuales, pero aún no había sido publicada. También señaló que con esas atenciones a dos clientes habían financiado la deuda que tenía con María. Se estableció también como prueba documental el pasaje que aún mantenía, justamente pagado por María, por un valor de 800.000 guaraníes, origen nuevamente Asunción con destino a Santiago. Respecto a la víctima, también se corroboró a través de la declaración de

doña Nicole Salinas quien agregó que Laura señaló que el contacto lo hizo a través de Jessica Sosa, refiriendo también además del pago del pasaje, el envío de los 300 dólares para ser utilizado en el control migratorio, porque María le dijo que tenía que decir que ella venía de visita y ese dinero era para fundamentar y poder respaldar esta supuesta actividad que venía a realizar. Fue recibida por María junto a Tania, que correspondía Lucía, la mano derecha de María Sosa, la fue a buscar en el automóvil Kia Rio 5, y desde el terminal es trasladada al departamento 1005 y luego trasladada a Ruiz de Gamboa, y allí usaba el nombre de Noemí o Naomi.

Respecto al bien jurídico protegido por el artículo 411 ter, si bien, no se incorpora el elemento explotación, de igual manera, cree que ha quedado claro que la acusada si obtuvo ganancias económicas, producto de la situación de prostitución de las víctimas en las condiciones tantas veces descritas. En efecto, respecto de este tipo penal, 411 ter, Matus y Ramírez señalan que este delito es un delito de peligro abstracto para la libertad ambulatoria de la mujer que es trasladada a otro país, como para su seguridad personal, por los riesgos que conlleva la realización de una actividad socialmente desvalorada y también para su libertad sexual, dado que la dedicación continua en la prostitución va limitando en ese sentido sus posibilidades vitales. Agregan estos autores que el consentimiento no parece tener valor en este delito, ni aún casos de personas que ejercen la prostitución antes de salir de su país de origen, entendiendo la ley que al salir una persona de su propio país para ejercer la prostitución, su voluntad se encontraría viciada por un desconocimiento presunto de las reales condiciones en que quedará una vez que cruce las fronteras, condiciones que generalmente suponen privar a las víctimas de la posibilidad de retornar a sus países de origen o de pedir auxilio (página 272 de Matus y Ramírez). En el mismo sentido, Balmaceda Hoyos, en su manual de Derecho Penal, y el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique, en su sentencia de 6 de agosto de 2021, en la causa RUC 1800976953-2, que hace la misma relación, indicando que el artículo 411 ter constituye un peligro tanto para la libertad ambulatoria de la persona que es trasladada a otro país, para su seguridad personal, por los riesgos que conlleva esta realización la realización de esta

actividad desvalorada, citando textualmente la doctrina antes mencionada. Que, dicho sea de paso, existe muy poca doctrina que se refiere a este a este tipo penal luego sobre todo de la ley 20.507.

En definitiva, en la figura sancionada por el artículo 411 ter del Código Penal, el legislador toma en cuenta la situación que normalmente afecta a las mujeres que ejercen la prostitución y que son extranjeras, a pesar de saber que vienen a Chile a ejercer la prostitución, lo hacen por una necesidad económica, que si bien no permite configurar un medio comisivo y que no permitió en este caso en particular, configurar del todo un medio comisivo en los términos que exige el artículo 411 quáter del Código Penal, si hace reprochable la conducta de quienes promocionaron, en este caso, la acusada, que promovió y facilitó el ingreso a Chile de las víctimas, con la finalidad de ejercer la prostitución, pues obtuvo un beneficio económico con la actividad que desarrollaron en Chile las víctimas, y que evidentemente, se realizó en forma reiterada. Habiéndose podido establecer respecto de las víctimas, en que estima, si se pudo establecer fehacientemente este medio comisivo, los tres ejes fundamentales que exige el artículo 411 quáter ya mencionado.

Seguidamente, hizo alusiones en relación con puntos levantados por la defensa en su alegato de apertura. En primer término, sobre la autorización de entrada a los domicilios. Respecto a este punto, la funcionaria Carolina Gatica declaró que el ingreso a Ruiz de Gamboa N°029 de Providencia, fue autorizado por Hilda, que efectivamente vivía ahí, ¿podemos desconocer que vivía ahí?, ¿qué otro lugar tenía donde vivir?, ese era el lugar donde vivía la víctima y apareció durante toda la prueba rendida, que las víctimas vivían y prestabas servicios sexuales en el mismo lugar y eso quedó plasmado sin duda en lo que ocurrió el día 27 de noviembre de 2019. Doña Nicole Salinas agregó que Hilda señaló que Tania es Lucía, y le señaló que María estaba detenida, que si llegaba la policía, debía decir que ellas eran trabajadores de aseo y cuando llegó la policía ella autorizó el ingreso voluntario, se autorizó la entrada y registro, y por supuesto rescate de las víctimas, y en este punto, el señor Santelices fue claro en mencionar, un funcionario policial que no había tenido participación antes

en este procedimiento y que explicó claramente cómo fue que ingresaron efectivamente al domicilio. La funcionaria Carolina Gatica señaló al igual que doña Nicole Salinas que la autorización de entrada para el departamento 1005 de Santa Rosa 170 la dio Jessica, lo que fue corroborado por el funcionario Javier Cárcamo, quien señaló que Jessica le dijo que era residente en ese departamento. ¿Y no era residente acaso?, ¿no vivía en ese departamento?, evidentemente vivía, toda la prueba acredita que vivía y también prestaba servicios sexuales en ese lugar, y aquello fue claramente relacionado por don Javier Cárcamo nuevamente, un funcionario que no había participado incluso en las diligencias anteriores, pero que sin embargo participó acotadamente este día, en las diligencias realizadas y que refirió como, la primera vez que fueron, las personas que estaban en los inmuebles entregaron lo que efectivamente estaban dispuestas a entregar, levantando actas de todo aquello. Sin embargo, con posterioridad fue necesario solicitar la autorización judicial respectiva, se encontraron incluso en la audiencia de control de detención y formalización, cuando se realizó a esta fiscal el requerimiento de la entrada y registro con autorización judicial, porque aparecía que no se encontraba toda la evidencia que sí, palmariamente había quedado claro que existía, de acuerdo con las escuchas telefónicas. Claramente entonces, las personas encargadas de los inmuebles y las personas que vivían en esos lugares, en tanto eran justamente personas que residían en esos lugares y que también estaban siempre en esos lugares, porque prestaban servicios sexuales en esos lugares, y cabe recordar que sólo podían salir con autorización de la acusada, se cumplen en consecuencia claramente los requisitos del artículo 205 del Código Procesal Penal, cuestión que ha sido también indicada por la jurisprudencia y que fue también resuelta claramente por el juez de garantía en la audiencia de preparación de juicio oral, refiriéndose al mismo punto, si eran las víctimas que se encontraban en el lugar, precisamente donde vivían y estaban obligadas a ejercer la prostitución, que duda existe entonces de que estaban habilitadas para autorizar el ingreso.

Respecto de la atenuante del artículo 11 N°8, indicó que corresponde hacer ciertas referencias, porque tienen elementos fácticos que es necesario aludir en este

alegato y que se refieren a la cronología de lo que ocurrió el día 27 de noviembre del año 2019. Así, se estableció que una persona, efectivamente un funcionario policial de Carabineros informa la acusada de la existencia de una orden de detención. Desde ahí ya resulta imposible dar por establecido o acreditada la atenuante del artículo 11 N°8, toda vez que, tal como refirieron además los funcionarios policiales, la orden de detención ya se había evacuado con fecha 26 de noviembre del año 2019, y además tal como lo indicaba la jurisprudencia, por vía ejemplar citando a la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, en la causa rol 248-2013, indica que el fundamento de la minorante es facilitar la persecución penal por medio de la presentación voluntaria y la confesión del hecho, es decir, no son circunstancias aisladas, sino que copulativas, lo que claramente no ocurrió en el caso particular, quedó en evidencia, por cierto que incluso la imputada en la propia audiencia de juicio oral señaló no haber indicado una cantidad importante de antecedentes que sólo indicó en esta audiencia de juicio oral y no en declaraciones anteriores. De la misma forma, doña Carolina Gatica refirió lo que ocurrió el día 27 de noviembre y refirió y se incorporó, además, las fotografías obtenidas desde la filmación de la cámara de seguridad del edificio de Santa Rosa, sin embargo, resulta por último indicar el tribunal lo relevante que es establecer la cronología de hechos, desde la filmación, analizando también las llamadas de WhatsApp, los audios de WhatsApp de ese día y la información contenida en el teléfono de las víctimas.

En consecuencia, estima el Ministerio Público que se ha logrado acreditar, más allá de toda duda razonable, la existencia de los ilícitos por los cuales formuló acusación, respecto de los ilícitos tanto constitutivos del artículo 411 quáter y 411 ter del Código Penal. Estima que ello ha ocurrido fehacientemente a través de la prueba rendida durante el desarrollo de la audiencia de juicio oral, y por cierto, aplicando los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

DÉCIMO TERCERO. *Alegatos de clausura de la querellante particular.* Que, la abogada doña Carolina Torres Bascur, actuando en representación de tres de las víctimas de este juicio, reiteró su pretensión de condena y de acción civil.

Al efecto, indicó que hubo captación, traslado, acogida y explotación. Todos y cada uno de los elementos de tipo penal, fueron acreditados con el mérito de la prueba que se rindió por parte de la fiscalía. Tampoco lograron ser desacreditadas con la prueba de la defensa.

Destacó que las declaraciones de las víctimas, en especial, Sonia, quien dijo haber sido contactada por la acusada, que unos días antes del viaje se contactó con ella, le envió audios y textos, que le tenía comprado el pasaje, que debía ir a retirarlos a la agencia. Indicó que María fue la que compró su pasaje, porque ella la trajo a trabajar en servicios sexuales. Sonia refirió que fue recibida en el terminal por María y luego trasladada por la acusada al departamento 1005, que debía atender clientes, que su parte, el 50% debía ser entregado a María, que le cobró los pasajes sin saber con exactitud su valor, que no traía dinero, que en el bus una persona se acercó a pasarle 300 dólares, que María contestaba los teléfonos y coordinaba las citas con los clientes, y que durante su primer día entregó todo a María. Se vio en su actitud, durante su declaración, cabizbaja, lábil emocionalmente, incómoda, lo que además resultó ratificado con la declaración de la perito Karen Schmidt, quien expuso que Sonia explicó que llegó a María por la información que le dio una hermana, que María la trajo al país y la ubicó en el departamento de Santa Rosa, sometiéndola a extensas jornadas de trabajo, debiendo atender clientes y sus exigencias, presionada por la acusada.

Esto se ve reforzado, por la declaración de Samantha, quien declara haber conocido a Yeruti en el viaje desde Paraguay a Chile, otra víctima que le señaló que trabajaba para María en el comercio sexual. Samantha explicó que llamó a Yeruti, y ésta le dice que debe preguntarle a su jefa, pero lo cierto es que el mismo día, la acusada va hacia la comuna de Huechuraba en busca de la víctima. Esta situación fue corroborada por la perito Milena Rojas, y da cuenta del mismo relato que la afectada.

A su vez, en la declaración de Hilda, explica que llegó al contacto de la acusada, por intermedio de su hermana, y que le hicieron una oferta, “que ganaría bien, así mi hermana le pasa el teléfono mío a María”, y se efectuaron las coordinaciones para concretar su arribo al país. Destacó que, pese a las preguntas de Hilda, la acusada no le daba muchos detalles en relación con el trabajo, instándola a que viajaran juntas, dado que la acusada estaría en Paraguay para esa época. Así, la acusada, le pagó el pasaje a la víctima, quien asumió una deuda por este concepto. Hilda refirió que vino a Chile en dos oportunidades, en donde es contactada nuevamente con María, quien además ofreció a la víctima recibirla si ella así lo quería. Estas situaciones son refrendadas por la propia acusada, al reconocer que Hilda fue la única que viajó con ella. El oficio de Latam, que da cuenta del ticket pagado por la acusada ratifica lo que se viene expresando. Insiste en que la acusada, reconoció los contactos con las hermanas Hilda y Sonia, ofreciéndole a la primera dinero para que Sonia pudiese venir.

Todas las víctimas son concordantes y coherentes en señalar que fueron contactadas por la acusada, recibidas por ella, les pagó el pasaje, y luego, fueron sometidas a extensas horas de trabajo de lunes a lunes, sin descanso, de 9 a 2 de la mañana. La acusada confirma este horario. Había mínimas salidas y todas controladas por la acusada, ya que utilizaba llamadas y mensajes para instar a que las víctimas volvieran. Respecto a las ganancias, Sonia declaró que lo obtuvo debió pagárselo a María a título de la deuda que mantenía con ella, por otro lado, Samantha denunció el robo de sus ahorros ascendientes a \$800.000. Las cartolas presentadas a juicio relativas a las cuentas del Banco Estado que mantenía la acusada evidencian las transferencias que recibía la acusada con motivo de las prestaciones sexuales, lo que es coincidente a los valores presentes en las agendas, que fueron incautadas por la policía. Es decir, se verificaron ganancias para la acusada, pero para víctimas como Sonia, no existieron ingresos, ya que en este caso debió ser auxiliada (para alimentarse) por su hermana Hilda.

La misma acusada respondió que ella podía hacer entre \$300.000 y \$1.000.000, sólo ella, y de acuerdo con las declaraciones de los funcionarios policiales, el día en que se verificó el rescate de las víctimas, logró ubicarse y rescatar a siete mujeres. Las víctimas, declararon que en general se atendían a dos o tres clientes diarios, dependía del día (Samantha), siete, ocho o diez, sin embargo, todas ellas declararon de manera conteste, el valor por los servicios sexuales, \$30.000 la media hora, \$40.000 por una hora full y \$65.000 por atenciones en “domicilios”. Estos fueron refrendados por Carolina Gatica, quien declaró que se confeccionó un gráfico en donde en un determinado periodo de tiempo, se verificó la presencia de más de 567 clientes hombres (solo al departamento 1005).

Todas estas situaciones no fueron al azar ni por mera coyuntura temporal. Este ejercicio de explotación de las víctimas se da en un contexto de extrema vulnerabilidad de ellas, conforme lo declararon en el juicio. Destacó en el caso de Samantha no sólo lo que ella declaró, sino los factores de vulnerabilidad reportados por la perito Milena Rojas, en donde llamó la atención una historia familiar con abandono y violencia y una sobrevivencia dura, con trabajo precario temprano y viviendo sola desde los 16 años. Samantha, tuvo contacto con drogas y desprotegida, y viene a Chile en busca de mayores oportunidades. Su sensación de desprotección era profunda, toda vez que incluso en Chile se preguntaba qué haría si es que María la echaba, ya que no conocía ni tenía otro lugar. Samantha relata sobre el episodio que termina gatillando su salida, experiencia en la que se destaca la molestia por la pérdida del dinero ahorrado y por la presencia de un tercero amigo que le presta ayuda para poder salir. Francisco Pino, refrenda los dichos de Samantha, y aporta que debía atender a muchos clientes, que era controlada, y que la veía demacrada y cansada por las extenuantes jornadas de comercio sexual, que en ocasiones la pudo ver en no más de 15' o 20', ya que constantemente recibía llamados de la acusada para saber dónde estaba y a qué hora volvería.

Por otro lado, la perito refiere además la baja percepción del daño, ya que estas mujeres no se conciben a sí mismas como víctimas, lo que es concordante con la

fenomenología de este tipo de delitos. El hecho de saber a qué venían y la vergüenza social asociada a la actividad, hace que no se sientan afectadas, sino por el contrario, en ocasiones, copartícipes de la actividad de explotación.

Destacó en la declaración de Samantha, el malestar que ella sentía con María, dada la utilización que ésta ejerció a su respecto solo para ganar dinero, y sobre todo, por el hecho de haber perdido sus ahorros en manos de María, dichos que fueron corroborados con las declaraciones de las funcionarias policiales Carolina Gatica y Nicole Salinas, quienes informaron al tribunal que Samantha denunció el hurto de su dinero en sede policial, y que luego al explicar las circunstancias de la pérdida de sus \$800.000 se une este relato con aquella información ya contenida en otra investigación en curso seguida por la Fiscalía Centro Norte por el delito de trata de personas.

La perito refiere también una baja intensidad acusatoria, fundada precisamente en el hecho de no sentirse víctima de estos hechos. Finalmente, dio cuenta de ciertos factores protectores, como la Casa de Acogida a la que la víctima fue trasladada por el persona del URAVIT, en donde logra sentir bienestar.

Las víctimas son presa fácil para quienes conocen de esta situación de necesidad, de carencias emocionales y de precariedad económica, pues están propensas a aceptar ofertas en donde se les promete dinero rápido.

Samantha sabía a lo venía, sin embargo, el consentimiento de ella y de las restantes víctimas no es un aspecto relevante para configurar el tipo penal. Este consentimiento, además, estaba viciado por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, por el aprovechamiento de la situación precaria emocional, económica y relacional de las afectadas, tal y como relataron las profesionales peritos psicólogas.

Sonia, era madre soltera de un pequeño de solo 9 meses, ganaba mensualmente cerca de \$215.000, y no tenía redes de apoyo, ni económicas para hacer frente a los requerimientos propios ni los que experimentaba su familia. Expresó “decidí viajar por necesidad”, circunstancias que fueron ratificadas por su hermana Bernardina, testigo de la defensa. En el caso de Sonia, no había ejercido previamente el comercio sexual y que solo lo hacía ahora porque estaba sin trabajo y necesitaba dinero. Estas

afirmaciones fueron confirmadas por la perito del CAVAS, Karen Schmidt, quien habló de la historia de vida de Sonia y sus necesidades, en las que prima la necesidad y las carencias. Por otro lado, Sonia reprime sus emociones, se mueve a corto plazo y por ello toma decisiones que permitan resolver sus necesidades económicas. Relató que solo al llegar a Chile pudo conocer las condiciones de trabajo, coincidente con la declaración de Hilda, la que acusó que María no le daba detalles del trabajo antes de su viaje a Chile, pese a haberlo preguntado. Sonia, también dio cuenta de la entrega de 300 dólares y que el “cambio” de esta moneda, vino a aumentar la deuda que contrajo con María con motivo de su viaje. Dijo además que ella debía costearse de propia comida, que las jornadas de trabajo eran extensas y que las coordinaciones con los clientes las hacía directamente la acusada. La perito Schmidt también corrobora lo dicho por Sonia, en torno al “problema” que le significó el negarse a realizar sexo anal, dado que tenía una fisura y que al efecto María la presionaba diciéndole a que vino y que no ganaría dinero de esa manera.

En cuanto al daño, la perito Schmidt da cuenta de los costos negativos que tuvo en la afectada, especialmente desde lo familiar, la preocupación constante por enviar dinero a su hijo, la sensación de ser instrumentalizada por la acusada, que resulta igual que lo dicho por Samantha. Sonia se sintió “cosificada”, ignorada desde sus necesidades y con una importante baja a nivel emocional lo que se pudo evidenciar en la actitud que mostró durante su declaración anticipada. Sonia dijo que estuvo cerca de un mes o un mes y medio, pero que, durante ese periodo, lo que produjo debió ser entregado a la acusada y no obtuvo ganancia personal alguna.

Si bien no se contó con peritaje del CAVAS en relación con Hilda, es posible, de su propia declaración vislumbrar coincidencias con el relato de su hermana, ya que Hilda también es madre soltera de un niño pequeño, que ganaba en un laboratorio un sueldo precario, que debió dejar a su hijo al cuidado de su hermana, dado que le hicieron una oferta en donde “ganaría bien”, pues las cosas en su país estaban muy mal. Reportó que María le dijo que lo que podía ganar era cerca de \$900.000 o \$1.000.000, y que le compraría un pasaje, “la oferta era muy grande, lo que me dijo

ganar, era muy bueno”, afirmó Hilda. Indicó que llegó a Chile sin dinero, y en compañía de María Sosa en agosto del año 2018.

Señaló que, la testigo de la defensa, Bernardina (hermana de las afectadas Hilda y Sonia) en nada aportó al juicio, toda vez que solo desacreditó, sin base alguna, los dichos de sus hermanas y haciendo afirmaciones personales de lo que ella creía había pasado. No especificó ninguna de sus aseveraciones, indicando inclusive que sus hermanas estaban super bien, lo que aparece como absolutamente contradictorio a lo que en estrados relataron las afectadas Hilda, Sonia y además, por Samantha.

Finalmente, en relación con la demanda civil, indicó que a consecuencia de la comisión de un delito nace también una acción civil para reparar el daño moral, en este caso, que sufrieron las víctimas. Toda esta situación de vulnerabilidad y el daño asociado a ello, de sentirse usadas, cosificadas, instrumentalizadas en beneficio de la acusada, sintiéndose además como objetos sexuales sólo destinadas a la obtención de ganancias de María Sosa, estos hechos resultaron refrendados por las peritos Schmidt y Rojas en los términos ya explicados.

Agregó que el daño en Sonia importó un gran costo familiar, al verse alejada de su hijo, y no viendo retribuido ese esfuerzo con la tarea que decidió venir a realizar a Chile. Por su parte, en Samantha, se da una baja percepción del daño, que es a la vez, un daño en dicha afectada. Ella sentía estresores adicionales, como su necesidad habitacional, monetaria, y sin proyección laboral, no solo por estar en un país extranjero, sino por su escasa formación escolar, y por el robo que sufrió que la dejó a la deriva. Todos estos elementos de aprovechamiento de la condición de vulnerabilidad de las víctimas hacen necesaria una reparación económica a las mismas. La traumática experiencia por la que tuvieron que pasar, de ser explotadas sexualmente, y solo beneficiándose la acusada, justifica que deba decretarse una compensación económica, que de acuerdo con la normativa nacional e internacional sea una forma de reparación del daño que se les ha provocado. Si bien no se logrará compensar efectivamente el daño que las afectadas sufrieron, al menos mitigará su

sensación de justicia, junto a una condena, por el delito de trata de personas perpetrado en contra de Sonia, Hilda y Samantha.

Hizo presente que se debe considerar el dolor físico y psíquico causado, presente aún hoy, con motivo de la explotación sexual a las que fueron sometido, el que es tratado en nuestro régimen jurídico, como daño moral. Ejercer el comercio sexual, en las condiciones que lo realizaron, sin protección, sin seguridad, expuestas a hombres drogados y agresivos, en condiciones precarias de higiene y en extensas horas de trabajo, compelidas a ello por su situación precaria en el país de origen, es también un factor que considerar dentro del daño psicológico que las afectadas experimentaron, siendo una sensación la deshumanización, ya que la explotación las reduce a un mero objeto de aprovechamiento de otro.

Expresó que en este caso la gravedad de los delitos justifica plenamente la obligación de tener que indemnizar los perjuicios provocados a las víctimas. La acusada como responsable los delitos, debe responde también de las consecuencias que fueron soportadas por las afectadas, quienes no tenían más redes ni alternativas que permanecer sometidas a la situación de explotación sexual tantas veces aludido. Al estar trabajando con la acusada, se encontraban también en situación irregular, y no podían aspirar a conseguir otro trabajo, con contrato y estabilidades legales, por lo que, todas las víctimas que fueron rescatadas el día 27 de noviembre de 2019 debieron ser llevadas a una Casa de Acogida, donde fueron recibidas por profesionales y educadoras que les dieron acogida y contención, dentro de lo que resultó posible, pues todas decidieron retornar a su país con sus familias, salvo Samantha, quien decidió permanecer en Chile y hoy cuenta con un trabajo estable, con contrato, ejerciendo una tarea de capataz en una construcción y seguimiento por las trabajadoras sociales de la Casa de Acogida.

Atendidas todas estas razones, es que la querellante solicitó que se acogiera la demanda civil intentada en contra de la acusada, al monto que el tribunal determine como acorde al daño experimentado por las víctimas o la suma que en Derecho corresponda.

DÉCIMO CUARTO. *Alegatos de clausura de la querellante institucional Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).* Que, en sus intervenciones finales, la querellante INDH reiteró su pretensión de condena en contra de la acusada, a las mismas penas señaladas en la acusación.

En efecto, hizo presente que a lo largo de las jornadas en que se desarrolló este juicio oral se conoció sobre la forma en que se cometió una de las formas más graves de violencia en contra de las mujeres, justo en fecha cercana al Día en que se conmemora mundialmente el día en contra de la Eliminación de toda forma de violencia en contra de las mujeres (25 de noviembre). Los delitos materia de este juicio, de trata de personas, constituyen una lamentable forma de esclavitud moderna, cuyas víctimas principalmente son las mujeres.

El INDH reitera que su presencia en este proceso, lo es para abogar por la dignidad y por el respeto de los derechos humanos de todas las personas. Se pregunta cuál es el límite de tolerancia que en una sociedad democrática como la nuestra tiene con conductas de abuso e instrumentalización de las mujeres. Por eso pide al tribunal, que estos hechos sean apreciados desde la norma penal, pero con enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género, ya que ambos aspectos son un binomio indisoluble al sancionar y erradicar las conductas como las que se han ventilado en este juicio.

Expresó que, con la prueba rendida, se pudo conocer que la acusada María Sosa, establecía un verdadero *modus operandi*, que permitió desarrollar su actividad delictiva por un periodo considerable de tiempo en completa impunidad, vulnerando los derechos humanos y la dignidad de casi una veintena de mujeres. Lamentablemente, no se pudo contar con el testimonio de todas las afectadas, lo que es propio del aspecto reconocido por la doctrina y en la especie, por la perito Milena Rojas, a saber, que las víctimas no se aprecian a sí mismas como tales, su vulnerabilidad de base les impide confiar en el sistema y como se acreditó de los oficios otorgados por las autoridades competentes en Paraguay, estas víctimas no lograron ser contactadas porque expresaron que sus familiares desconocían lo que había ocurrido

en Chile y no deseaban que ellos se enterasen. Se debe sumar, además, un factor, la vergüenza, la falta de dignidad en que las víctimas caen, es un aspecto determinante para que este delito se continúe desarrollando tanto en Chile como en otros países.

Con la prueba rendida se acreditó el aprovechamiento que hizo la acusada de todas las afectadas, todas mujeres, todas paraguayas, todas pobres, todas con historias de vulneración previa, muchas de ellas madres, que sabían que en ese contexto accederían sin muchos cuestionamientos a la oferta que realizaba la imputada. Las condiciones de precariedad económicas y políticas del país de origen de las afectadas, sirvieron de terreno fértil para que la acusada pudiera captar, trasladar, acoger y explotar a Hilda, Sonia y Samantha.

La acusada generó una situación de asimetría de poder y de dependencia económica entre ella y sus víctimas, en este punto, respecto de Hilda y Sonia, se vio materializada en la obligación de devolver los montos en que la acusada incurrió al comprarles el pasaje.

La concurrencia de la vulnerabilidad en estos casos debe ser analizada desde las disposiciones presentes en el “Protocolo de Palermo”, el que determina un criterio orientador, y dispone que la situación de vulnerabilidad es aquella en la cual el sometimiento de las víctimas a las condiciones de los tratantes es la única alternativa, dado su contexto. El consentimiento no forma parte del tipo penal y no se puede sostener que la anuencia de las víctimas para ser trasladadas y prostituidas habilita a la acusada para explotarlas. Tampoco se puede hablar de consentimiento en un contexto de vulnerabilidad, control y aprovechamiento.

Durante el desarrollo del juicio se pudo establecer que María Sosa captó, trasladó y acogió a Hilda, Sonia y Samantha, ejecutando así todos los modos comisivos dispuestos en el tipo penal, propios de este tipo de delitos de emprendimiento, para luego, teniéndolas bajo su control, explotarlas sexualmente.

Respecto de Hilda, hizo presente que su historia y relato se apreció directamente en su declaración, pero además en los testimonios de las oficiales de caso, pero también en la declaración de la testigo de la defensa, que dio cuenta de un

estado de necesidad económica urgente tanto en el caso de Hilda como en Sonia. Corroboró, además, que ninguna de ellas contaba con redes de apoyo suficiente, así, se conoció que Hilda trabajó desde edad temprana, pero no podía solventar su vida ni la de su hijo. Por eso debe vivir con otras hermanas y sobrinos y en un contexto de extrema necesidad, se vio compelida a buscar otras alternativas de sobrevivencia. Así, en agosto de 2018 María Sosa se contactó con ella, quien por intermedio de su hermana Bernardina, le informó vía WhatsApp que ganaría una suma cercana a los \$900.000 o al millón de pesos y que las ganancias se debían dividir, en un 50% para ella y el 50% para la acusada, informándole además que la jornada a trabajar era desde las 9 a las 2 de la mañana, le ofreció un lugar donde vivir y pagarle el pasaje. Con esta breve descripción y oferta, María Sosa captó a Hilda, configurando con ella la primera etapa del delito.

En relación de Sonia, se escuchó su declaración registrada anticipadamente, pero además el testimonio de Nicole Salinas y de la perito Karen Schmidt. Al igual que su hermana Hilda, Sonia vivió una infancia difícil, bajo el cuidado del Estado, sin figuras significativas, compartiendo vínculos familiares solo con sus hermanos, con quienes compartía la misma precariedad. Al igual que en el caso anterior, Sonia supo de María por su hermana Bernardina, quien además quedó a cargo de su hijo. Dijo que trabajaba en un sanatorio, pero con un sueldo que no le permitía cubrir apropiadamente sus necesidades ni las de su núcleo. La precariedad en la que se encontraba fue el factor que la motivó a buscar otras alternativas, por eso habló con Hilda, quien ya se encontraba en Chile con María, y es ella quien hace de nexo para que luego María la contactara. María por medio de audios y de manera muy general le cuenta sobre el trabajo, anticipándole que podía darle un lugar donde vivir y que además le pagaría el pasaje para que ingresara a Chile, haciéndole presente también, que las ganancias se dividían en mitades para ella y para la afectada. En este caso, Sonia no pidió mayores antecedentes y aceptó la oferta, concretándose así la primera etapa de captación.

Respecto de la víctima Samantha, se conoció su situación de vulnerabilidad previa y las circunstancias de su captación a través de su extensa declaración, y también por medio de la declaración de los testigos Francisco Pino, Carolina Gatica, Nicole Salinas y de los testimonios de los peritos del CAVAS Milena Rojas y Gonzalo Horstmeier.

Citando la historia difícil de Samantha, en donde evidenció violencia y abandono, debió a temprana edad hacerse cargo de otros, desertar del colegio y hacerse cargo de su propia vida a los 16 años, trabajando en un café y ejerciendo el comercio sexual. El contacto con drogas y el temor por conflictos vividos en Paraguay motivan su salida de ese país a Chile ya que conoce a una pareja, y sin saber nada de nuestro país, a los 19 años, decide viajar. En su ruta conoce a Yeruti y sabe de la existencia de María. Este contacto es el que servirá de nexo para que luego sea captada por María, y no verificándose un traslado internacional, de igual manera, María va por ella, y la ubica en uno de los inmuebles que tenía dispuestos para el comercio sexual. El ofrecimiento de María consistió en informarle que ella manejaba perfiles, le habló de una división de las ganancias al 50% y que no tenía que pagar por alojamiento, agua ni luz. Samantha no conocía a nadie más en Chile, y por ello acepta, concretándose entonces la etapa de captación.

Resaltó que la dinámica de captación de la acusada era siempre la misma, ya que contactaba a las víctimas por medio de terceros, asegurándose de que se daba un mismo contexto, eran siempre connacionales, lo que le servía para establecer un vínculo de confianza inicial, lo que sería muy útil para el desarrollo de su negocio delictual.

Hizo presente que Hilda nunca había salido de Paraguay, y luego de encomendar el cuidado de su hijo con su hermana, viaja a Chile vía Latam en compañía de la acusada. Una vez en Chile, María la instala en Santa Rosa 170, departamento 1005, de esta manera se concreta la acogida. Con Sonia, también se da una coordinación en pocos días para que ésta viajara a Chile. María le compró el pasaje, para el día 18 de octubre de 2019, por vía terrestre, instruyéndole que debía

retirar el pasaje en la misma empresa de buses. Un tercero, chileno, le entregó 300 dólares, para que -conforme las instrucciones previas dadas por María- informara en Chile que estaba haciendo ingreso en calidad de turista. Ya en territorio nacional, María en compañía de Tania, va a buscar a Sonia al terminal de buses, y la traslada a bordo del vehículo gris al domicilio de calle Santa Rosa 170, concretándose así la acogida. En el trayecto, María le informó sobre los servicios sexuales que debía prestar, señalándole Sonia que solo podía practicar sexo normal dado que tenía un problema de salud. María amenazante le señaló que aquello no le reportaría ganancias, y que no le sería útil.

En el caso de Samantha, la acusada ejecuta el traslado en el vehículo gris Kia, de propiedad del padre de su hijo menor, Luis Araya, usado exclusivamente por la acusada para su traslado y el de las afectadas, tal como lo señalaron los testigos Juan Oliveros, Carolina Gatica, Nicole Salinas y Álvaro García. Esto se corroboró además de las imágenes de las vigilancias realizadas por los funcionarios policiales y por la incautación del citado vehículo. En ese auto, María fue a buscar a Samantha, en compañía de Yeruti para trasladarla al departamento de Luis Thayer Ojeda, donde fue instalada para el ejercicio del comercio sexual.

María Sosa mantenía el control de la situación, ella determinaba donde se ubicarían las mujeres y las condiciones en éstas debían desarrollar el comercio sexual.

En cuanto a la finalidad, este delito solo puede ser cometido con dolo directo, para fines de explotación, lo que en este caso se desprende de las diversas maniobras realizadas por la acusada, quienes ejecutó las diversas fases comisivas para explotar a las víctimas y obtener un provecho económico mediante la instrumentalización de ellas. Todo esto se comprobó con la declaración de las víctimas, quienes de manera conteste relataron que el control del negocio lo tenía María íntegramente. A solo días de haber llegado a Chile, María las publicaba a través de la agencia “Preciosas”, respecto de la cual ella era la representante. Hilda fue publicada como “Pao”, aunque refirió que comenzó a atender clientes el mismo día de su llegada (previo a su publicación). Sonia, señaló que le habrían sacado fotos, desconociendo si alcanzó a ser

publicada o no, pero afirmando que comenzó a atender clientes bajo el seudónimo de “Soe” el 21 de octubre de 2019, a solo dos días de su llegada a Chile. Samantha fue publicada como “Pamela” el 11 de abril de 2019, lo que fue corroborado por las oficiales de caso, y con la documental proveniente de la página “sexo.cl”.

María era quien manejaba y contestaba los teléfonos de los números asociados a las publicaciones, y se hacía pasar por las víctimas, para acordar los servicios y valores, manteniendo con ello el control total de su lucrativo negocio. Las víctimas no podían negarse a atender clientes, incluso María acordaba servicios que las afectadas no realizaban, lo que quedó acreditado con la declaración de las afectadas Hilda y Samantha.

Lo anterior también fue corroborado por las declaraciones de los funcionarios policiales Gatica, Salinas y García quienes dieron cuenta de las diligencias de interceptaciones telefónicas y de agente encubierto usados en este proceso. Se habló en este juicio de 17 teléfonos que la acusada utilizó para desplegar su negocio. Las escuchas y transcripciones de ciertas interceptaciones también refrendan el control que tenía la acusada en relación con la prestación de servicios sexuales y sus montos, los que variaban entre los \$30.000 y los \$65.000.

La acusada además controlaba las prestaciones directamente, ya que se comprobó con la prueba rendida, que era la propia acusada la que trasladaba a las víctimas para que éstas prestaran los servicios sexuales en los denominados “domicilios”, reforzando el control que tenía en torno a toda la actividad sexual.

La forma de operar de la acusada también fue corroborada con la técnica del agente encubierto, ya que la acusada era quien contestaba los teléfonos, se hacía pasar por “Pao”, acordó los servicios e indicó el lugar en que debían realizarse, para luego a través del grupo de WhatsApp informar que el cliente iba en camino y que Hilda debía estar lista para atenderlo. Se comprobó también que María tenía habilitados dos domicilios para el desarrollo de su negocio en el inmueble de Ruiz de Gamboa y en el departamento 1005.

Destacó también la existencia del grupo de WhatsApp, el que le servía a la acusada para coordinar los servicios sexuales y además para controlar los desplazamientos y ubicación de las afectadas. Las mujeres debían estar disponibles para la atención de los clientes desde las 9 y hasta las 2 de la mañana. Juan Oliveros realizó vigilancias en agosto de 2019 en Ruiz de Gamboa, y dio cuenta que solo vio salir a mujeres en tres ocasiones, y siempre saliendo a realizar compras a almacenes cercanos, tardando en ir y volver no más de 10', quedando así demostrado que la libertad ambulatoria de las víctimas estaba restringida y controlada constantemente por la acusada. De hecho, las víctimas debían avisar de sus salidas y regresos en el mismo grupo de WhatsApp, así como de la salida de los clientes y de los servicios prestados, circunstancia que quedó corroborada con la exhibición de las capturas de pantalla de dicho grupo.

Sin embargo, esta no fue la única forma en que la acusada desplegaba control en relación a las víctimas, ya que también se conoció que los inmuebles en donde se prestaban servicios sexuales contaban con cámaras de seguridad que eran controladas por María Sosa, lo que se comprobó con la declaración de las afectadas, los funcionarios policiales y con el mérito de las escuchas telefónicas incorporadas, sumado a las fotografías de las aludidas cámaras presentes en la casa de Ruiz de Gamboa, exhibidas como otros medios de prueba.

La dinámica de control y sometimiento de María Sosa en relación con sus víctimas era total, desde el inicio y durante todo el desarrollo de las actividades, las víctimas llegaban al país con una deuda inicial que las mantenía cautivas, y luego María mantenía el control, publicándolas y coordinando los servicios con los clientes, fijando precios y usando cámaras y WhatsApp para ejercer su control.

Hizo presente que las víctimas Hilda, Sonia y Samantha durante la etapa de la captación, hizo entrega de información solo de manera general, y que una vez que estaban siendo explotadas se daban cuenta de la situación real. Ejercían la prostitución los siete días de la semana, sin descanso, en extensas jornadas, atendían a un gran número de clientes, lo que se demostró con el análisis del libro de visitas del edificio de

Santa Rosa 170, departamento 1005. El alto flujo de clientes también fue reportado por el administrador del edificio quien prestó declaración en estrados, quien expresó que este movimiento inusual motivó que se llevara un libro aparte para el departamento 1005. Samantha declaró que llegó a atender a 10 clientes diarios, no obstante, los testigos Francisco Pino, Carolina Gatica y Nicole Salinas reportaron que aquel número pudo llegar hasta 15 clientes en un día.

Luego, destacó otro hecho relevante y propio de estos delitos, a saber, que las afectadas debían vivir y dormir en el mismo lugar en donde ejercían el comercio sexual, y no contaban con las mínimas condiciones higiénicas y de seguridad para ejercer el trabajo. Samantha dio cuenta que en Luis Thayer Ojeda llegaron a vivir cinco mujeres en dos habitaciones, cuando estaba lleno, debían tener relaciones sexuales con los clientes en cualquier lugar, incluidos baño y cocina. María proporcionaba preservativos de mala calidad, Samantha refirió que producto de esto y debido a que un preservativo se rompió adquirió una enfermedad de transmisión sexual que mantiene hasta el día y la afecta en su vida sexual.

La situación de explotación sexual de las víctimas, las condiciones de los lugares en que ésta se ejercía y la dinámica de control, fue claramente relatada en primera persona por el cliente Francisco Pino, haciendo hincapié en lo inédito que resultó que en esta investigación se contara con el relato de dos clientes de servicio sexual. El hecho que dos personas clientes hayan declarado, incluso uno de ellos en este juicio, da cuenta que las condiciones de explotación sexual eran evidentes, ellos refirieron que llamaba la atención las condiciones del lugar y aquellas en que las víctimas debían prestar los servicios.

Luego, expresó que la prueba rendida ha sido capaz de demostrar que, más allá de toda duda razonable, María Sosa desarrolló un modo operandi mediante el cual captó, trasladó y acogió a Hilda, Sonia y Samantha, para aprovecharse de su situación de vulnerabilidad y explotarlas, lo que le reportó millonarias ganancias. María instrumentalizó a sus víctimas, las degradó en su dignidad para cometer el delito de trata de personas y enriquecerse. No se está frente a un caso del ejercicio lícito de la

prostitución, ni menos frente a una “mescenas” del comercio sexual, se está frente a un caso de abuso, control y explotación de mujeres. Los elementos probatorios dan cuenta de todos y cada de los elementos del tipo penal.

Hizo presente que también se probó el componente económico que le es propio a la explotación, ya que se demostró que María no desarrollaba ninguna otra actividad que le reportara ingresos, tal como quedó demostrado con la prueba documental. Refirió que tampoco se aportaron antecedentes que pudieran sustentar las alegaciones que hiciera la defensa, y para respaldar dentro de la legalidad, los ingresos que la acusada registraba. María Sosa manejaba grandes flujos de dinero, lo que quedó demostrado con los movimientos en las cuentas bancarias y los importantes montos que remitía a Paraguay, por sumas también millonarias. Indicó, además, que conforme el análisis que se hiciera del chat de WhatsApp tantas veces citado, queda en evidencia que dentro de un breve periodo, se produjeron ganancias con motivo del comercio sexual por una suma de \$3.750.000. Se acreditó también, que los clientes podían pagar vía transferencia, para lo cual la acusada contaba con tres cuentas bancarias, lo que fue ratificado con las declaraciones de las víctimas y con fotografías de los montos consignados en las agendas en donde se llevaba registro de los servicios prestados. Según la declaración de Nicole Salinas, desde el año 2015 en adelante, María Sosa registró un aumento sostenido en sus ingresos, llegando a peaks en el año 2017 y 2018, puesto que registró operaciones por sobre los \$21.000.000, situación que se mantuvo el año 2019. El negocio solo se vio interrumpido por el rescate de las víctimas en noviembre de ese año. Expresó que, del análisis de las cuentas de María Sosa, registró en los años 2015 a 2017 ingresos que superaron los \$77.000.000. A su vez, respecto de la cuenta de su hermana María Sosa, también se registraron abonos que superaron los \$12.000.000. Entonces, sólo de las dos cuentas (de la acusada y su hermana) se superan los \$90.000.000, y como no se pudo obtener los ingresos a las cuentas de su expareja Luis Araya, tales montos son solo una muestra o un indicio de lo lucrativo que resultaba este negocio. La contundencia de la prueba les permite sostener que,

durante varios años, la única finalidad de la actividad de María Sosa era obtener este enriquecimiento económico.

Hizo presente, además, en el mismo sentido antes apuntado, que con las ganancias del negocio que la acusada montó, pudo financiar tanto el vehículo que utilizaba como el departamento en el que vivía, los que, sin perjuicio de aparecer con dominio a nombre de Luis Araya, quedó demostrado con prueba incorporada a juicio, que fueron ambos financiados por María Sosa. De igual manera, pudo solventar con holgura los departamentos de Santa Rosa 170, Luis Thayer Ojeda y la casa de Ruiz de Gamboa, lugares en los que se desarrolló el comercio sexual.

En relación con las alegaciones de la defensa, esta querellante señaló que trataría al menos tres aspectos. El primero de ellos, la posibilidad de que la acusada haya sido también una mujer vulnerada cuando se dedicaba al comercio sexual, señaló que no se incorporó medio de prueba alguna que pudiera sustentar esta postura. Durante el desarrollo de la investigación, no se detectó ejercicio de la prostitución de parte de la acusada, pero lo que es más relevante, es que aquello no es obstáculo para que se verifiquen como ocurrió, todos los requisitos del tipo penal de trata de personas. Además, la acusada refirió que compartía con las víctimas su situación de vulnerabilidad económica, lo que fue rotundamente desacreditado en este juicio, con el mérito de la prueba ya analizada. María Sosa, estaba regular, mantenía residencia en el país, tenía cuenta bancaria y otra de ahorros desde el año 2015, y desde el año 2013 pudo proveerse de medios para vivir e incluso para viajar a Paraguay al menos en 14 oportunidades. Con todo, María Sosa, contaba con redes en Chile, a modo ejemplar, su hermana y su sobrina Jessica. También quedó desacreditado que el destino del departamento 1005 era subarrendarlo, ello, gracias al tenor expreso del contrato de arrendamiento que se aportó como prueba documental. Es claro, que la acusada sabía que estaba siendo investigada y que ejercía una actividad ilícita, lo que quedó demostrado con la escucha telefónica de 10 de noviembre de 2019, en donde le indica a Luis Araya que no puede hacer una denuncia, porque tiene “una cola” que le pueden pisar. En el mismo sentido, se incorporó una escucha en donde un sujeto Freddy le

ofrecía hacer negocios, (de prostitución), pero ella le indica que aquello no es posible que lo hablen por teléfono.

Por último, cuestionó que con el mérito de los antecedentes que han sido traídos a juicio, las víctimas hayan estado en posición de poder salir de dicha situación. Hilda, Sonia y Samantha no tenían herramientas ni medios para salir de la situación de explotación en la que se encontraban, eran mujeres migrantes, en situación irregular, dos de ellas con hijos pequeños que dependían de ellas, sin vínculos en Chile y que en calidad de “tratadas” se les vulneró en su dignidad, les originó un daño crónico y se les anuló su capacidad de autodeterminarse. Eran mujeres cautivas, que sólo fueron rescatadas en el contexto de esta investigación. Así, y en el convencimiento de que los hechos de la acusación fueron acreditados, más allá de toda duda razonable, es que pidió que se condene a la acusada como autora del delito reiterado de trata de personas del artículo 411 quáter y se le imponga la pena solicitada por dicha acusadora institucional.

DÉCIMO QUINTO. Alegatos de clausura de la defensa. Que, al culminar el periodo de debate y en sus alegaciones conclusivas, la defensa de la acusada María Sosa insistió en su petición principal de absolución, por las razones que pasan a exponerse.

La primera alegación que formuló fue la existencia de una vulneración a las garantías constitucionales del artículo 19 en sus numerales 4 y 5 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 205 del Código Procesal Penal, en específico, el requisito establecido por la norma de que, quien realice la autorización del ingreso sea el propietario o encargado del recinto. Señaló que la jurisprudencia sostenida de la Excm. Corte Suprema ha establecido que una vulneración a esta norma no sólo afecta a la propiedad del afectado, sino que además la privacidad de este. Al efecto, hizo presente que, respecto de los departamentos 1005, 704 y la propiedad ubicada en Ruiz de Gamboa, se pudo establecer por los distintos funcionarios policiales que prestaron declaración, que la encargada, arrendataria, titular de aquel derecho, era doña María Sosa, y aquello es algo que no se discutió en

este juicio. En relación con el departamento 1005, de Santa Rosa 170, es importante recordar que quien abre la puerta es Jessica Sosa. Es ella, quien, según Javier Cárcamo, abre la puerta y permite el ingreso de la policía, lo que es refrendado por Carolina Gatica. Los funcionarios establecen que la encargada, propietaria o arrendataria del inmueble era María Sosa. Ahora bien, los funcionarios Gatica, Salinas, Oliveros y Cárcamo dieron cuenta de manera categórica que no había otra persona responsable de los inmuebles más que María Sosa.

Respecto del inmueble ubicado en calle Ruiz de Gamboa, quien autoriza el ingreso es doña Hilda, que también se prueba con la declaración de los funcionarios policiales anteriormente citados. Señalan que es ella, de manera voluntaria, quien permite el acceso al domicilio. Lo cierto es que, en la declaración videograbada de Hilda, ella respondió que no era la encargada, sin perjuicio de lo anterior, se le consulta si pueden ingresar y efectivamente autoriza el ingreso. En ese sentido, el ingreso se permite por una persona distinta de doña María Sosa. Respecto de estos dos domicilios, cabe tener presente que los funcionarios policiales sabían de antemano quien es la persona responsable de los domicilios, y con la facultad para autorizar los ingresos, no se hizo ninguna diligencia investigativa para obtener dicha autorización, incluso sabiendo que María Sosa se encontraba en dependencias del tribunal. No se suple esta falta tampoco con una autorización judicial, para que se permite al ingreso a los dos domicilios referidos y proceder además a la incautación de diversas especies.

Respecto del domicilio de Santa Rosa, departamento 704, en este caso, cabe hacer una distinción de dos momentos, por cuanto los funcionarios policiales así lo explicaron. Javier Cárcamo explicó que llegaron, otros funcionarios policiales, en un primer momento a dicho lugar, sabiendo que era el domicilio de María Sosa, y se encuentran con Tania o Laura. Aquella, es la que permite la entrada y hace entrega de algunas especies. Después, los funcionarios, lo que hacen es decir que lo que se les entrega no es suficiente, no es todo lo que esperan. A criterio de ellos, entonces piden una autorización y finalmente la obtienen desde el tribunal. La defensa entiende que hay que hacer una distinción, pero en relación con estos dos momentos, ya que hay

que distinguir, cuando se pide o por qué no se la pide, conforme el entendimiento de los funcionarios policiales. Se asumió, convenientemente por los funcionarios, que las personas que se encontraban en los domicilios de Ruiz de Gamboa y del departamento 1005 eran las encargadas del lugar, tenían esa facultad o derecho, facultad irrogada por las propias facultades policiales. En consecuencia, el ingreso no debidamente autorizado por quien tenía la facultad o derecho, raya con la vulneración de garantías, que no solo se entiende respecto del ingreso y la incautación de especies, sino que con todas las diligencias que provienen y devienen con posterioridad a estos ingresos, bajo la teoría “del árbol envenenado”. Todo lo que se realice con posterioridad a una diligencia desapegada de la ley, raya en ilicitud. La defensa por ello entiende que ha existido una vulneración de garantías. Ahora bien, en un segundo momento, existió una autorización judicial, una vez que la imputada está detenida. Con esa autorización, los funcionarios vuelven y realizan nuevamente un ingreso e incautaciones. Es, en ese momento que se valida aquella incautación de 17 teléfonos celulares y los computadores que se establecen como propiedad de María Sosa, el auto marca Kia y tres pendrives ubicados en su interior. Luego, la incautación de dichas especies contaba con autorización. Se podrá discutir, el momento en que se entrega, pero a lo menos, a esa época, y. para esa incautación si se requirió de una autorización judicial.

Como segunda alegación, la defensa esgrimió la falta de los elementos de los injustos penales por los cuales su representada ha sido acusada.

Respecto del artículo 411 ter, hizo presente que es pertinente recordar qué significa “promover”, definiéndolo como inducir, inclinar a otro a hacer la realización de un determinado comportamiento, en formar en otro individuo la resolución o convicción de ejecutar un acto o desarrollar una actividad. Respecto de ese verbo rector, lo que se mostró en este juicio, en relación con las víctimas Yeruti, Lida, Norma, Nilda, Maricel, María, Laura, Ana, Analía, Liz, Arnal, Ana y Catalina. Respecto de estas 11 víctimas, cabe destacar que ninguna de ellas declara, en ninguna instancia del procedimiento, ni ante la Policía de Investigaciones, ni ante la Fiscalía,

menos ante este tribunal. Es imposible sostener la existencia de algún tipo de inducción o inclinación para determinarlas a tomar la decisión de entrar o salir del país a fin de que se ejerza la prostitución. Estas víctimas aparecen en la investigación producto de un listado, que envía un sujeto, administrador de la página “sexo.cl” llamado don Iván, que además es un testigo que no declara, que no respalda su información en ningún tipo de respaldo oficial que se pueda verificar o contrastar por algún tipo de medio. Tampoco se pudo acreditar que hubiere existido de parte de María Sosa algún pago efectuado por ella a la página “sexo.cl”.

No se pudo ver ningún tipo de fotografía de las víctimas ya mencionadas, tampoco se pudo acreditar que dichas mujeres hayan sido las mujeres individualizadas en este juicio. La testigo Nicole Salinas indicó que no había como verificar la identidad de las personas que se encontraban en ese listado, no existía por parte del administrador algún comprobante o documento que acreditara que el nombre y el apodo que él tenía correspondía a aquella víctima que luego el Ministerio Público identifica con iniciales y que luego le atribuye un nombre. Además, ese administrador indicó que cada persona que aparecía en ese listado concurrió hasta las dependencias de dicha empresa a publicarse, a autorizar la publicación y la subida de las fotos a la web, autorizar los servicios que se prestaban. Todo ello, hace que, a juicio de la defensa, sea imposible hablar de algún tipo de promoción por parte de doña María Sosa.

Ahora bien, situación distinta es la que existe en relación con las víctimas Jannyré, Araceli y Laura. En cuanto a Jannyré, si bien no declara frente al tribunal, si lo hizo en una instancia previa, tal y como lo señaló Nicole Salinas. Sin embargo, lo que reportó Jannyré dice que fue ella quien se contacta con su prima Celeste, sabiendo que su prima ejercía la prostitución, y le pide ubicar a María Sosa, porque ella quería venir a trabajar, es decir, la decisión de venir a Chile a ejercer un trabajo ya estaba tomada por Jannyré, sin que nadie hubiera inducido o intervenida en esa decisión. Ella agrega que luego de aquello, María Sosa la llama para preguntarle si estaba segura de venir, lo que significa que la decisión se había tomado con anterioridad. Dijo que

existió además una compra de pasajes en bus, supuestamente financiados por su representada. Lo cierto, es que la compra de los pasajes no se pudo acreditar por ningún medio. No hay ningún tipo de documento, declaración de algún funcionario o dependiente de la empresa de buses que permita establecer o acreditar que doña María Sosa efectivamente los compró. En ninguna de las cuentas bancarias a las que se hizo referencia por el Ministerio Público se pudo comprobar que desde ellas se había pagado algún pasaje a dicha empresa. Aquel registro tampoco existe. La víctima Jannyré refiere que, le compran el pasaje, dicha compra es una especie de préstamo porque ella debe devolver el valor del pasaje.

En el caso de Araceli, también se escuchó su declaración por medio del testimonio de los funcionarios policiales Santelices y Salinas. Ella señaló que para venir a Chile contactó a su amiga Jannyré, que ya sabía y conocía que se encontraba en Chile ejerciendo el comercio sexual. Dice que le indica que quiere venir a Chile en lo mismo que efectúa ella. Entonces, al igual que en el caso anterior, la decisión de venir a Chile a ejercer el comercio sexual había sido adoptada por la víctima con anterioridad al primer contacto con María Sosa. Esta víctima también refiere que una vez que había tomado la decisión, María Sosa se comunica con ella, para saber si estaba segura de venir, lo que implica que la decisión se había tomado de manera previa sin inducción de parte de su representada. Esta víctima también indica que supuestamente le habrían comprado los pasajes, cayendo en las mismas falencias de falta de prueba que en el caso anterior. En este caso, hay que tener presente que todas las víctimas prestan declaración el mismo día, 5 de diciembre, en dependencias del Ministerio Público en presencia de doña Nicole Salinas.

Luego, respecto de la víctima Laura, tampoco declara ante el tribunal, pero sus dichos fueron aportados por medio de las declaraciones de Javier Cárcamo y Nicole Salinas. Esta víctima señala que ella ubica a doña Jessica Sosa para pedirle que le consiga trabajo, sabiendo que Jessica Sosa se encontraba en Chile prestando servicios sexuales. Es ella, Jessica que le cuenta, antes de venirse, que venía a Chile, le indica con quién y en que condiciones. La decisión de Laura, en consecuencia, tampoco

proviene de algún acto o inducción de parte de doña María Sosa, es una decisión que la víctima toma con anterioridad. Dice que solo cuando estaba decidida a viajar, pide hablar con doña María Sosa. Claramente, no es posible sostener que, en relación con esta víctima, haya existido una promoción tal y como lo ha referido el Ministerio Público.

Respecto de los pasajes, ocurrió lo mismo, ya que Laura dice que se los compran y que tampoco tiene como acreditarse. Tales pasajes debían ser reembolsados una vez estando en Chile, producto de su trabajo.

En este contexto, el razonamiento que se debe hacer de este verbo rector es que el comportamiento exigido al agente debió haber consistido en formar en otro individuo en formar la resolución de ejecutar un acto o desarrollar una determinada actividad, bien sea, entrar o salir del país para ejercer la prostitución, sin embargo, en este caso, la decisión había sido tomada por las víctimas antes incluso de darse el primer contacto con su representada.

Respecto del verbo rector “facilitar”, importa cualquier acto de cooperación que haga posible o más expedita una determinada actividad. En este sentido, corresponde referirse a las víctimas, que, según el Ministerio Público, medió envío de dinero o compra de pasajes, es decir, Yeruti, Norma, Catalina, Maricel, María, Ana y Analía.

La defensa sostiene que el envío de dinero no permite acreditar el tipo penal, porque en muchos casos las víctimas no declaran, por lo que no se puede determinar la finalidad con la que se envía el dinero. Luego, el tipo penal exige que dicho envío de dinero haya tenido por finalidad facilitar la entrada o salida del país, algo que sin haber oído a las víctimas resulta muy difícil de probar. Pero más difícil de probar es que dichas víctimas hayan ejercido el comercio sexual, lo que aparece como improbable en el caso de las víctimas que no prestaron declaración. El que hayan sido supuestamente publicadas por María Sosa, es algo que tampoco es posible probar, ya que únicamente se mostró un listado, no se exhibió algún documento firmado por María Sosa que acreditara que en efecto fueron publicadas por ella, de manera exclusiva.

Conforme a lo mismo, ¿cómo se puede probar que los servicios sexuales fueron prestados de manera efectiva por aquellas víctimas, que no han declarado?, a juicio de la defensa, aquello no es posible.

Luego, hizo referencia a la situación de Arnal. Si bien es cierto, Arnal tampoco declara, el Ministerio Público ha sostenido la compra de pasajes a través de Latam, y existe a juicio de la fiscalía, por la compra de pasajes la facilitación, sin embargo, la defensa cuestiona que el solo hecho de comprar un pasaje logre por sí solo formar en la víctima la convicción y decisión de entrar o salir del país para ejercer el comercio sexual, habida cuenta que Arnal no prestó declaración, y sin que se haya probado que dicha víctima efectivamente ejerció el comercio sexual.

Respecto de las víctimas Jannyré y Laura, tampoco es posible establecer, sin su declaración que la compra de sus pasajes lo haya sido para obtener la realización de una determinada conducta.

Las víctimas se contactan con otras personas para los efectos de venir a Chile, sabiendo en qué consistía el trabajo, cuáles eran las condiciones en que éste se iba a desarrollar, formándose entonces su convicción en una etapa previa.

Respecto del momento en que efectivamente María Sosa, habría enviado el dinero para la compra de pasajes, o para que vinieran a Chile, o para sostener que un funcionario del bus les entregaba 300 dólares para poder establecer con ello algún viático y facilitar con ello el ingreso al país, a juicio de la defensa, tales hechos no resultaron probados, ya que como señaló Nicole Salinas, se concurrió a la empresa de buses y no se obtuvo ningún registro. Incluso, dicha circunstancia (el no tener registro) debió -a juicio de la defensa- haber sido acreditado por la vía de aportar un documento oficial de tal empresa, o un testigo que trabajara en esa entidad y aquello tampoco se produjo. En consecuencia, la propuesta de la fiscalía es que se acredite la compra de pasajes únicamente con los dichos de Nicole Salinas.

Luego, la defensa insistió en que el Ministerio Público no logró acreditar la existencia de ningún verbo rector presente en el tipo penal del artículo 411 ter, pero aun cuando se considerare acreditado alguno de ellos, respecto de ciertas víctimas,

indica que no es posible sostener que se haya acreditado la exigencia del tipo de haberse realizado efectivamente la prostitución por parte de las víctimas. Ni aun haciendo un símil con la declaración de doña Samantha es posible establecer que las 14 víctimas anteriores ya mencionadas, estén en la misma situación que las restantes invocadas en relación al artículo 411 quáter.

A continuación, la defensa trata el elemento “consentimiento”, que a su juicio es de suma relevancia, en tanto, al ser la libertad sexual un bien jurídico disponible, al concurrir la voluntad del sujeto, se excluye la ilicitud del hecho. Todas las víctimas son claras en mencionar en que ellas voluntariamente decidieron venir a Chile a ejercer la prostitución y este aspecto es algo que no resultó discutido en juicio.

La defensa entiende que el consentimiento puede no concurrir en situaciones en las que la dignidad de la víctima ha sido atacada, lo que se da cuando ha sido explotada, lo que, a su juicio, se verifica cuando se han obtenido servicios financieros, comerciales o de otro tipo a través de la participación forzada de otra persona en actos de prostitución, servidumbre sexual, o laboral, incluidos la pornografía y la producción de material pornográfico infantil, según la ONU. No se debe atender únicamente a la obtención de beneficios económicos, puesto que la definición agrega “participación forzada”, es decir, no hay consentimiento de las víctimas, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa.

Expresó que es importante tener presente que inclusive respecto de las víctimas que prestaron declaración en juicio, siempre mantuvieron su voluntad en cuanto a decidir si prestaban o no un determinado servicio sexual, ya que cuando decidían no prestarlo, efectivamente aquello no ocurría. Nadie las obligó a hacer algo que ellas no quisieran. Ellas elegían el nombre de su publicación y los servicios que ellas iban a prestar, lo que denota que no ha existido ningún tipo de explotación, ni menos falta de voluntad o forzamiento para ejecutar algún tipo de conducta.

Ahora bien, en relación con el artículo 411 quáter, cuyas víctimas serían doña Hilda, doña Samantha y doña Sonia, la defensa indicó que es importante tener presente la estructura del tipo penal, la que inicia con la “acción típica”, que no es otra

cosa que los verbos rectores, captar, trasladar, acoger o recibir personas, la promoción o facilitación o financiamiento de actividades. Luego, los medios comisivos, que son las circunstancias o conductas utilizadas para llevar a cabo la actividad o acción, buscando la falta o vicio del consentimiento, ya sea a través de la violencia, la intimidación, la coacción, el engaño, el abuso de poder, el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o dependencia de la víctima, la concesión de pagos u otro beneficio para obtener el consentimiento de una víctima que tenga autoridad sobre otra, y; finalmente, se tienen los fines por los cuales se lleva a cabo el delito, y éstos fines son la explotación sexual, que es lo motiva este proceso.

En cuanto a “captar” aquello se entiende como atraer a alguien, ganar su voluntad, con el objeto de obtener un convencimiento en la víctima, respecto de una oferta de trabajo que suele ser interesante o tentadora para la propia víctima de trata, que suele ser engañada en relación con la oferta o del tipo de trabajo o de su remuneración o de las condiciones de esta.

En este caso, esta captación o contacto, puede ser por cualquier medio, lo que es sabido por todos, pero destaca que dicha captación debe ser ejecutada por el agente, es decir, por su representada María Sosa.

Respecto de estas tres supuestas víctimas, y respecto de la captación, la defensa indicó que, en el caso de Samantha, ella se comunicó con Yeruti, la que sabía que trabajaba en Chile ejerciendo el comercio sexual, la contacta sabiendo donde trabajaba y en qué condiciones. La contacta porque tiene un problema en donde estaba viviendo y debe irse del lugar, entonces, contacta a Yeruti para ejercer el comercio sexual. Luego, no existió de parte de su representada ningún de convencimiento hacia la víctima, no existió ningún tipo de oferta de trabajo, desde ninguna perspectiva. Ella, previo a llegar al lugar, había tomado la decisión de ir hacia el mismo, a efectuar servicios sexuales. Luego, si es Yeruti la que le informa sobre las condiciones en que se trabajaba, ¿quién es la que capta? Si fuera Yeruti, debiera haber sido parte de este procedimiento, pero no se la acusó.

En el caso de Hilda, la situación es bastante similar, ya que refiere que, por medio de su hermana, doña Bernardina, que también declaró ante el tribunal, que se puso en contacto con María Sosa. Aquí ocurre un hecho importante, porque la testigo Bernardina indicó que su hermana Hilda había decidido venirse a Chile, a Iquique, a ejercer el comercio sexual, el que también lo ejercía en su país, y es su hermana quien interviene por temor a que le pase algo, es ella quien señaló haberse puesto en contacto con María Sosa, a quien conocía porque ambas habían ejercido juntas la prostitución en España y le pidió que ayudara a su hermana. Entonces, a juicio de la defensa no hay acción de captación alguna de parte de María Sosa. Tampoco cree la defensa que haya existido un engaño respecto de la función o el servicio que se iba a prestar.

Respecto de doña Sonia, estima la defensa, que conoce sobre las condiciones en que se iba a desarrollar el trabajo, porque se las informó su hermana Hilda. No es posible, tal y como lo indican las reglas de la lógica, que sea posible creer o sostener que Sonia no se haya impuesto de las condiciones laborales con motivo de lo que habló con su hermana Hilda. Bernardina, sin ninguna motivación de perjudicar a sus hermanas, y luego de haber tenido problemas con el padre de su hijo, de que fue echada de su trabajo es que habla con Hilda y ahí tomó la decisión de irse a Chile, Bernardina dice que fue Hilda quien le pagó el pasaje y no María, conforme la conversación que tuvieron las hermanas previo al viaje. Luego, tampoco hubo captación, porque no hay instrucciones de María hacia Hilda para que trajera a alguna persona a Chile, para ejercer el comercio sexual, otorgando a cambio algún tipo de bono o premio.

Respecto del verbo trasladar, la defensa indicó que éste importa llevar a una persona de un lugar a otro, y en la trata, entregar por los tratantes los medios para ello, por ejemplo, la entrega de pasajes, financiamiento, asesoramiento en la obtención de la documentación, la entrega de lo necesario para el alojamiento y la alimentación y en general, que el tratante haya coordinado el transporte. La defensa hizo hincapié que al tratar este verbo rector es importante tener en cuenta el concepto de “desarraigo”, que implica evitar el contacto de la víctima con sus redes sociales de apoyo, a fin de

provocar situaciones de aislamiento, que permitan mantener el control y la explotación. Este desarraigo se materializa, cuando se llega al destino final por parte de la víctima. Y es frecuente que las víctimas al llegar sean despojadas de la totalidad de sus documentos de identificación o de viaje, además se les priva de libertad. El desarraigo se mantiene siempre en el delito de trata, aun cuando no es un elemento del tipo penal. Ahora bien, el desarraigo tiene una finalidad que es generar una situación de vulnerabilidad que se convierte en el contexto propicio para su explotación.

Indicó que respecto de la víctima Samantha, no existió ningún tipo de traslado, porque ella llegó a Chile costeadando ella sus propios pasajes y el contacto en Chile, luego de haber vivido un problema, lo tiene con Yeruti. Samantha también señaló que la entrega del 50% de las ganancias a María tenía como objetivo pagar el alojamiento y los servicios básicos, explicando también, que la alimentación era costeadada por ellas mismas. Entonces, la defensa pregunta, ¿cómo es posible sostener que en Samantha haya existido algún tipo de desarraigo propio del delito de trata? No existe desarraigo en el caso de Samantha, porque conforme sus propios dichos, ella no tenía redes familiares de apoyo en su país, y que por lo mismo, su situación era distinta que las demás chicas, dado que no tenía hijos ni familia en Paraguay, Milena Rojas, la perito, refirió que cuando Samantha tiene el problema (cualquiera que sea) con María Sosa, decide irse y se apoya en Francisco Pino, es decir, contaba con redes de apoyo, y desacreditando el que pudiera darse el elemento de desarraigo a su respecto.

Para la defensa es claro, que conforme el propio testimonio del testigo Francisco Pino, en cuanto a que se juntó en varias ocasiones con Samantha, no se da tampoco en relación a esta supuesta víctima el elemento de verse privada de libertad. El testigo Pino da cuenta que salieron a almorzar, a cenar, la propia Samantha dice que siempre mantuvo su teléfono y tuvo acceso a redes sociales, luego no existió ninguna limitación a su libertad.

En el caso de Hilda, ella es una víctima que viaja en tres oportunidades a Chile, en las mismas condiciones, y regresa conforme la coordinación que hizo ella misma. Apoyándose en sus dichos, y sin perjuicio de que dijo que María Sosa le compró los

pasajes para venir a Chile en las dos primeras oportunidades, lo cierto es que Hilda explicó que tuvo que devolver esos montos, es decir, lo que existió fue un préstamo de dinero. Su hermana Bernardina, relató en el tribunal que a diario conversaban por videollamada y la veía contenta y bien, reportándole que iba al gym, a Viña del Mar, a cenar, etcétera. La defensa indica que en este caso tampoco se dan los elementos de desarraigo ni privación de libertad que se analizan, lo que quedó ratificado con las fotografías aportadas por la defensa, en distintos lugares.

Hizo presente que, en relación con Hilda, no se presentó ningún peritaje psicológico en esta causa, y esta ausencia a juicio de la defensa, no cuenta con explicación alguna.

Respecto de la víctima Sonia, es claro que el traslado, conforme los dichos de sus hermanas Bernardina y Sonia, se genera a instancias de que Sonia se pone en contacto con su hermana, en tanto había decidido venir a Chile. La compra de los pasajes por parte de su representada es algo que no se puede acreditar por ningún medio, salvo por dichos. Tampoco respecto de Sonia, se verifica alguna privación de libertad y, de hecho, confirma este hecho la propia declaración de la supuesta víctima, que dijo que el día 27 de noviembre, cuando llega la policía, ellas, en la mañana, había salido con su hermana, no estaba en el lugar, llegan después y pocos momentos antes que llegara la policía. De hecho, tanto no se restringía su libertad o su voluntad que no existió impedimento alguno al propio límite impuesto por Sonia de no realizar sexo anal, dada una condición de salud que tenía. Declaró que ella no prestaba ese servicio, y que no lo prestó y que en el tiempo en que estuvo en Chile solo atendió a dos clientes. En consecuencia, para la defensa respecto de Sonia no se verifica ni el desarraigo (mantuvo el contacto con sus vínculos familiares) ni tampoco se la restringió o privó en su libertad.

Seguidamente, la defensa hizo alegaciones en torno a las evidencias incautadas, en específico sobre lo que se ha señalado en torno al “pendrive amarillo”, esto es, que María tenía acceso a cierta información, y que la utilizó en su beneficio a lo largo del tiempo. Sin embargo, tales afirmaciones no tienen asidero en la lógica, primero,

porque en dicho dispositivo se daba cuenta de un “Manual”, que databa del año 2008, año en que ni siquiera María Sosa estaba en Chile. Dicho manual tampoco tenía asociado algún archivo que permitiera a alguna base de datos, solo era un manual de programación. Explicó que este tipo de afirmaciones del persecutor muestra que la forma en que se investigó fue antojadiza, ya que se le consultó a la funcionaria Nicole Salinas, si hicieron más diligencias en relación con la liquidación de sueldo (del año 2008), correspondiente a Luis Araya, encontrada en una de las evidencias incautadas, liquidación que emanaba de una empresa de programación de softwares computacionales, la testigo informó que no. Para la defensa aquello era importante, porque en esa época Luis Araya prestaba servicios como ingeniero informático, y trabajaba en esa empresa con la finalidad de trabajar en accesos de la identificación en este país, su función fue puntual respecto de una parte de aquellos programas. De hecho, el propio perito del Ciber Crimen, explicó que esos archivos no podían haber otorgado acceso a los sistemas de migración de la Policía de Investigaciones si no está al interior de un sistema institucional, aun cuando trató la querellante de obtener una respuesta en contrario durante su interrogatorio. La razón de por qué María Sosa tenía ese pendrive en el auto, era porque contenía música, tal como dicho Nicole Salinas al relatar que, además, encontraron archivos de música, fotografías y videos.

Respecto de los verbos “acoger” o “recibir”, consisten en recibir a una persona en un lugar determinado. Citando a un fallo del Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, indica que es importante tener presente que, siendo aceptado por las víctimas el pago de alojamiento y de servicios básicos, con la entrega del 50% de sus ingresos, no se verifica entonces una limitación a su libertad, desde ninguna perspectiva.

Respecto del verbo “promover”, ya definido por la defensa previamente, afirmó que respecto de las víctimas del artículo 411 quáter, tampoco se realiza por su representada algo alguno que se traduzca en alguna inducción para que ellas vinieran a Chile a trabajar.

Respecto de los últimos verbos rectores, “facilitar” y “financiar”, consiste en prestar auxilio, ayuda o cooperación a la realización de alguna actividad y dice relación, con la compra de pasajes o alojamiento, y como ya se ha expresado por la defensa, no es posible sostener aquello, por cuanto cada víctima tuvo que pagar un precio por tales conceptos.

Hizo presente que la jurisprudencia ha entendido que no basta sólo con la facilitación o el financiamiento para que se entienda perpetrado un delito de trata de personas, sino que debe concurrir, además, un medio comisivo y una determinada finalidad. En cuanto a los medios comisivos, hizo presente que con la prueba rendida no se dio cuenta de ningún abuso de poder (las víctimas eran libres en todo sentido), no existió algún tipo de agresión, de intimidación o de violencia. En cuanto al engaño, entendiendo que procede cuando el agente crea una falsa expectativa en la víctima acerca de las condiciones laborales que se ofrecen o en la calidad de vida ofrecida a las víctimas, explicó que este elemento tampoco se verifica en este juicio. Indicó que al efecto se debe considerar los informes periciales psicológicos realizados a Sonia y Samantha, los que dan cuenta que ambas son personas con un coeficiente intelectual promedio, sin alteraciones psicológicas, orientadas, y conforme al mérito de dichas pericias, ambas víctimas sabían y conocían los términos del servicio que se iba a prestar. Entonces, no es posible sostener que hubo un cambio en las condiciones, ni menos un engaño, ambas se impusieron por lo que les informó su hermana Hilda y Yeruti. Sólo una de ellas alega que no conocía la situación vinculada a las “multas”, la que en todo caso no fue una vivencia personal, sino que oyó de otra de las mujeres que se le impuso una multa por no haber informado de una propina. Insiste que no existió engaño, por cuanto ofrecían los servicios que ellas mismas publicaban (“de novia” en el caso de Samantha, y excluyendo sexo anal en el caso de Sonia), no ejecutándose aquellos que las propias mujeres decidían no realizar. Hizo presente que, en el caso de Hilda, la situación es más evidente, ya que decide ir y volver en tres oportunidades, lo que pone en evidencia su conocimiento sobre los servicios y condiciones y excluye la posibilidad de engaño.

Indicó la defensa que tampoco es posible hablar de engaño, cuando lo que existió fue una falsa expectativa de la realidad, cuestión que se habría dado en el caso de Sonia, que pretendía venir a Chile a ganar grandes sumas de dinero, atendiendo pocos clientes, y aquello no se dio. Esa expectativa personal y no cumplida (considerando que además Sonia, llegó a Chile en medio del estallido social, en donde el ingreso de clientes se vio afectado y no era atribuible a María Sosa), no puede a juicio de la defensa, ser considerado como un engaño de parte de su representada.

Por último, respecto del aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, en donde se requiere que el agente se aproveche de la situación de desamparo en que se encuentra la víctima, para someter u obligar a otro a ejercer el comercio sexual, ese aprovechamiento debe verse materializado en un control sobre la víctima, por ejemplo, quitándole sus documentos, privarle de libertad, en someterla a la servidumbre, generarles deudas, entre otras conductas, logrando con ello la explotación sexual. Para la defensa, este aspecto no logró ser probado, ya que el Ministerio Público no aportó ningún informe social ni antropológico que acreditara la supuesta vulnerabilidad en que se encontraban las víctimas, tanto en su país de origen como en Chile. Lo relevante era probar que esa situación de vulnerabilidad provoca desarraigo, y aquello no se acreditó por la fiscalía.

Indicó que, en relación con la finalidad de explotación sexual, no se pudo establecer que las personas indicadas como víctimas hayan sido “cosificadas” por parte de su representada, porque mantuvieron siempre la voluntad y la posibilidad de decidir qué hacer, en qué condiciones, sabían los servicios que prestaban y consintieron en ello, porque quisieron venirse a Chile. Hizo presente nuevamente lo ya dicho en relación con el consentimiento, porque la prueba incorporada por el Ministerio Público permite establecer que lo que se hacía en los inmuebles arrendados por María Sosa, es que se prestaba el comercio sexual. Así lo declara el administrador del edificio don Frederic, en donde lo particular es que un grupo de mujeres se encontraban en el lugar ejerciendo la prostitución, en ningún momento este testigo habla de que haya existido una trata de personas.

Finalmente, aludió que la prostitución como actividad no es una actividad ilícita en Chile, de manera que las personas pueden ejercerla, sin exponerse a una sanción, siempre y cuando esa decisión sea libre y consciente. No existiendo engaño entonces, y verificándose una decisión voluntaria de cada una de las víctimas, no es posible que se imponga a su defendida a su acción penal.

Por último, explicó su última alegación, relativa al dolo. La defensa, tal y como lo expresara en las personas, postuló que María Sosa, no sabía, ni tenía el conocimiento suficiente para entender y comprender, que alguna de las conductas que supuestamente realizó, implicaban desde alguna perspectiva la realización del tipo penal de trata de personas, ya sea, en las hipótesis del artículo 411 ter o bien del artículo 411 quáter. Respecto de la conducta de la acusada, existió un error de prohibición, porque María Sosa no entiende, no comprende, o no sabía en qué consistía el ilícito penal. Su representada dio cuenta que ella ejercía la prostitución, ella misma aparece publicada en el listado de “sexo.cl” en el año 2015, que es cuando ingresa a Chile, Bernardina (testigo de la defensa) indicó que la conocía desde España ya que ejercieron la prostitución juntas en dicho país, hay fotografías de ello en su Facebook, etcétera. Les restó importancia a los dichos de los funcionarios policiales, en lo relativo a no haber constatado el ejercicio de la prostitución en relación con María Sosa, ya que las vigilancias que se hicieron fueron en días y en horas puntuales y no en periodos continuos, lo que en definitiva no elimina la posibilidad de que lo dicho por su defendida sea cierto. En el ejercicio de su actividad propia, de comercio sexual en Chile, María Sosa lo que hizo fue “tenderles la mano a otras”. Luego, por un tema de orden, y atendido el hecho de que corresponde pagar arriendo y servicios básicos, es que se establece el monto de una suma de dinero, pero siempre en el entendido que estaba destinada a hacer frente a dichos pagos. Tampoco se pudo acreditar que su representada tiene la educación y conocimientos suficientes para que pueda comprender los alcances del delito de trata de personas. Ligado al error de prohibición entonces, está la falta de ánimo o de intención para cometer el tipo penal de que se trata.

La defensa culminó insistiendo en su petición de absolución, apoyada de las tres alegaciones principales de las que se ha dado cuenta, y por la integridad de los delitos contenidos en la acusación.

En cuanto a la demanda civil, solicitó su rechazo, fundado en que la única víctima que declara sobre este punto es Samantha, la que incluso declaró ignorar la existencia de una demanda civil interpuesta en su favor. Luego, no habría justificación para pedir sin más una cantidad considerable de dinero a título de daños. Indicó que es imposible resarcir un daño que tampoco ha sido probado, habida cuenta que la acción intentada no puede tener fines meramente lucrativos. Al efecto, señaló que, conforme al mérito de las pericias, no se acreditó daño alguno en relación con Samantha, el daño reportado en Sonia es anterior a los hechos y en Hilda, ni siquiera se efectuó una pericia sobre el particular.

DÉCIMO SEXTO. Réplicas. Que, habiéndole otorgado el tribunal la posibilidad a los intervinientes de efectuar réplicas, alguno de ellos hizo uso de la palabra con las siguientes alegaciones.

En primer lugar, el *Ministerio Público*, adelantó que trataría brevemente cuatro aspectos que fueron motivo de conclusiones de la defensa. En síntesis, sobre la infracción de garantías, afirmó que no aquello no se verifica por cuanto las personas encargadas de los domicilios en que se hicieron las entradas y registros eran aquellas que vivían en dichos inmuebles, lo que es coincidente con los términos en que está regulado tal circunstancia en el artículo 205 del Código Procesal Penal. Se acreditó que la imputada no estaba en dichos lugares, porque ya se encontraba detenida e hizo presente que las personas que prestaron la autorización a los funcionarios policiales, no se encontraban en dichos lugares “por casualidad”, sino porque vivían en los mismos y además porque la propia acusada, dadas sus instrucciones, les había dicho que a la policía les informaran que eran arrendatarias. Señaló también que la jurisprudencia citada por la defensa lo fue en relación a hechos absolutamente distintos comparados a los que son materia de este juicio, no vislumbrándose apoyo en lo que sostenidamente ha sido la Excma. Corte Suprema sobre quien debe ser considerado como “encargado”

de un lugar para estos efectos, ya que, sin duda, se admite que así lo sean quienes vivan y no necesariamente los imputados. En la misma línea, además, en esta causa, se enderezó la resolución del juez de garantía que rechazó las alegaciones de vulneración de garantías formuladas por la defensa, ya que en dicha resolución el tribunal consideró que fue la propia acusada quien asignaba a sus encargadas, toda vez que era imposible, que María Sosa haya estado en tres inmuebles a la vez. Las víctimas, encontrándose en una situación de explotación, por cierto, estaban en dichos lugares representando o trabajando para el beneficio de la acusada, por lo mismo, tenían la calidad de encargada y admitir una posición contraria, permitiría que la acusada se aprovechara de su propio dolo. Así, las autorizaciones (citando a la resolución dictada en sede de garantía) otorgadas por Hilda, Tania y Jessica, son plenamente legales.

De igual modo, hizo presente que en relación a lo dicho por la defensa de no poderse acreditar los delitos en que no se contó con las declaraciones de las víctimas, aquello no puede ser admitido, por cuanto ignora una realidad habitual en el fenómeno de la trata de personas, y así tratado por la literatura, de que en estos delitos es muy común la presencia de muchas dificultades a la hora de tener contacto con las afectadas, por temor a represalias, por informar sobre su actividad a otros y también por vergüenza lo que quedó plenamente demostrado en este juicio. Por ello es por lo que es relevante, tanto en la etapa de investigación como en el juzgamiento, no hacer recaer todo el peso de la prueba únicamente en el testimonio de las víctimas, lo que permite de hecho, el uso de técnicas especiales para poder llegar a esclarecer los hechos, como lo ha señalado Naciones Unidas. Ello también debe ser ponderado como la circunstancia de normalización de la trata, y al hecho de que las propias víctimas no se visualicen a sí mismas como afectadas, por eso, es relevante la ponderación de otros medios de prueba y a la corroboración periférica de los elementos integrantes de este delito, en un contexto de un delito transnacional.

Luego, en relación con la conclusión de la supuesta inexistencia de desarraigo de Samantha, indicó que curiosamente la defensa citando correctamente lo que se entiende por desarraigo, no pondera que es un concepto aplicable plenamente a esta

víctima, que se encontraba en Chile sin redes familiares y de apoyo, y que, de hecho, de no haber contado con la ayuda del testigo Francisco Pino, no es posible imaginar qué le hubiere pasado. Insistió en que el concepto de desarraigo está vinculado con el aprovechamiento que hacen los tratantes de la situación de vulnerabilidad en las víctimas, lo que debe ser analizado caso a caso.

Por último, indicó que, en relación con las alegaciones de error de prohibición, de tipo o de falta de dolo, expresó que no es posible sostener desconocimiento de parte de la acusada de la prohibición de explotación de otro. Se debe considerar que estas vulneraciones reiteradas, son delitos que reportan una grave violación a los derechos humanos, sancionados en todas partes del mundo, inclusive en Paraguay.

Por su parte, la *querellante particular*, insistió en sus alegaciones en cuanto a que la prueba rendida prueba plenamente los elementos del tipo y de sus etapas, como la captación. Indicó que, de las aseveraciones de la acusada ninguna prueba se rindió al afecto para que tuviera algún tipo de credibilidad, a modo ejemplar, que los inmuebles se encontraran arrendados para los efectos de subarrendar habitaciones. Señaló que la defensa erradamente vuelve a tratar el consentimiento, como si fuere un elemento que debe ser ponderado, el que, sin lugar a dudas, en un delito como el de trata de personas, no puede tener cabida, citando para ello lo dispuesto en el Protocolo de Palermo. Destacó que, contrariamente a lo que expresara la defensa, la prueba rendida logró probar todos y cada uno de los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales por los cuales se acusó.

Negó que Sonia haya conocido las condiciones en que se iba a desarrollar el trabajo, al igual que en el caso de Hilda, quien en su declaración anticipada dijo haberle preguntado por las condiciones de trabajo a María y que ésta no le había dado mayores detalles.

Luego, en cuanto a la demanda civil, dijo que los informes sociales tienen como objetivo establecer la condición económica de las personas en relación con algunas materias, a modo ejemplar, cuando se ventilan pensiones de alimentos, pero que dichos peritajes no podrían analizar el daño, que es precisamente el tipo de pericia que

se aportó en este juicio, a fin de no dejar dudas sobre el daño que esta clase de delitos deja en las víctimas. Afirmó que de igual manera, un peritaje “antropológico” es del todo impertinente en un juicio como éste, ya que una prueba de esa naturaleza busca conocer sobre usos o costumbres de un grupo de personas, de una localidad o zona específico, para conocer sus hábitos o usanzas, y no conocer el daño. Conocer su pertenencia, en juicios penales, no son de ningún aporte. Agregó que el conocimiento de la víctima sobre la existencia de una demanda civil tampoco es un elemento relevante a la hora de ponderar la pertinencia de la indemnización, que como ya se ha dicho anteriormente, pretende resarcir los daños sufridos por las víctimas con ocasión del delito. Así, pide que las alegaciones de la defensa sean desestimadas y se acoja la demanda intentada en todas sus partes.

Que el *Instituto Nacional de Derechos Humanos*, al efectuar sus réplicas, indicó sobre ciertas de la defensa, que en el caso de la víctima Samantha no resultó cierto que ésta haya estado en una situación de libertad, lo que quedó probado por la declaración del testigo Francisco Pino, quien dijo que en las oportunidades en que pudo verla, Samantha estuvo por pocos minutos con él, dado los constantes llamados y hostigamientos de la acusada para que retornara. Respecto de la víctima Hilda, tampoco es cierto que no se trata de una persona vulnerable por haber ingresado a Chile en más de una oportunidad, ya que quedó demostrado que el motivo principal de todos aquellos viajes era la condición económica que tenía, y cada estadía que tuvo en nuestro país se dio en un contexto de explotación por parte de la acusada, quien costó cada uno de sus viajes. Sobre la ausencia de un informe psicológico para acreditar el daño en la víctima de Sonia, hizo presente que la asistencia a estas pericias es voluntaria, lo que se dificulta con el mismo hecho de que las afectadas no se consideren a sí mismas como víctimas del delito de trata.

En cuanto a lo que afirmó la defensa, en torno a la inexistencia del elemento desarraigo en las víctimas, porque se dijo por su testigo doña Bernardina que tanto Hilda como Sonia la llamaban de manera diaria. Lo cierto, es que no se puede obviar que esas comunicaciones se dan porque Bernardina, quedó en calidad de cuidadora de

sus hijos menores y por el compromiso de pago o sueldo mínimo que las víctimas debían darle por cuidarle a sus hijos, cuestionando que, en el caso de estas hermanas, se pueda hablar verdaderamente de un vínculo familiar significativo.

Por último, al replicar *la defensa*, expresó que en relación a lo que señaló el Ministerio Público, resulta antojadizo señalar por un lado que las víctimas son personas privadas de toda voluntad, no solo de decisión o desplazamiento, sino incluso respecto de su propio cuerpo, para luego, con el objeto de reforzar las diligencias de entrada y registro, asignarles la calidad de “encargadas”, insistiendo que la única persona que tenía las facultades que señala el artículo 205 del Código Procesal Penal era su representada (y tampoco las había delegado en las personas que autorizaron los ingresos), actuando la policía en dichas actuaciones con infracción a las garantías constitucionales en la forma en que ya ha sido planteado.

Luego, reiteró que no pueden prosperar las acciones en que no se obtuvo declaración de las víctimas, ni siquiera se hicieron diligencias para obtener su ubicación, e hizo presente que, de lo expuesto por las acusadoras en clausuras, no hay alegación alguna sobre la vulnerabilidad de las víctimas, en relación a aquellas afectadas en el capítulo del artículo 411 ter del Código Penal, respecto de las cuales, no se tenía ninguna noticia ya para la fecha de preparación de juicio oral. Ahora, en relación con las víctimas Samantha, Hilda y Sonia, repitió lo ya dicho, como, por ejemplo, que respecto de Hilda no se hizo una pericia de daño. Indicó que la declaración de las víctimas es siempre fundamental, especialmente en un juicio como éste. Señaló que se vieron videos y fotografías de la casa de Ruiz de Gamboa, una semana antes de la detención de María Sosa, en donde se daba cuenta de atención de clientes a altas horas de la madrugada, como, por ejemplo, 4 de la mañana. Sin embargo, exhibido el chat de WhatsApp de las mismas fechas, no hay mensajes de María Sosa avisando o instruyendo sobre la atención de dichos clientes, lo que únicamente se explica porque eran clientes privados de cada una de las chicas.

Agregó que, en relación con lo dicho por el Ministerio Público, sobre la declaración de Carolina Gatica y la estadística de 567 clientes entre enero y mayo de

2017, lo que, a primera vista, parece ser una cantidad exorbitante de clientes, sin embargo, la defensa indica que la funcionaria no sabía cuantos de esos clientes habían sido atendidos por cada chica. Sin embargo, se puede hacer un cálculo, considerando que ese periodo son 127 días, los días de mayores flujos eran viernes y sábado, y conforme los dichos de la funcionaria Gatica, el promedio de atención de los días sábado era de 98 personas. Ahora, si se considera cuántos sábados hubo en ese mismo periodo, la defensa dijo que se trató de 16 sábados. Luego, para esos días, el promedio es de 6,1 clientes. Considerando que en el departamento 1005, hubiere 4 víctimas, a 6 clientes por cada sábado, lo que permite concluir que cada víctima atendió a uno, dos clientes o probablemente a ninguno. Todo ello, muestra el ánimo del Ministerio Público de entregar la prueba parcializada y de manera acomodaticia. Lo mismo ocurre, con las afirmaciones de los policías, en cuanto a que cuando las víctimas salían a comprar lo hacían en periodos breves de 10' o 15', sin embargo, la lógica indica que cualquier persona que va a comprar alimentos al almacén más cercano a su casa, no se demora cinco horas, sino el mismo corto tiempo ya aludido.

A continuación, reiteró lo ya expresado en ocasión al consentimiento, dado que todas las víctimas sabían a lo que venían y, de hecho, iban a venir igual a ejercer la prostitución. No existió captación o contacto alguno de parte de su representada. Insistió que el Ministerio Público tenía la carga de establecer que las víctimas eran personas vulnerables y como se mantuvo esa situación en el tiempo hasta que se produjo el rescate. Si aquello no resultó probado, no se puede reprochar que su defendido se haya aprovechado de la vulnerabilidad preexistente en las afectadas. Aquello, no se puede presumir y lo acusa como una falta de parte de la fiscalía.

En cuanto a la demanda civil, insistió que no es posible probar ni menos cuantificar los daños, máxime si una de esas víctimas ni siquiera conocía sobre la existencia de una demanda. Hizo presente que, desde junio del año 2020, las víctimas Hilda y Sonia no fueron ubicadas, y en el año 2021 se presentó una demanda a nombre de ella, lo que le parece extraño, expresando la defensa “deben haber dejado firmados los papeles con anterioridad”, aportando que se hizo en notaria, en diciembre de 2019,

es decir, ninguna de las tres conocía el tenor de las demandas civiles, cuyo rechazo volvió a solicitar.

DÉCIMO SÉPTIMO. *Palabras finales.* Que, la acusada MARÍA SOSA AQUINO, en la última intervención que le permite la ley, expresó que, si hubiere sabido que ayudar a sus “paisanas” le iba a traer estos problemas, no habría hecho nada. Dijo que siempre ha sido prostituta, y que nunca tuvo problemas en ello, porque en su país es algo normal. Dijo que, si es que en algo ofendió a las chicas, les pedía perdón, pero no sabía, porque nadie se lo explicó. Puntualizó que nunca más, ni para ella ni para ayudar a otros, volverá a ejercer la prostitución.

DÉCIMO OCTAVO. *Valoración de la prueba rendida. Hechos acreditados y decisión de condena.* Que, por decisión unánime, y luego de ponderar la prueba de conformidad a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, esto es, con apego a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los principios científicamente afianzados, el tribunal pudo arribar a una decisión parcialmente condenatoria, en base a las siguientes fundamentaciones.

1.- Antecedentes preliminares o de contexto. Hechos no controvertidos.

Que, durante extensas jornadas, el Ministerio Público rindió diversos medios de prueba para demostrar no sólo la efectividad de las imputaciones que formuló en su acusación, (plantada en los mismos términos por las querellantes), sino que, además, para permitir conocer una serie de antecedentes periféricos o contextuales, vinculados a la investigación, y que dan coherencia al núcleo fáctico de la actividad de trata de personas materia de este juicio.

De hecho, en varios de estos aspectos contextuales -y respecto de los cuales se presentó prueba- no existió discusión de los intervinientes, de hecho, aquella fue encausada hacia aspectos interpretativos de estos hechos, o bien, hacia la forma en que dichas circunstancias configuraban o no, los tipos penales invocados por las acusadoras.

Así, por ejemplo, un hecho no controvertido en este juicio fue la **oferta y ejecución de actos de prostitución** en los inmuebles a cargo de la imputada María Sosa Aquino, durante el periodo en que se desarrolló la investigación (febrero de 2017 a noviembre de 2019). La defensa, no hizo cuestión sobre este punto, por cuanto lo reconoce, sin embargo, argumentó a lo largo del juicio, que esto fue un ejercicio libre y personal de cada mujer oferente, en que a la acusada le correspondió una labor de colaboradora o prestadora de ayuda a mujeres que querían dedicarse al comercio sexual, no verificándose explotación sexual alguna, ni ninguna otra conducta capaz de enmarcarse en alguno de los tipos penales del artículo 411 ter o 411 quáter del Código Penal.

Sin embargo, cabe despejar este punto como inicial o exento de controversia, dadas las constantes sugerencias por parte de la acusada Sosa Aquino en sus intervenciones, toda vez que refirió en varias oportunidades que sus “problemas” actuales se debían a haber sido prostituta, algo que para ella era absolutamente normal y socialmente aceptado, tanto en su país como en otras latitudes (España), y en consecuencia, experimentó una supuesta persecución o reproche en nuestro país con motivo de su actividad en el comercio sexual, lo que dista de la realidad, por cuanto, aquello no fue materia de alegación alguna de parte de los intervinientes, ni de los aportes testimoniales o periciales oídos en juicio, ni menos es algo posible de realizar en este proceso, atendido el contenido de nuestra legislación, que no criminaliza ni castiga jurídico penalmente el comercio sexual.

Asimismo, es posible considerar que es un hecho cierto y no controvertido, que la acusada María Sosa tenía **a su cargo -a la fecha en que se verificó su detención- tres inmuebles ubicados en la ciudad de Santiago**, correspondientes a dos departamentos ubicados en el edificio de Santa Rosa N°170 de la comuna de Santiago (los departamentos 704 y 1005), y a la propiedad de calle Ruiz de Gamboa N° 029, en la comuna de Providencia. La defensa, de hecho, fundamenta una de sus alegaciones (la de vulneraciones a garantías constitucionales de su representada) precisamente en la calidad de “encargada” de estos tres inmuebles, dado que en relación con dos de ellos

la vincula su calidad de arrendataria, y respecto del departamento N° 704 constituía aquél su residencia o morada.

Al efecto, cabe hacer presente que se presentó prueba documental (N°3 en el auto de apertura) consistente en el Contrato de Arrendamiento del departamento N° 1005 de Santa Rosa 170, y se incorporaron transcripciones de interceptaciones telefónicas, en donde la acusada le da instrucciones a su hija Sheila que reciba al dueño de la casa de Ruiz de Gamboa (audio de 4 de noviembre de 2019, documental N° 36, en el auto de apertura), lo que refuerza la veracidad de la existencia de contratos de arrendamiento en relación con estas dos propiedades.

Ahora bien, pese a que fue objeto de prueba y controversia el título o vínculo jurídico de la acusada en relación con el departamento 704 de Santa Rosa 170 (respecto de lo cual se hará un análisis más adelante), resultó claro y no controvertido que, durante el tiempo en que se desplegó la investigación, ese departamento era su residencia o domicilio particular.

2.- Antecedentes sobre el inicio de la investigación y denuncias intentadas en contra de María Sosa Aquino.

Que, durante el desarrollo el juicio se presentó ingente prueba relativa al origen de la investigación que encabezó este proceso penal y que pasará a ponderarse en este apartado.

En efecto, se incorporó la declaración de la subcomisaria de la Policía de Investigaciones de Chile **Carolina Gatica Urra**, quien se desempeña en la Brigada de Trata de Personas Metropolitana (en adelante BITRAM).

Sobre el particular, la testigo Gatica dio cuenta sobre la recepción de una orden de investigar proveniente desde la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, la que a su vez reportaba la existencia de una denuncia hecha por un ciudadano de nombre Sebastián Quintana Sandoval, el día 16 de febrero de 2018. En esta denuncia, Quintana relató ser cliente de manera frecuente de servicios de comercio

sexual, y que por dicha razón acudió a varios domicilios, uno de los cuales correspondía al departamento 1005 de calle Santa Rosa 170. Indicó que, a su parecer, en dicho lugar, las mujeres estaban en condiciones de esclavitud, hacinadas, durmiendo en el mismo lugar en el que trabajaban, por lo que él pensaba que aquello podía ser una trata de personas.

Luego, el día 17 de abril de 2019 se tomó declaración en sede policial al denunciante Sebastián Quintana, (una de las dos declaraciones que rindió) diligencia en la que la policía Gatica participó como testigo. En dicha oportunidad, Quintana reiteró sus dichos, y especificó que fue en tres ocasiones al departamento 1005 de Santa Rosa 170, atendiéndose todas aquellas veces con una mujer de nombre “Cinthia”. Agregó que en el lugar pudo ver a más chicas y que todas ellas hablaban en guaraní, hecho que supo porque al no comprender lo que decían, lo preguntó y así se lo informaron (las mismas chicas). Notó que en el departamento las mujeres estaban hacinadas, que dormían y comían ahí y que el lugar estaba desaseado. La chica de nombre “Cinthia” le dijo que su intención era volver a Paraguay para ser policía y que estaba juntando dinero, debía juntar dinero para poder concretar esos objetivos. También constató que las mujeres estaban a cargo de una proxeneta y que los horarios de trabajo eran extensos. Aclaró que los lugares que frecuentaba no tenían relación entre ellos, porque los elegía al azar, en la página web “lo canto”.

El tribunal también pudo apreciar la declaración del subinspector de la Policía de Investigaciones de Chile Juan Carlos Oliveros Narea, quien debido a las instrucciones de la oficial a cargo Carolina Sánchez de la BITRAM, se impuso de la denuncia interpuesta por Sebastián Quintana Sandoval. Indicó que el día 16 de febrero de 2018 este hombre denuncia, debido a que, al concurrir a distintos domicilios a obtener prestaciones sexuales, había observado que las mujeres que prestaban dichos servicios se encontraban en condiciones esclavitud, hacinamiento y, en general, en muy malas condiciones. Dijo que observó que las mujeres comían y desarrollaban su vida normal en el mismo lugar en que ejercían el comercio sexual.

El testigo Oliveros dijo que le correspondió presenciar una declaración en dependencias de la brigada del citado Sebastián Quintana el día 29 de mayo de 2018, oportunidad en que éste habría ratificado sus dichos y, además, agregó otros antecedentes de relevancia. Indicó que uno de los lugares, era el ubicado en Santa Rosa 170, departamento 1005, en donde fue atendido por “Cinthia”, pero que, en el lugar, las otras mujeres la llamaban “Clarisa”. Explicó que canceló \$30.000 para mantener relaciones sexuales con esta mujer, por una hora, y que el medio de comunicación fue por vía telefónica, número que habría visto en una página web, probablemente “lo canto”. Añadió que la mujer que contestó el teléfono le dijo que fuera hasta Santa Rosa con Curicó y que cuando estuviera ahí llamara nuevamente. Que, producida esa segunda llamada, la mujer le da la dirección exacta y que suba hasta el departamento 1005, lugar en donde es recibido por “Cinthia”. Señaló que fue en más de una oportunidad y que en todas ellas se atendió con Cinthia, y que pudo apreciar que había al menos cuatro mujeres más en el interior del departamento. Que, en la tercera vez, ya con más confianza, se puso a observar el entorno que había dentro del departamento, pudiendo apreciar que solo había dos dormitorios y que se encontraban mujeres, lo que le pareció extraño, dado que las mujeres desarrollaban su vida en el departamento y que dormían en el mismo lugar donde ejercían el comercio sexual. Una vez que la mujer se retira del dormitorio, escucha que hablan algunas en un idioma que le parece extraño y él se ríe, enterándose luego que aquello era lengua guaraní.

Quintana además agregó que cuando se encontró solo en la habitación, le pareció ver algo extraño al lado del televisor y, entonces se acercó y vio un cable que desconectó. Al salir, vio a una mujer de unos 40 años, con falda corta, sostén tipo bikini, que ingresa al dormitorio, lo mira y después se va. Sebastián Quintana dijo que se fue muy extrañado, a raíz de todo aquello.

El funcionario Oliveros indicó que la investigación a raíz de esta investigación estaba a cargo de la oficial de caso Carolina Sánchez y que luego pasó a manos de Carolina Gatica, quien con posterioridad le informó de que se había hecho un “cruce”

de información en la unidad, debido a que existía otra investigación en curso (a cargo de otra oficial de caso) en contra de una ciudadana paraguaya, debido a la denuncia de una mujer de nombre Samantha.

En el contexto de la investigación a cargo de Gatica, se hicieron otras diligencias, como comparecer a verificar el mencionado inmueble de Santa Rosa 170, indicando la testigo Carolina Gatica, que se entrevistaron con el administrador don Frederic Liabeuf, quien les comentó de variados antecedentes sobre el ejercicio del comercio sexual en un departamento del décimo piso de ese edificio, y que, con posterioridad, prestó declaración en sede policial.

En efecto, la testigo Gatica indicó que el administrador del edificio les informó que, con ocasión de lo manifestado por varios vecinos, se impuso que el departamento 1005 recibía un número constante y alto de visitas, razón por la cual se tomó la decisión de abrir un libro únicamente para registrar a las personas que ingresaban a ese inmueble. Dijo que, en el año 2017, debido al constante flujo de personas a ese departamento, concurrió a Carabineros a efectuar una denuncia en contra de la persona a cargo del departamento (ya que ella era la arrendataria) de nombre María Sosa, porque a su juicio en dicho lugar se estaba ejerciendo el comercio sexual. Don Frederic (ya en el año 2019) refirió que a su juicio el comercio sexual se seguía prestando, por cuanto el flujo de personas no había variado. Dijo también que a él le llamaba mucho la atención la situación de María Sosa, ya que a diferencia de otros residentes no salía diariamente en horas de la mañana, por lo que él creía que no tenía un trabajo determinado o al menos uno que la hiciera salir del edificio, pues siempre estaba en el departamento en donde ella vivía, que era el 704 a nombre de Luis Araya. Entonces, el administrador indicó que le llamaba la atención el hecho de que María no trabajara, pero que podía arrendar el departamento 1005 y tener un auto casi del año. En la misma oportunidad, les hizo entrega del libro que especialmente se había abierto para registrar las visitas del departamento 1005, el que fue exhibido en audiencia, como **Otros Medios de Prueba N° 10** (conforme la numeración del auto de apertura), consistente en tres fotografías de un libro de color azul marca Orgarex.

Carolina Gatica, explicó durante su declaración que se realizó un análisis del citado Libro de Visitas del departamento 1005, estudio que materializó en unos cuadros y gráficos para establecer ciertos datos, como número de visitantes, género, días más frecuentados y horarios de las visitas. Así, y por medio de la exhibición de **Otros Medios de Prueba N°9** (conforme la numeración del auto de apertura) explicó que el periodo entre el 1 de enero de 2019 y el 6 de mayo de 2019 se registró un total de 568 personas, respecto de los cuales 567 eran hombres. Indicó que febrero fue el mes con más visitas, registrándose la entrada de 185 hombres y que sólo en los primeros seis días de mayo analizados ya se habían registrado 28 visitas de hombres. En cuanto a días de la semana, entre los meses de enero a mayo, los que presentaron más afluencia fueron los viernes y los sábados, con 98 hombres cada uno de esos días. También señaló que durante el periodo analizado se repetían ciertos nombres, ya que se registraron dos veces o más como visitas del departamento, distinguiendo a estas personas “frecuentes” con más asistencia los martes (31 hombres) y los viernes, lunes y miércoles (30 hombres). Por último, en cuanto a horarios, indicó que las visitas asistían entre las 9 de la mañana y las 2 de la madrugada, resultando el horario de 13 y 14 horas como el más frecuentado.

Que, ratificando lo dicho por la funcionaria Gatica, compareció a estrados el testigo **Frédéric Leopold André Liabeuf**, ciudadano francés, de 56 años, quien se presentó como administrador de edificios y condominios.

El testigo Liabeuf dijo que desde marzo de 2017 administra el edificio ubicado en calle Santa Rosa N°170, y que desde que asumió la administración en esa época, varios vecinos le manifestaron su inquietud sobre actividades en departamentos del piso 10, ya que había un constante movimiento de hombres, por lo que pensaban que se trataría del ejercicio de prostitución o de masajes, lo que no se condecía con el destino habitacional del edificio (ello en relación a los departamentos 1011 y 1005, ambos del piso 10).

Que, al efecto, lo primero que hizo fue verificar los libros de visita, haciendo un conteo de las personas que ingresaban y se pudieron percatar de un movimiento cíclico de 10 o 15 de personas, exclusivamente hombres, y por ello, decidió optar por un libro exclusivo de este departamento. También usaron el sistema cerrado de televisión (CCTV interno) para ver el flujo de personas y ver qué pasaba.

En ese contexto, dijo que, a su juicio, los libros, para él “eran la prueba irrefutable que aquí tenían un negocio”, evidenciándose solo la presencia de hombres. Con la cámara de seguridad pudo constatar que varias veces llegaban jóvenes, mujeres, de edades entre los 20 o 25 años, personas respecto de las cuales no sabían el nombre ni apellido, y que salían muy poco, acompañadas, todo lo cual le provocó una duda que debía aclararla.

Las mujeres no salían en ningún registro, y afirmó que, si varias personas de sexo femenino, que no salen a la mañana, y hay solo visitas de sexo masculino, aquello le generaba la percepción de que había un negocio de prostitución o de masaje, que no era aceptable, porque el edificio era de uso habitacional.

Actuando en representación de la comunidad y después de una asamblea de propietarios, acudió a hacer una denuncia a Carabineros, donde lo recibió la teniente Avilez, añadiendo que tuvo que ir a una calle que está en la comuna de Ñuñoa, cuyo nombre no recuerda. Indicó que aportó dos discos duros de alta capacidad con dos DVR con imágenes de las cámaras de seguridad y puso también a disposición los libros de visitas.

Dijo que, con posterioridad, ya en el año 2019 fue contactado por la inspectora Gatica de la Policía de Investigaciones, entendiendo que la investigación era llevada ahora por dicha policía, y prestó declaración.

El testigo dijo que entre los años 2017 y 2019 no hubo un cambio, se continuó con el negocio, existiendo sólo un periodo donde hubo menos actividad. Indicó que después la persona, refiriéndose a la “señorita Sosa”, la que previamente ocupaba dos departamentos, se mudó al 704, pero la actividad continuaba en el piso 10. Dijo que el departamento 704 fue comprado por la señorita Sosa con su marido o esposo para

residir ambos. Sin perjuicio de ello, Sosa se hacía cargo y arrendaba los departamentos del piso 10, conservando finalmente uno de ellos (que no recordaba si era el 1011 o el 1005), ya que ella pagaba los gastos comunes. Agregó que nunca tuvo un problema con la señorita Sosa, con quien habló en unas dos o tres oportunidades, de manera normal.

Agregó que la situación de registro de las visitas en los departamentos fue algo que le generó algunos problemas con dos de los conserjes, los que al parecer tenían bastante contacto con la señorita Sosa y no cumplían con las instrucciones que él les daba. Dijo que, de hecho, fueron despedidos con posterioridad (indicando que se trataba de Mario Paillao y Pedro Espinoza), incluso uno de ellos, le lavaba el auto a la señorita Sosa y se encargaba de su vehículo. Indicó que, en una oportunidad, las instituciones policiales quisieron hacer un operativo, estacionaron cerca del edificio en otro lugar, que él les proporcionó, y apenas llegaron los oficiales encubiertos todo el mundo había desaparecido, es decir, era claro que alguien tenía la información, “y estaban los dos caballeros mencionados, era su turno”, aseveró.

Dijo que la preocupación que tenía en relación con la prostitución en el edificio también la compartía el mayordomo, de nombre Ignacio Briones, porque era muy incómodo todo, la presión de las personas que veían un flujo permanente de personas, considerando además que en el edificio hay solo dos ascensores, hay personas mayores, personas con niños, y no les gustaba este flujo permanente, era incómodo.

Señaló además que supo de un conflicto entre una residente del piso 9 y la señorita María, en donde él habló con María y se enteró que fue agredida por la residente el 905. Agregó también que la semana anterior a la de su declaración en estrados, la señora Rosa Gómez del departamento 406, le informó que había hablado con la hija de la señora Sosa y que los iban a mandar a callar a todos y eso en su país lo considera una amenaza.

A las preguntas que le hiciera el Instituto Nacional de Derechos Humanos, dijo que el horario en que las visitas llegaban era desde temprano, cerca de las 10 de la mañana y hasta tarde, 22 horas aproximadamente.

Preguntado sobre la actividad de la acusada Sosa, el testigo dijo que ella era una “madame”, señalando que no sabe el concepto en castellano, pero es una persona “vela para las personas que comercian con su cuerpo, esa es mi percepción, ella velaba por las jóvenes que estaban ahí, y salían muy poco, salían a veces acompañadas o con ella, pero salían sin carteras. No las veía como personas libres” afirmó.

A las preguntas de la defensa, reiteró sus dichos y agregó que no hizo denuncia sobre lo que le dijo la señora Gómez, porque no es no es ciudadano del país y no conoce las leyes. Indicó que doña María Sosa era quien pagaba los gastos comunes y la encargada de los departamentos 704 y 1005 del edificio.

Por último, y en el examen que permite el artículo 329 del Código Procesal Penal, el testigo indicó que cuando se realizó el censo, tampoco pudieron obtener datos sobre las jóvenes que se encontraban en el edificio, y que no entendía por qué no registraban sus datos, siendo de relevancia por razones de seguridad en un país sísmico. Dijo también que había algunas muchachas que se quedaban y otras las cambiaban, porque vio a muchas mujeres diferentes, era un “recambio de muchachas” el que se daba en el lugar.

Que se pudo apreciar también la declaración de **Cassandra Catalina Avilez Hernández**, teniente de Carabineros y miembro del OS-9, en la sección de delitos de alta complejidad.

Señaló en estrados que, en el año 2017, recepcionó una denuncia, en donde el administrador de un edificio, Frederic Liabeuf, señaló que era administrador de edificios en distintos lugares, entre los cuales estaba el edificio “Energy Santa Rosa 1”, ubicado en Santa Rosa 170. Desde el inicio, los residentes le dijeron que existía una especie de prostíbulo y venta y consumo de droga. Como no le dijeron que departamento era, él buscó en los libros de conserjería y se percató que había departamentos con mucho movimiento, en específico el 1005 y el 1011, en el registro del libro, vio muchas visitas, principalmente hombres, las 24 horas del día. Como le surgió la duda, él verificó las cámaras y se percató que había extranjeras que no

estaban ingresadas en ninguno de los libros, presumiblemente porque los conserjes, no dejaban registro de nada. Por las características, las identificó como mujeres paraguayas. Las personas que las visitaban decían que iban a ver a amigas. El dueño del departamento era Darío Espinoza, y ambos departamentos, estaban a nombre de María Sosa Aquino, aportando tres números celulares. Como estos temas no los podía hablar con cualquier persona, lo habló con Ignacio Briones, mayordomo en el edificio. Dijo que días antes de la denuncia, ocurrió el censo del 2017, y en esa oportunidad concurrió el dueño del departamento y él contestó y se hizo responsable por ambos departamentos. La testigo Avilez dijo que en el parte policial, se pidió una orden de investigar al Ministerio Público, y llegó al tiempo después.

Ya con la orden emanada de la fiscalía, acudieron al edificio y el administrador le hizo entrega del libro de registro de visitas, abierto desde 21 de febrero de 2017 hasta abril de ese mismo año. Luego de ver el contenido del libro, hicieron un traspaso de la información en una planilla. El departamento 1005 como el departamento 1011, durante esos 45 días, registraron 461 visitas, todos hombres, que en su mayoría no dejaban registro de su salida, lo que ocurrió solo en seis oportunidades. El promedio de visitas era de 25 minutos, 75 personas tenían un Rut mal ingresado o daban datos erróneos, y entraban desde las 00:02 am a las 23 horas, es decir, casi 24 horas.

Indicó que dichas estadísticas las extrajeron del libro de visitas que fue entregado voluntariamente por el administrador, el que la testigos Avilez reconoció como **Prueba Material N°1** (conforme la numeración del autor de apertura), señalando que además reconoce su firma en la cadena de custodia que está asociada a la evidencia (NUE 2906628).

La carabinero Avilez, explicó que otras de las diligencias que practicó consistió en tomarle declaración al mayordomo del edificio de nombre Ignacio Briones. Este mayordomo les indicó que efectivamente el flujo de personas era alto, específicamente en el piso 10 y que, al hacer una revisión de las cámaras de seguridad, divisaron también constantemente a una mujer, de unos 35 años, alta, de contextura gruesa, con ropas ajustadas, de pelo negro largo, en constante movimiento en el lugar, usando su

celular de manera permanente. Esta mujer no conversaba con él ni con otros conserjes, no interactuaba con nadie. A Briones le llamó la atención que las personas que ingresaban como visitas ya venían con su cedula de identidad en la mano. Ya sabían a lo que iban y ninguno ingresaba con vehículos, todos caminando. Que daban además nombres o apodos de las amigas que iban a ver, como “Caty” o “Gaviota”. Al revisar los libros, se percató que el dueño del departamento 1005, era de Diego y que también estaba el 1011, y que ambos estaban arrendados por María Sosa. En el edificio no sabían quién era o que pudiera ser un nombre real, hasta que en octubre, ella pidió un quincho, y eso requería que se pidiera con su cédula de identidad, y de esa forma supieron que era María Sosa.

Indicó que María Sosa no hablaba con él y evitaba todo contacto, salvo con los conserjes Luis Riquelme y Jaime Astorga, respecto de los cuales se mostraba muy cercana, cariñosa y hasta les llevaba comida, empleados que luego fueron despedidos por su mal desempeño.

Avilez señaló que la declaración que le tomó a Ignacio Briones se verificó el día 6 de junio y que éste le manifestó que dos semanas antes, habían llegado unas mujeres (dos mujeres) en compañía de María Sosa y que habían subido a uno de los departamentos del piso 10. Dijo que después de eso, nunca más las vio salir, que por sus rasgos eran extranjeras y jóvenes de unos 18 años y que en las pocas oportunidades que las vio pasar, siempre estaban acompañadas por María Sosa, y a veces, por un guardia.

La testigo Avilez señaló además que se entrevistó con una residente del edificio de nombre Rosa Gómez, la que salía diariamente a pasear a su perrito en las mañanas y que, por ello, se pudo percatar del constante ingreso de personas al edificio, y de mujeres vestidas de forma particular, por lo que decidió preguntarle a los conserjes, quienes le habrían informado que esas mujeres eran prostitutas del piso 10.

Luego, Cassandra Avilez reconoció la ubicación del edificio Energy Santa Rosa, (ubicado en Santa Rosa 170 de la comuna de Santiago, en las imágenes que le fueron exhibidas como **Otros Medios de Prueba N° 1 y 2**, y en relación con las

fijaciones fotográficas contenidas en **Otros Medios de Prueba N° 3**, indicó que correspondía al piso 10 del mismo edificio y a la puerta de entrada de los departamentos 1005 y 1011 respectivamente (fotos 3, 4, 5 y 6 de aquella prueba).

Por último, la testigo dio cuenta de las últimas diligencias que realizó y de cuáles fueron las conclusiones y resultados de estas. Así, indicó que luego de identificar a María Sosa Aquino y al dueño de los departamentos como Darío Espinoza Riquelme, señaló que conforme las búsquedas policiales se impusieron de que Darío Espinoza tenía varias propiedades en las comunas de Las Condes, Vitacura, El Bosque y los departamentos ya citados. Que, tanto en el registro civil como en Equifax, la acusada María Sosa aparecía con domicilio en el edificio de calle Santa Rosa. Que, además, accedieron al perfil de Facebook de María Sosa y vieron que uno de los comentarios a una de sus fotos decía “belleza paraguaya”.

Indicó que se solicitó la interceptación telefónica del celular de Darío Espinoza de la compañía Claro, y de dos números asociados a María Sosa otorgados por la administración del edificio, así como el levantamiento del secreto bancario tanto de Espinoza como de Sosa, peticiones todas que fueron rechazadas.

Indicó que se solicitó a personal el Labocar que realizara la incautación de los DVR de las cámaras de seguridad del edificio y se revisaron además los movimientos migratorios de María Sosa y Darío Espinoza. Agregó que hicieron vigilancias discretas, pero no pudieron ver a las mujeres, porque cuando llegaban al edificio se paraba el movimiento de los departamentos, en tanto al parecer los conserjes advertían la presencia de personal policial.

Que, como se apuntó precedentemente, tanto el funcionario Oliveros como Gatica, dieron cuenta que mientras desarrollaban diligencias de investigación con motivo del orden de investigar que les había sido remitida por la Fiscalía, con motivo de la denuncia de Sebastián Quintana Sandoval, en la unidad policial BRITRAM se realizó un “cruce” de información, ello porque en la investigación que lideraba Carolina Gatica surgió el nombre de María Sosa, como también en otra investigación

en curso, a cargo de otra oficial (Nicole Salinas), a cargo de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

En efecto, tanto Carolina Gatica, como Juan Carlos Oliveros como la funcionaria de la Policía de Investigaciones de Chile Nicole Salinas Salinas dieron cuenta de la existencia de denuncia, efectuada por una víctima de nombre “Samantha”, la que a pesar de haber sido intentada por el delito de hurto en contra de María Sosa, les había parecido a los funcionarios policiales que en el relato de la afectada se vislumbraban ciertos elementos propios del delito de trata de personas.

Debido a que la situación de la víctima “Samantha”, será analizada con detalle en forma posterior, en este apartado sobre el inicio de la investigación seguida en contra de la acusada Sosa Aquino, se harán breves consideraciones y extractos de declaraciones que atañen a dicha afectada, únicamente para efectos de contexto.

La funcionaria Nicole Salinas relató al tribunal que el 8 de mayo de 2019 recibió una orden de investigar en la que se detallaba una denuncia de fecha 19 de abril de 2019, realizada ante Carabineros de la 19ª Comisaría de Providencia, donde una ciudadana paraguaya de 19 años, Samantha de iniciales S.G.R., denunciaba ciertos hechos constitutivos de delito, en concreto, por el delito de hurto. En el relato dijo que el 17 de abril de ese año, mantuvo problemas con “María”, también paraguaya, no da más antecedentes de ella. Dijo que tuvo un problema en el contexto del ejercicio de la actividad que ella realizaba, por cuanto María se dedicaba a administrar, ser jefa o “líder” de la prestación de servicios de comercio sexual, el que se ejercía en calle Luis Thayer Ojeda N°027, departamento 902, en la comuna de Providencia.

La afectada indicó (entre otros datos personales, como el número de su pasaporte) que ingresó en marzo a Chile el 30 de marzo. Señaló que María comercializaba drogas, además del comercio sexual y les entregaba preservativos de mala calidad. El problema que tuvo con esta persona fue el 17 de abril, en que discutieron porque Samantha no quiso atender un cliente en específico. María les indicaba que clientes tenían que atender, cuando ella no quiere atender a ese cliente en

particular, se verifica entonces una discusión, pelean, es echada del lugar y luego de eso, indica que María le sustrajo desde su cartera la suma de \$800.000, y por eso la denuncia estaba en el delito de hurto. La funcionaria Salinas indicó que la orden que recibió era por el artículo 411 ter del Código Penal, porque los funcionarios que recibieron la denuncia al escuchar el contenido de la declaración se dieron cuenta que había indicios de promoción y facilitación de prostitución y artículo 411 ter.

Nicole Salinas, indicó que posteriormente se contactaron con Samantha, quien ratificó y amplió sus dichos y que dicha declaración se hizo en presencia de Carolina Gatica y de ella. Agregó que se hizo un reconocimiento fotográfico en relación con esta víctima reconociendo en un 100% a la acusada María Sosa como la persona que le sustrajo el dinero. Por último, dieron cuenta que entre otras diligencias se tomó declaración a un testigo de nombre Francisco Pino, quien habría auxiliado a Samantha el día que salió del departamento de Luis Thayer Ojeda y que además la habría acompañado hasta la comisaría a efectuar la denuncia.

Que, cabe señalar que, hasta este punto, cada uno de los testimonios que se han expuesto se consideraron como veraces por el tribunal, en tanto, no se apreció en ellos elementos de falsedad o error que permitieran presumir que son relatos alejados de la realidad. Tampoco durante los interrogatorios de los intervinientes se pudo evidenciar preguntas que permitieran sugerir siquiera que se encontraban prestando una declaración mendaz o contradictoria.

Que, en consecuencia, hasta este punto y con estos medios de prueba, es posible dar por cierto que ya desde el año 2017 se iniciaron denuncias con motivo de la actividad de comercio sexual desplegada por la acusada y que ésta además se desarrollaba de manera muy activa, atendido el flujo constante y numeroso de clientes que pudieron ser constatados por el administrador del edificio de Santa Rosa 170 (el testigo Frederic Liabeuf) y corroborados por los Libros de Visita del departamento 1005, que fueron analizados por las funcionarias policiales Cassandra Avilez (de Carabineros de Chile) y por Carolina Gatica (de la Policía de Investigaciones de Chile)

y además incorporados a este proceso por vía de la incorporación de evidencia material y otros medios de prueba, en la forma antes expuesta.

De igual modo es posible tener por establecido que el comercio sexual vinculado a la persona de María Sosa, -dado que ella era la arrendataria (aunque no residente) del concurrido departamento 1005-, era prestado por mujeres jóvenes de nacionalidad paraguaya, lo que se concluye de las coincidencias en los relatos del denunciante Sebastián Quintana Sandoval (introducido y validado en este juicio por medio de los testimonios de Carolina Gatica y de Juan Carlos Oliveros), del administrador Frederic Liabeuf y por los dichos de la tercera y última denunciante, “Samantha”, la que de hecho relata haber sido una de las mujeres prestadoras de servicios sexuales a cargo de una líder o “jefa” de nombre María. Es importante resaltar, que cada una de las tres denuncias, se efectuaron en años distintos y por personas que no tuvieron contacto entre sí, por lo que, conforme a las máximas de la lógica, si ambos relatan idénticas circunstancias la explicación más razonable, es que aquello obedezca a un hecho cierto y no a una inusitada coincidencia.

Que, finalmente, es claro que, debido al análisis en conjunto efectuado por la BITRAM, solo para el año 2019 se logró conocer que existían dos investigaciones (y tres denuncias) relativas a la misma persona, cuya identidad, -sólo después de este cruce de información-, se comienza a corroborar por medio de variadas y diversas diligencias. Luego, las prácticas de investigación desplegadas por las policías y por el Ministerio Público, pese a un inicial letargo, cobran pleno sentido y fuerza, al contar con antecedentes que de manera consistente los condujo a indagar sobre eventuales delitos previstos en la ley 20.507.

3.- Antecedentes sobre la investigación propiamente tal.

Que, tal y como lo señalara la testigo Carolina Gatica, (y ratificado por la integridad de los funcionarios policiales de la Policía de Investigaciones de Chile que comparecieron a estrados) una vez que se cruza la información, y se llega al nombre de

María Sosa vinculado a una actividad de comercio sexual, en donde existían indicios de una posible trata de personas, la investigación quedó a cargo de ambas oficiales de caso, esto es, tanto de Nicole Salinas como de Carolina Gatica, las que, en colaboración con otros policías de su unidad especializada, organizaron y llevaron a cabo un número considerable de diligencias, para conocer quién era María Sosa, verificar si ésta lideraba un negocio asociado al comercio sexual, en qué condiciones se prestaba éste y si, en efecto, existían antecedentes que permitieran corroborar las dudas del ente persecutor sobre la existencia de los delitos que fueron objeto de este proceso penal.

Es así, que se efectuaron análisis en la propia institución y en fuentes públicas, se realizaron vigilancias discretas y luego, se llevaron a cabo, otras medidas intrusivas, como la interceptación de números telefónicos, levantamiento de secreto bancario, uso de la técnica de agente encubierto, además de la toma de diversas declaraciones y análisis de evidencia (una vez producida la detención de la acusada) tal y como se explicará a continuación.

3.1. Diligencias con relación a la acusada:

En efecto, **Carolina Gatica Urrea**, relató que, al contar con el nombre de María Sosa Aquino, se procedió a la búsqueda de información en fuentes cuyo acceso les es permitido, como el registro civil o antecedentes en Policía Internacional, además de aquella información con carácter público en redes sociales e internet. Así, en el sistema de extranjería institucional, obtuvieron información de ella como residente (ficha de residente) asociado a un número telefónico, y desde las bases de datos de Migración a cargo de Ministerio del Interior se repitió el mismo teléfono, además aparecer los datos de dos hijos, de nombres Bruno y Sheila.

En cuanto a la búsqueda en redes sociales, encontraron asociados a su nombre dos perfiles en “Facebook”, en uno de ellos se indicaba que tenía residencia en Santiago y en el otro, se veían fotografías de un año nuevo en la misma ciudad. En uno

de dichos perfiles se veía a una mujer en compañía de un hombre etiquetado como “Luis Araya Espinoza”, quien a esa época era su pareja y padre de su hijo menor Bruno.

Se exhibieron durante la declaración de la policía Gatica **Otros Medios de Prueba N° 12**, correspondientes a cuatro imágenes de captura de pantalla de uno los perfiles de la red social “Facebook” recién indicada, con el nombre “Elizabeth Sosa (eli)”, en donde se observan las fotos de perfil y de portada, y su última publicación, en donde se indicaba que vivía en Santiago de Chile. La foto de perfil es aquella en que aparece la acusada en compañía de un nombre, que según los dichos de Gatica resultó ser el mentado Luis Araya.

Se exhibieron además las fotografías contenidas en **Otros Medios de Prueba N° 13**, relativas al segundo perfil de nombre “Elizabeth Aquino”, un perfil más antiguo ya que tenía data de una última publicación el año 2015, y en la que encontraba una publicación en que se leía “año nuevo en Chile”, de fecha 1 de enero de 2015.

Carolina Gatica indicó que el teléfono asociado a María Sosa, previamente encontrado en las consultas a fuentes institucionales, fue objeto de una búsqueda en el buscador “Google”, (celular N° 569-63227532), la que arrojó a dos publicaciones efectuadas en las páginas “mundochileno.cl” y “anuncios.net”, en la que “Elizabeth Sosa” como usuario ofrecía arrendar un departamento amoblado por día en la comuna y ciudad de Santiago, imágenes que también fueron apreciadas directamente por el tribunal al incorporarse dos fotografías contenidas en **Otros Medios de Prueba N° 14**.

Que como se apuntó precedentemente, Carolina Gatica concurrió hasta el edificio de Santa Rosa 170, a entrevistarse con el administrador Frederic Liabeuf, quien -entre otros antecedentes- les hizo entrega de unos DVR con imágenes de las cámaras de seguridad del edificio, en donde pudieron apreciar a la acusada Ministerio Público en distintas dependencias del edificio.

Así, y al exhibírsele los **Otros Medios de Prueba N° 11**, la testigo Gatica dijo que en dichas imágenes, obtenidas como capturas de imágenes de las cámaras de seguridad, se aprecia a María Sosa en el ascensor en compañía de otras tres mujeres y

de un hombre (fotos N° 1 y 2), luego, como secuencia de lo anterior, se ve a María Sosa con las mismas tres mujeres en el sector de los estacionamiento y abordando un automóvil de color gris conducido por el hombre que se vio anteriormente (fotos N° 3 y 4), luego se ve a la acusada en el piso 7 en compañía de una mujer, imagen obtenida el día 7 de mayo de 2019 (foto N° 5) y la continuación o secuencia, en donde se aprecia a María con la misma mujer, de regreso, subiendo en el ascensor, imagen del mismo día 7 de mayo de 2019 a las 2:19 horas (foto N°6).

Que, se incorporó además mediante su lectura la **Prueba Documental N° 4**, consistente en la Ficha de Residente Extranjero, extraída desde los sistemas de control migratorio de la Policía de Investigaciones de Chile de la acusada María Sosa, en la que se observa como dirección en el país Santa Rosa 170 departamento 1011, en la comuna de Santiago, que cuenta con visa temporaria titular y que su empleador es Luis Araya Espinoza (primera parte) y luego un cuadro sobre su situación migratoria actual en donde se indica que cuenta con residencia definitiva desde el 6 de marzo de 2017 (segunda parte). Se exhibió, además, los **Otros Medios de Prueba N°8**, consistentes en tres capturas de pantalla del sistema GEPOL de la Policía de Investigaciones de Chile, en donde constan las entradas y salidas al país de María Sosa Aquino, entre los años 2013 y 2018, verificándose 15 entradas y 15 salidas, con destino de salida o de origen Paraguay (22 registros), Argentina (5 registros) y Brasil (3 registros).

3.2. Sobre los aportes iniciales de la afectada “Samantha”.

Que, es importante destacar también que tanto Carolina Gatica como Nicole Salinas hicieron hincapié en la relevancia que significó para la investigación la **denuncia y posterior declaración de la víctima “Samantha”**.

Sobre este particular, Nicole Salinas Salinas, relató en estrados que una vez que recibieron la orden de investigar con la denuncia efectuada por Samantha, la ubicaron

para los efectos de tomarle una declaración en la unidad policial, lo que ocurrió en conjunto con Carolina Gatica, y de ello dejaron registro en audio y video. Salinas aludió que dentro de los acápites principales de su declaración se destaca ella confirma que su ingreso fue el 30 de marzo de 2019, previa invitación de Paola, una connacional, amiga de ella. Samantha agregó en Paraguay tenía una situación económica precaria y necesitaba ingresos, y por ello, su amiga Paola la invita y decide viajar. Su amiga vivía en Huechuraba y residía junto a su pareja. Al llegar a Chile fue recibida en el terminal terrestre de la línea de buses Pullman del Sur, por su amiga Paola y luego fue trasladada hasta la residencia de Huechuraba donde se mantuvo cerca de dos semanas, ya que tuvo un problema con su amiga y su pareja. La pareja de su amiga quería mantener relaciones sexuales con ella, con conocimiento y previa autorización de su amiga, y eso no le pareció bien a Samantha y decide irse. Para concretar dicha intención, llamó a “Yeruti”, a quien conoció en el traslado desde Asunción a Santiago, en el viaje que duró 36 horas. Ahí conversaron, porque previamente la había escuchado hablar en guaraní, y luego, se pudieron a conversar y se sientan juntas. Yeruti le comentó que venía a Chile a ejercer la prostitución, porque necesitaba ingresos, ya que tenía un hijo a quien mantener. La invitó de hecho a trabajar con ella, pero Samantha se negó. Cuando tiene este problema con su amiga y su pareja, Samantha se acuerda de Yeruti y la llama, porque lo cierto es que es era la única persona que conocía en Chile y en ese momento, necesitaba un lugar donde vivir y trabajar. Yeruti le dijo que hablara con su jefa, María. No pasó mucho tiempo, minutos y Samantha recibió mensajes de WhatsApp de María, diciéndole que la van a buscar. Es ahí donde María y Yeruti la van a buscar a Huechuraba, en un vehículo gris, marca Kia, sin dar mayores antecedentes.

Una vez que María llega por ella y aborda el vehículo, Samantha es trasladada hasta el domicilio de Luis Thayer Ojeda. Durante el trayecto, María le da información en relación con las condiciones de este trabajo, y le dice que ella le tenía que pagar el 50% de las ganancias de la actividad sexual, pero que no pagaría alojamiento, ni luz ni agua. Una vez instalándose y ejerciendo la actividad, bajo la administración de María,

indica que las condiciones de trabajo en ese lugar eran totalmente distintas. Así, indicó que debía trabajar de lunes a domingo, en horarios que iban desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la madrugada, y que no tenía descanso. Que al tener a esa fecha 19 años era muy solicitada, y atendía 15 clientes diarios. No se le permitía salir, y había un control permanente para que no saliera del domicilio y estuviera disponible para atender clientes. Agregó que el departamento, era arrendado por María, pero sabía que tenía otro departamento en Santiago. En el departamento de Luis Thayer Ojeda tenían dos habitaciones, una de las habitaciones era más grande que la otra, y en esa más amplia había una cama de dos plazas, donde prestaban los servicios sexuales y además dormían. en esta habitación la más amplia una cama de 2 plazas y además dormían. En total, vivían en ese departamento cuatro mujeres, todas ejerciendo el comercio sexual bajo la administración y control de María Sosa.

Samantha también añadió que los ofrecimientos sexuales correspondían a tener relaciones sexuales con los clientes, si eran de una hora costaba \$40.000, si era media hora costaba \$30.000, si se le agregaban “adicionales”, por ejemplo, show lésbico, sexo anal, oral, esto se sumaba al valor y quedaba en \$50.000 y el servicio de “domicilios”, que implicaba ser trasladadas por María en su auto hasta un inmueble distinto, según el cliente les indicaba, costaba \$65.000 que se dividía en \$30.000 para la trabajadora sexual y \$30.000 para María y los restantes \$5.000 eran para María por concepto de traslado o “Uber”.

Dentro de su declaración, Samantha también aportó con más detalle sobre la problemática que tuvo con María. Señaló que ese día en la mañana, muy temprano, María le indica que tiene que ir con un cliente, pero dicho cliente estaba drogado, estaba en muy mal estado. Entonces, ella se negó a atenderlo. Esta negativa generó luego una discusión con María que finalmente termina por echar a Samantha del lugar. Una vez que se produjo este problema y antes de irse Samantha decidió llamar a un amigo, que también había sido cliente, a saber, un ciudadano chileno de nombre Francisco Pino, y lo llama por necesitaba ayuda, no sabía dónde ir. Pino entonces fue hacia donde estaba ella y la ayudó. Previo a salir y al ir a buscar sus cosas, Samantha

se da cuenta que le faltaban \$800.000, y señala que ese dinero le fue sustraído por María.

Samantha declaró que mientras desarrollaba la actividad de comercio sexual en varias oportunidades pensó en irse, ya que estaba molesta y no agradada, pero no podía salir. María le imponía multas, y tenía que estar pagando estas deudas, por ejemplo, existían multas por no atender a un cliente o por el horario.

Además, Samantha expresó que se tuvo que ir a publicar a una página de escorts, cercana al departamento de Luis Thayer Ojeda, de nombre “sexo.cl” y ahí ella se tuvo que ir a publicar, bajo el nombre de “Pamela”, como una chica de María. Señaló también que cuando tenía un cliente, las comunicaciones eran por WhatsApp.

Sobre las publicaciones, Samantha agregó que contenían la foto de cada chica, el servicio que prestaba, un teléfono de contacto y la ubicación del metro más cercano, entonces, cuando un cliente llamaba, los teléfonos eran monitoreados y contestados por María Sosa, quien se hacía pasar por las chicas, y por medio de un WhatsApp grupal, indicaba por ejemplo “sube un cliente para Pamela”, además del tiempo para hacer referencia del tipo de servicio. Samantha dijo que luego de atendido el cliente, debía que informar en el mismo chat “Pamela, \$30.000”, que correspondía al servicio sexual prestado.

Samantha además expresó que luego del problema que tuvo con María, no mantuvo más contacto con ella.

Nicole Salinas aludió a una nueva oportunidad en que Samantha volvió a rendir declaración en la unidad, en que además de ratificar sus dichos, amplió su declaración ya que se hizo de más información. Indicó que Samantha acudió hasta las oficinas de “sexo.cl” para bajar su publicación y ahí tomó contacto con el administrador de nombre Iván, quien le habría entregado el celular particular de María, correspondiente a un celular de la compañía WOM (569)63227532. Además, Samantha entregó a las funcionarias, algunos nombres o seudónimos de las mujeres del departamento Luis Thayer Ojeda mencionando a “Anita”, entregando un Instagram de ella; de “Yeruti”, entregando su Facebook e Instagram, otra mujer

“Analía”, entregando también sus perfiles en redes sociales, y una última de nombre María Figueredo, aportando su Facebook.

Que, tal y como lo expresaran las oficiales de caso Gatica y Salinas, las declaraciones de Samantha aportaron antecedentes que gran relevancia para la investigación, toda vez dichos datos y aportes contribuyeron a la ubicación de ciertos focos de investigación, y fue una suerte de primera “ruta” en la información que fueron recabando. En tal sentido, se destaca el nombre y teléfono de María, el contar sobre las publicaciones y aportar el nombre de “sexo.cl” y las dinámicas del comercio sexual, la dirección del departamento de Luis Thayer Ojeda, el nombre de varias de las mujeres que conoció en dicho inmueble, especialmente el de Yeruti, nombre que le permitió ponerse en contacto con María, y la descripción de que María Sosa se desplazaba en un vehículo gris marca Kia.

3.3. Sobre vigilancias a la acusada y sus domicilios.

Como se señaló, prestó declaración el funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile **Juan Carlos Olivaros Narea**, quien explicó que participó en varias diligencias de la investigación. Indicó que como parte del equipo de BITRAM, le correspondió estar en el análisis de alguna de las escuchas, en vigilancias de los domicilios identificados, y en otras vigilancias discretas, como, por ejemplo, una que se realizó al aeropuerto.

Así relató, que por información que se tenía dadas las interceptaciones telefónicas a algunos números de teléfonos asociados a María Sosa, se conoció que ésta se encontraba fuera del país, pero que retornaría a Santiago, por lo que, el día 28 de julio de 2019 concurrió junto a las funcionarias Nicole Salinas, Carolina Gatica y al policía Juan Sáez, a realizar en una **vigilancia** en el aeropuerto de Santiago. Expresó que en el contexto de esa diligencia pudo ver a la acusada salir de la zona de registro de ingreso al país, en compañía de sus hijos Bruno y Sol, y luego al salir, se reunió con Luis Alexis Araya, quien los recibió y los condujo luego hacia los estacionamientos.

Abordaron un vehículo color gris marca Peugeot, dirigiéndose todos hacia el edificio ubicado en Santa Rosa 170 de la comuna de Santiago.

Se le exhibió al testigo las fotografías contenidas en **Otros Medios de Prueba N° 49**, correspondientes a las fijaciones obtenidas en la diligencia de vigilancia recién descrita, en donde el tribunal pudo apreciar a la acusada en el aeropuerto en la zona de retiro de equipaje, y luego imágenes que dan cuenta del seguimiento vial del vehículo Peugeot, color gris PPU HTZV 83, (fotos N° 1, 2, 9, 10 y 11) y del momento en que llegan e ingresan al edificio de Santa Rosa 170 (fotos 12 y 13).

Que, durante la audiencia de juicio, se incorporó por medio de su lectura la **Prueba Documental N° 45**, consistente en un Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes del vehículo marca Peugeot, color gris PPU HTZV 83, a nombre de Luis Alexis Araya Espinoza.

El testigo Oliveros además relató de las escuchas telefónicas pudieron conocer que María Sosa ofrecía servicios de comercio sexual no solo en el departamento 1005 de Santa Rosa 170 sino que también en el inmueble de calle Ruiz de Gamboa N° 029, en la comuna de Providencia. Por ello, se le encomendó participar en una vigilancia estática en el domicilio de Ruiz de Gamboa 029, Providencia. En ese lugar pudo ver la llegada de María Sosa, en el auto Kia, PPU JFPB-26, modelo Rio 5, estacionándolo en las cercanías e ingresando al inmueble.

Se le exhibió entonces, **Otros Medios de Prueba N°51**, que correspondían a fotografías obtenidas en la vigilancia recién aludida de 12 de agosto de 2019. Así dijo que en la fotografía N°1 se apreciaba el inmueble de Ruiz de Gamboa N° 029, y en las fotos N° 2 y 3 el automóvil Kia Rio 5 utilizado por María Sosa. Expresó que de manera constante se visualizó a la acusada, estacionándose en la esquina del inmueble vigilado, para ingresar luego a la casa de Ruiz de Gamboa. En la fotografía 4 señaló que es el mismo vehículo, pero esta vez transitando por diferentes calles, tanto de la comuna de Santiago como de Providencia. Lo que ocurrió fue que María Sosa salió del domicilio de Providencia, abordó el vehículo, se la siguió y ésta llegó hasta el edificio de Santa Rosa 170, tal y como se aprecia en la fotografía 5.

Oliveros expresó que una vez que María Sosa ingresó al edificio ubicado en la comuna de Santiago, los funcionarios policiales volvieron al domicilio de calle Ruiz de Gamboa y continuaron con las vigilancias. Así, pudieron ver a tres mujeres que salieron de la casa y se dirigieron hacia un almacén cerca y se las siguió de manera discreta. Las mujeres compraron algunos alimentos y luego regresaron hacia el inmueble, todo lo cual quedó registrado en las fotografías N° 6, 7, 8 y 9, exhibidas.

Indicó que en relación con el vehículo Kia utilizado por la acusada Sosa, se hicieron las consultas en registros oficiales, y así se impusieron de que dicho móvil estaba a nombre de Luis Alexis Araya Espinoza, antecedente que fue corroborado con la **Prueba Documental N° 46**, correspondiente al Certificado de Inscripción y Anotaciones vigentes del citado automóvil Kia, adquirido el 28 de octubre de 2016.

El testigo Oliveros además dio cuenta de una segunda vigilancia estática en las inmediaciones del inmueble ubicado en calle Ruiz de Gamboa, efectuada el día 13 de agosto de 2019. Indicó que al igual que en la oportunidad anterior, pudieron ver el automóvil Kia estacionado muy cerca de la propiedad. Luego, observaron hacia la casa del número 029 y pudieron ver a María Sosa salir con una mujer, hacia un almacén cercano, fueron a comprar y regresaron. Indicó que luego, al comparar las imágenes con alguna de las publicaciones en páginas de comercio sexual, pudieron identificar a la mujer que acompañaba a la acusada, la que aparecía con el seudónimo de “Mimosa”. La salida observada fue a eso de las 9 de la mañana. Luego, en horas de la tarde, nuevamente visualizaron el vehículo Kia en las cercanías, logrando visualizarla al salir del inmueble, abordar el automóvil y desplazarse hasta el edificio de calle Santa Rosa, efectuando siempre un seguimiento discreto. De todas estas acciones, también se dejó registro por medio de fotografías, las que fueron exhibidas al tribunal como **Otros Medios de Prueba N° 52** (fotos 1, 2, 3, 4, 5 y 6).

Luego, el día 16 de agosto de 2019, efectuó una nueva vigilancia discreta en Ruiz de Gamboa, comuna de Providencia, y apreciaron que no estaba el vehículo Kia, por lo que solo observaron el domicilio. Así, pudieron ver a una mujer salir del inmueble y caminar hasta los locales comerciales cercanos, del tipo almacén, compró

alimentos y enseres básicos, y luego regresó al mismo inmueble. Ello quedó registrado en fijaciones fotográficas también incorporadas a la audiencia como **Otros Medios de Prueba N° 54** (fotografías 1, 2, 3, 4 y 5).

Para los efectos de refrendar sus dichos, en cuanto a que la mujer visualizada correspondía a “Mimosa”, se le exhibió al testigo Oliveros los **Otros Medios de Prueba N° 55**, que corresponden a un cuadro comparativo de dos imágenes, una de aquellas observadas de la mujer en el contexto de las vigilancias y otra, de la imagen de una mujer de características físicas similares en una publicación de la página “mi privado.cl” (fotos 3 y 4).

Preguntado por el aporte investigativo de las diligencias de vigilancias recién apuntadas, Oliveros indicó que aquellas sirvieron para confirmar la presencia de la acusada y de sus desplazamientos usando siempre el vehículo gris, marca Kia, (siempre desde y hasta Santa Rosa y Ruiz de Gamboa) y que mientras observaron desde las afueras el domicilio de calle Ruiz de Gamboa, pudieron observar el ingreso de una gran cantidad de hombres al inmueble, los que permanecían cerca de una o dos horas.

Que, prestó declaración en estrados el subcomisario de la Policía de Investigaciones de Chile **Álvaro García Velozo**, quien también participó de ciertas y concretas diligencias de investigación antes y después de producida la detención de la acusada María Sosa.

Indicó que, durante el año 2019, y en un trabajo dirigido por Nicole Salinas y Carolina Gatica, participó en vigilancias llevadas a cabo en diversos meses y distintos horarios, en la mañana, en la tarde, en la noche, en el aeropuerto, en desplazamiento, en el edificio de Santa Rosa 170 y en las cercanías de la clínica Santa María, en la calle Ruiz de Gamboa. Indicó que ya se tenían los “blancos”, y dentro de esas vigilancias, los desplazamientos fijaron varias veces a la acusada en el aeropuerto recogiendo mujeres que trasladaba al departamento de Santa Rosa 170 o -en alguna oportunidad- a la dirección de la comuna de Providencia de Ruiz de Gamboa. Vieron que los

desplazamientos eran hacia y desde Santa Rosa y Ruiz de Gamboa. La acusada se movilizaba en automóvil color gris, del tipo “hatchback”, marca Kia, modelo Rio.

Al observar las imágenes correspondientes a los **Otros Medios de Prueba N° 59**, el testigo García reconoció las fotografías como parte de las vigilancias que le correspondió realizar, y al observar las imágenes 1, 2, 3, 4 y 5 indicó que se podía apreciar tanto el edificio de Santa Rosa 170, como el vehículo en el que se desplazaba la acusada a quien reconoció en las imágenes 6, 7 y 8, fotografías que contenían una data propia de las cámaras de vigilancia, indicándose como fecha el 26 de agosto de 2019. Hizo presente que se realizó una coordinación con el encargado de seguridad del edificio para poder obtener dichas fotografías. Dicha coordinación se hizo necesaria, porque se contaba con el antecedente de que la imputada tenía una especie de compromiso o de pago anexo con los conserjes, ya que ellos le informaban todo lo que ocurría o si la buscaban o si preguntaban por ella, por lo que, lo más probable es que si se presentaban como funcionarios policiales, le darían aviso, y lo principal era no despertar sospechas para que no se viera involucrado el éxito de la investigación.

El testigo García indicó que también le correspondió hacer análisis de unos DVR que contenían imágenes de las cámaras de vigilancia del edificio de Santa Rosa 170. Dijo que desconocía la fecha exacta en que se hizo el levantamiento de esa evidencia (por Carabineros), pero recuerda que fue en el año 2017. En el año 2020, llegó una instrucción particular, y se recibe esta evidencia en que se remiten unos discos duros, para su análisis. Así, pudo apreciar la secuencia de imágenes, que van entre los meses de septiembre y diciembre del año 2017. Eran cerca de 64 cámaras, las que tenían un mecanismo particular, ya que solo grababan cuando había luz o movimiento. Al ser tanta la cantidad de grabaciones se fijó solamente aquella que apareció como relevante, correspondientes a imágenes del piso 7 y del piso 10, del citado edificio de calle Santa Rosa.

García agregó que el aporte de esas imágenes estuvo en que se pudo constatar el alto flujo de personas que ingresaban al departamento del piso 10, y se logró visualizar

a María Sosa haciendo tránsito entre ambos pisos, al igual que las trabajadoras. También pudo apreciar la llegada de otras “niñas” con maletas, tanto en el piso 7 y 10.

Se incorporó durante la declaración del testigo, los **Otros Medios de Prueba N° 109**, imágenes que el funcionario García reconoció como las fijaciones fotográficas realizadas a la revisión de los DVR recién aludidos.

Así, dijo que en la fotografía 1 correspondía a imagen del piso 10, en que se ve a dos mujeres camino al ascensor (9 de diciembre de 2017 a las 15:49 horas); en la imagen 2, las mujeres van saliendo por la recepción, hacia el exterior del edificio (mismo día a las 15:50 horas); en la imagen 3, indicó que se ve a la misma persona que había salido el mismo día, (16:32 horas), viene de retorno al edificio, y viene con otra mujer con una maleta entrando al edificio. Indicó que la mujer que va con una maleta es Norma. La persona que está marcada en un recuadro es Jessica. La tercera mujer es la víctima de iniciales MT. En las fotografías 4, 5 y 6, que es continuación, se ve a Jessica, Norma y la otra mujer en el interior del edificio; en la imagen 7 se ve a las mismas mujeres ya en el piso 10. Señaló que en la foto 8, reconoce a la mujer de polera rosa como Norma, a la acusada en la foto 9 (del mismo día, pero a las 22:46 horas, en el piso 7) y en la foto 10 (mismo día, a las 22:53 horas, en el piso 10).

El testigo García, indicó que también analizó imágenes desde las cámaras de vigilancia ubicadas al interior del domicilio de Ruiz de Gamboa, las que se obtuvieron con posterioridad a la detención de la acusada María Sosa, y que por ello, se hará alusión a dicha diligencia más adelante en este acápite.

3.4. Sobre indagaciones en “sexo.cl” y el surgimiento de varias mujeres en calidad de víctimas.

Que, las oficiales de caso **Carolina Gatica** y **Nicole Salinas**, relataron al tribunal que debido al antecedente de que se efectuaban publicaciones en ciertos sitios web, como “**sexo.cl**” (conforme la información dada para Samantha), procedieron a contactarse con dicha empresa lo que se realizó por medio de un correo electrónico de

fecha 12 de noviembre de 2019 dirigido a Iván Cornejo (administrador del sitio “sexo.cl”) por Nicole Salinas, quien les contestó en la misma fecha y al día siguiente, que existía una serie de publicaciones a cargo de María Sosa, quien se identificaba como “Mani” y que aparecía como la responsable de una agencia de nombre “**Preciosas**”. Vinculadas a esa agencia, se hicieron un número considerable de publicaciones de distintas personas, incluida la acusada, aportando un listado en que se aprecia el nombre de las mujeres publicadas, su número de identificación, el nombre de fantasía con el que fueron publicadas y la fecha de la publicación. Los correos electrónicos fueron reconocidos tanto por Carolina Gatica como por Nicole Salinas en estrados, e incorporados como **Prueba Documental N° 40 y 42.** De igual modo, reconocieron el listado con publicaciones y nombres de mujeres publicadas por María Sosa, como aquel incorporado como **Prueba Documental N° 41.**

Que Carolina Gatica y Nicole Salinas destacaron la importancia de estas comunicaciones y de este Listado emanado de “sexo.cl”, porque les permitió no sólo corroborar aquello reportado por la víctima Samantha sino también de conocer el nombre de varias de las mujeres identificadas como víctimas con posterioridad, y cruzar información, ya que, en paralelo, surgían antecedentes de relevancia en relación con las mujeres que prestaban servicios sexuales al alero de la acusada Sosa Aquino.

En efecto, Carolina Gatica y Nicole Salinas, explicaron que mientras se realizaban las interceptaciones, vigilancias y toma de declaraciones, así como análisis de movimientos migratorios de mujeres como la ya citada Samantha, recabaron información a ciertas entidades, como por ejemplo “Chilexpress”, ya que se tenía como antecedente que la acusada María Sosa enviada de manera frecuente dinero con destino a Paraguay.

Así, se incorporó durante la declaración de Carolina Gatica y de Nicole Salinas la **Prueba Documental N° 72**, consistente en un oficio emanado de **Chilexpress**, en el que se detallan las fechas y destinatarios de numerosos envíos de dinero desde Chile a Paraguay efectuados por la acusada María Sosa y otras personas vinculadas a la investigación como su hermana Miryan Sosa Aquino o su sobrina Jessica Sosa

Aquino. Las fechas informadas en relación con estos envíos van desde el 13 de enero de 2015 hasta el 13 de noviembre de 2019.

Carolina Gatica, de hecho, destacó que el nombre de “Yeruti”, no solo apareció dentro de la declaración de Samantha, sino también en el listado de “sexo.cl”, sino también el listado contenido en el oficio de Chilexpress, dado que María Sosa le había enviado dinero.

En efecto, señaló al observar la Prueba Documental N° 72 que es posible observar un envío de dinero por parte de María Sosa a Yeruti el día 2 de febrero de 2017, por medio de dos depósitos.

Agregó, al ver la Prueba Documental N° 11 (página 4) que se observan los movimientos migratorios de Yeruti, instrumento respecto del cual destaca la entrada a Chile el día 4 de febrero de 2017, con salida el 24 de marzo del mismo año y una nueva entrada el 31 de enero de 2018.

Indicó además que se realizaron búsquedas en la web, en redes sociales y en la página “sexo.cl”, en relación con “Yeruti”, indagaciones que resultaron positivas, ya que pudieron asociar los datos obtenidos previamente a imágenes y características físicas propias de esta mujer.

Carolina Gatica, al observar Otros Medios de Prueba N° 15, indicó que aquello corresponde a imágenes del perfil de Facebook de Yeruti, en donde se aprecia información general y algunas fotografías y publicaciones (fotos 1, 2 y 3). Luego, al apreciar Otros Medios de Prueba N° 26, indicó que aquella es una imagen del perfil de Facebook de Yeruti actualizado a julio de 2019, y un conjunto de fotos publicadas por ella (fotos 1 y 2), mientras que Otros Medios de Prueba N° 27, corresponde a una imagen del perfil en Instagram de la misma mujer ya aludida. Gatica agregó que en Instagram se vio una foto publicada en la Plaza de Armas de Santiago, lo que sin duda, la ubicada en nuestro país y que la revisión de las fotografías en redes sociales fue muy importante porque en ellas se ve a la mujer con un tatuaje (en la espalda en forma de una hoja de marihuana), que permitió ratificar dicha imagen en las publicaciones apreciadas presentes en el sitio “sexo.cl”.

Que, se exhibieron los **Otros Medios de Prueba N° 37**, correspondientes a dos publicaciones provenientes de la página “sexo.cl”, en donde se aprecia una mujer de nombre “Rossana”, Carolina Gatica refirió que aquel nombre era el nombre de fantasía que Yeruti. Se aprecia, además de su fotografía, los servicios sexuales ofertados, los valores de éstos y una referencia en la dirección como “Metro Tobalaba”, además de un número de celular, como número de contacto. (fotos 1 y 2).

Que, luego se mostraron cuadros comparativos de imágenes, efectuados según los dichos de Carolina Gatica con el objeto de demostrar que Rossana corresponde a Yeruti, así lo señaló con las dos fotografías ofrecidas en **Otros Medios de Prueba N° 38**, en donde se hace una comparación de una fotografía publicada por Yeruti en sus redes sociales con una fotografía publicada en “sexo.cl”, y se aprecia claramente el mismo tatuaje (hoja de marihuana) en la espalda. Lo mismo ocurrió al incorporarse **Otros Medios de Prueba N° 41**, en donde se compara una imagen de Yeruti desde su perfil de Instagram y una publicación efectuada en la página “skokka.cl”.

Que, durante el transcurso del juicio oral, se incorporó mediante su lectura, la Ficha de Identidad de “Yeruti” de iniciales Y.C.F., en la que constan sus datos personales y su nacionalidad paraguaya, tal y como se consigna en la **Prueba Documental N° 17**.

La oficial de caso Carolina Gatica dio cuenta de más mujeres que comenzaron a ser identificadas en calidad de víctimas, además de las citadas Samantha y Yeruti. Así, nombró a Norma, Lida, María, Catalina, Nilda, Maricel y Laura.

Detalló que “**Norma**” recibió dinero de parte de María Sosa el día 7 de diciembre de 2017 cerca de \$160.000 e ingresó a Chile el día 9 de diciembre, siendo publicada de “sexo.cl” el día 17 de enero de 2018. Afirmó además que el depósito de dinero consta en el **Documento N° 72** que le fue exhibido en audiencia. Que además se hicieron búsquedas en redes sociales y la información migratoria que registraba en la policía.

Así, al observar la **Prueba Documental N°8** señaló que correspondía a la Ficha de Residente Extranjero de Policía Internacional, en donde se aprecia la fotografía y antecedentes aportados por Norma al ingresar a Chile. Destacó que se indica su situación de extranjera utilizando “visa” y que informó como domicilio en nuestro país el departamento de Luis Thayer Ojeda 027, Providencia. Luego, al observar la **Prueba Documental N° 11**, indicó que aquello correspondía a los Movimientos Migratorios de Norma, poniendo de relieve que ingresó al país el día 9 de diciembre de 2017, por el paso fronterizo Libertadores. Indicó que no recordaba si había sido incluida en el listado, pero luego señaló que Norma fue publicada en “sexo.cl” como “Jacky” el día 17 de enero de 2018.

La testigo Gatica Urra indicó que Yeruti no viajó sola hacia Santiago, sino que lo hizo en compañía de “**Lida**”, la que ingresó también el día 4 de febrero de 2018, y que fue publicada en “sexo.cl” el 15 de febrero de 2017 con el nombre de fantasía de “Mini Barbie”.

Que, se identificó también a “**Catalina**”, quien ingresa a Chile el 17 de enero de 2018 y fue publicada el 24 de enero de 2018, en “sexo.cl” con el seudónimo de “Micky”.

Que el día 20 de junio de 2018 ingresaron al país “**Nilda**” y “**Maricel**”, publicadas ambas por María Sosa en la página “sexo.cl” el día 24 de julio de 2018. Nilda fue publicada como “Miley” y Maricel como “Jade”.

Que, en relación con “**María**”, se tiene que ingresó a Chile el 20 de julio de 2018 y fue publicada en “sexo.cl” el día 24 de julio de 2018 bajo el nombre de “Palomita”.

Que, además está “**Laura**”, quien registró ingreso a Chile el día 28 de julio de 2018 y fue publicada en “sexo.cl” como “Barbie” o “Mini Barbie” el día 1 de agosto de 2018.

Que tanto Carolina Gatica como Nicole Salinas, remarcaron que la proximidad en el tiempo, entre el ingreso de las mujeres y su publicación en las páginas como “sexo.cl”, era para ambas policías prueba de que existió captación, y que el destino de

todas ellas fue ejercer la prostitución tanto en Santiago como en Providencia, bajo el control y administración de la acusada María Sosa.

Que la testigo Nicole Salinas, refirió que las consultas a la página “sexo.cl” se dieron en dos momentos, ya que, en la primera información, no aparecían nombres ya pesquisados como el de Samantha, en una segunda comunicación por correo electrónico, se informó que Samantha fue publicada por medio de un pago realizado por la acusada usando el apodo de “Mani”. Que la mujer de nombre “Arnal”, fue publicada el 9 de enero y el 24 de mayo de 2019 también por “Mani” bajo el seudónimo de “Barbie” y “Analía” fue publicada como “Yayita” en el mismo sitio web entre los días 12 de octubre de 2018 y 24 de mayo de 2019, también mediante un pago realizado por “Mani”.

Nicole Salinas reiteró la relevancia que tuvo para la investigación el listado entregado por el sitio “sexo.cl”, toda vez que pudieron saber de 37 mujeres vinculadas al nombre de María Sosa y a la agencia de escorts “Preciosas”.

Reafirmando los dichos en relación con las afectadas Yeruti y María, ya apuntadas, respecto de las cuales pudieron comprobar envíos de dinero en fechas cercanas a las de ingreso a Chile, de parte de la acusada, agregó antecedentes sobre otras mujeres vinculadas a las actividades de comercio sexual a cargo de la acusada.

Así, dijo que de la información del listado aportado como Prueba Documental N° 41, pudieron encontrar también a Blanca González o “Mariana”, Tania publicada como “Lucía”, Sheila publicada como “Sabrinita”, Araceli publicada como “Mirna” y “Jannyré” publicada como “Janny” el 10 de octubre de 2019.

Nicole Salinas indicó que varios de estos nombres ya les eran conocidos, pues habían sido oídos en las interceptaciones telefónicas, como por ejemplo, Blanca (cuyo nombre de fantasía es Mariana), la que además pudo ser vista en vigilancias y reconocida en las imágenes que con posterioridad se obtuvieron de las cámaras de seguridad de la casa de Ruiz de Gamboa, pero que, el día en que se produjo el rescate de las víctimas y a la vez, la detención la imputada, los funcionarios que ingresaron a dicho inmueble se percataron que Blanca no estaba y que al parecer había escapado en

forma previa, no lográndose la obtención de su relato, por medio de una entrevista o declaración. Agregó que, pese a no registrar movimientos de salida del país, se la intentó buscar, siendo estas diligencias infructuosas.

Luego, Nicole Salinas destacó que conforme las diligencias de investigación que se practicaron surgieron los nombres de dos mujeres, que ingresaron al país por el aeropuerto y no por vía terrestre, como lo hizo la gran mayoría de las mujeres investigadas. Las que viajaron en avión desde Asunción, Paraguay a Santiago fueron “Hilda” y “Arnal”. Hilda, fue una de las víctimas con las que se pudo tener contacto directo y que también aportó antecedentes relevantes para el esclarecimiento de los hechos materia de este juicio.

Nicole Salinas, refirió que **“Hilda”** prestó declaración durante la etapa de investigación. Ella vivía y ejercía el comercio sexual en el inmueble de calle Ruiz de Gamboa y fue quien autorizó la entrada voluntaria de los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile y las incautaciones que se hicieron en dicha oportunidad.

En síntesis, en aquella declaración prestada en fiscalía (a fines del año 2019 o principios del año 2020) indicó que Hilda tenía una mala situación económica en Paraguay y que necesitaba hacer frente a los gastos propios y el de su hijo. Que, por ello es por lo que decide viajar a Chile, para lo cual conversa con una de sus hermanas quien conocía a María Sosa. La acusada se comunica con ella por WhatsApp y le ofrece venir a Chile a ejercer el comercio sexual, lo que Hilda acepta. Indicó que viajó en dos oportunidades, en avión, y que, en la segunda oportunidad, viajó en compañía de María Sosa. Que en ambas ocasiones fue la acusada quien le pagó los pasajes, pero que éstos debían ser cancelados en Chile con las ganancias de lo que ella produjera con las actividades de prostitución. Indicó que María Sosa le dio instrucciones previas al viaje, como, por ejemplo, que borrara todas las comunicaciones previas que habían sostenido por WhatsApp. Una vez en Chile fue acogida por María Sosa y llevada al departamento 1005 de Santa Rosa, sin embargo, indicó que ejerció el comercio sexual en tres inmuebles, en el de Santa Rosa, en el departamento de Luis Thayer Ojeda y en el de Ruiz de Gamboa.

Hilda indicó que una de las condiciones que imponía María Sosa era la de pagar el 50% de las ganancias, y que los servicios constaba de una hora de relaciones sexuales por \$40.000, media hora costaba \$30.000, con adicionales como sexo anal, oral o show lésbico costaba \$50.000 y que si prestaban los servicios fuera de los inmuebles, esto es, si el servicio era un “domicilio” costaba \$65.000, monto que se dividía en \$30.000 para la trabajadora sexual, igual suma para María Sosa y el resto para María Sosa por concepto de transporte.

Sobre el horario, Hilda relató que era de lunes a lunes, y que ella fue publicada como “Pao”, lo que resultó corroborado con las publicaciones de “sexo.cl” según la policía Salinas.

Hilda también hizo alusión a un problema que tuvo con María, a quien describe como una persona dominante, intimidadora, porque las amenazaba que, si no cumplían con las reglas, les iba a imponer multas o las iba a echar a la calle, porque ella sabía que no tenían red de apoyo en Santiago. El problema con la acusada consistió en que ésta se enteró que un cliente le había dado propina a Hilda, y María entonces, le reclamó la entrega del 50% de dicho dinero extra. Hilda habría negado el hecho, pero María le dijo que salía de la propina puesto que había llamado al cliente una vez que se fue del lugar, lo que le molestó mucho a Hilda, por cuanto lo consideró injusto.

Agregó que esta Hilda relató sobre ciertas medidas de control ejercidas por la acusada, como ejemplo, el monitorear la entrada y salida de los clientes, el uso de cámaras de vigilancia en los inmuebles, además, llamaba al cliente cuando se demoraban más, para saber si había otro pago u otro ingreso, y; que las mujeres tenían obligación de reportar sus prestaciones de servicios sexuales y del retiro de los clientes en un chat de WhatsApp llamado “Chicas Súper Poderosas”. Así, luego de que Hilda atendiese a un cliente debía escribir en el mencionado chat “Pao 40.000” para que se conociera cual fue el servicio que se prestó.

Hilda también aportó nombre de mujeres a las que conoció en los inmuebles en los que vivió y trabajó, citando a Paloma, Jazmín, Yeruti, Samantha o “Pame”.

Agregó que en los departamentos las habitaciones eran reducidas y que, por ende, dormían en el mismo lugar que ejercían el comercio sexual, actividad que iba desde las 9 a las 2 de la mañana, de lunes a domingo, el viernes “full time”, esto es, todo el día, lo que también era algo que se pudo apreciar en las publicaciones, expresó la oficial de caso Salinas.

En relación con la forma en que los clientes cancelaban los servicios sexuales, Hilda relató que podían cancelar en efectivo o por transferencia. Que, en este último caso existían tres cuentas, la cuenta Rut de María Sosa, la cuenta de Rut de Miryan, su hermana y la cuenta del Banco Santander de Luis Araya, padre del hijo menor de María. Hilda dijo que los datos de las cuentas estaban en las agendas que existían en cada domicilio o bien eran informadas en el grupo de WhatsApp.

Hilda dijo que estuvo un tiempo en el departamento 1005 y que luego ella y su hermana Sonia fueron trasladadas a Ruiz de Gamboa, porque estaban haciendo reparaciones en el departamento 1005. Aportó nombres de mujeres como Jannyré, Araceli, Laura, Jessica y Mariana, a quienes conoció en dicho lugar.

Sobre Samantha, indicó que la conoció en abril de 2019 en el departamento de Luis Thayer Ojeda, y que estaba en compañía de Yeruti. Agregó que supo sobre un problema que Samantha tuvo con María, por un cliente drogado que Samantha no quiso atender.

Hilda dijo que el día 27 de noviembre de 2019, Tania (alias “Lucía”) les había informado que María estaba detenida y que posiblemente iba a llegar la policía hasta Ruiz de Gamboa, y que entonces, ellas debían decir que eran trabajadoras del aseo, lo que a Hilda le pareció raro, porque todas sus cosas estaban ahí.

Con relación a su hermana Sonia, Hilda dijo que ella tenía un hijo pequeño de solo 9 meses y que también tenía problemas económicos, por eso llegó a Chile. Señaló que su hermana tenía un problema físico (fisuras anales) y que por eso no podía dar todas las prestaciones que María ofrecía. María les decía que, si no tenían “adicionales”, como sexo anal, oral, o las salidas, o se negaban a tener relaciones con

cualquier cliente, ellas no iban a tener ganancias y también agregan que María decía constantemente que estaba en una mala situación económica.

Nicole Salinas, indicó que Hilda o “Pao” fue una de las mujeres individualizadas al principio gracias a los aportes de Samantha, y que, por ende, a su respecto se hicieron búsquedas en redes sociales y publicaciones, y que en el caso de ella también se logró individualizar una característica particular para reconocerla, ya que en varias fotografías se apreciaba un tatuaje. Agregó que también se hicieron búsquedas en el sistema de colaboración y cooperación vigente con policías de otros países y por ello, obtuvieron antecedentes como fotografías en documentos de identificación de Paraguay, proporcionado por la policía de ese país.

Sobre las imágenes recabadas en el caso de “Hilda”, se exhibieron fotografías, las que fueron reconocidas y explicadas por la testigo Nicole Salinas. Así, al observar los **Otros Medios de Prueba N° 23**, indicó que aquello correspondía al perfil de Facebook de Hilda nombrada como “Paolii C.” y a fotos subidas a la misma red social, incluida una en que se encuentra en el departamento de Luis Thayer Ojeda (fotos 1 y 2), y que la imagen exhibida como **Otros Medios de Prueba N° 24** corresponde al perfil de Instagram de Hilda.

Luego, al incorporarse **Otros Medios de Prueba N° 30**, la testigo Salinas indicó que las fotos N° 1 y 2 corresponden a capturas de pantalla de publicaciones de Hilda en el sitio “sexo.cl”. Destacó que se aparece la edad (19 años), horarios “full time”, donde llamar, que el valor es de \$40.000 la hora, y \$30.000 por 30 minutos, se indica solo pago en efectivo y que está en el sector del metro Santa Lucía. Por su parte, las fotografías 3 y 4 son ampliaciones de fotografías encontradas tanto el perfil de Facebook como en las publicaciones de “sexo.cl” y en ellas se aprecia a Hilda con un tatuaje en la zona del hombro (estrellas).

Información similar a ésta, se encontró en publicaciones de la página “mi privado.cl”, exhibidas como **Otros Medios de Prueba N° 60**, en que se observan imágenes de la misma mujer como “Pao”, con información de servicios “normales y adicionales” a hombres, mujeres y parejas, en horario “full time”, y además se indica

que se prestan en un departamento propio cercano al metro Santa Lucía, hoteles, y domicilios (foto 1). Se exhibieron también un grupo de fotografías que corresponden a la galería de imágenes en “mi privado.cl”, en las que se incluyen fotografías presentes en el perfil de Facebook (fotos 2 y 3). Luego en **Otros Medios de Prueba N° 61 y 62**, se hacen ampliaciones de datos contenidos en las publicaciones y a la galería de fotos presente en “mi privado.cl”.

Nicole Salinas agregó respecto de Hilda, se hicieron búsquedas institucionales relativos a sus movimientos migratorios, y además (después de producida la detención de la acusada) se detectó evidencia que comprobaba la compra de los pasajes aéreos correspondientes a los viajes efectuados por “Pao” a nuestro país, lo que además pudo ser ratificado con oficios remitidos por la empresa de línea aérea Latam.

Que luego, y durante el transcurso de la audiencia se incorporaron por medio de su lectura, tres documentos asociados a la empresa Latam. Así, en la **Prueba Documental N° 18** se observa un Oficio de Latam de 21 de junio de 2019, en que informa la compra y realización de viajes de “Hilda”, los días 17 de agosto de 2018 (destino Santiago desde Asunción), los días 10 de diciembre de 2018 (con destino a Asunción desde Santiago), y el de 11 de marzo de 2019 (desde Asunción a Santiago), todos con información de contacto vinculado al celular 9 62337532 y al correo electrónico “manisosa1331982”, cuenta de Gmail. En el mismo oficio, se indica, además, dos viajes de “Arnal” L.G., con los mismos antecedentes de contacto, y relativos a los vuelos de fecha 7 de enero de 2019 (ruta Asunción- Santiago-Asunción), con retorno el 4 de abril de 2019, y el viaje de 24 de abril de 2019, con retorno el 11 de diciembre del mismo año en idéntica ruta.

Se incorporó también, la **Prueba Documental N° 20 y 21**, consistentes en un oficio enviado por la Policía de Investigaciones de Chile a Latam, pidiéndoles información sobre reserva de viajes de la acusada María Sosa, y su respuesta, vía correo electrónico de fecha 25 de julio de 2019 en que se muestra una captura de pantalla, con datos de la reserva “MZIFFF”, relativas a los vuelos de 24 de julio de

2019 y 28 del mismo mes y año, con destino el primero a Asunción y el segundo a Santiago de Chile, ambas reservas hechas por la acusada María Sosa.

En efecto, durante la declaración de la policía Salinas, el tribunal apreció la incorporación de la **Prueba Documental N° 11** (lámina 5) en la que se aprecian los movimientos migratorios de Hilda, y se observó una entrada al país el 17 de agosto de 2018, una salida el 10 de diciembre de 2018, una entrada el 11 de marzo de 2019 y una salida el 9 de junio de 2019, todas por el aeropuerto. Salinas agregó que se verificó una tercera entrada y para ello establecieron puntos de vigilancia en el aeropuerto. Con dicha diligencia, pudieron observar que María Sosa va a buscar a Hilda al aeropuerto y la traslada hasta el edificio de Santa Rosa en su vehículo Kia de color gris. Así, y por medio de la exhibición de **Otros Medios de Prueba N° 59**, la testigo indicó que se observan los movimientos antes descritos, en donde se ve el frontis del edificio de calle Santa Rosa 170 y el automóvil marca Kia (fotografías N° 1, 2, 3 y 4), a María ingresando con Hilda al edificio y a los estacionamientos (foto N° 5) y luego al interior del edificio accediendo a los ascensores y al piso N° 10, imágenes éstas últimas, que fueron captadas por las cámaras de seguridad del edificio (foto N°6, 7 y 8).

Luego, y al apreciar **Otros Medios de Prueba N° 113** (documento de 3 hojas), la testigo Salinas dijo que aquello correspondía a información del pasaje de Hilda, en la línea aérea Latam, comprado el día 18 de octubre de 2019, en el que se aprecia el itinerario de viaje (ruta Santiago-Asunción) para el sábado 21 de diciembre de 2019. Salinas puntualizó que, en las compras de pasaje como ésta, aparecía siempre el correo electrónico de la acusada María Sosa, “manisosa”, correspondiente a una cuenta de Gmail, correo que también procedieron a indagar.

3.4. Sobre las interceptaciones telefónicas y el uso de la técnica del agente encubierto.

Que, tanto Nicole Salinas como Carolina Gatica dieron cuenta que gracias a los datos aportados por Samantha y los resultados que fueron obteniendo con motivo de las publicaciones en diversas páginas de ofrecimiento de servicios sexuales, pudieron

detectar cinco números de celulares vinculados a la acusada María Sosa, por lo que se procedió a solicitar la medida de interceptación telefónica de los mismos. Luego de su tramitación, el Séptimo Juzgado de Garantía accedió a la medida intrusiva, respecto de cuatro números celulares, a saber: (9) 62590551, (9) 77820729, (9) 86314127 y (9) 63227532, último que correspondía al ya citado teléfono personal de María Sosa.

Carolina Gatica relató en estrados que las interceptaciones telefónicas sirvieron para resolver “cabos sueltos” y para corroborar los domicilios en los que se estaban prestando los servicios sexuales, enterándose que el domicilio de Luis Thayer Ojeda había sido cambiado por otro en la comuna de Providencia, ubicado en calle Ruiz de Gamboa 029. Con esta técnica se logró además determinar la modalidad en que los servicios sexuales que se prestaban, esto es, María era quien contestaba todas las llamadas y determinaba que hacer con cada chica. Así, ofrecía y acordaba distintas posiciones, besos, caricias, sexo oral, con y sin preservativo, sexo vaginal y anal. Los precios iban desde los \$30.000 a los \$65.000 si era a domicilio. Pudieron corroborar además el control que ella ejercía, la coordinación que ella llevaba, especialmente en lo que dice relación a la ubicación de las mujeres y el tiempo que ellas disponían para cada atención. Gatica indicó que María mantenía un WhatsApp con las chicas, lo que también apareció en las escuchas, así como la existencia de cuentas bancarias para el pago de los servicios sexuales.

Se incorporaron una serie de escuchas, correspondientes a audios o transcripciones de las interceptaciones telefónicas realizadas, durante la declaración de la testigo Gatica, las que fueron reconocidas y analizadas por dicha testigo.

Se aparejó, como **Prueba Material N°4**, CD N°2 (celular 62590551), **audio de 6 de agosto de 2019 a las 19:13 horas**, en que se escucha la voz de un hombre y de una mujer. El hombre pide indicaciones y avisa que está en el metro Salvador, cerca de la Clínica Santa María. La mujer le dice que vaya hasta Ruiz de Gamboa 029, pero que vuelva a llamar.

Gatica indicó que en este llamado se evidencia la coordinación que hacía María Sosa con los clientes, quienes primero debían llegar hasta las cercanías de la estación

de metro publicada, y luego se le daban más detalles, para lo cual se verificaba más de una llamada. Gatica refirió que la voz femenina corresponde a María Sosa, la que, además, contestaba los teléfonos que aparecían en las publicaciones. Agregó que con esta escucha se corroboró que ella estaba habilitando un segundo domicilio, antes tenía el de Luis Thayer Ojeda, pero en esa época estaba habilitando esta casa en calle Ruiz de Gamboa para ofrecer los servicios sexuales, y queda en evidencia también la forma en como ella daba las indicaciones para que los clientes llegaran.

De la misma Prueba Material antes citada, se escuchó el audio de **8 de agosto de 2019, a las 00:21 horas**, en donde una voz femenina indica que “40 mil incluye todo, oral, vaginal, anal, americana, besos caricias contacto, todo ...estoy hasta las 2 de la madrugada.” Carolina Gatica refiere que esta voz de mujer nuevamente es María y es importante esta escucha, porque indica el horario en que los clientes podían asistir y lo que se ofrece, que consistía en relaciones sexuales vía vaginal, anal, americana, besos caricias y contacto.

Se incorporó de la **Prueba Material N°4**, CD N°1, (celular 77820729), el audio de **1 de agosto de 2019, a las 19:52 horas**, en donde nuevamente se escuchan a un hombre y una mujer. Ésta le señala que está en Santa Rosa con Alonso de Ovalle, en metro Santa Lucía, que el servicio cuesta \$30.000 y que está hasta las 2 de la madrugada y desde las 9 de la mañana. También, la mujer le pregunta en qué página la había visto y el hombre contesta que no recuerda si fue en “lo canto” o en otra página. Carolina Gatica indicó que nuevamente se aprecia el mismo horario referido por Samantha y el domicilio que ya se había determinado, aclarando que se trata nuevamente de una llamada contestada por María Sosa.

De la misma prueba y CD anterior, se incorporó el audio de **3 de agosto de 2019 a las 20:47 horas**, en donde se oye a un hombre con acento extranjero y a una mujer. Ésta le dice que tiene cuatro chicas que están trabajando, que la dirección es Santa Rosa 170, departamento 1005 y que vuelva a llamar cuando esté abajo. Carolina Gatica indicó que en esta escucha se hace alusión a la cantidad de mujeres que están trabajando y da la dirección exacta. Destacó que éste es uno de los pocos llamados en

donde el cliente es extranjero. También Gatica que en este audio no se escucha a María, sino a su hermana Miryan, que también se publicaba como escort.

Luego, de la misma **Prueba Material N°4**, CD N° 1, pero desde el celular 86314127, se incorporaron dos audios. El primero, de **5 de agosto de 2019 a las 13:43 horas**, en donde se escucha a un hombre y a una mujer. Ella le informa que, si va, le costaría \$65.000 y si él viene, el precio es de \$30.000, avisándole también que próximamente estará en metro Salvador, entre ese día y mañana. Le dice también que, a lo más, le puede dejar el domicilio en \$50.000, pero menos, no. El hombre le dice que no, porque solamente quería sexo oral y tiene solo \$30.000, que no puede por el traslado y todo. Carolina Gatica, indicó que la voz de mujer era María Sosa, atendiendo un llamado por un cliente que pedía un domicilio. El segundo audio, es de **8 de agosto de 2019 a las 21:17 horas**, en donde se escucha nuevamente un interlocutor masculino y a una mujer. Ella le informa que está en Ruiz de Gamboa. El hombre le dice que se quiere atender con “Barbie”, pero la mujer le dice que igual está ella, que su nombre es “Bebota”, porque “Barbie” se ocupó, “pero si la quieres esperar, sale justito a las 4”. La mujer agrega que lo puede recibir, y que es amiga de Barbie y que también se encuentra otra amiga, una chiquitita, “te la presento”. La mujer le advierte que la puede esperar aquí porque lo que quedaron en que el hombre volvería a llamar en un rato cuando se desocupe. La testigo Gatica indicó que en este llamado se escucha a María Sosa hablando con un cliente y haciéndose pasar por “Bebota”, que era otra chica y le ofrece los servicios de esta mujer (o de una tercera), ya que el cliente quería atenderse con “Barbie”, pero ésta estaba ocupada, agregando que Barbie es Arnal.

Se incorporaron luego 18 escuchas, todas desde el celular 63227532, pertenecientes a la acusada María Sosa.

En efecto, de la **Prueba Material N° 4**, CD 3, el audio de fecha **2 de agosto de 2019, 16:47 horas**, en donde se escuchan a un hombre y una mujer, en un idioma que solo permitió escuchar el inicio (en español) en donde el hombre le dice que tenía a una paraguaya de Oviedo, y que ya estaba en Chile. Carolina Gatica, indicó que se

trata de una conversación entre María Sosa y un hombre de nombre Freddy, en guaraní, la que pudo ser conocida en su contenido gracias a la colaboración es la policía de Paraguay. En esta escucha, Freddy le pregunta a María si está trabajando aún y que tiene a una chica de Paraguay, de Oviedo. María le contesta que se la lleve, y el hombre le propone trabajar juntos. María le dice que no le entiende y luego le señala que aquello no lo pueden hablar con teléfono, que le puede dar una comisión, pero no compartir gastos, porque ahora está en una casa en Providencia. María le dice que se vean un lunes, ya que el fin de semana está ocupada.

Luego, de la **Prueba Material N° 5**, CD 3, se incorporaron los audios de **15 de octubre de 2019 a las 14:51 horas y el de 11 de noviembre de 2019 a las 20:34 horas**. En el primero de ellos, se escucha a una mujer y a un hombre de nombre Víctor que le pregunta si tiene alguna chica para mandar. Ella luego de preguntarle si tiene efectivo, le dice que le llevará a una “chiquitita y bien pechugoncita”. El hombre le indica que tiene \$60.000 y al aceptar la mujer, él le indica que la mande “al tiro”. Gatica indicó que este es otro llamado de coordinación con un cliente, en que contesta María Sosa, y que además le dice que sólo debe pagar en efectivo. El segundo audio, contenía una conversación entre dos mujeres, en donde una de ellas se encontraría perdida. La testigo Gatica, indicó que, en este audio, María habla con alguna de las chicas que trasladó a un domicilio y en el lugar, la mujer le dice que la dirección no corresponde, la chica le pide que la vaya a buscar y María le responde que está a la vuelta, evidenciado que María Sosa era quien las iba a dejar y recoger a las muchachas, cuando de prestaban los servicios de “domicilio”. Agregó que el control que tenía María, también se demostraba en el uso de las cámaras y en las instrucciones que les daba a las chicas, como, por ejemplo, “el cliente ya está ahí, el cliente está esperando, bajen luego”. Ella les decía qué cliente debía ser atendido y por cuál de las chicas, toda vez que ellas no tenían poder de elegir.

Se incorporó, de la **Prueba Material N°4**, CD N°3, los siguientes audios: escucha de **4 de agosto de 2019 a las 17:03 horas**, en guaraní. La testigo Gatica indica que en esta conversación se oye a María Sosa con “Laura” y le indica que el cliente

estaba esperando para ser presentada, que la estaban esperando y Laura le dice que va; audio de **5 de agosto de 2019 a las 8:15 horas**, también en guaraní. La funcionaria Gatica, explicó que se trata de María Sosa y “Jazmín”. La acusada le indica que debe estar pendiente al celular, por la llegada de cliente; audio de **28 de septiembre de 2019 a las 20:29 horas**, en donde se escucha a un hombre y a una mujer diciendo “Luis no te olvides de la cámara”. Gatica expresó que en esta conversación María Sosa habla con un maestro de nombre Luis, y que esta conversación se da cuando estaban haciendo arreglos en la casa de Ruiz de Gamboa. María le pide que le coloque bien la cámara del pasillo, y el hombre le dice que si lo hará. Para la testigo, con ello se corrobora lo dicho por las víctimas en cuanto a que en el interior de los domicilios existían cámaras de vigilancia; audio de **11 de octubre de 2019 a las 10:48 horas**, en donde se escucha a un hombre y a una mujer. Él le informa que está en la esquina de Fernando Manterola con Ruiz de Gamboa, y la mujer le dice que es la casa amarilla con el N° 029, señalando “sube no más”. Carolina Gatica indicó que en esta llamada se ve nuevamente que María Sosa contestaba los teléfonos y coordinaba la asistencia de clientes, controlando con ello la actividad. Cada vez que llegaba un cliente, tiene que avisar para que se le abra el portón y pueda entrar; audio de **11 de octubre de 2019 a las 10:53 horas**, que es continuación de la escucha anterior. La mujer le dice “hola, estás intentando llamarme, no sé qué le pasa a mi teléfono. Soy Mirna” Le explica también sobre los servicios y sus costos, diciéndole que \$30.000 incluye besos, caricias, sexo oral, vaginal, contacto, y que “colita y americana” tiene un valor de \$40.000, además de informarle que ese día el horario es “full time” hasta las 4 de la madrugada. Carolina Gatica reiteró que con esta llamada se confirma el costo de los servicios sexuales, y de los “adicionales”. También se muestra que ella ofrece los servicios de las chicas, en tanto sabe quién llama a cada teléfono, es decir, es ella quien tenía el manejo y no las chicas. Aclaró que “Mirna” es Araceli.

A continuación, de la **Prueba Material N° 6** (que contiene un único CD), se incorporaron tres audios: el primero, de **22 de noviembre de 2019, a las 18:52 horas**, en donde intervienen dos mujeres, una de ellas dice que la cámara se desenchufó, que

le llegó un mensaje de aviso, y la otra mujer le responde que se salió un poco, “solito se salió” y la primera le responde que en seguida hablará por la cámara. Carolina Gatica explicó que, en esta escucha, se oye a María Sosa con una de las chicas. Señaló que esta llamada fue importante para saber que había una cámara en el lugar, ya que cuando aquel elemento se desconecta María las llama para ver por qué se desenchufó. María Sosa cuestiona porqué se desenchufó, dice “será...luego, les voy a hablar”, es decir, se ratificó algo que dijo Samantha en su declaración, que era que María Sosa les hablaba desde la cámara, además de observar lo que pasaba en la casa, así mantenía un control de lo que hacían las chicas al interior del inmueble; audio de **14 de noviembre de 2019 a las 21:30 horas**, conversación entre dos mujeres, parcialmente en español y el resto en guaraní. Carolina Gatica señaló que se trataba de María Sosa con una de las chicas de nombre “Mariana”, en la que María, con un tono no tan amistoso, le dice de un cliente que está abajo esperando, y Mariana le contesta que lo está esperando, pero no hay nadie. Lo que le parece raro que Mariana haya sabido del cliente, avisada por las chicas, diciéndole “y como te avisaron, si yo no mandé en el grupo”, pero la chica le explica que una de las mujeres le dijo “para vos” y que por eso había bajado. Para la testigo Gatica, esta conversación no solo evidencia el control sobre los servicios en general, sino además la existencia del grupo de WhatsApp como forma de ordenar la atención y montos de los clientes, para cada mujer; audio de **22 de noviembre de 2019 a las 17:40 horas**, en que se escucha la conversación que sostiene un hombre y una mujer. Ésta le dice que hizo la transferencia y que quería la publicación, pero que le respondieron que el nombre no se podía usar y que enviara tres alternativas. La mujer se queja porque dice que le mandó hasta un WhatsApp con el envío de la información, hace dos días, y que lo reiteró ya en tres ocasiones. El hombre le dice que lo revisará y que le de unos minutos. Carolina Gatica explicó al tribunal que, en esta conversación, se escucha a María Sosa con una persona que trabaja en los sitios web de publicaciones de servicios sexuales. Lo importante, es que quedó demostrado que María Sosa hizo todo el trámite para publicar a las chicas. Primero paga y luego le manda los datos de las chicas con los nombres. La molestia de María, evidenciada en esta escucha, es por

la no respuesta que le dan al publicar. Le dice que antes él no era así, lo que demuestra que publicaba frecuentemente. Lo importantes es saber que María Sosa era la única que hacía toda la tramitación de las chicas que tiene trabajando en su departamento.

Luego, Carolina Gatica indicó que pudieron oírse ciertos llamados “claves”, efectuados desde el celular, por ejemplo, en relación con algún servicio básico, con lo que corroboraron que ese era su número personal, además de su nombre completo y dirección.

En aquella línea, se incorporó la **Prueba Material N° 5**, CD 3, relativas a los audios de **14 de octubre de 2019 a las 14:10 horas** y de **5 de noviembre de 2019 a las 15:09 horas**. En el primero de ellos, se escucha a una mujer solicitando un cilindro de gas al call center de la empresa “Gasco”. La mujer se identifica como María Sosa y da como dirección la de calle Ruiz de Gamboa 029, Providencia. En el segundo audio, se verifica una llamada a la empresa “Aguas Andinas”, en donde una mujer indica llamarse María Sosa y que quiere saber por qué no le ha llegado la boleta de consumo a su casa (de Ruiz de Gamboa 029, Providencia). Informa también que su celular es el 9-63227532, y su correo electrónico “manisosa1331982@gmail.com”.

Carolina Gatica señaló que también se escucharon conversaciones de María Sosa sobre ciertos problemas que tuvo en el edificio, otras en donde se refiere a la titularidad del departamento y del vehículo y en otras en donde evidencia sus intenciones de querer salir de Chile.

Así, se incorporó la **Prueba Material N° 5**, CD 3, audio de **8 de noviembre de 2019 a las 18:30 horas**, en donde se escucha a un hombre y una mujer. La mujer le pregunta a “Alexis” a qué hora llegará y el hombre le cuenta de los problemas que tuvo con “Leslie” a la que califica de “es una perra, un jabalí, no entiende” y se queja de las condiciones en que Leslie tiene a su hija “Flo”, por lo que no le va a transferir más la pensión. La mujer le cuenta que se quiere mudar, porque una mujer le hizo un escándalo y le cuenta que, al increparla sobre la venta de drogas, dicha mujer la golpeo en varias partes del cuerpo, siendo auxiliada por el conserje. El hombre le preguntó si había denunciado el hecho y la mujer le contesta que hizo una constancia, porque la

demanda es muy seria, “porque a mí me van a caer mal, por eso lo mejor es mudarme de acá”. La testigo Gatica, dijo que en esa escucha se oye la conversación entre María Sosa y Luis Araya, en donde ella le cuenta sobre un problema que tuvo con una vecina y su interés por mudarse.

Se incorporó también el audio de **10 de noviembre de 2019 a las 18:41 horas** (también contenido en la **Prueba Material N° 5**, CD 3) respecto de la cual la testigo Carolina Gatica refiere que se trata de una conversación entre María Sosa y Luis Araya sobre el problema que había tenido con la vecina que la golpeó. Aquí, Araya la insta a denunciar por droga, pero María Sosa le contesta que no, porque tiene “cola que me pisen”, es decir, que no le conviene hacer gestiones judiciales.

Luego, se reprodujo la **Prueba Material N° 5**, CD N°2, audio de **23 de octubre de 2019 a las 17:24 horas**, en que se escucha una conversación entre una mujer y un hombre. Hablan sobre que “ella” se quiere ir a España. La mujer le dice que, si lo anuncia, es porque no lo hará y él le contesta que para salir, necesita un permiso para sacar a Bruno. Carolina Gatica explicó al tribunal que esta conversación se da entre Luis Araya y su madre Saida Espinoza, en la que conversan sobre las intenciones de María Sosa de salir de Chile para ir a España, pero él conoce que para sacar a su hijo del país requiere antes de una autorización o permiso.

Luego, se incorporó la **Prueba Material N° 5**, CD 3, audio de **11 de noviembre de 2019 a las 16:06 horas**. Se escucha a dos mujeres, en donde una le informa a la otra que está en Afex y que le faltan “60 céntimos para completar un millón tres” y que fuera rápido a la caja. Gatica, señaló que reconoce a María Sosa, que ocupaba además de Chilexpress otras empresas para el envío de dinero y que su interlocutora puede ser Laura o Lucía.

Por último, se reprodujo la **Prueba Material N° 6** (un único CD), en específico el audio de **24 de noviembre de 2019**, conversación que por su extensión se reprodujo desde el minuto 45 en adelante. Se escuchó la conversación entre dos mujeres, en donde una le dice a la otra que tenía con “él” una deuda bien grande. Agrega que el auto está a nombre de “él”, pero que ya está todo pagado y que sólo tiene que hacer la

transferencia. La interlocutora le dice que debe hacerla antes de enojarse con él. La primera mujer le comenta luego que el departamento es suyo, que “él” solo fue su aval y la mujer con la que hablaba le dice que de eso siempre se debe asegurar, que todo lo que compre quede a nombre de ella y no a nombre de él. La policía Gatica dijo que esta conversación es muy larga, pero lo relevante de ella es que se da entre la acusada María Sosa y Leslie, que es la ex pareja de Luis Araya. En este llamado, se hizo referencia que tanto el automóvil Kia Rio 5 como el departamento le pertenecen, aunque figuren a nombre de Luis Araya, a lo que Leslie le aconseja que debe instar porque ambos queden a su nombre y no a nombre de Luis. María Sosa le aclara, en todo caso, que el departamento es de ella, está a su nombre, pero que Luis Araya intervino en la compra, sólo como aval.

Cabe hacer presente que se aportó además un correo electrónico emanado de la empresa telefónica WOM, de fecha 1 de junio de 2019, en que informa que el celular 569 63227532 corresponde a la titular María Sosa Aquino, según se lee de la **Prueba Documental N° 12**.

Los funcionarios policiales Carolina Gatica, Nicole Salinas y Álvaro García Velozo, relataron al tribunal de manera conteste que durante el mes de octubre de 2019 y previa autorización judicial se hizo uso de la técnica del **agente encubierto**.

En efecto, Gatica relató que previamente se seleccionó una publicación, y se escogió una correspondiente a “Pao”. El oficial encubierto llamó al número que se observó en la publicación y le contestó María Sosa -haciéndose pasar por “Pao”-, coordinando los servicios sexuales en el domicilio de Ruiz de Gamboa. Al llegar al lugar, fue recibido por María Sosa quien le dice que trabajaba ahí en la limpieza, y que Pao no estaba disponible, pero que si quería podía ver a otras chicas. El funcionario ingresó y vio las condiciones de lugar y luego, le presentaron a las mujeres que estaban disponibles. Para ello, fue dirigido hasta el segundo piso, donde estaban las habitaciones. Luego, dice que como “Pao” no estaba, que prefiere irse. Luego, el día 16 de octubre, asistió, previas coordinaciones telefónicas, al departamento 1005 de Santa Rosa 170, nuevamente solicitando los servicios de “Pao”. Al llegar al edificio

(previas llamadas en donde se le daba la información parcelada de la dirección) se le pidió la cédula de identidad en conserjería y el funcionario dice que no la tiene. El conserje entonces le dice que tiene que llamar para que lo fueran a buscar, cuestión que el funcionario hace, pero no es atendido. Transcurridos unos 10 minutos aproximadamente, el conserje le dice “compadre no te van a venir a buscar, sube no más”. Él sube hasta el piso 10, se dirige al departamento 1005 y ahí es recibido por “Pao” cuyo nombre es Hilda. El funcionario dice que ingresó con esta persona a una habitación. Hilda le habría contado las razones que por qué estaba ahí, y le relata que es paraguaya, que trabaja a cargo de María, y ante la posibilidad de que, terminado el servicio, recibiera un llamado de María, él debía negar que habían conversado, porque María era muy problemática. Le contó que, en una oportunidad, un cliente le dio una propina, y María le había hecho un “quilombo” porque tenían prohibido hacer acuerdos con los clientes, es decir, ellas podían recibir solo lo que los clientes habían pagado, y todos los extras debían ser informados. La petición de Hilda fue, que, si María se comunicaba con él después, negara que habían conversado, para no tener problemas con su jefa, porque ella era complicada y estructurada. En el interior, pudo ver una habitación con una cama de dos plazas y con preservativos en el velador.

Con esta técnica, se corroboró que María Sosa tenía destinados los inmuebles de Ruiz de Gamboa y de Santa Rosa (departamento 1005) para los servicios sexuales y para habitación de las chicas. El agente encubierto dijo que, además, pudo ver cámaras en el pasillo de Ruiz de Gamboa, que en dicho inmueble había habitaciones destinados para el comercio sexual y para la habitación y vivir diario de las chicas.

4. Antecedentes relativos al día 27 de noviembre de 2017, en que se verificó la detención de la acusada María Sosa Aquino. Hechos ocurridos previo a su detención, diligencias de entrada y registro a los domicilios a cargo de la encartada, incautación de evidencias y rescate de las víctimas.

Tanto Nicole Salinas como Carolina Gatica reportaron que para los meses de octubre y noviembre de 2019 tenían una cantidad considerable de información sobre María Sosa, razón por la cual se había pedido su orden de detención a la fiscalía. El Ministerio Público, a su vez, pidió dicha orden al tribunal y el Séptimo Juzgado de Garantía la despachó con fecha 26 de noviembre de 2019. La BITRAM, en esa época estaba con las oficiales de caso ausentes, por feriado legal y permisos asociados a natalidad, por lo que, no existió una inmediata reacción de parte de dichos funcionarios al recibir la mentada orden. Sin embargo, los sucesos del día siguiente forzaron a que los policías actuaran con rapidez, ya que fueron noticiados en horas de la mañana del día 27 que María Sosa había comparecido al tribunal de garantía y se encontraba ahí, detenida.

Según el testimonio de Carolina Gatica el día que los funcionarios concurrieron al edificio de Santa Rosa 170, el conserje les comentó “ustedes también vienen donde la señora María, por lo mismo que vino el carabinero en la mañana”. Aquel comentario les llamó la atención, y al día siguiente, se le tomó declaración a dicho conserje, de nombre Pedro Inostroza Escobar. Él, de manera voluntaria quiso entregar su declaración y les relató que el día 27 de noviembre de 2019, entre las 10 y las 10:30 horas se presentó un hombre en la conserjería, pidiendo contactarse con María Sosa del departamento 704, el conserje dio aviso por medio de citófono y la acusada le dijo que ella bajaría. Describió al sujeto como un hombre entre los 35 a 40 años, que portaba una credencial con cinta azul, y que, al verlo con una carpeta con documentos, le preguntó a qué iba. Entonces, el individuo le dijo que era carabinero, sin embargo, nunca exhibió identificación. María Sosa bajó con su hijo Bruno y se van hacia una parte contigua, a una sala, y fueron cerca de 20 minutos los que estuvieron conversando, y luego este sujeto va hacia la conserjería y se retira. María Sosa también se dirigió hacia la conserjería, y le dijo “tengo que ir a presentarme a tribunales”, luego de subir hacia su departamento efectivamente, la vio salir, caminando con su hijo pequeño hacia la salida del edificio.

Además, el citado conserje hizo entrega de las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio, que registraron lo que él les declaró, y de dicho material visual, se realizaron capturas de pantalla.

Luego, Carolina Gatica, reconoció que fotografías que se le exhibieron como **Otros Medios de Prueba N° 80**, correspondían a las capturas de pantalla, entregadas por el conserje Inostroza. Indicó que las fotos 1, 2 y 3 son imágenes de la llegada del sujeto que se identificó como carabinero, se lee en la parte superior el día y la hora (10:33 horas). Las imágenes siguientes (4 a 9) se ve a la acusada sosteniendo una conversación con este sujeto, en donde ella además observa unos papeles que el hombre le exhibe. En la última foto, se ve como el hombre sale hacia el exterior del edificio (a las 10:46 horas).

Prestó declaración también el comisario de la Policía de Investigaciones de Chile **Juan Esteban Santelices Rivera**, también miembro de la BITRAM, en la época en que se llevó a cabo la investigación.

Este testigo indicó que a eso del medio día del 27 de noviembre de 2019 se les informó que una “blanco”, que a su vez mantenía una orden de detención, se había presentado al tribunal. Por ello, se formaron dispositivos para comparecer a tres domicilios, dos ubicados en Santa Rosa 170 y un tercero, ubicado en Ruiz de Gamboa 029. A él, le correspondió asistir a este último, en compañía de las funcionarias Karen Jones y Katterin Montoya.

En el domicilio, se llamó a la puerta y fueron atendidos por una mujer, la que accedió a que se efectuara ingreso al domicilio. Le explicaron porque se estaban presentado y aceptó que pudieran ingresar e hicieran una revisión, firmando las actas de autorización respectivas. Dicha mujer era “Hilda”.

Lo primero que el testigo observó en el lugar, era que se trataba de una casa de dos pisos color amarillo, de material sólido, orientada de oriente a poniente, cercada con una reja. Que, al pasar esa reja, en el acceso y sobre el techo de la puerta, había una cámara de vigilancia. Luego, se vio un pasillo, una recepción al costado, un mesón

y varias habitaciones. En el interior había cuatro mujeres además de Hilda: Sonia, Élide, Jannyré y Araceli. Todas jóvenes estaban reunidas en el segundo piso del inmueble. Se les explicó lo que pasaba brevemente y se las invitó al cuartel para su declaración. A todas ellas las llevaron a la unidad, en un furgón policial.

Con la autorización previa otorgada, se efectuó una revisión superficial en el inmueble, constatando las habitaciones que tenía tanto en el primer piso como en el segundo. En el primer piso, había tres piezas, dos con veladores, y uno con un pequeño ropero o closet. Sobre los veladores, preservativos al igual que en el interior de un clóset. Había varias habitaciones deshabitadas, desordenadas, como en remodelación. Cuando ingresaron, en el primer nivel había una cámara ubicada hacia las habitaciones, y en la escalera otra cámara. Una tercera cámara apuntaba a los dormitorios. En un dormitorio abierto, había dos camas y un camarote, y en las otras piezas, camas de dos plazas.

Santelices relató las víctimas estaban bastante complicadas, porque no entendían mucho que hacía la policía en su casa. Por tal motivo, se les explicó la razón de la concurrencia y por ello fueron voluntariamente asistieron a la unidad.

Indicó que se levantaron evidencias del lugar: preservativos, tres agendas en donde se registraban los servicios que prestaban las chicas, tres teléfonos celulares, dos de Élide y uno de Jannyré. Además, se incautó el DVR, un mouse y un conector de energía, todo lo que corresponde al dispositivo que registra las imágenes de las cámaras de vigilancia del lugar.

Durante su declaración, el testigo Santelices reconoció las evidencias contenidas como **Prueba Material N° 9, 10 y 11**, como aquella levantada por su equipo el día en que se ingresó a la propiedad de Ruiz de Gamboa, el DVR, los 20 preservativos, una agenda y una boleta.

Luego, se le exhibió **Otros Medios de Prueba N°88**, correspondiente a un set de imágenes de la diligencia en que participó el día 27 de noviembre de 2019. Indicó que en la imagen 1 se observa el frontis de la casa de Ruiz de Gamboa; en la foto 2, la cámara de vigilancia dispuesta en el frontis; en la foto 3, la cámara que apunta a los

pasillos y habitaciones del primer nivel; en la foto 4, el DVR, el que se encontraba estaba conectado; en la foto 5, una de las habitaciones del primer nivel; en la imagen 6, los preservativos. Estaban en un velador, sobre éste en la pieza que se observa en la foto anterior; en la fotografía 7, preservativos, pero de otra habitación; en las fotografías 8 y 9, un closet; en la foto 10, se observa la cámara que apuntaba al acceso de las escaleras; en la foto 11, se ve la cámara que apuntaba al dormitorio en donde estaban las niñas, en el segundo nivel; y, en la imagen 12, se aprecia el dormitorio de las niñas en el segundo nivel.

El funcionario Santelices, indicó que le correspondió participar también en otra diligencia de relevancia, a saber, la toma de declaración de la víctima **“Araceli”**. Esta joven, le relató que era paraguaya, de la localidad de Coronel Oviedo, distante a tres horas de Asunción. Que vivió con una tía, porque la mamá la abandonó a los cuatro meses de vida. Luego, al separarse su tía, ella se quedó con la pareja de ella, a quien le decía papá. Este hombre trabajaba como albañil y su hermana, hacía aseo en distintas casas. Araceli estudiaba y trabajaba en un patio de comidas. Y su vecina Jannyré le cuenta que se venía a Chile a trabajar, “acostándose con hombres por plata”. Fue así como Jannyré se trasladó a Chile y a los días, tomó contacto con ella para saber cómo había llegado, pero en esa misma conversación le dijo que estaba interesada en trabajar en lo mismo. Obtuvo el nombre de la señora para la cual Jannyré iba a trabajar, de nombre María Sosa y se contacta con ella. Jannyré le dijo que era complejo el trabajo, ya que debían tener relaciones con desconocidos. Araceli y María, hablaron en guaraní y acuerdan el traslado. Al día siguiente, María Sosa le dice que los pasajes estaban comprados, que debía de ir a Asunción y que en ventanilla diera su nombre. Sigue las instrucciones y llega hasta el terminal de buses y pide su pasaje, le dan un número de asiento y comienza así su traslado a Chile. Dijo que el viaje duró cerca de 33 horas, y que pasó por Paraguay, Argentina y Chile. En el terminal, se contactó con Jannyré y a los minutos, ésta llegó en compañía de María, la que venía conduciendo un auto gris e cuatro puertas.

Araceli, relató también que la trasladaron hasta la casa de Ruiz de Gamboa 029, y que eso fue el 7 de septiembre. Ese día, conversó con las demás chicas que estaban en la casa, nombrando a Hilda, “Soe”, Jannyré y Élide. Ellas le cuentan sobre los valores que tenían los servicios y el día 8 atendió a su primer cliente. Indicó que por media hora de relaciones sexuales se cobraba \$30.000, por una hora, eran \$40.000. El día 9 fue fotografiada en uno de los dormitorios, con su compañera Jannyré. Las fotos las sacó María, y luego fueron hasta una agencia que se llamaba “sexo.cl”. Agregó que firmó un par de documentos para que sus fotos fueras subidas al portal. No tuvo que pagar porque María pagaba mensualmente por las publicaciones. Después de eso, volvieron a la casa y trabajó un par de semanas, hasta que fue trasladada al departamento 1005 de Santa Rosa 170.

Araceli declaró que, al conversar con María Sosa sobre las condiciones del trabajo y los gastos, María le dijo que tenía que cubrir los gastos por transporte, y que el pasaje le había costado \$250.000, pero que este monto se lo podía cancelar a medida que trabajara. Cuando llegaron al inmueble, el día 27 de noviembre, dice que había llegado hace unos 15 días, ya que antes había estado trabajando en Santa Rosa.

Añadió que Jannyré le había comentado que el trabajo era rentable porque trabajaban en el mismo lugar en donde vivían, y que no tenían que pagar arriendo. Señaló también, que dentro del tiempo en que estuvo trabajando, había terminado de pagar la deuda por el pasaje desde Asunción.

También, dijo que toda la comunicación que tuvo con María antes de su viaje fue por WhatsApp, y que no tuvo acceso al pasaje, solo llegó a la ventanilla y ahí le asignaron un asiento.

El testigo Santelices, dijo que se dejó constancia de este relato, que se ahondó un poco más, y que él podía percatarse que Araceli era muy niña, tenía recién cumplidos los 18 años, y presentaba bastantes carencias familiares. Luego de que prestó declaración el día 27, se reunió todo el grupo de estas mujeres y las llevaron a Ruiz de Gamboa a buscar sus pertenencias. Él condujo el vehículo y luego fueron llevadas a una Casa de Acogida. Ellas no tenían donde llegar, no tenían redes ni

ayuda, en el caso de Araceli su única conocida era Jannyré y en el caso de esta última, lo mismo.

A las preguntas de contra examen, agregó que Araceli declaró sobre los horarios, indicando que la jornada de trabajo era de lunes a sábado y que el domingo lo tenían libres. Que, si querían ganar más plata, debían trabajar más de madrugada. Araceli contó que se limitaban a salir a hacer las compras de alimentación y ya. Que no conoció la ciudad ni la playa.

A las preguntas de la defensa, indicó que todas las chicas hablaban en guaraní, cuando estaban distraídas, pero cuando hablaron con ellos (los funcionarios) hablaban y entendían el español. Agregó que no mantenían llave del inmueble, debido a que siempre quedaba alguien en la casa. De hecho, cuando se fueron a la unidad, les solicitaron que la puerta quedara abierta, sin seguro, ni nada, para poder entrar. Añadió que todas portaban sus documentos identificatorios.

Indicó también que, Araceli declaró sobre las condiciones del trabajo, diciendo que Jannyré le había comentado que lo que ganaba se dividía, y un 50% era para ella y el resto para María Sosa, pero que desconocía para que María usaba ese porcentaje recibido. Manifestó también que varios de los clientes pagaban previamente y hacían depósitos y que los teléfonos los mantenía María Sosa y ella coordinaba todo. Dice que logró pagar su pasaje en un mes de trabajo.

Araceli declaró además que la casa era normal y que ella debía financiar su comida. Dijo que tenía todo lo básico, ya que tenía agua, luz y cama, y el funcionario Santelices supone que también internet, lo que concluye porque supo que el DVR estaba con una conexión activa. Por último, que, al salir de la casa, por ejemplo, a comprar, no existían limitaciones o restricciones previas.

Que, durante las audiencias de juicio se incorporaron mediante su lectura, documentos relativos a “Araceli”, de iniciales A.N.I.G. Así, se aportó copia de la Cédula de Identidad extendida por la República del Paraguay como **Prueba Documental N° 51**; y, la Información de Pasajero y Movimientos Migratorios respecto de Araceli I.G., extendida por la Dirección General de Migraciones de la República

del Paraguay, individualizada como **Prueba Documental N° 65.5**, y remitida por el Oficio de 17 de diciembre de 2019, incorporada como **Prueba Documental N° 65**.

Que, prestó declaración, además, el subcomisario de la Policía de Investigaciones de Chile **Javier Cárcamo Quezada**, miembro de la BITRAM desde el año 2012 a la fecha.

Cárcamo indicó que debido a las funciones que cumple, el día 27 de noviembre de 2019 se enteró de una situación que se había dado, vinculada a una investigación que estaba dirigida por otras funcionarias. Lo que se sabe es que la persona investigada tenía orden de detención, despachada por el tribunal el día 26 y que ésta se había presentado al tribunal. Se tomaron las medidas, entonces, en cuanto a formación de equipos y estrategias a seguir, por cuanto había mujeres que habían sido trasladadas a Chile para ejercer el comercio sexual y se tenían tres inmuebles en donde aquellas mujeres trabajaban. “¿Que había pasado con las mujeres?, no se sabía”, afirmó el testigo.

Por ello, se decidió acudir a los domicilios investigados, por medio de entradas y registros voluntarias. De esa manera, distintos equipos de la brigada se despliegan en esos tres inmuebles, y en su caso va con la funcionaria Constanza Olivares a un departamento ubicado en calle Santa Rosa 170, el departamento 1005, y otros funcionarios fueron al mismo domicilio, pero al departamento 704 y al tercer domicilio de la comuna de Providencia.

Indicó que cerca de las 13 horas, y por una comunicación con la fiscalía se enteró que la situación con la acusada, y que las entradas se comenzaron a realizar cerca de una hora después, cerca de las 13:55 horas aproximadamente.

En el departamento 1005, él y su acompañante fueron atendidos por una mujer paraguaya, de nombre Jessica. Manifestó ser residente en ese lugar, y se le da a conocer las diligencias y el motivo de la presencia policial. Se le pidió la autorización para ingresar al domicilio y ella accedió voluntariamente. Autorizado que fuere, ingresaron al domicilio y constataron que había otra mujer de origen paraguayo de

nombre “Laura”. Se les representa las diligencias que estaban haciendo y la necesidad de contar con elementos que les iban a servir para la investigación. Dentro de ese contexto, se les indica que la diligencia tenía por objeto, por ejemplo, encontrar especies de interés, si es que ellas entregaban voluntariamente tales especies y ellas accedieron a dicho requerimiento. Así, Jessica entregó su equipo telefónico, dos cuadernos que estaban sobre una mesa de comedor y una cajita que estaba en el velador de la pieza principal, con preservativos y lubricantes, entre otras cosas que tenía esa caja. Laura entregó su teléfono y una libreta. La relevancia de los cuadernos era que tenían anotaciones con registros de servicios sexuales. Se confeccionó un set fotográfico con relación a ese inmueble y se dejó una descripción escrita de ese departamento.

Se le exhibió al testigo Cárcamo, **Otros Medios de Prueba N° 97**, correspondiente a varias fijaciones fotográficas de la diligencia antes descrita, que el testigo reconoce y explicó.

En efecto, señaló que en las fotos 1 y 2 se observa el cuaderno que se encontraba sobre la mesa; en la foto 3, 4, 5, 6 y 7 se aprecian registros o anotaciones, en las que se leen valores, atribuyéndolos a distintas mujeres, como por ejemplo, Jessica o Jessi, Soe, Pao, Janny, Nicol, Mariana, Mirna, Lucía, Nachi, Naomi y Tatiana; en la foto 8: se observan anotaciones con letra manuscrita en una hoja del mismo cuaderno, apreciándose una referencia con un determinado lugar, así, se lee “Metro Salvador: Ruiz de Gamboa con Francisco Manterola”, “Metro Santa Lucía: Santa Rosa con Curicó”, “30 normal, 40 la completita”.

Se incorporó también **Otros Medios de Prueba N° 95**, correspondiente a otro set fotográfico, que el testigo Cárcamo reconoció, aseverando que en las imágenes 1 y 2, se observa un cuaderno o agenda con una mariposa, que se levantó ese día y que estaba al interior del departamento; que en las fotos 3 y 4, se aprecia una lista de números telefónicos con algunos nombres anotados en dicha agenda; en la foto 5, una anotación que refiere “mi número: 56 948961093”; en la foto 6, una anotación que señala “Santa Rosa 170 departamento 1005”.

Luego, se exhibió la **Prueba Material N° 16, 17 y 18**, y el funcionario Cárcamo expresó que corresponde a la evidencia levantada por él, reconociendo un cuaderno universitario y una libreta color rosado con inscripciones (16 y 17, respectivamente) y que además reconoce aquella cadena de custodia rotulada como NUE 5041249 levantada en el mismo departamento 1005 (prueba material 18).

Agregó que, con posterioridad, cuando finaliza la diligencia en el departamento 1005, se invitó a todas las mujeres a prestar declaración, y se dirigieron a dependencias de la BITRAM, en conjunto con las demás mujeres ubicadas en los otros dos domicilios.

Javier Cárcamo señaló que, además, le correspondió entrevistar a dos mujeres, Jessica y Laura.

Con relación a la entrevista con “**Jessica**”, el testigo Cárcamo relató que dicha mujer expresó que su nacionalidad era paraguaya y tenía 21 años. Al ser consultada por su presencia en ese lugar, dijo que había viajado a Chile en unas 5 o 6 ocasiones, y que la primera de ellas fue en el 2016, invitada por su tía, la imputada de la causa, con la finalidad de que pudiese colaborar con los cuidados de un hijo que tenía o estaba por nacer. Tenía 18 años en esa oportunidad y su familia accedió a dicho viaje, dándole permiso. Describe que estando en Chile y ocupándose del niño, descubre o conoce la actividad que tenía María y conoció a las mujeres que trabajaban con ella. Dio algunos nombres de mujeres y añadió que todas ellas fueron traídas por la tía, quien les pagó el pasaje, y coordinó también el traslado, para ejercer la prostitución. Indicó también que las ganancias se dividían en 50% para la mujer y el 50% restante para la acusada, y que una vez en Chile con trabajo, le devolvían el dinero del pasaje.

Jessica describe que durante tres meses se dedicó a ver al niño, pero que habría conversado con la tía para ver si podía hacer el mismo oficio y la tía aceptó, previa advertencia que se le cobraría el mismo porcentaje que a las demás. Agregó que permaneció en Chile hasta fin de año. Javier Cárcamo declaró que pudieron constatar que durante el año 2016 salió del país y que luego reingresó y permaneció en Chile hasta fines de 2016, con fines de comercio sexual.

Jessica señaló que después de terminado el 2016 volvió a su país, y que en los dos años siguientes viajó a Chile, pero ya no ejerciendo la prostitución con la tía, sino que, con otra mujer, de nombre Berta Gaúto. Mencionó que, en agosto de 2019, había tenido problemas con Berta y que por ello se fue a Antofagasta, siempre en el comercio sexual, a una casa clandestina en donde deben presentarse. Al cabo de un mes, se devuelve a Santiago a ejercer la prostitución, pero en septiembre de 2019 vuelve al lado de su tía.

Posteriormente, el funcionario Javier Cárcamo dio cuenta de la entrevista que tuvo con “**Laura**”. Esta mujer, también paraguaya, indicó que tenía 29 años y que había viajado a Chile en dos oportunidades. Su primer viaje, fue el año anterior y que ambos viajes tuvieron como fin, el ejercicio de la prostitución. Señaló que en su primer viaje trabajó en San Francisco 335, de la comuna de Santiago y estuvo ahí meses. Después de eso, retornó a su país. Que luego, estando en su país, tomó contacto con una prima lejana, que correspondía a “Jessica” y por medio de ella se contacta con María Sosa y es con ella que acuerda y hace arreglos para venir a Chile en una segunda ocasión.

En este segundo viaje (a diferencia del primero) fue María quien financió el viaje y por eso se traslada a Chile. Dice que arribó a Chile, el 2 de noviembre de ese mismo mes en que se ejecutaba el procedimiento, lo que se contrastó con control migratorio, concluyendo el testigo que dicho antecedente era efectivo.

Laura le expresó que llegó a Chile para ejercer la prostitución. Dijo que ya había dado prestaciones, pero pocas, solo dos, pero se debía porque aún no había sido publicada, y que las atenciones que realizó fue por clientes que habían llegado a un departamento buscando a otras mujeres, pero ellas no estaban disponibles.

Javier Cárcamo relató que Jessica le dijo que ella atendía a 9 clientes por día, mientras que Laura dijo que solo atendió a dos clientes (hasta la fecha de la entrevista).

Laura, con esas atenciones a esos dos clientes, había financiado la deuda que se originó por su pasaje. Agregó que no había sido presionada para tener relaciones sexuales, o para trabajar más, por ejemplo.

Que, cabe consignar que se incorporó durante la audiencia de juicio y por medio de su lectura, el Oficio de 17 de diciembre de 2019 emanado de la Dirección General de Migraciones de la República del Paraguay, que remitió información sobre Datos del Pasajero y Movimientos Migratorios de las personas encontradas el día del procedimiento de entrada, registro e incautación e individualizado como **Prueba Documental N° 65**. En este instrumento se remite, por tanto, la información de viajes y salidas desde Paraguay de varias de las afectadas, incluida “Laura”, de iniciales L.E.A., en la que aprecia una salida con destino a Chile el día 1 de noviembre de 2019 (**Prueba Documental N° 65. 4**). De igual modo, se incorporó la Prueba **Documental N° 55**, correspondiente a una copia del pasaje de “Laura”, de fecha 1 de noviembre de 2019, en la empresa Pullman del Sur; y copia de la Cédula de Identidad extendida por la República del Paraguay, ya la citada Laura E.A. como **Prueba Documental N° 56**.

Luego, el funcionario Cárcamo indicó que se verificó una situación, a lo largo del día, por lo que debió concurrir (después de las entrevistas, y pasadas las 19 horas) al edificio de Santa Rosa 170. Lo que ocurrió fue que se determinó que, en uno de los inmuebles, que correspondía a la residencia habitual de la acusada, -el departamento 704- se encontraron ciertas evidencias, pero que de aquellas especies incautadas no se verificaban buenos resultados. Señaló que hay que considerar que, al ser una entrada y entrega voluntaria, las especies a los que se podía tener acceso eran solo aquéllas que las personas accedían a entregar. También precisó que, en la brigada, trabajan por equipos y los resultados son conocidos por todos. Por otra parte, añadió que efectuó una fijación fotográfica del departamento 704, que no estuvo en la incautación, pero si tomó fotos e hizo la descripción del mismo inmueble, tal como consta en el informe policial.

Insistió que, al hacer un chequeo de resultados con los demás integrantes de la brigada se determina, además de la información que estaba apareciendo de las declaraciones, que el domicilio particular de María Sosa era el 704, pero lo incautado no decía relación con ella, y por lo mismo, no colaboraba al esclarecimiento de los

hechos. Supo, por el trabajo colectivo de la brigada, que las especies levantadas fueron recibidas por las funcionarias Giselle Rojo y Bárbara Madariaga. Ellas incautaron dos cuadernos y dos computadores. Del mismo modo, se enteró que quien autorizó la entrada y la incautación voluntaria fue una mujer paraguaya de nombre “Tania”.

Que, con la información de que la diligencia en el departamento 704 no había arrojado los resultados esperados, se comunicaron con el Ministerio Público, quien hace las gestiones de rigor con el tribunal y en horas de la tarde, se autoriza la entrada y registro con incautación de las especies vinculadas a la imputada, y se levantan varios dispositivos electrónicos y computacionales y un vehículo. Añadió que todo esto se tuvo que realizar por partes, porque él estaba aún tomando declaraciones y que dentro de los funcionarios que asistieron a tal diligencia recordaba a Piero Gellona y Constanza Olivares.

Javier Cárcamo declaró que acudió al departamento 704 de Santa Rosa 170 cerca de las 20:30 horas, indicando que el funcionario Gellona había ido una hora antes. Relató que acudió en compañía del detective Juan Oliveros y otra funcionaria, que pudo haber sido Giselle Rojo, aunque no lo puede precisar, y que, una vez en el lugar, se materializa la incautación de un vehículo, un computador más y algunos equipos telefónicos, haciendo presente que se trataron de 17 celulares, solo tres de dichos equipos tenían simcard o chip que los vinculara a un número telefónico. Recordó que, entre esos celulares, se encontró un iPhone, un LG o Motorola y un Samsung, y que el resto, eran celulares antiguos o más económicos, bien deteriorados, sin tapa, sin batería, bien desarmados. Encontraron también cinco nano chips sueltos, dos pendrives y además de eso, al materializar la incautación del vehículo, se incautaron tres pendrives más, finalizando la diligencia pasadas las 21 horas.

Que, a continuación, se incorporó la **Prueba Material N° 23**, la que el testigo reconoció como la que correspondió a la evidencia levantada por Constanza Olivares, con la NUE 5941242, se trata de un celular, (un Smartphone de color negro), afirmando el testigo que se trata de uno de los celulares incautado, marca Nokia.

De igual modo, Javier Cárcamo reconoció la **Prueba Material N° 24 y 24.1**, que corresponde a la cadena de custodia levantada por Juan Oliveros con la NUE 5941250, consistente en un equipo computacional (computador o notebook de color negro y rojo) y los pendrives que fueron encontrados en el departamento 704.

Luego, reconoció la **Prueba Material N° 25**, correspondiente a la NUE 5941251. Señaló que se trata de la cadena de custodia, levantada por Juan Oliveros, a las 20:36, en relación con la libreta color gris con dibujos de sandía.

El testigo Cárcamo dio cuenta, al observar la **Prueba Material N° 26 (y aquellas consignadas como 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9, 26.10, 26.11, 26.12, 26.13, 26.14, 26.15, 26.16 y 26.17)** señaló que aquellas corresponden a la NUE 5941252, misma incautación, a las 20:32 y a los teléfonos celulares descritos en el anexo de la cadena de custodia. Reconoció y describió los equipos, expresando que correspondían a un celular iPhone; a otro marca Samsung; a otro Samsung pero sin tapa trasera; a otro equipo, marca Huawei, sin tapa trasera; a un celular cuya marca no puede distinguir, sin batería y tapa trasera con la pantalla quebrada; a un equipo marca Azumi, sin batería y sin tapa; a un celular LG; a un celular gris y negro, marca Motorola; a un celular blanco o gris, sin tapa, cuya marca no distingue; a un celular blanco marca Sony Xperia; a un celular Nokia, un modelo más antiguo, sin tapa trasera y sin simcard; a un celular antiguo, con un papel adosado en la parte posterior con la palabra “Yani”; a un celular negro, cuya marca no se ve, pero que cree que es un Samsung, también con un papel pegado atrás; a un celular negro, con un papel con la palabra “SOS” sin su tapa posterior. Agregó que todos estos equipos, estaban en la habitación que correspondía a la imputada principalmente, algunos estaban en una bolsa, que correspondían a los celulares que les faltaban piezas. Reconoció también un celular de color negro, marca Azumi, con un papel pegado atrás; a un celular marca ZTE, negro, con un papel pegado atrás y a un celular color negro, marca Nokia, sin tapa y sin batería, reiterando que se trata de los 17 equipos incautados en la diligencia en que participó.

Luego, el testigo Cárcamo describió el departamento 704. Indicó que se ubicaba en el piso 7, el acceso correspondía a una puerta de madera, con su numeración en números grises, y hacia al interior, hacia la izquierda, estaba el baño y la habitación principal, y al frente el espacio correspondiente al living y comedor, y a la derecha, la cocina y una segunda habitación.

Agregó que encontraron evidencias relacionadas a actividad sexual. Así, por ejemplo, en el departamento 1005, encontraron una caja con preservativos y lubricantes y además, se encontraron unas especies de altares, en donde se mantienen algunas figuras con billetes y velas. Ello se utiliza -afirmó Cárcamo- para llamar clientes, y es de común ocurrencia en los prostíbulos. Añadió que en el departamento 704, en donde se establece la residencia de la imputada, se encontró una gran cantidad de teléfonos, compatible con esta actividad, y como se desarrolla, en donde hay una persona que administra y coordina los teléfonos. En los departamentos también están los registros escritos, en cuadernos y libretas, con las anotaciones de prestaciones de servicios sexuales, en relación con nombres y valores de precios que han sido cobrados por cada tipo de servicios.

Al observar la **Prueba Material N° 15**, el testigo Cárcamo señaló que corresponde a la evidencia levantada en el departamento 1005, con la NUE 5941247, a las 14:05 horas y que corresponde a una caja de cartón café, que contiene preservativos y lubricantes. Es una caja (de zapatos) con la inscripción “Agta”, en cuyo interior, se encontraron cajas con preservativos, marca “Gusto”, un gel lubricante marca “Bentley”, un líquido lubricante marca “Touchme”, dos preservativos, de la misma marca “Gusto”, y otros objetos como agujas e hilos de diversos colores.

Al contra examen, el testigo Cárcamo, insistió en sus dichos, sobre no liderar la investigación ya que estaba a cargo de otras oficiales de caso; que las entradas y registros que se efectuaron fueron todas en calidad de voluntarias, autorizadas por las personas que correspondía como encargadas, dado que estaban ahí y residían en cada lugar. Añadió que, con relación a los celulares entregados por Jessica y Laura, a él no le correspondió el análisis de tales evidencias.

Agregó (a una de las preguntas de la defensa) que Jessica indicó que ellas contestaban los teléfonos celulares cuando alguna estaba ocupada, y que el 50% entregado a su tía era por concepto de arriendo, internet, servicios básicos y publicaciones. Jessica también dijo que el día domingo era libre, que, sin perjuicio de ello, había horarios, no recordando si las mujeres podían trabajar fuera de ese horario. En todo caso, el testigo aclaró que el horario referido por Jessica era bastante extenso, comenzando en la mañana y finalizando a la madrugada. Por último y con relación a Laura, agregó que ella le reportó no tener restricciones de salida para ir a algún lugar y que viajó a Chile para trabajar en prostitución, afirmando que no había engaño en la actividad que iba a desarrollar.

Que, como se indicó precedentemente, prestó declaración el funcionario **Juan Carlos Oliveros Narea**, quien (como refirió el testigo Cárcamo) participó en la diligencia de entrada y registro al departamento 704, que se produjo pasadas las 20 horas del día 27 de noviembre de 2019.

Tal y como señaló Javier Cárcamo, indicó que concurrió en compañía de ese y de la funcionaria Giselle Rojo. Expresó que al llamar a la puerta, fueron recibidos por “**Tania**”, a quien se le exhibió la orden judicial que habilitaba la entrada, y que se incautaron una serie de evidencias, tales como, un computador marca Samsung color rojo con negro, dos pendrives, uno color negro y otro con forma de llave, una agenda, 17 teléfonos celulares, 5 tarjetas SIM, y el vehículo usado por la imputada María Sosa, el Kia Rio 5, estacionado en el estacionamiento N°34, y al interior de este automóvil, se encontraron 3 pendrives, también incautados.

Al apreciar los **Otros Medios de Prueba N° 83**, reconoció las fotografías como aquellas en donde se fijaron las especies incautadas que acaba de mencionar. Así, en la foto 1, señaló que era el Samsung, color rojo y negro, el que luego de ser analizado, se determinó que le pertenecía a Luis Araya Espinoza; en la foto 4, indicó que se veían los pendrives incautados en el departamento, uno forma de llave y otro pequeño, sin marca ni modelo ni capacidad visible; en la foto 5, señaló que se veía la agenda

incautada (con diseño de sandías), con una letra “J” sobre su portada; en la foto 6, refirió que se apreciaba el interior de la agenda. Señaló que se observan anotaciones de distintas y fechas y diversos montos (\$30.000, \$40.000) y que correspondían a los valores de los servicios sexuales prestados por las víctimas. Esta agenda, fue encontrada al interior del departamento; en la foto 7, dijo que se trataba de un celular, color negro, no recuerda marca ni modelo; en la foto 8, se trataba de un iPhone blanco; en la foto 9, un celular Azumi, color negro; en la foto 10, se aprecian un conjunto de celulares que obedecen, al igual que en las imágenes anteriores a aquellos incautados en el departamento 704. Agregó que la mayoría de dichos aparatos no son del tipo “Smartphone”, es decir, no se puede instalar una aplicación como de WhatsApp, solo se pueden hacer y recibir llamadas y mensajes de texto; en la fotografía 11, señaló que se apreciaban más teléfonos incautados de los ya mencionados y en la imagen 15, se observan las cinco tarjetas SIM incautadas desde el mismo departamento 704.

Luego, se hizo incorporación de los **Otros Medios de Prueba N° 82**, que también corresponde a un set de fotografías, las que el testigo Oliveros reconoció como aquella parte del procedimiento en que se incautó el vehículo Kia, que era usado por la acusada María Sosa. Refirió, al observar las imágenes 1, 3, 4, 11, 12, 13, 14 y 15 que en ellas se observaba el automóvil Kia, estacionado en el estacionamiento N° 34 del edificio de Santa Rosa, tanto desde el exterior como en el interior del habitáculo. Señaló también, que en la foto 16 y 17 se observan los 3 pendrives encontrados en el interior del vehículo, uno de color amarillo, un azul marca “Maxell” y otro de color negro, de la misma marca.

El testigo Oliveros, indicó que el correspondió hacer un análisis de los tres pendrives encontrados al interior del auto Kia, y que, tanto en el pendrive azul como en el negro, no encontraron contenido de interés, sin embargo, al interior del pendrive amarillo encontró un manual de usuario y aplicaciones ejecutables de instaladores de sistemas informáticos de uso exclusivo de la Policía de Investigaciones de Chile,

GEPOL y Extranjería. Debido a que sus competencias no son en lo informático, dicha evidencia fue enviada para su revisión a la brigada del Ciber-crimen.

Luego, y la exhibición de la misma evidencia fotográfica (Otros Medios de Prueba N° 82) indicó que en las fotos 21 y 22 se observan documentos personas de María Sosa que se encontraban al interior de la guantera del automóvil Kia. Así, se pudo apreciar la licencia de conducir de la acusada, extendida en Paraguay, documentación asociada al vehículo tales como seguro y comprobantes de pago de multas a nombre del propietario del vehículo; en la imagen 23 se detalla una imagen de la Licencia de Conducir y la Cédula de Identidad Civil de María Sosa, documentos ambos extendidos por la Republica del Paraguay.

Juan Carlos Oliveros relató al tribunal que participó en el análisis de otras evidencias, como, por ejemplo, el notebook marca Samsung, color rojo y negro. Explicó que, como elementos de interés, encontró en dicho dispositivo fotografías y documentos, pasajes tickets aéreos de la acusada adquiridos en Latam, reservas de vuelo a nombre se María Sosa, comprobantes de pagos de esos vuelos; una fotografía correspondiente a un comprobante de transferencia bancaria, desde la cuenta de la imputada en que se transfieren \$500.000 a la cuenta de Luis Araya con el comentario “pago cuota del auto”.

Que dicha imagen de comprobante fue incorporada (y reconocida por el testigo) como **Otros Medios de Prueba N° 117**, en la que se aprecia el contenido aludido por el funcionario Cárcamo y la fecha de la operación bancaria (21 de junio de 2017).

Oliveros expresó que además se encontró como parte del contenido del notebook, una Liquidación de sueldo de Luis Araya, la que reconoció al ser exhibidos los **Otros Medios de Prueba N° 116**, la que corresponde a un documento, extendido por “EFT Group” por la suma de \$1.862.632.

Por último, el funcionario Oliveros, indicó que analizó un celular marca Apple, de propiedad de una de las víctimas de nombre Jessica, encontrada en el departamento 1005. Indicó que pudo apreciar conversaciones de mensajería instantánea en que Jessica hablaba con “Jany” o Jannyré, en que ambas hacían alusión a la presencia de

cámaras y micrófonos al interior de los domicilios y que se encontraban incluso al interior de los dormitorios en que ejercían el comercio sexual, y que todos estos dispositivos eran controlados por la imputada María Sosa. También pudo ver conversaciones que Jessica sostuvo con un contacto de nombre “Freddy”, y con otro contacto de nombre “Eli-Amor”, nombre que obedecía a otra de las víctimas, de nombre Élide. En la conversación que sostiene con Élide se da cuenta que con motivo del procedimiento que se estaba gestando el día 27 de noviembre de 2019, Jessica habría apagado y escondido en la bodega los celulares que eran usados por María Sosa, a fin de evitarle un perjuicio mayor.

Que, en los apartados siguientes, se analizarán diligencias de toma de declaración de parte de las mujeres rescatadas, así como de las restantes operaciones de investigación desplegadas por la BITRAM con motivo de este proceso. A modo de síntesis, cabe únicamente, recordar que las mujeres que fueron encontradas en los inmuebles a cargo de la acusada fueron siete (conforme los dichos de los testigos Javier Cárcamo, Juan Santelices y Juan Oliveros), a saber, Hilda, Sonia, Élide, Jannyré, Araceli, Jessica, Laura y Tania.

5.- Antecedentes relativos a la toma de declaración de víctimas por parte de la oficial de caso Nicole Salinas, análisis de celulares de Laura y Jannyré.

Que, la testigo **Nicole Salinas**, en una declaración que duró varios días, expuso al tribunal sobre una serie considerable de diligencias que realizó antes y después de la detención de María Sosa, habida cuenta que en la fecha en que se verificó la detención y las diligencias de entrada y registro, ella se encontraba haciendo uso de su feriado legal. Al reincorporarse a sus funciones, debió imponerse del estado en que se encontraba la investigación y realizó, una serie de diligencias, destacándose las que se señalarán a continuación.

En efecto, explicó que en el mes de diciembre presencié la declaración de “**Sonia**” en la fiscalía. Destacó, dentro de esta declaración, que Sonia relató en primer

lugar, antecedentes sobre su vida en Paraguay, de dificultades económicas y estudios incompletos. Que, decidió venir a Chile, en busca de una mejor situación ya que se había quedado sin trabajo y el que tenía, no le permitía sostenerse, si ella ni a su hijo. Entonces, se contacta con su hermana Hilda, que ya estaba en Chile, y por su intermedio, se contacta con María Sosa, por medio de WhatsApp. Sosa le dice que se puede venir a Chile, y le cuenta que el trabajo a realizar es el comercio sexual, y que le iba a generar muchas ganancias. María le dijo que le compraría el pasaje en bus, en la empresa Pullman del Sur, cuestión que ocurrió y así ingreso a Chile desde Asunción. Su llegada fue el 19 de octubre de 2019, información que los policías verificaron con sus registros institucionales.

Ya en nuestro país, María le dice a Sonia que el pasaje debía serle devuelto, y que le habría costado 800.000 mil guaraníes, una suma cercana a los \$100.000 chilenos, pero María le dijo que el costo era de \$150.000, monto respecto del cual, \$30.000 iban destinados a su hermana Hilda, por el contacto. Dijo que esta modalidad la vio también en otras mujeres, porque a Araceli le pasó lo mismo, y, de hecho, a ella le cobró más dinero por el pasaje.

Al llegar al terminal en Santiago, Sonia declaró que es recibida por María Sosa y su hermana Hilda y que fue trasladada al departamento 1005, en donde se instala. Señaló que en ese lugar estaba Araceli, Jannyré y rectifica, también estaba Hilda, y Tania apodada “Lucía”, que fue la persona con la que María Sosa la fue a buscar. Luego de un tiempo ahí, se fue durante la primera semana de noviembre a Ruiz de Gamboa.

Sonia expresó que el día que llegó a Santiago, en el trayecto, María le hizo preguntas respecto a que servicios iba a entregar ella, y ella le contestó que sexo normal, es decir, vaginal, y María le explica que para ganar dinero debe hacer adicionales, lo que corresponde a sexo anal, oral, lesbianismo, entre otros.

Sonia relató que, desde su llegada, le dio aviso a María que tenía fisuras anales, y que de hecho, durante su periodo también tuvo problemas de salud asociados a su periodo, por lo que a veces debió negarse a prestar servicios sexuales, por lo que

mantuvo discusiones por María, la que le decía que para qué vino a Chile si no iba a atender clientes, Sonia expresó que nunca había salido de su país con anterioridad y que era la primera vez ejerciendo el comercio sexual.

Indicó también que se le había comentado de forma previa que ejerciendo la prostitución iba a ganar mucho dinero, y que ese dinero iba a ser alcanzado con la atención de pocos clientes, pero luego se enteró por dichos de María que sólo con “adicionales” se ganaba más. Es así donde se entera que las condiciones son otras, y se siente estafada, porque tendría que haber atendido a más de 10 clientes por día.

Una vez trabajando, Sonia se da cuenta de que los horarios son de lunes a domingo de las 9 a las 2 de la mañana y que también había horario “full time”. Señaló que desde su llegada estuvo dispuesta para ejercer el comercio sexual, sin embargo, su primer clientes fue a 3 días de su llegada, porque el día 19 de octubre fue “el estallido” y no hubo clientes.

Sonia declaró además que en departamento 1005, observa y conoce a Jannyré y Araceli, estaban listas con short, para trabajar, pero no tuvieron clientes. El tercer día, tuvo su primer cliente, y explicó sobre las prestaciones sexuales. Dijo que si mantenían relaciones sexuales por una hora el precio era \$40.000 lo que incluía “dos contactos”, y que se incluía sexo vaginal, oral y anal. Un solo contacto costaba \$30.000. Sus nombres de fantasía eran “Arelis”, “Zoeli” o “Soe”.

Indicó que le tomaron fotografías con el objeto de ser publicada, pero no supo si eso se concretó o no. Indicó que existía un grupo de WhatsApp en donde debían informar la prestación de los servicios sexuales cuando el cliente se retiraba, por ejemplo, ella debía escribir “Soe, tal valor”.

Nicole Salinas expresó al tribunal que el día en que presencié la declaración de Sonia ella estaba visiblemente afectada, lloró en varias oportunidades y dijo estar preocupada, porque había recibido mensajes de “Tati”, que era “Lucía”, y esta mujer le había dicho que había hablado con María y que ésta saldría (de su privación de libertad), que por qué habían hablado y que aquello le preocupaba porque asumía que María era una persona amenazante y maltratadora. Hizo presente que usó esta

palabra, “maltratadora” debido a las discusiones que tuvo con ella en relación con los servicios que Sonia no quería prestar y también por el control que María Sosa ejercía sobre todas las trabajadoras.

Finalmente, Sonia hizo alusión a que siempre estaban en el departamento, y que si bien, podían salir de éste, solo les era permitido hacerlo para cuestiones puntuales y por periodos breves, como, por ejemplo, salir a enviar dinero a su país, y que María siempre las controlaba, por medio de cámaras que estaban en el departamento de Santa Rosa y en Ruiz de Gamboa.

Luego, Nicole Salinas, dijo que tuvo contacto con “**Laura**”, ya que participó en la declaración que prestó dicha víctima en fiscalía el 5 de diciembre de 2019. Indicó que esta mujer contó que tenía una hija de 9 años, que mantenía una enfermedad cardíaca, que en su país de origen vendía pollos junto a su madre, y que tenía una mala situación económica y que, por ello, al buscar una alternativa laboral llegó al trabajo que ofrecía y promovía María Sosa.

Laura relató que viajó a Chile en dos oportunidades, la primera fue en el año 2018, no recordando la testigo Salinas si la víctima dio referencias sobre el motivo o la actividad que realizó en dicha primera visita al país. La segunda vez, fue directamente a trabajar con María y por ello, llegó a Chile el 2 de noviembre de 2019, y al igual que en el caso de Sonia, se corroboró esa información por las vías institucionales, de control migratorio. Ingresó en bus, por el paso Libertadores, por la misma línea que las otras mujeres, Pullman de Sur, desde Paraguay, en calidad de turista.

Laura expresó que el motivo de este viaje a Chile era atendido únicamente por su situación económica. Así, se puso en contacto con una prima, de nombre Jessica, que es Jessica Sosa, sobrina de María, por cuanto necesitaba encontrar un trabajo por la enfermedad de su hija. Precio contacto con María por WhatsApp, ésta le indica que le pagará el pasaje y que para ello debe dirigirse hasta Asunción a la línea de buses Pullman de Sur, en donde le será entregado el pasaje. Indicó que aquello ocurrió, por cuanto un funcionario de dicha empresa la contacta y le entrega el pasaje y un sobre

que contenía la cantidad de 300 dólares, sobre que le fue entregado ya al interior del bus, en el trayecto, refiriéndole el sujeto que era lo que le mandaba María. Se le indicó por María que aquel dinero correspondía a “viáticos”, pero eran para ser usados en el control migratorio, porque se le instruyó por María que ella debía decir que venía de visita y el dinero era para respaldo de dicha actividad.

Nicole Salinas refirió que se hicieron diligencias tendientes a la ubicación de este funcionario, descrito por las víctimas como un auxiliar que entregaba café, pero aquellas no rindieron frutos. Laura dijo que el sobre con los dólares se lo entregó al mismo sujeto, una vez que pasó los controles migratorios.

Cuando llegó a Santiago, la fue a buscar María en compañía que Tania, también llamada como “Tati” o “Lucía”, en el vehículo Kia Rio 5 y la trasladó hasta el departamento 1005, y luego de una semana, a la casa de Ruiz de Gamboa, debido a las reparaciones que iban a realizar en el departamento 1005.

Laura indicó que María Sosa le tomó fotografías con el objeto de ser publicada, pero que no se alcanzó a concretar aquello. Sin embargo, por órdenes de María usaba una publicación de otra mujer que ella no conocía. Indicó que su nombre de fantasía correspondía a “Naomi” o “Noemí”.

Sobre los servicios sexuales, Laura declaró en iguales términos que las demás víctimas, haciendo alusión al servicio de “domicilio”, que los pagos de las prestaciones sexuales eran por medio de transferencia o en efectivo, y que, en el caso de los pagos por transferencias, habían tres cuentas bancarias, la de María, la de su hermana y la de una pareja de María. Indicó que los datos de dichas cuentas se ubicaban en agendas ubicadas en los inmuebles. Cuando llegó, se la ingresó al grupo de WhatsApp, el que fue analizado luego de la entrega voluntaria que esta víctima hizo de su dispositivo móvil, el día de las entradas a los domicilios.

Laura refirió también que podía salir sin problemas o sin avisar, porque salía siempre en compañía de Jessica, sin embargo, las otras afectadas debían avisar la salida y la llegada en el WhatsApp, y que aquellas salidas, eran siempre por un tiempo breve.

Que se incorporó durante la declaración de Nicole Salinas (y también durante la declaración de Carolina Gatica), los **Otros Medios de Prueba N°90**, correspondientes a capturas de pantalla desde el celular de Laura, que aún conservaba las conversaciones del chat “Chicas Súper Poderosas” que María y las mujeres mantenían. Al observar las fotografías 1 y 2, Salinas explicó que se ve la creación del grupo y a María como administradora de este. Se ven nombres de mujeres integrantes del grupo como Jessica, o Lucía, que es Tania, la “mano derecha” de María Sosa. María Sosa se sale de este grupo el día 27 de noviembre de 2019. En las imágenes 85 y 86 que se le exhibieron, Nicole Salinas, indicó que se aprecia lo que ya habían señalado varias víctimas, esto es, que cuando se verificaba la prestación de un servicio, las víctimas debían indicar su nombre y el monto del servicio otorgado, tal como se aprecia en las fotos, “Naomi, 40 mil”, “Jany 30”, indicando que Jany es Jannyré, “Jesi 30”, que corresponde a Jessica, sobrina de María Sosa, “Lucía, 40 mil”, que corresponde a Tania. Asimismo, indicó que “Naomi” es Laura. Indicó que además se aprecian mensajes de María Sosa dándoles los buenos días y avisándoles que ya están encendidos los celulares, es decir, que, a partir de ese momento, debían prepararse para ejercer el comercio sexual. En las fotografías 112 y 113, indicó que se aprecian prestaciones de “Pao”, de Jessica y se ven imágenes que envía Lucía con los datos de las cuentas bancarias, en donde los clientes debían hacer las transferencias.

Nicole Salinas agregó que Laura, aportó varios antecedentes a su declaración. Así, respecto de su viaje, indicó que la compra del pasaje la realizó María Sosa y que una vez en Chile se lo cobró. El pasaje costó 800.000 guaraníes, y María le cobró \$250.000. Laura dijo que de esa suma solo pudo pagar \$170.000 ya que se produjo luego el procedimiento de entrada y registro, por lo que durante el periodo en que estuvo en Chile, no tuvo ingresos.

Se incorporó la **Prueba Documental 55**, correspondiente al pasaje de Laura, en el que se aprecia la línea de buses ya citada, y la fecha, 1 de noviembre de 2019, coincidente con la fecha de arribo a nuestro país.

La oficial de caso, Nicole Salinas, relató que también presenció la declaración prestada en fiscalía de “**Jannyré**”, el 5 de diciembre de 2019.

Destacó de la declaración de esta víctima que ella expresó tener dos hijos, uno de 4 años y otro de un año, ambos al cuidado de su madre. Que en Paraguay era reponedora de alimentos y que ganaba un sueldo mínimo, cercano a los \$250.000 chilenos. Atendida su necesidad por cuanto su remuneración no le alcanzaba para vivir y en general, tenía una situación precaria, por eso decidió buscar mejores oportunidades económicas y contacta a una prima que se encontraba en Chile, de nombre Celeste Duarte. Nicole Salinas dijo que conforme las diligencias de investigación detectaron que esa mujer Florencia Celeste Lugo Duarte, también trabajadora sexual bajo la administración de María, bajo el seudónimo de “Bebota”. Jannyré se contacta con su prima, quien le dijo que era “bar woman”, aunque luego le cuenta la verdad al señalarle que su actividad era el comercio sexual, bajo las órdenes y la administración de María Sosa. Celeste le da el número de María, y así logran hacer las coordinaciones (por WhatsApp) para que venga a Chile.

Al igual que en los otros casos, María le comunicó que le compraría el pasaje en bus, y que debía retirarlo en la empresa Pullman del Sur, en donde también se le haría entrega de 300 dólares para mostrar en control migratorio, instruyéndole que, si le hacían alguna pregunta, dijera que venía a Chile como turista y a visitar a una madrina, y que al llegar, borrara todas las comunicaciones por WhatsApp que tuvo con ella. Jannyré llegó hasta Asunción, retiró el pasaje y abordó el bus con destino a Santiago.

Jannyré dijo que en el terminal la fue a buscar María en el automóvil Kia, y que además estaban su hermana Miryan e Hilda. Indicó que fue trasladada a Ruiz de Gamboa, donde vio a su prima Celeste, a quien se puede ver en las publicaciones como “Bebota”. En el lugar vio a otras mujeres como “Monse” (nombre de fantasía), “Barbie”, y Tania o Lucía.

Jannyré relató que comenzó a trabajar al día siguiente y que las prestaciones sexuales correspondían a 30 minutos de sexo vaginal, una hora costaba \$40.000 y el

monto subía si se incluían adicionales, como sexo anal, oral y show lésbicos. Ella refirió que sus servicios eran sexo vaginal y oral y que María daba las instrucciones e informaba la salida y el ingreso del cliente. Las chicas debían informar el servicio y la salida de los clientes. Agregó que María Sosa les entregaba preservativos a las afectadas, pero que éstos eran de mala calidad, alude a que tuvo accidentes con esos preservativos y que habrían tenidos que recurrir a la pastilla del día después. También, contó que el mismo día de su llegada María le sacó fotos, y fue con ella hasta “sexo.cl” para ser publicada. Sabe que eran publicadas en varias otras páginas, como “mi privado.cl”, “chimbis”, “tus amantes”, todas de ofrecimiento de servicios sexuales o de escort.

Jannyré dijo que debió pagarle a María el costo del pasaje, que ascendía a 800.000 guaraníes, lo que equivalía a \$100.000, pero que María le había cobrado más, en específico, \$250.000 lo que incluía \$15.000 para su prima Celeste por haberla contactado. Indicó que se demoró cerca de 7 días en pagarle a María, y que en ese periodo no tenía dinero alguno, incluso María le prestó \$20.000 para que pudiera comprarse alimentos.

En relación con las publicaciones, dijo que María le tomó fotos, en dos ocasiones por que las primeras habían salido oscuras. La segunda oportunidad, fue el 26 de noviembre, pero dichas imágenes no alcanzaron a ser publicadas. Sabía que las publicaciones también debían ser pagadas.

Jannyré expresó que los clientes podían pagar en efectivo y cada mañana María llegaba a hacer retiro de estas ganancias, y que, cuando los clientes pagaban con transferencia, era María quien les pasaba el 50%, pero que, si tenían deuda, no recibían nada.

Nicole Salinas, refirió que dentro de la declaración de Jannyré se refirió al trato de María con las chicas, haciendo alusión a que las controlaba permanentemente, que debía avisar por el grupo sobre su intención de salir, o si habían regresado y que las controlaba por medio de cámaras, y que en general, el trato no era bueno. Comentó un problema con María, porque ésta le cobró \$15.000. Jannyré le reclamó que ella no

había realizado la prestación sexual que le estaba siendo cobrada, sin embargo, María se los cobra igual, por lo que la discusión escala y finaliza devolviéndole el dinero, pero de mala forma.

Jannyré dijo que el día 27 de noviembre, ella se encontraba en la casa de Ruiz de Gamboa con las demás afectada, y Mariana (Blanca González Castillo), pero que ésta se escapó cuando llegó la PDI. Además, previo a la llegada de la policía, Jannyré dijo que atendió a un cliente. Añadió que posteriormente, recibió un audio desde el teléfono de Tania o Lucía, y que la hija de María, hija de nombre Sol, le decía que no debían culpar a su mamá y que, si llegaba alguien a controlarlas, debían decir que eran arrendatarias. Jannyré hace entrega de la conversación por WhatsApp que mantuvo con Tania, mientras estaban siendo interrogadas en la unidad policial, conversación que posteriormente fue transcrita.

Se incorporó entonces, la **Prueba Documental N° 54**, correspondiente a la transcripción de la conversación que Jannyré sostuvo con Lucía el día 27 de noviembre de 2019. Nicole Salinas hizo presente que Lucía es un nombre de fantasía y que su nombre real es Tania Espíndola. En el mentado documento se observa que a las 16:50 horas Jannyré le cuenta que las están interrogando, y Lucía pregunta si les sacaron los celulares. Jannyré contesta que a Jessica y a Naomi sí. Lucía le dice luego, que María irá a la cárcel y Jannyré le contesta que va a quedar de cómplice también. Lucía le dice que María se va a ir tres meses, que Miryan no quiere que les digan donde están los celulares. Lucía reconoce que ella guardó los celulares, pero no quiere decirlo para no ser cómplice. Jannyré le confirma que la policía preguntaba por los celulares y Lucía le dice que “sin encuentran eso cagamos”. Jannyré le informa que la PDI seguía a María hace más de un año “y saben todito” a lo que Lucía responde “mejor no meternos”. Jannyré le dice luego, que eso no fue lo que le dijeron los policías, que ellas son víctimas.

Nicole Salinas, señaló al tribunal que Jannyré entregó de manera voluntaria su teléfono celular y que en éste se encontró información relevante, como algunos audios

que demostraban el control que ejercía María en relación con las afectadas, así como fotografías y números telefónicos de otras víctimas.

Se incorporó por ello, la **Prueba Documental 36**, en la que se contienen **transcripciones de los audios** encontrados en el celular de Jannyré (audios de WhatsApp), los que fueron reconocidos, leídos y explicados por la testigo Salinas, en los términos que siguen (se incorporaron 20 audios).

- Audio de 21 de octubre de 2019, a las 10:35 horas (audio 4), habla María Sosa, “como que las tres, luego van a salir Sheila, hay muchísimas llamadas...no pueden salir las tres juntas”.
- Audio de 21 de octubre de 2019, a las 10:55:20 horas (audio 5), habla María Sosa, “pero si viene...en cinco minutos llega la persona, nadie le dijo y obviamente que todo se sabe cómo se hace, enséñenle de a poco ustedes”.
- Audio de 21 de octubre de 2019, a las 10:55:40 horas (audio 6), habla María Sosa, “enséñenle ahí por fa, ahí que se presente y si cualquier cosa, ya estamos llegando”.
- Audio de 21 de octubre de 2019, a las 19:00:05 horas (audio 9), habla María Sosa, “subió otra vez al final y ¡que hagan en el se Susy o el de Luis!”
- Audio de 21 de octubre de 2019, a las 19:00:17 horas (audio 10), habla María Sosa, “En el de Santander que haga mejor”.

Nicole Salinas expuso que estos audios corroboran la información que entregaban las afectadas respecto a las instrucciones que recibían de parte de María, instrucciones e información en relación con las cuentas en donde los clientes debían realizar los pagos por los servicios sexuales (la cuenta del Banco Santander era de su pareja Luis Araya). Debían decirle además que le enseñaran a las nuevas, porque nadie nace sabiendo.

- Audio de 22 de octubre de 2019, a las 11:53 horas (audio 3), habla María Sosa, “¡bueno ahí yo voy a poner orden!, tu cliente Ely antes de ayer, uno, ayer vino uno y dijo ahí en la esquina, ya estoy aquí en Santa Lucía me queda muy lejos ir a Salvador me dijo y yo le dije, mira si te queda mejor

Santa Lucía yo te puedo presentar una amiga y si quieres venir, acá está Nicole no hay problema. ¡Si van a creer!, a todos los clientes lo que dicen, entonces yo a todos los clientes les voy a creer cuando dicen ¡Ah es que yo le pagué más 30! ¡Ah es que yo les pagué más 20!, ¡yo no le estoy hueviando a nadie!... Así, que cada uno ubíquese que yo sí o sí les voy a pasar sus clientes y quién pico va a pasar por acá por ustedes, ¡Imposible que pasen por ustedes acá, nadie!, porque las direcciones se dan en donde tienen que ser en ningún momento a Mariana (comienza a hablar en guaraní), ¡Vamos a ubicarnos un poquito!, (frase en guaraní), así que cada una de ustedes saben perfectamente que yo ayer estuve casi todo el tiempo con ustedes y yo atiendo los celulares, ¿entendés?.

Nicole Salinas explicó que en este audio se confirma que la acusada es que maneja y contesta los teléfonos, es ella quién les pasa a los clientes a las víctimas y refiere nombres como el de “Ely” que es Élidea o Larissa además de “Mariana” qué es el seudónimo de Blanca.

- Audio de 22 de octubre de 2019, a las 11:53:35 horas (audio 4), habla María Sosa, “se dé...de que se le pasa fotos, es porque algunos dicen quiero tríos, quién hace la cola, y por ejemplo yo sé lo que más o menos hace la cola y los que no hacen la cola, entonces yo le agrego porque los teléfonos, hay algunos que no tienen WhatsApp... Entonces le agregó a los teléfonos que no tienen WhatsApp y entonces mando las fotos y no solamente de Lucía, mando todas (habla en guaraní). Porque yo misma, yo me encargo de ese tema, porque Lucía... Yo no le voy a permitir esas cosas”.
- Audio de 22 de octubre de 2019, a las 11:56:18 horas (audio 5), habla María Sosa, “otra cosa, hay chicas que tienen muchísimas publicaciones ¿por qué? porque más o menos se parecen a las fotos que yo tenía anteriormente de las chicas, no solamente de sus fotos llaman, ¡no solo una foto tiene en cada publicación!, ¡todas! tienen más de 5 publicaciones de otras chicas que anteriormente estaban y ustedes pasan por su foto. No es solamente que

vienen de su foto... ¡tienen que tener en cuenta también! y hay personas que quieren ver otras chicas (habla en guaraní). y obviamente Mariana, yo no sé porque le das WhatsApp ni tu número de teléfono a los clientes, eso yo no sé tampoco para qué te llaman a vos, si es que hay, hay número de publicación. Tonce, cuando yo me vaya, cada uno tonce, va a apartar todito de sus fotos entonces, cada uno, una foto lo que de su foto no más, le vamos a pasar entonces porque (habla en guaraní).

Nicole Salinas indicó que en este audio queda demostrado lo que dijo Laura, en cuanto a que no alcanzó a publicarse, pero que había otras publicaciones de otras mujeres que eran usadas, para obtener clientes, da cuenta de ese actuar. María reitera que es ella misma quien se encarga de las publicaciones y da la instrucción de que las chicas no pueden dar su número a los clientes, porque es ella quien ve las llamadas de las publicaciones y que para eso existían las publicaciones y los celulares eran controlados por ella.

Refirió además que el equipo de BITRAM en colaboración con personal de LACRIM se dedicó al análisis de los celulares incautados, y que en muchos de ellos no se mantenían claves por lo que su análisis no fue dificultoso. Indicó que el celular de la acusada, entregado por Tania, no pudo ser analizado porque no se contaba con la clave y se mantenía bloqueado (un celular marca Nokia). Agregó que presenció declaraciones de la acusada en la que ella dijo que no recordaba si ese celular tenía clave.

- Audio de 27 de octubre de 2019, a las 20:19:59 horas (audio 2), habla María Sosa, “el tipo que se fue hace rato, que era de “Susy” llamó ahora de “Paola” y está en camino, ya le dije, le pregunté, si es que no va a hacer, como hace rato y me dijo que ¡no!... así que ahora está en camino y va a volver”.

Nicole Salinas dijo que la referencia a “Susy” corresponde a la hermana de María Sosa, de nombre Miryan y que “Pao” es Hilda y le avisa sobre la asistencia de un cliente.

- Audio de 25 de octubre de 2019, a las 15:04:49 horas (audio 1), habla María Sosa, “treinta y cinco mil quedamos con ese, a lo mejor se queda 2 horas”.
- Audio de 25 de octubre de 2019, a las 15:23:51 horas (audio 2), habla María Sosa, “Eh, por favor contesten a poco lo que yo pregunto, para saber a ver dónde voy a meter al cliente, hay muchísimas llamadas, contesten de a poco por favor...(habla en guaraní)... pero bueno, está bien que se haya quedado con Yuli.”
- Audio de 25 de octubre de 2019, a las 15:25:58 horas (audio 3), habla María Sosa, “Y por si ahora viene, por ejemplo, otro... abajo hay que ver si está todo limpio, porque hay llamadas, así que hay que aprovechar”.

Nicole Salinas señaló que en estas llamadas se da cuenta del control que mantenía María Sosa, era ella quien se comunicaba con los clientes, y María disponía que mujer debía atender a un determinado cliente.

- Audio de 29 de octubre de 2019, a las 12:54:53 horas (audio 5), habla María Sosa, “y de repente con ellos así... dicen 30 y después suben y pagan 40 o si no dicen 40 y después dicen 30 y... así, por eso no me dio el tiempo de avisar porque estoy manejando, pero ya voy llegando ya”.

La testigo Salinas declaró que en este audio se demuestra el control continuo que tenía María, y como ella tenía conocimiento en relación con los valores de las prestaciones sexuales, determinándose también, que era ella quien fijaba los valores de los servicios sexuales prestados por las afectadas.

- Audio de 29 de octubre de 2019, a las 12:55:23 horas (audio 6), habla María Sosa, “la mejor opción de así decirle a los clientes...es ¿en cuánto quedamos amor? ¿cuando entra! ¿en cuánto quedamos?... así para que no haya malos entendidos con el cliente”.

Salinas indicó que aquí se evidencias las constantes instrucciones que María Sosa le daba a las chicas.

- Audio de 29 de octubre de 2019, a las 13:32:50 horas (audio 8), habla María Sosa, “esas cosas con mucho antes me tienen que avisar para yo

prepararme, por qué a última hora no puedo conseguir preservativos...eh... que vaya ahora una de todas y compre al menos una cajita de ese de tres en la farmacia, 1.500 parece que sale, después yo le doy otra... porque yo me voy a ir ahora pero más ratito ya, para llevar preservativos”.

Salinas destacó la concordancia de este audio con la información que aportaban las afectadas sobre que era María Sosa la que les entregaba preservativos, aunque eran de mala calidad.

- Audio de 2 de noviembre de 2019, a las 16:42:12 horas (audio 1), habla María Sosa, “sí, pero igual el muchacho ya se tiene que ir ya, por qué me preocupa si le da una sobredosis ¡ahí cagamos todos!, así que este último no más, ya que pague... porque me preocupa, ahí que le dé algo, ¿qué vamos a hacer?, que se vaya a descansar y después otro día que vuelva para hacer la fiestita”.
- Audio de 2 de noviembre de 2019, a las 19:19:39 horas (audio 2), habla María Sosa, “Tóquenle ya la puerta a Mónica”.
- Audio de 2 de noviembre de 2019, a las 16:42:12 horas (audio 4), habla María Sosa, “de...cuéntenme que es lo que pasa porque están llegando todos los clientes”.

A juicio de la testigo Salinas, estos audios confirman y dan cuenta, sobre el control que mantenía María Sosa a nivel de atención del cliente y con las trabajadoras, conocía la llegada de los clientes y el tiempo que permanecían con las mujeres. Ellas debían por medio del grupo, informar que estaban en contacto con el cliente y al salir, debían avisar el monto de la prestación sexual que realizaron.

- Audio de 4 de noviembre de 2019, a las 15:38:00 horas (audio 1), habla María Sosa, “chicas acuérdense de la casa, se va el dueño con su señora hacia ahí, si tocan el timbre baja una eh... bien vestida, Sheila que baje y que diga que es mi hija, que se está arrendando por pieza por mes y si pregunta... que se va a hacer el tonto iba a decir...eh ¿pero tiene una habitación para arrendar?...¡no ahora ya está todo arrendado ya las piezas!,

Y listo... y bajen no más a cerrar no más el portón... porque no sé si se va ahí”.

- Audio de 4 de noviembre de 2019, a las 15:38:00 horas (audio 1), habla María Sosa, “¡Chicas!, qué tal en la casa, está temblando a full, como pa tanto da y si vuelve más fuerte, se bajan ahí no más en frente...no... no salgan a la calle porque el cable se puede caer cualquier cosa”.

Que, cabe consignar que durante las audiencias de juicio se presentó Prueba Documental vinculada a Jannyré, de iniciales J.M.D, a saber, copia de Cédula de Identidad extendida por la República del Paraguay instrumento leído como **Prueba Documental N° 53**; y, la Información de Pasajero y Movimientos Migratorios respecto de Jannyré M.D., extendida por la Dirección General de Migraciones de la República del Paraguay, individualizada como **Prueba Documental N° 65.9**, y remitida por el Oficio de 17 de diciembre de 2019, incorporada como **Prueba Documental N° 65**.

Luego, Nicole Salinas, relató que presencié la declaración prestada en fiscalía por la víctima “**Araceli**”. Sobre su origen, relató una infancia difícil, criada por unos tíos, que estaba estudiando el último año de la secundaria y que tenía 18 años. Dijo que trabajaba en un patio de comidas y que sus bajos ingresos hicieron que pensara en buscar otras alternativas para trabajar. Por eso, contactó a su amiga Jannyré, y por su intermedio se puso en contacto con María Sosa. Indicó que se le hizo un ofrecimiento de trabajo en Chile donde ganaría más de 5.000.000 de guaraníes, cifra que se acerca a los \$500.000. Indicó que las comunicaciones con María, previas a su viaje, fueron por WhatsApp y ella le informó que le compraría el pasaje, además de entregarle la cantidad de 300 dólares. Señaló que, siguiendo sus instrucciones, viajó hasta Santiago, llegó el día 7 de septiembre y cuando estuvo con María procedió a hacerle entrega de los dólares que portaba. Agregó que el día 10 de septiembre es publicada es páginas de prestación de servicios sexuales.

Araceli relató que cuando llegó al terminal de buses, es recepcionada por María y Jannyré, en un vehículo marca Kia, de color gris, y fue trasladada al domicilio de Ruiz de Gamboa, donde permanece hasta octubre.

Expresó también que debió hacer devolución de los pasajes, concepto por el cual María Sosa le cobra \$250.000, teniendo presente que costaban cerca de \$100.000. Sabía que María le iba a dar una parte a Jannyré (\$50.000) por el contacto, pero ésta no quiso cobrar dicho monto.

Araceli agregó que María le instruyó que en el control migratorio debía decir que venía a Chile a visitar a una tía y que, si se le pedía justificar su calidad de turista, estaban esos 300 dólares, entregados a ella por un tercero antes de tomar el bus.

En relación con los servicios sexuales, Araceli relató que costaban \$30.000 la media hora de sexo vaginal, de un contacto, una hora eran dos contactos, vaginal, anal u oral, y los domicilios costaban \$65.000. De todo ello, debía pagar el 50% a María. Dijo que nunca le preguntaron si dentro de los servicios sexuales estaba el lesbianismo o tríos, pero que luego se percató de ello. Añadió que el horario era de lunes a domingo y los fines de semana “full time”.

Señaló también que cuando llega, la agregan al grupo de WhatsApp y que ahí debía registrar cuando se retiraba un cliente y por qué monto. María les daba instrucciones con relación a donde debían los clientes hacer las transferencias, admitiéndose también los pagos en efectivo.

Respecto a su movimiento, Araceli declaró que debía informar en el grupo si iba a salir, lo que era casi una autorización y que podía ser por poco tiempo, si es que se trataba de transferir dinero a su familia.

Araceli, no recordó la cantidad de clientes que atendió, dijo que solo había otorgado servicios de sexo vaginal, pero que no alcanzó a realizar tantos servicios, porque estaba pagando el pasaje. Indicó que el seudónimo de “Mirna, era el que usaba y fue el que aparece en las publicaciones, y que, para ello, María le sacó distintas fotos, con bikini y desnuda, y que debió ir con María para firmar un documento con el objeto de que tales fotos pudiesen ser publicadas.

Se incorporó entonces, los **Otros Medios de Prueba N° 67 y 68**, los que corresponden a capturas de pantallas extraídas desde la página “mi privado.cl”, en donde aparece “Mirna” en distintas imágenes, con indicación de datos, como el valor de los servicios, ubicación (cerca de metro Salvador), números de teléfono y contenido de las prestaciones.

Se exhibió posteriormente, la **Prueba Documental N° 52**, la que corresponde al pasaje de Araceli a Santiago (desde Asunción”, el que también fue entregado por dicha víctima el día en que prestó declaración.

Luego, la testigo Salinas, indicó que pudo apreciar la declaración de “**Élida**”, conocida como “Nicole” o “Larissa”, prestada los primeros días de diciembre de 2019, en fiscalía. En síntesis, esta mujer también dio cuenta de una situación económica precaria en Paraguay, que era madre de una hija, y que tuvo que desertar de los estudios por su embarazo. Indicó que ganaba un sueldo muy bajo en un supermercado (cerca de \$150.000 pesos chilenos), y que cuando terminó una relación sentimental, decidió buscar mejores opciones, y por eso viajó a Chile. Indicó que se dirigió donde Maribel su prima, también paraguaya, costeadando ella su propio pasaje. Señaló que vivía en Plaza Italia y que estuvo dos meses sin trabajar. Su prima, le dijo que conocía a Jessica Sosa y que ella trabajaba como escort. Élida tomó contacto con Jessica, quien le contó que se encontraba trabajando con su tía y es por medio de Jessica, que finalmente Élida llega hasta María Sosa. Indicó que se comunicaron siempre por teléfono por llamadas nacionales. María le dijo que tenía a varias mujeres trabajando como escort y que tenía una casa en Providencia, invitándola a trabajar. Élida indicó que aceptó, y va hasta el inmueble de Providencia, comenzando a trabajar bajo las mismas condiciones ya indicadas.

De igual manera, la oficial de caso Nicole Salinas relató que otra de las declaraciones que presencié fue la de **Jessica Sosa**, sobrina de la acusada.

Jessica indicó que estaba desde el 2016 en Chile, y que antes de trabajar con María había trabajado con otra connacional de nombre Berta en Santiago Centro, que también tenía un grupo de mujeres paraguayas ejerciendo el comercio sexual. Que cuando dejó de trabajar con Berta, empezó con su tía, y quedó bajo la administración de María. Jessica dijo que prestó servicios sexuales en el departamento 1005 de Santa Rosa y en el inmueble de Ruiz de Gamboa. Agregó que el 27 de noviembre, se encontraba en el departamento 1005, y fue ella quien autorizó la entrada, registro e incautación de evidencias. Aquel día estaba junto a Laura, una prima lejana.

Jessica dijo que ella tenía posibilidades de salir, pero que debía avisarle a María. Sabía que tenía mayores libertades, aunque de igual manera debía pagar el 50% de las ganancias, lo que incluía las propinas que dieran los clientes.

Nicole Salinas explicó que Jessica también fue publicada bajo la administración de María, vinculada a la agencia “Preciosas”, estaba en el listado de “sexo.cl” bajo el nombre de “Tati”. Añadió que se encontraron publicaciones de Jessica en páginas como “sexo.cl” y en otras como “lo canto”, “tus amantes” y “skokka”.

Luego, la funcionaria Salinas relató que estuvo presente en la declaración de **Tania Espíndola**, conocida también como “Lucía” o “Tati”, declaración que también se prestó en la fiscalía a fines de diciembre del año 2019.

Tania o “Tati”, expresó que se encontraba abrumada por los hostigamientos de María tras su detención, y que fue ella quien llegó hasta el tribunal en búsqueda de su hijo Bruno el día en que fue detenida, quedándose al cuidado de dicho menor.

Tania relató que el día 27 de noviembre, María se presentó a tribunales previo contacto en el edificio de Santa Rosa 170 con un sujeto que era policía, y que dicho hombre le habría informado que tenía una orden de detención y que debía presentarse en tribunales. María va y lo siguiente que supo de ella, fue cuando la llamó contándole de su detención. Desde esa fecha, Tania estuvo cuidando a Bruno. Señaló que, además de ser trabajadora sexual al mando de María, le cuidaba a su hijo, hacía aseo, contestaba los teléfonos -cuando sonaba más de uno y María no podía contestar-, y

que, por lo mismo, también informaba sobre la llegada de clientes en el grupo de WhatsApp, relatando que incluso vivió con María Sosa en el departamento 704.

Reportó también que, cuando llegó en búsqueda de Bruno, María le hizo entrega de su cartera, en cuyo interior estaba su teléfono. Luego, cuando autoriza la entrada y después, cuando la policía asiste con una orden judicial, procedió a entregar el celular de María Sosa, un equipo marca Nokia, color negro.

Tania dijo que con María se tenían días buenos y días malos. Que, de igual forma, le pagaba el 50% al igual que las otras mujeres. Que María le pagó el pasaje para venir a Chile, que le mandó 300 dólares, instruyéndole además que dijera que era turista y que diera como dirección el departamento 704 de calle Santa Rosa 170. Como María manejaba cerca de 15 teléfonos, ella la ayudaba en eso, pero que María “era la jefa”, autodenominándose Tania como solo una ayudante.

Finalmente, Tania, expresó que cuando fue recepcionada en Chile, fue instalada en el departamento 1005, donde estaba la hermana de María, Miryan a quien conocía, y que también trabajó en comercio sexual. Indicó que se le tomó declaración en calidad de testigo, rectificando al contra examen que lo fue en calidad de imputada, porque se le hizo saber sobre su derecho a guardar silencio, propio de los derechos que les asisten a los imputados.

Que, durante el desarrollo de la audiencia de juicio oral, se incorporó mediante su lectura la **Prueba Documental N° 68**, correspondiente a un Certificado de Nacimiento del menor “Bruno”, cuyos padres son María Sosa Aquino y Luis Araya Espinoza.

Nicole Salinas, indicó también que se hicieron diligencias y se lograron pesquisar más víctimas. Así, por ejemplo, “**Analía**”. Indicó que en relación con esta mujer se encontraron evidencias tales como publicaciones en páginas de ofrecimiento de servicios sexuales, incluyéndose su nombre dentro del listado de “sexo.cl”, ya que fue publicada por la acusada con el nombre de fantasía “Yayita”, y las imágenes que se

visualizaron como publicaciones, aparecieron números de celular que estaban siendo investigados.

Se exhibieron los **Otros Medios de Prueba N° 58**, los que la testigo Salinas reconoció como publicaciones de Analía (imágenes 1, 2, 3 y 4). Explicó que en la foto 5 se observa la foto del perfil de Facebook de Analía, datos que inicialmente fueron dados por Samantha y corroborados con estas evidencias. Al observar la foto 6, indicó que se trataba de la fotografía de la cédula de identidad de Analía, la que fue obtenida gracias a la cooperación y trabajo conjunto que se realizó con la policía de Paraguay.

Luego, se incorporó la **Prueba Documental N° 13**, que corresponde a una imagen de la Ficha de Identidad de Paraguay de Analía, de 28 años a esa época.

Se exhibió también **Otros Medios de Prueba N° 18**, que corresponde a una captura de pantalla del perfil de Facebook de Analía, desde donde se extrajo la fotografía 5 (Otros Medios de Prueba N° 58) recién aludida, y; **Otros Medios de Prueba N° 20**, que muestra el perfil de Instagram de Analía, con información pública. Se observan fotografías de Analía con otras víctimas en concreto, con “Arnal” (al interior de un ascensor, usando Arnal una chaqueta color rojo, la que corresponde a la fotografía 1), una imagen de acercamiento de la foto anterior (fotografía 2) y otra imagen en que se observa a Analía con Arnal (fotografía 3).

Nicole Salinas continuó exponiendo sobre la situación y diligencias relacionadas a otra víctima, de nombre **“Arnal”** publicada como “Barbie”.

En efecto, indicó que conforme las diligencias efectuadas, se pudo determinar que ella fue publicada desde la agencia “Preciosas” el día 9 de enero de 2019, ingresando a Chile solo dos o tres días antes. El ingreso al país se hizo vía aérea, gracias a la compra de un pasaje efectuado por María Sosa, información que se obtuvo gracias a un oficio emitido de la empresa Latam.

Salinas indicó que Analía fue publicada en varias páginas de ofrecimiento de servicios sexuales, además de “sexo.cl”, ya que encontraron publicaciones en “tus amantes”, “lo canto”, “chimbis” y “skkokka”.

Se exhibieron **Otros Medios de Prueba N° 57**, y la testigo Salinas indicó que dichas imágenes eran de publicaciones de servicios sexuales de Arnal, en específico, en la imagen 1 se ve la publicación en la página “mi privado.cl”, publicada con el pseudónimo de “Padhila”, y la foto 2, se ve una fotografía de Arnal, extraída desde su perfil de Facebook.

Salinas indicó que, tras la detención de María Sosa, varias de las víctimas se contactaron con el administrador de “sexo.cl” con el objeto de bajar sus publicaciones. En el caso de Arnal, luego del periodo en que se mantuvo bajo la administración de María, se publicó personalmente, de manera independiente, aunque usando el mismo nombre de fantasía “Yayita”. En la foto 3 (de Otros Medios de Prueba N° 57) dijo que se observa la fotografía presente en el documento de identidad paraguayo de Arnal.

Se incorporó también **Otros Medios de Prueba N° 48**, imagen que la testigo Salinas reconoce como una publicación de Arnal (en la página “skkoka.cl”) en el periodo en que se encontraba bajo el control de María Sosa, con teléfono interceptado. Se observa que se indica que tenía 18 años, que la ubicación era metro Santa Lucía, además de consignarse los servicios ofrecidos.

Se exhibió **Otros Medios de Prueba N° 36**, en donde la funcionaria Salinas indicó que también corresponde a una publicación de Arnal, en donde se aprecian los servicios y la foto 2 o segunda lámina existe un acercamiento de la fotografía de dicha víctima.

Nicole Salinas también reconoció la **Prueba Documental N°13** exhibida, como el Documento de identidad de Arnal, de 21 años a esa fecha.

Sobre Arnal efectuó luego algunas aclaraciones (producto de las preguntas que le hiciera la defensa) y dijo que Arnal no fue recogida por María Sosa en el aeropuerto, sino por Analía. Que, con posterioridad a la detención, tanto Arnal como Analía se publicaron de manera independiente y asociadas a un tercero (en la página “sexo.cl”).

Que durante el examen que hiciera la querellante particular, la testigo Salinas indicó que no existía algo parecido a un registro oficial en relación a los servicios

sexuales prestados, que aquello sólo se pudo establecer con el levantamiento y análisis de las evidencias, ya que en las agendas no se consignaba un registro completo, no tenían un orden general en relación a las fechas, y se encontraron agendas con distintas anotaciones, algunas con fecha, unas solo asociadas a nombres y ciertos valores, no había evidencia completa. También con el levantamiento del secreto bancario, en donde se usaban las cuentas para recibir pagos pro los servicios sexuales, en conjunto con estos medios, se pudo establecer un pago constante o continuo en relación con el comercio sexual.

Se incorporó entonces, la **Prueba Material N° 12 y 13**, (NUE 5941239) las que corresponden a dos agendas, una con la leyenda “Itaú” y otra con la leyenda “agenda corporativa universitaria LTDA 2019”. Con la primera de ellas, Salinas indicó que se apreciaban datos de las cuentas bancarias usadas para transferencias por parte de los clientes de servicios sexuales. Muestra una página, en donde se lee “Domingo” y los nombres de “Pao”, “Yani”, “Yeru” y “Susi”, y debajo de ellos, una anotación correspondiente a los servicios sexuales prestados; otra página, 7 de mayo de 2019, se observa el nombre “Susy”, con anotaciones correspondientes a valores por los pagos, aparece también “Pao”, “Yeruti”, “Yayita”, que es Analía, “Barbie” (o Barby) que es Arnal. En la segunda agenda, en la contratapa se observan lo datos correspondientes a una cuenta Banco Santander, y se muestran anotaciones similares a las anteriores, de fecha 26 de enero de 2019, aparecen distintos seudónimos de las mujeres, se lee a “Yayita”, “Barbie”, “Yeru” o “Jeny”.

Luego, se exhibieron los **Otros Medios de Prueba N° 98 y 99**, los que Nicole Salinas reconoce como imágenes de levantadas desde los inmuebles investigados, con anotaciones de pagos y nombres, similares a las ya incorporadas.

Se le preguntó por la querellante particular, si las víctimas obtuvieron las ganancias prometidas y Nicole Salinas, refiere que conforme las declaraciones recabadas de las afectadas, desde que llegaban al país mantenían una deuda con María, por ello se dedicaban a pagar la deuda, siempre superior al costo del pasaje, y por eso muchas de las mujeres refirieron no tener dinero ni ganancias. Las víctimas indicaron

no tener ganancias en aquellos montos que se les había ofrecido. Además de pagar el 50% de cada prestación, montos excesivos por pasaje y publicaciones, se le debía entregar la mitad de las propinas que pudieren obtener.

Agregó (a preguntas que hiciera la defensa) que se lograron determinar dos “Laura” que una de ellas usaba los nombres de fantasía “Naomi” o “Noemí” (de iniciales L.E.A.), no recordando el seudónimo que usaba la segunda Laura.

6.- Antecedentes sobre diligencias relativas a las cámaras de seguridad de Ruiz de Gamboa, levantamiento del secreto bancario y otras evidencias incorporadas.

Que tal y como se consignara en apartados anteriores, dentro de las diligencias que se realizaron por funcionarios de la BITRAM, le correspondió al testigo **Álvaro García Velozo** la revisión de las cámaras de vigilancia encontradas al interior de la propiedad de Ruiz de Gamboa, incautadas el día 27 de noviembre de 2019.

En efecto, García relató que luego de una análisis y extracción de imágenes que hiciera la BICRIM, y en mérito de una instrucción particular, analizó los extractos de las grabaciones de las cámaras de vigilancia ubicadas al interior del inmueble de Ruiz de Gamboa 029, en la comuna de Providencia, en donde se visualiza, un alto tráfico de clientes, ingresando a obtener los servicios sexuales que ofrecen estas mujeres. “Esto era 24-7” señaló García, agregando que no había un horario fijo, ya que se observaron dichas actividades de lunes a lunes, desde las 7 de la mañana y hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Había horarios en que había mayor presencia de clientes y en otros, no tanto. Se veía pasar mujeres entrando con clientes, saliendo, mujeres sin ropa paseándose, mujeres con dinero en sus manos, se vio a María Sosa en varias oportunidades, ingresando a modo de fiscalizar, esa fue su percepción, puntualizó. Indicó que también se veía a las mismas chicas haciendo aseo, comiendo, pero, sin embargo, siempre se vio un flujo bastante constante de clientes que entraba y salía a ese domicilio. Ingresó hasta una persona en silla de ruedas eléctrica, porque recuerda

que aquello significó una complicación para las chicas a la hora de que dicha persona se retirara del lugar, es decir, se atendía a todo tipo de personas.

Que se incorporó durante su declaración, los **Otros Medios de Prueba N° 112**, correspondientes a un set con fotografías, que el testigo García reconoció como aquellas imágenes relativas al análisis de imágenes de calle Ruiz de Gamboa, y que fue explicando al tribunal.

Así, indicó que en la foto 1, se observa el acceso al segundo piso de la casa Ruiz de Gamboa, se ve una escalera y una cámara, y al costado derecho el ángulo de grabación.

En las fotografías 1 y 2, a dos chicas que trabajaban en el lugar.

En la foto 4, de fecha 11 de noviembre de 2019, se ve a una mujer en la bajada de la escalera, donde hacían ingreso los clientes, y se encontraba una salita a mano derecha. La mujer va desnuda o con ropa ligera ingresando a esta sala.

En la imagen 5, se va a otra chica, en el mismo ángulo de grabación anterior, y que por el tatuaje puede reconocer como “Hilda”. (imagen de 11 de noviembre de 2019).

En la fotografía 6, reconoció a otra mujer, de nombre Blanca (imagen de 11 de noviembre de 2019 a las 01:54 horas).

En la imagen 7, indicó que se trata de una cámara ubicada en el pasillo, y se ve a las chicas en el primer piso, en donde se ve el ingreso de los clientes.

En la foto 8, explicó que se trataba del ángulo de la cámara que muestra el pasillo.

En la foto 9, señaló que se ve el mismo pasillo, y a tres mujeres, dentro de las cuales reconoce a “Élida”. Indicó que al parecer van a subir o ir a comprar, porque están vestidas con ropas normales. Élida es la que está atrás, con polera celeste y short negro.

En la foto 10, se ve a una mujer que va desnuda por el mismo pasillo, a las 3:25 horas del día 11 de noviembre de 2019.

En la foto 11, se ve a dos mujeres en ropa interior en el pasillo (día 14 de noviembre de 2019 a las 00:07 horas).

En la foto 12, se ve a una chica en ropa interior, con un cliente, y el testigo indica que se trata de “Élida”.

En la imagen 13, se ve el mismo pasillo, el día 12 de noviembre de 2019 a las 2:14 horas, se ve una chica en ropa interior y un hombre la abraza.

En la foto 14, se ve a otra mujer con otro cliente, ella está en ropa interior, en el mismo pasillo, y están hablando (01:02 horas).

En la foto 15, se ve la imagen que había explicado previamente, relativa al cliente en silla de ruedas eléctrica. Se ve que las chicas tienen mucha dificultad para moverla e ingresarla a un dormitorio.

En la foto 16, se observa a tres chicas en ropa interior, en el mismo pasillo, y se ve a un hombre al final de este.

En las fotos 17, 18, 19 y 20, se ven a distintas mujeres con distintos clientes, transitando por el pasillo ya citado previamente.

En la foto 21, se ve a la mujer que el testigo identifica como Blanca, en interior, en el pasillo. La imagen es del día 11 de noviembre de 2019, a las 1:54 horas.

En la foto 22, se ve a la misma mujer, con un cliente, el mismo día a las 01:52 horas.

En la imagen 23 se ve en el pasillo a Hilda, con un hombre detrás (día 11 de noviembre de 2019).

En la foto 24, se observa a Élida con un cliente que se estaba retirando del lugar a las 00:48 horas del día 11 de noviembre de 2019.

En la fotografía 25, se observa a un cliente y a una chica en ropa interior (11 de noviembre de 2019, a las 07:35 horas).

En la foto 26, también se observa a una mujer y a un cliente. (11 de noviembre de 2019, a las 13:22 horas).

En la foto 27, también del día 11 de noviembre de 2019, se ve a una mujer que va con ropa interior rojo o burdeo, y detrás de ella, un hombre.

En la foto 28, se ve a una chica de polera roja y pantalón oscuro y detrás de ella, un hombre con una mochila. (11 de noviembre de 2019, a las 20 horas).

En la foto 29, se ve a una mujer con copa interior y un hombre. (13 de noviembre de 2019 a las 2:08 am).

En la foto 30 se ve a una mujer y detrás de ella van dos hombres, solo se aprecia la hora, 2:16 am.

En la imagen 31, se observa a Hilda en ropa interior, detrás un hombre con camisa y mochila.

En la imagen 32, se aprecia a una mujer con pantaleta celeste y detrás un hombre con polera negra. (día 12 de noviembre de 2019 a las 5:06 am).

En la imagen 33, se ve nuevamente al mismo hombre de la foto anterior, esta vez con jockey y ya son las 5:30 horas.

En la foto 34 (12 de noviembre de 2019, a las 10:20 horas) se ve a una mujer y detrás de ella, una persona de sexo masculino.

En la foto 35, se ve a una mujer y detrás un hombre, con polera y mochila.

En la foto 36, se ve a una mujer descalza, con un hombre que vestía con short y zapatillas (12 de noviembre de 2019, a las 12:22 horas).

En la foto 37, se ve a una mujer con short rosado, a su lado un hombre, que vestía pantalones short o bermudas y zapatillas. (12 de noviembre de 2019, a las 13:29 horas).

En la foto 38, se ve un hombre y una mujer con ropa interior. (12 de noviembre de 2019, a las 23:36 horas).

En la imagen 39, es continuación de la anterior, (mismas personas), aclarando el testigo que la mujer es Blanca (23:51 horas).

En la foto 40, se ve a Élidea con ropa interior, y un hombre que viste camisa celeste con pantalón café claro.

En la imagen 41, de 13 de noviembre de 2019, se ve a una mujer desnuda, en compañía de un hombre.

En la imagen 42, se ve a una mujer en ropa interior, y hombre de azul detrás (no se aprecia día, solo la hora, 5:13 am).

En la imagen 43, se va a un sujeto calvo, con polera celeste y una chica de espaldas, con ropa interior. (13 de noviembre de 2019, a las 13:17 horas)

En las fotos 44 y 45, se puede observar a una mujer que corresponde a la acusada viste ropa oscura y un bolso en la mano (13 de noviembre de 2019, a las 01:13 y 01:33 horas respectivamente)

En la imagen 46, en el mismo pasillo, se vuelve a ver a la acusada, pero en un día distinto (14 de noviembre de 2019).

En la foto 47, el testigo indica que se trata de la cámara que estaba en el pasillo donde las trabajadoras mantenían sus dormitorios, se ve un pequeño pasillo, y se ve también que descansaban en dicho lugar después de sus labores. No ingresaban con clientes, y se las veía con pijama o ropa de calle.

En la foto 48 se observa a una de las mujeres transitar por el pasillo (14 de noviembre de 2019).

En la foto 49, se observa a una mujer vestida con peto, con el pelo color “fantasía azul” y el testigo señala que ella es Sheila, (12 de noviembre de 2019, a las 00:09 horas) hija de la imputada, la que también se dedicaba a la prostitución.

En la foto 50, se ve desde el ángulo de la última cámara las puertas hacia las habitaciones, y se ve a una mujer de espaldas en ropa interior.

En la foto 51, indicó el testigo que se observa a dos mujeres, la que va vestida con vestido oscuro es Jessica, que trabajaba en el mismo domicilio, y que es además sobrina de la acusada (12 de noviembre de 2019, a las 00:08 horas).

Finalmente, al observar la foto 52, el testigo García indicó que se trata de la acusada María Sosa el día 14 de noviembre de 2019, a las 06:00 horas.

Que los funcionarios Javier Cárcamo, Juan Carlos Oliveros y la oficial de caso Nicole Salinas, refirieron que entre las evidencias incautadas el día de la detención de la acusada se encontró un **pendrive de color amarillo** al interior del vehículo Kia,

utilizado por la acusada María Sosa, el que, entre otra información como música, fotos y videos, tenía ciertos archivos con información propia de sistemas computacionales de uso exclusivo de la Policía de Investigaciones de Chile, razón por la cual, remitieron dicho dispositivo de almacenamiento a la unidad del “Ciber-crimen” para los análisis y pericias de rigor.

Es así, que prestó declaración en estrados el perito e ingeniero en informática **Héctor Rodríguez Escárate**, de la Policía de Investigaciones de Chile.

En síntesis, este profesional relató que le correspondió hacer un análisis de evidencias contenidas en la NUE 5941254, correspondientes a tres pendrives, (de color azul, de color negro y un tercero de color amarillo), para determinar si existía algún programa o archivo asociado a un sistema de control migratorio de la Policía de Investigaciones de Chile, y en la afirmativa, que determinara el origen de los archivos y la factibilidad que estos archivos o programas puedan ser instalados y usados por terceros.

Indicó que con el uso de dispositivos y técnicas propias de su especialidad se procesó la información contenida en los mismos, destacando que el trabajo desplegado se centró en el pendrive de color amarillo. Tras el procesamiento de la información, en el pendrive se encontraron carpetas y archivos que sirven para instalar un sistema informático de la policía, en relación con el sistema integrado de control migratorio. Además, de estos programas para instalación de este sistema, se encontró un documento en formato Word, en donde se especifica como son los pasos para instalar ese aplicativo, como instalar una estación de trabajo (un computador) y se encontró un archivo en particular, que trata sobre la configuración, es un archivo de extensión “XML”, con variables que indican el nombre del usuario, administrador, el puerto de red al que debe configurarse, la password, entre otros datos, y permite que en forma automática, la aplicación se conecte a un entorno de red. Se pudo determinar también que dicha aplicación trabaja en la plataforma Microsoft Windows. Indicó que la data de esos archivos corresponde al año 2011. Señaló que, considerando que estos archivos se relacionaban con un sistema de la PDI, puesto que los manuales y los entornos

hacen referencia a los sistemas de la policía, estaba asociado también al sistema de consulta de gestión policial GEPOL.

Indicó además que, para la instalación del software de control migratorio, se encontraron aplicaciones que permiten la instalación de hardware periféricos, que se conectan a una computadora, que, por sus características, corresponderían a archivos que permiten la lectura de documentos digitales, como pasaportes, DNI, u otros similares. Es decir, que, para escanear un pasaporte, es necesario tener este hardware, (controlador) y además conectar un dispositivo apropiado a tales fines.

Concluyó que, efectivamente se encontraron programas y archivos relativos al control migratorio de la Policía de Investigaciones de Chile, que datan del año 2011, que estos trabajan en plataforma Windows, y aparecen en el manual que se encontró. Este tipo de programa está basado en “Visual Based”, del tipo cliente servidor, es decir, no basta con instalar el programa, se debe tener conexión a una base de datos, ya que este aplicativo es sólo para la estación de trabajo. Para que el aplicativo funcione en una estación de trabajo en conjunto con el servidor, el aplicativo debe estar conectado en un entorno de red, institucional idealmente y en ese contexto el software podría leer y extraer información desde la base de datos.

A fin de determinar si este programa es funcional, se debe consultar a la Unidad de Informática de la Policía de Investigaciones de Chile, ya que hoy en día se usan sistemas integrados, con un acceso seguro, institucional, con credenciales de cada usuario o funcionario acreditado, sistema integrado que no vio en el pendrive analizado.

Indicó que de su trabajo y los pasos que siguió sacó capturas de pantalla, las que fueron exhibidas durante la audiencia como **Otros Medios de Prueba N° 121.**

Que, las oficiales de caso Carolina Gatica y Nicole Salinas, relataron que dentro de las diligencias de investigación que se efectuaron, surgió con especial relevancia el **levantamiento del secreto bancario**. Se hizo presente que, pese a haberse solicitado dicha medida en relación a las tres cuentas bancarias que aparecían constantemente en

escuchas, en la declaración de Samantha, y luego en las agendas levantadas desde los domicilios y en las declaraciones de las afectadas que declararon después de producida la detención de María Sosa, sólo se extendió la autorización judicial de que se trata respecto de las cuentas bancarias de la acusada y de su hermana Miryan Sosa Aquino, pero se negó lugar a la información relativa a la cuenta del Banco Santander de Luis Araya Espinoza, quien fue pareja de la encartada.

Nicole Salinas relató que una vez que se obtuvo la autorización judicial, se ofició al Banco Estado, quien remitió un número considerable de cartolas históricas, en las que se pudo encontrar información sobre los movimientos entre las cuentas y sobre las transferencias que se recibían.

De aquel análisis se pudo establecer, expresó Salinas, que, en relación a la acusada, ésta mantenía una cuenta Rut y una cuenta de ahorro. Respecto a la primera, el banco les entregó información desde el año 2015 a marzo de 2020. Se pudo obtener que había diversas transacciones asociadas a montos por servicios sexuales, había depósitos y por información de quien realiza la transferencia, se logró individualizar a lo menos a 109 personas, que habían realizado transferencias a la cuenta de María, y cuyos montos superaban los \$35.000.000, solo por concepto de estos depósitos en la misma cuenta. También se determinó que se verificaron depósitos y transferencias entre las cuentas de María y su pareja Luis Alexis Araya Espinoza por cerca de \$19.000.000.

También, se pudieron encontrar movimientos entre las cuentas de María, entre las cuentas de la María Sosa y la cuenta Rut de su hermana Miryan, además de pagos de María a terceros, como por ejemplo a Darío, por concepto de arriendo del departamento 1005, así como a pagos a empresas, una de las cuales correspondía a la página web “mi privado.cl”.

Se incorporaron entonces, los **Otros Medios de Prueba N° 107**, documentos que fueron reconocidos por Nicole Salinas como cartolas de la cuenta Rut del Banco Estado de María Sosa. Se destacó un número significativo de transferencias por

montos como “\$30.000”, “\$40.000” y \$100.000”, correspondientes a pagos de aquellas 109 personas a las que hizo alusión, mayoritariamente hombres.

Luego, al observar los **Otros Medios de Prueba N° 108**, la testigo Salinas indicó que correspondía a varias capturas de pantalla de transferencias efectuadas por María Sosa, y de ellas se relevaron las siguientes:

- Lámina 2: captura de pantalla de transferencia electrónica, por un monto de \$250.000 desde a cuenta de la acusada a la empresa “servicios digitales”, que correspondía a una empresa asociada a “mi privado.cl”.
- Lámina 3: transferencia efectuada desde la cuenta de María Sosa (chequera electrónica”, nuevamente a la empresa “servicios digitales” con mensaje “pago la mitad de las chicas”.
- Lámina 6: también es una transferencia de María Sosa a “Servicios digitales SPA”, se advierte el mail de quien recibe el dinero como “[pagos @ mi privado. cl](mailto:pagos@miprivado.cl)”; por la suma de \$250.000, efectuada en junio de 2019.
- Lámina 13: también es un comprobante de “Serviestado”, en donde no se ve bien la fecha, pero si que se trata de una transferencia a “Servicios Digitales”.
- Lámina 15: otro comprobante de transferencia de “”, se indica como destinatario “Servicios digitales” por \$120.000.
- Lámina 18: otro comprobante de transferencia electrónica desde la cuenta Rut de María Sosa a la empresa “Servicios digitales”, efectuada el 30 de abril de 2019.
- Lámina 22: otra foto de comprobante de depósito en efectivo a “Servicios digitales SPA” por la suma de \$190.000.

Nicole Salinas expresó que, si bien no recuerda el monto exacto que se determinó como ganancias obtenidas por la acusada María Sosa en el periodo de investigación, indicó que si recordaba que los movimientos de las cuentas asociadas a María Sosa, en periodos anuales eran por montos de \$30.000.000 o \$40.000.000.

Agregó que en la cuenta RUT de su hermana también existió información vinculadas a pagos por prestaciones sexuales, logrando pesquisar cerca de 83 u 85 personas o clientes, que realizaron transferencias, por montos como los ya referidos, haciendo presente que la información que el Banco Estado remitió sobre Miryan Sosa sólo comprendía a los meses de marzo a diciembre del año 2019. Salinas expresó que también se verificaron transferencias mutuas entre la acusada y su pareja, Luis Araya. Dentro de las personas que pudieron individualizar como quienes efectuaban transferencias se repitió un nombre, Víctor Morales, el que en etapa de interceptación se logró individualizar como un cliente frecuente y que pedía domicilios. Como son montos de cuentas distintas, no puede dar montos totales, pero expresó que, sin duda, se trataba de operaciones que superaban los \$30.000.000.

Dentro del análisis de la evidencia electrónica levantada desde los inmuebles el día en que se practicaron las entradas y registros de los domicilios de la acusada, se pudo visualizar comprobantes de transferencias dentro del grupo de WhatsApp ya mencionado, concordante con el mensaje de la afectada, con su nombre de fantasía y el monto, lo que se pudo corroborar con la información dada por el banco.

Se incorporó también los **Otros Medios de Prueba 94 y 98**, correspondientes a imágenes de dos agendas levantadas por los funcionarios policiales, el día en que la acusada fue detenida. En el primer grupo de imágenes (Otros Medios de Prueba N°94, tres imágenes) Nicole Salinas indicó que se apreciaban anotaciones correspondientes a registros de los servicios sexuales, con ciertas fechas (octubre de 2019) y con algunos nombres de afectadas como “Laura”, “Yani” y “Nicol”. En el segundo grupo de fijaciones fotográficas (Otros Medios de Prueba N°98, imágenes 1 y 3), Salinas señaló que en esa agenda, se leen registros de pagos que se efectuaban por María Sosa, por ejemplo, “Don Darío \$600.000”, resultando que Darío es el dueño del departamento 1005, y otros conceptos, como “estacionamiento”, “agua”, ésta última con una referencia entre paréntesis que se lee “704 y 1005”, otra anotación de “arriendo \$1.600.000”, “preservativos 40 mil”, entre otros registros.

Que, cabe señalar, además, que durante el transcurso de las 21 jornadas de audiencias de este juicio oral, y por medio de su lectura, se incorporó ingente **Prueba Documental**, la que debido a su pertinencia en este punto (de análisis de levantamiento de secreto bancario), se expondrá a continuación.

- **Prueba Documental N° 59:** Oficio Banco Estado, en que se informa que la acusada mantiene cuenta Rut, y remite cartolas históricas con movimientos correspondientes a los años, 205, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2018 (78 páginas). Por medio de su lectura, se destacó por el Ministerio Público el apartado “ingresos” correspondientes a diversos meses años comprendidos en el periodo de investigación (desde páginas 12 en adelante) en que se reiteraba de manera constante montos como \$30.000, \$35.000, \$40.000, \$70.000 y superiores.
- **Prueba Documental N°60:** Oficio Banco Estado, en que se informa que Miryan Sosa Aquino mantiene cuenta Rut, y remite cartolas históricas con movimientos correspondientes al año 2019, en donde, al igual que en el caso anterior, se hizo lectura del apartado “ingresos” en los que se apreciaban montos (de manera reiterada) de \$30.000, \$35.000, \$40.000, \$70.000 y superiores.
- **Prueba Documental N° 61:** Correo electrónico de fecha 15 de abril de 2020 emanado de Banco Estado, en que se que remite detalles de todas las transferencias recibidas y efectuadas desde la cuenta Rut N° interno 32972564141, cuya titular es Miryan Sosa Aquino, Rut 26.252.005-6 entre el periodo de entre los años 2015 a 2020; detallando en cada archivo si las mismas fueron realizadas a través de Internet en Banco Estado u otros Bancos, o si se efectuaron a través de la aplicaciones (y se remiten los cinco documentos siguientes).
- **Prueba Documental N° 61.1:** Consulta de datos de persona natural respecto de Miryam Sosa Aquino del Banco Estado.

- **Prueba Documental N° 61.2:** Transferencias electrónicas realizadas a través de la APP.
- **Prueba Documental N° 61.3:** Transferencias electrónicas realizadas a través de internet.
- **Prueba Documental N° 61.4:** Transferencias realizadas otros Bancos.
- **Prueba Documental N° 61.5:** Transferencias recibidas otros Bancos.
- **Prueba Documental N° 62:** 3 cartolas remitidas por el Banco Estado Ahorros de María Sosa. (se deja constancia que este documento es el mismo que se aprecia como Prueba Documental N° 67.4)
- **Prueba Documental N°67:** correo electrónico del Banco Estado, complemento de información bancaria de la acusada.
- **Prueba Documental N°67.1:** Resolución que decreta el levantamiento de secreto bancario en relación a la acusada, dictada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
- **Prueba Documental N°67. 2:** Requerimiento de información remitido por la Fiscalía de fecha 21 de abril de 2020.
- **Prueba Documental N°67.3:** cartola de ahorro de cliente de fecha 13 de mayo de 2020 (6 páginas).
- **Prueba Documental N°67.4:** documento ya aportado como Prueba Documental N° 62.

Asimismo, se incorporó un **Oficio** emanado del **Servicio de Impuestos Internos**, en que se remite la Consulta Integrada de 21 de noviembre de 2019 con relación a la acusada María Sosa Aquino, correspondiente a la **Prueba Documental N° 47**. Se destaca que registra iniciación de actividades, con contabilidad simplificada y registrada como empresa de menor tamaño o pro-pyme (página 2). Además, se observa la Declaración Anual de Renta del año 2018 (Formulario 22), en donde se aprecia como actividad o giro “venta al por menor de prendas y accesorios de vestir en

comercios establecidos”, un patrimonio financiero de “-60.000”, y un resultado de liquidación el impuesto a la renta de “0” (página 4). Se observa también que la contribuyente no registra sociedades o bienes raíces a su nombre (páginas 6 y 7).

Se exhibieron también boletas de recibo de pago de gastos comunes respecto del departamento 902, de Luis Thayer Ojeda 127, como **Prueba Documental N° 19**, en concreto, 6 boletas, 5 de las cuales fueron extendidas a nombre de María Sosa, en los meses de octubre y diciembre de 2019, febrero, abril y mayo de 2019.

Que, por último, se incorporó mediante su lectura, la **Prueba Documental N° 66**, consistente en un Oficio de la Unidad Especializada en la lucha contra la Trata de Personas y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (UCIEX) de la República del Paraguay, en la que se contesta una comunicación remitida por el Ministerio Público y se remiten antecedentes, que forman parte de los siguientes documentos: Prueba **Documental N°66.1**: Oficio remitido de 21 de julio de 2020, emanado por el Ministerio Público de la República del Paraguay; **Prueba Documental N°66.3**, Informe que da cuenta que la UCIEX intentó comunicarse con las víctimas en Paraguay, pero dos de ellas manifestaron no querer saber más del asunto, dado que sus familias desconocen lo que les ocurrió en Chile, y las restantes tres, aun siguen tratando de ubicarlas; **Prueba Documental N°66.4**: reporte que da cuenta que en Paraguay y gracias a la acción coordinada con nuestro país, se recibieron 5 mujeres repatriadas: Jannyré SM (4815340); A.N.I.G. (69466489); Laura E., (6133382); S.C. y Antonia Luisa Vera Ahumada de 50 años. Todas manifestaron que no querían ayuda, ni ser albergadas, atendido que sus familiares no sabían su situación en Chile; **Prueba Documental N°66.5**: Se adjunta informe social de Hilda, Sonia, Laura, Jannyré y Araceli; **Prueba Documental N° 66.6**, consistente en un Informe de gestión, suscrita por la trabajadora social, Cecilia Espínola, destacando que Laura y Sonia, no tienen interés en participar en el proceso y las demás no tienen número de contacto o el que aportaron no existe.

7.- Declaraciones de “Samantha”, “Hilda” y “Sonia”. Declaración del testigo Francisco Pino y de los profesionales psicólogos del CAVAS.

7.1.- “Samantha”.

Que, se presentó a estrados la declaración de la testigo **Samantha (S.G.R.)**, ciudadana paraguaya, de 21 años, con domicilio reservado.

Que, al inicio de su declaración relató algunos antecedentes de su historia vital, afirmando que tiene estudios de escolaridad hechos en Paraguay, desconociendo si equivalen a tercero o cuarto medio en Chile. Indicó que durante su infancia vivió en muchas partes, pero antes de venir a Santiago, vivía en Asunción, con su mamá y una tía. Antes de eso, vivía sola, cuestión que hizo desde que tenía 16 años.

Indicó que en Paraguay se dedicaba a la prostitución y hacía otros trabajos que le dejaban buen dinero, lo que debió hacer, debido a su edad.

Decidió viajar, porque sus padres no se ponían de acuerdo, no tenía donde quedarse ni que hacer, y recibió una propuesta para viajar y lo hizo. En esa época trabajaba en un bar y conoció a una pareja (cree que son paraguayos) y le dijeron que podía venir a Chile, que la recibirían y así fue.

Viajó a Santiago el día 30 de marzo de 2019, cuando tenía 19 años. No precisa más antecedentes sobre la pareja que mencionó, porque no los recuerda bien, y debido a que estuvo con ellos muy poco tiempo. Señaló que tuvo un altercado con el esposo porque él quería tener intimidad, es decir, tener relaciones sexuales con ella, y Samantha le dijo que no. La mujer, le dijo que él era el hombre de la casa y que había que hacerlo. Samantha expresó que se sintió mal por la mujer y por ella, porque se sentía que la mujer estaba siendo abusada y ella también. Vivían en un condominio en Huechuraba. Entonces, Samantha se negó al requerimiento de aquel hombre y ese día, cada uno se fue a su habitación. En ese momento se comunicó con una niña que conoció en el bus, que se llamaba Yerutí. Ellas mantuvieron una conversación en el bus, de lo que cada una venía a hacer, le dijo que, si necesitaba ayuda, que había una

persona que la podía ayudar, dijo que la señora María la podía ayudar. Intercambiaron perfiles de Instagram, y por eso medio se comunicó. Yerutí, le comentó que era la segunda o tercera vez que venía a Chile, y que se dedicaba a la prostitución en un departamento en Providencia, y que la señora María era la mujer para la que ella trabajaba. Cuando le habló a Yeruti, ésta le dijo que hablaría con la señora María. A la hora, hora y media después, le avisó que la pasarían a recoger, la señora María, ella y otra mujer, que trabajaba en otro departamento, que no sabe quién es o como se llama.

Después que pasó el altercado, se comunicó con ella, juntó sus cosas, salió por una ventana del condominio y pasaron por ella, un vehículo gris, Kia. Estaban Yerutí, una muchacha, María y un niño. María manejaba. Le preguntó (María) cuanto llevaba, que venía a hacer acá, hablaron sobre lo sucedido con la pareja, le dijo que tenía un departamento, que tenía clientela, y que manejaba perfiles en donde se ofrecían servicios de prostitución, si así lo quería, “hasta ahí fue muy amable” expresó la testigo.

Al llegar al departamento, María la dejó con las chicas, 3 o 4 mujeres más y luego, ella venía en la semana. Primero le tomó unas fotografías y fueron a “sexo.cl” o a una empresa de nombre parecido, y le montó un perfil. Entre semana, María ya no era tan amable, eran “más golpeada en el hablar”, es decir, le hablaba distinto, “ya no era tan agradable”, insistió Samantha.

Señaló que cuando llegó, no sabía dónde estaba ubicado el departamento, pero ahora sabe que era en Luis Thayer Ojeda, a la entrada del Costanera Center, aunque no se sabe la numeración.

Se le preguntó a Samantha sobre lo que le habría dicho María a su llegada, y contestó que ella le dijo que eran servicios de acompañante, no le explicó ni horarios ni montos, porque cada muchacha tenía distintos servicios. Pero no le habló en términos monetarios, pero si le indicó que el 50% era para ella (María). Que posteriormente, cuando hablaron mejor, le dijeron que era un servicio “tipo pareja”, “tipo novia”, que no implicaba nada extra que no hiciera una pareja normal, María le dijo que había

distintos servicios, y que costaban \$30.000, \$35.000, dependía del tiempo que la persona estaría con ella.

En relación con las demás mujeres que conoció en el departamento, la testigo dijo que estaba Paola, Yeruti, Yayita, aunque ese era su sobre nombre, y otra chica que le decían Coty, que nunca dijo su nombre. Todas estas chicas eran paraguayas.

Agregó que fue publicada en “sexo.cl” con el nombre de “Pamela”. María pagó, pero aquello sería descontado de lo que ella ganara y no recuerda cuánto costó. Sabía que iba a ser descontado en distintos pagos, para que no se viera afectada ella. Indicó que las fotografías de las publicaciones las sacó María, en el departamento de Luis Thayer Ojeda, un día la pasó a recoger y fueron hasta “sexo.cl”. Ahí, María conversó con un hombre que era el encargado de subir las fotos a la plataforma. Recuerda que salía con un traje rojo y blanco, cree de enfermera, con distintas poses, y tenían un número y un nombre. La señora María le indicaba que posiciones adoptar para las fotos. El hombre que las atendió, en un momento la apartó y le dio una tarjeta, con un número e indicaciones cómo hacer para deshabilitar las fotografías de la plataforma, porque de lo contrario María tendría derecho al manejo total de las publicaciones. Afirmó que el lugar, es un edificio de oficinas, al ingresar, hay un sex shop, María ingresó primero y luego ella y luego le dieron las instrucciones.

Samantha relató que, al día siguiente de hacer el trámite de subir las fotos, llegaban las llamadas, que eran contestadas directamente con María. Cada publicación tenía un número de teléfono para comunicarse con la mujer de la foto, pero la verdad el cliente no hablaba con ella, sino con María o con la niña que fue a recogerla. Ella no tenía conocimiento de las llamadas. Todo el trato y la negociación del monto y la hora del servicio era hecho por María.

Indicó que una vez que se prestaba el servicio al cliente, debía de avisar en el chat o grupo que existía, afirmando que cada persona tenía su tipo de servicio, en su caso tenía “servicio tipo novia”. El cliente no podía pedir otro tipo de servicio, porque ella no lo hacía.

Samantha declaró sobre el último percance que tuvo con María, por el que decidió retirarse. Explicó que un domingo en la mañana, a las 9:30 o 10 de la mañana María le dijo que había un cliente y que iba a pasar a recogerla. María estaba en el otro departamento, cree ubicado en Curicó. Entonces, ella bajó y María llegó a recogerla y le dijo que el cliente no era para ella, pero que la iba a llevar a ella para que lo atendiera. Pasaron por el cliente, María los dejó en un hotel, que Samantha ignora donde queda, y el cliente le pagó a María. Luego, ella ingresó con el hombre a la habitación, pero éste estaba muy drogado, alucinando, hablaba solo. A Samantha le dio miedo y llamó a María, le pidió que pasara por ella, porque el hombre estaba en condiciones de no estar con nadie o que le podía hacer daño. María le dijo que eran dos horas y que aguantara un poco. El hombre se empezó a poner un poco violento, creía que iba a entrar alguien a la habitación, volvió a llamar a María, pero a ésta no le importó. Pasó una hora y María llegó con otra chica para el cliente y así pudo irse de ese lugar. María reaccionó mal y le gritó. Le dijo que era un cliente “VIP”, que pagaba muy bien y que la había dejado mal, porque ese cliente siempre la llamaba, que era un cliente frecuente y que no podía hacer eso que eso la perjudicaba. Samantha indicó que no sabe quién era el cliente, dado que no hablaba, no estaba en condiciones si quiera de hablar.

Después, Samantha relató que llegaron al departamento de Luis Thayer Ojeda y habló con María. Le dijo que eso no podía pasar, que le dio miedo, porque si bien, las cámaras del lugar estaban para protegernos, la verdad era que estaban ahí para controlarlas. Samantha le dijo a María que no la auxilió cuando debió haberlo hecho, y decidió retirarse del lugar. Es ahí, cuando se da cuenta que le faltaban \$800.000 y decidió denunciar, y luego la Policía de Investigaciones de Chile le dijo que eso en realidad era trata de personas.

Cuando se estaba retirando, María le insistió que se quedara, le dijo que la cambiaría de departamento, al de Curicó, pero Samantha le contestó que no quería, porque le dio miedo, porque ella no cuidaba de las chicas. Posteriormente fue a la PDI,

relató lo que le pasó y ahí le dijeron que no era solamente un robo, era trata de personas.

Sobre el otro departamento indicó que no sabe mucho, ya que nunca fue y solo escuchó de él. María le dijo que la iba a llevar allá, pero nunca ocurrió. Posteriormente, Samantha relató que vivió en un edificio de calle Curicó y escuchó la voz de María, pensó que ahí estaba el otro “local” y decidió mudarse de ese lugar, porque si estaba cerca no se sentía segura.

No precisó cuanto tiempo estuvo en el departamento de Luis Thayer Ojeda, pero indicó que no fue mucho. Agregó que los servicios empezaban generalmente como a las 9 de la mañana o cerca del mediodía, pero si llegaba un cliente a las 2 de la madrugada o a las 3 de la tarde, había que atenderlo. Y puntualizó que “todos los días debíamos trabajar”.

Sobre la forma en que los clientes pagaban por los servicios sexuales, Samantha indicó que tenían la posibilidad de realizar transferencias o pagar en efectivo. Si se hacían transferencias, era para las muchachas que elegían la opción, que María les guardara el dinero. Si pagaban en efectivo, ella recibía el dinero, pero se lo debía entregar al final del día a María, para que hiciera el conteo. Esto lo hacía de un día para otro. Si trabajaba un lunes, María pasaba el martes a la tarde.

Indicó que sabía que María vivía en el departamento de Curicó.

Sobre el departamento de Luis Thayer Ojeda, Samantha refirió que tenía dos habitaciones, una sala, una pequeña cocina, un balcón y un baño. Agregó que ellas dormían en las mismas habitaciones donde trabajaban, y que además existían dos cámaras de seguridad, una ubicada en la entrada. Luego, -y visiblemente emocionada- señaló que “no es fácil que esta gente se aproveche de lo que una hace por necesidad”. Continuó luego, señalando que la segunda cámara estaba en una esquina, arriba del baño, en medio de las dos habitaciones.

Samantha también relató que las niñas que estaban antes que ella, le dijeron que las cámaras funcionaban, y que no había que mostrarse frente a las cámaras, porque María las controlaba, tenía un micrófono y ella se metía y les hablaba. Contestaba o les

llamaba la atención, agregó que por medio de las cámaras María hablaba en cualquier momento, que estuviese viendo.

Sobre las transferencias, expresó que éstas se hacían a una cuenta de María, al parecer en el Banco Santander o Itaú, las muchachas guardaban su dinero en el mismo Banco de ella, porque ninguna contaba con documentos o tarjetas y por esa razón, María les guardaba el dinero.

Señaló también que cuando llegó, le dijo a María que ella prefería pagos en efectivo, y no que le guardara el dinero en el banco, porque no la conocía del todo, y cuando se percató que el dinero faltaba, la única que sabía que tenía dinero era ella, con ella hizo el trato. Ignora lo que María hacía con el dinero. Sabía que se estaba construyendo una casa, no sabe si acá o en Paraguay, porque eso les contó, que le faltaba poco para terminar su casa.

Samantha indicó que el número de clientes que le tocó atender no era fijo, por día, ya que dependía del flujo de clientes, así podía ser que un día atendiera 2 o 3, pero en otras oportunidades, 7, 8 o 10 clientes.

La testigo relató que, en el departamento, en cada habitación, había una cajita al costado de las camas con preservativos, pero eran muy malos, se rompían, no eran de buena calidad, y las chicas ya le habían contado que tenían accidentes. Entonces, ella decidió comprar preservativos propios. Agregó que ella podía comprar preservativos, porque no tenía tantas deudas como las demás. Las demás tenían hijos pequeños, familia en Paraguay y ella no.

Luego, indicó que podían salir a comprar, pero solo una persona, es decir, todas encargaban las compras a una chica y esa era quien salía a comprar, y a parte, podían salir a algo puntual, pero un tiempo, una hora, aproximadamente, ya que siempre María las estaba llamando y preguntando que donde iban, para qué, cuando volverían, etcétera.

Samantha señaló que los costos por alimentación o insumos de higiene corría por cuenta de cada chica. “Una iba a comprar o la pedían directamente a la casa para evitar problemas” aseveró.

Luego, Samantha relató que cuando recién llegó a Santiago, al condominio de Huechuraba, trabajaba independiente en páginas gratuitos, y ahí conoció a Francisco Faúndez, que es abogado. Él requirió sus servicios, pero después, hicieron amistad y compartieron juntos. Él era la única persona que conocía, por eso le pidió ayuda, le dijo que la encontrara y la llevara a hacer la denuncia, porque era dinero con el cual ella contaba.

Preguntada sobre las consecuencias de su paso como trabajadora sexual en el departamento de Luis Thayer Ojeda, indicó que sufrió una infección, es un herpes, que, si bien no es contagioso, la afecta porque si tiene una pareja o tiene relaciones, la irrita, le da comezón, y por lo mismo, no puede tener una pareja constante. Sabe que la adquirió en Luis Thayer Ojeda, producto que un preservativo que se rasgó.

Sobre la relación con María, Samantha indicó que no trataba mucho con ella, y cuando la veía por los pagos, siempre había un problema, un error, o algo faltaba, y siempre en perjuicio de las chicas. Indicó que trataba de no cruzar palabra con María, porque no tenía donde ir, y escuchaba que les decía a las muchachas “ya, pero ¿y tus hijos?, tienes que mandar dinero en Paraguay”, todo ello en guaraní, es decir, las ponía entre la espada y la pared. Ella no tenía hijos ni familia, pero su único techo era ése, no tenía donde ir. Pero no podía dejar pasar lo que le pasó con ese caballero.

Samantha dijo que llegaban policías como clientes, les preguntaban si estaban bien, cuál era el trato. Señaló que en una oportunidad le tocó atender a un PDI, y le dijo que, no tenía con quien hablar y habló con él, porque fue una oportunidad para desahogarse. Le contó como llegó allá, como era el trabajo, el trato, esas cosas.

A las preguntas de la querellante particular, indicó que se sentía mal por la forma en que María increpaba a las chicas, en relación con que debían enviar para sus hijos, les decía frases como “no pensás en los demás, solo pensás en vos”, lo que a Samantha le provocaba molestia, ya que todas estaban ahí y aceptaban, por necesidad.

Relató también que luego de hacer la denuncia y de que le indicaran que era trata de personas, se fue por dos o tres días a un hotel y luego se mudó que una pareja que tenía en ese momento, y vivieron en Dardignac con Loreto, en Recoleta. Luego

tuvo un problema con él y la PDI le dijo que la podían llevar a un lugar seguro. Ella aceptó y la policía la fue a buscar y la ayudó a salir, la trasladaron en un automóvil hasta una casa en Estación Central. Ahí, la esperaban con los brazos abiertos, era una casa grande. No recuerda cuanto tiempo estuvo ahí, probablemente unos ocho meses, con la fundación que incluyó un traslado de casa.

Agregó que al principio fue bastante difícil, las personas que la querían ayudar, las psicólogas hablaron mucho con ella, pero en ese momento no tenía la capacidad de confiar, no era fácil hablar y contar lo que le había pasado, una vez más, fue muy difícil, no pudo avanzar ni crecer, al menos en cinco meses, después, cuando ya vio que la gente la quería ayudar, ya confiaba más en una que en otra, y podía hablar un poco más. Indicó que recibió terapia siempre, que siempre estuvieron con ella, a toda hora, recibió ayuda y consejo, cuando se sentía mal y lloraba, siempre había alguien.

Luego, a las preguntas de la querellante INDH, aportó más detalles sobre su infancia. Indicó que su familia estaba compuesta por su mamá, su papá y su hermana. Su hermana se embarazó a los 16 años, y sus padres se separaron. Su mamá estaba con depresión, por la pérdida de un hijo varón. Su hermana se fue de la casa con su pareja e hijo, y el papá se fue. Ella tenía 13 años y su comportamiento empezó a empeorar. La mamá la mandó con el papá, en el año 2015. Él no tenía tiempo para mirarla ni controlarla, entonces, ella estudiaba de noche. El papá tomó un trabajo en Brasil o Ciudad del Este y la dejó sola en un arriendo. Su papá la ayudó unos ocho meses después de que se fue, pero luego de ese tiempo dejó de ayudarla. Tuvo que conseguir trabajo y por la edad no pudo conseguir. “No tenía dinero para nada” expresó. En esa época tenía una pareja y él la ayudaba con sus gastos, pero cuando terminaron, encontró una oferta para trabajar con un masajista, pero era de acompañante. Ese fue su primer trabajo en la prostitución y tenía 17 años. Había trabajado antes, pero de manera informal, le pagaban muy mal. Empezó a trabajar a los 17 años en la prostitución y a los 18 buscó trabajo en un financiera, pero le pagaban poco y no le alcanzaba para sus gastos.

Explicó que luego del incidente con la pareja, salió por la ventana. Dijo que cuando conoció a esta pareja en Paraguay, se veían bien, presentables. Pero ya en Chile se dio cuenta que tenían problemas de consumo. Dormían toda la mañana y se mantenían encerrados consumiendo. Dejó una ventana abierta, para salir, por si no la dejaban irse, tenía miedo de que la denunciaran a migraciones. Nunca la amenazaron, pero el hombre había cambiado. No se atrevió el decirles “me voy”, por lo que prefirió salir por la ventana, ya que lo consideró una forma más segura.

Indicó que no recordaba cómo se llamaba el chay de WhatsApp, pero que estaban las mujeres de Luis Thayer Ojeda y del otro departamento y que se registraba ahí la llegada de los clientes y los servicios, para rendir cuentas y que todo funcionara como María quisiera.

Señaló que en el departamento de Luis Thayer Ojeda había una habitación que tenía una cama grande y ahí dormía con Yayita, y en la otra habitación había dos camas, ahí dormía Yeruti. Y había otra cama en la sala, para emergencias. Si llegaban muchos clientes y no sabían dónde meterse, todas de auxilio ahí, o en el baño. Quizá durmió una vez ahí, pero las chicas no lo usaban. Afirmó que las mujeres que estaban en ese lugar eran Yeruti, Paola, Yayita y ella.

Preguntada sobre si tenían espacios o un periodo de descanso, indicó que no había clientes, se acostaban, dormían, veían televisión, compartían, pero no había un día, por ejemplo, domingo, para disponer para el descanso.

Indicó que cuando se contagió de una enfermedad de transmisión sexual, no sabía pese a los síntomas y siguió trabajando, que sólo asistió al médico porque su amigo Faúndez la llevó. Ella no conocía la ciudad ni el sector, menos sabía dónde ir a una atención médica.

Finalmente indicó que su situación migratoria, en esa época era de turista, cuya visa dura 90 días.

Luego, al contra examen de la defensa, indicó que la pareja con la que se quedó al principio, era una amiga de nombre Paola y su marido. Que no recordaba cuanto se quedó, pero podría ser posible que permaneciera con ellos unas dos semanas. Indicó

que no recordaba el tiempo en que estuvo con María, ni la fecha exacta de la denuncia, dato que se incorporó con un ejercicio del artículo 332 del Código Procesal Penal, con una declaración prestada con anterioridad en sede policial, en donde habría declarado que fue el 19 de abril de 2019.

Agregó que durante el viaje Yeruti solo le dijo que ejercía el comercio sexual y que trabajaba con María, y que si tenía algún problema la podía llamar. Luego, Yeruti le dijo que no confiara en María, pero Samantha sabía que Yeruti había viajado en más de una ocasión a Chile para trabajar con María. No sabe quién era el encargado del departamento de Luis Thayer Ojeda, “tenía entendido que era de María” respondió.

Sobre su asistencia a las oficinas de “sexo.cl”, indicó que debía ir con María, que ésta no podía ir sola. Aquello, lo creía porque suponía que María necesitaba ver lo que estaban haciendo, y cree también que debía estar presencial para recibir la tarjeta que el caballero le dio. Nadie le preguntó si autorizaba algo o no y no recuerda si firmó algún documento.

Indicó que cuando habló con María sobre los ser vicios, ella le dijo que sólo haría servicio de acompañante y que no prestaba ningún servicio que la hiciera sentir incómoda, por lo que María le dijo que hacer otras cosas le daría más dinero.

Añadió también que antes, María la publicó con la foto de otra chica, entonces llegaban los clientes, veían que no era ella y se iban.

Se le preguntó porque no llamó a Francisco Pino cuanto tuvo el problema con su amiga Paola (y su marido) y Samantha indicó que la primera persona en que pensó fue una compatriota, Yeruti.

Se le preguntó por el horario, y Samantha indicó que el mayor flujo de clientes era en la noche. Luego, se le preguntó de qué dependía el horario de atención a clientes y Samantha contestó “del primer hombre que se le ocurría venir a buscar sexo. De eso dependía”.

La defensa le preguntó sobre un problema que tuvo con María con motivo de una salida al bar “Harvard”, y Samantha señaló que un día sábado, salieron con las

muchachas, quedaron en salir después de las 2 de la mañana, cuando se terminaba el turno, y las muchachas le dijeron que no le avisaran a María porque se les pegaba. Y las muchachas llegaron al día siguiente, eso fue lo que pasó.

La defensa intentó sugerir que el problema que tuvo con el cliente no fue el motivo de discusión con María, sino esta salida al bar, a lo que Samantha indicó que ellas salieron el sábado y lo del problema con el cliente fue un domingo. Ella llegó del bar “Harvard” y María llamó, para que se duchara y bajara.

Finalmente, la defensa le preguntó sobre los contactos que tenía con su abogada y Samantha indicó que la última vez que habló con ella, le hablaron de la fecha de su declaración, cree que la indemnización es por el dinero que María le quitó y dijo no saber que su abogada estaba pidiendo \$15.000.000.

7.2.- “Hilda”.

Que, en sede de garantía y de manera anticipada de declaró **“Hilda”**, de iniciales H.C., paraguaya, de 24 años a la época de su declaración, la que fue incorporada y exhibida en este juicio oral por medio de la videograbación descrita en **Otros Medios de Prueba N° 120**.

Indicó que vivía en la localidad de Luque, en la ciudad de San Lorenzo (Paraguay), y que vivía con sus hermanas (de iniciales B. y S.), con su hijo y con los hijos pequeños de sus hermanas que tienen un año y cuatro y meses y 10 meses, respectivamente, en tanto su hijo tiene 4 años 11 meses, y se encontraba en esa época al cuidado del padre, en Paraguay, antes, cuando ella podía pagar, estaba al cuidado de su hermana.

Relató que antes de viajar a Chile no había salido nunca de Paraguay y que vino porque allá renunció a su trabajo y necesitaba trabajar. Expresó que le hicieron una oferta, que le iban a pagar bien y allá está muy mala la situación. En Paraguay ganaba entre \$130.000 y \$150.000 pesos chilenos, que era un millón y medio en

guaraníes. Con eso, “se paga arriendo, se come, se paga la luz y agua y nada más” afirmó.

Agregó que la oferta se la hizo María Sosa, que es la señora con la que trabajaba. Ella se comunicó con su hermana por medio de Facebook y su hermana le dio el dato y luego hablaron por WhatsApp. Ella le preguntó a María en qué consistía, donde era, cuánto se iba a ganar, y ella le dijo que se ganaba entre \$900.000 y un millón de pesos mensuales “y eso en Paraguay es mucha plata” afirmó, quedó muy sorprendida y María le dijo que le iba a pagar los pasajes.

Su hermana, de inicial “B” era la conocida de María, la conoció en España. No sabe en qué año se conocieron ni cómo se conocieron, solo sabía que era su amiga, porque mantenían contacto por Facebook. Fue su hermana quien le pasó el teléfono de María para que hablara con ella directamente y también le dijo que María le tenía una oferta de trabajo, y ella le respondió (a su hermana) que si se ganaba tan bien como decía, se iría a Chile.

Dijo que con María comenzó a hablar por WhatsApp, con mensajes de texto y audios. María le decía que de lo que se ganaba, el 50% era para ella, y que se trabajaba de 9 de la mañana a 2 de la madrugada. Indicó que ingresó a Chile el 17 de agosto de 2018 y unos 15 días antes empezaron las comunicaciones con María.

Señaló que el trabajo consistía en ser “escort”, ella sabía lo que era eso, “que te pagan para que tengas relaciones sexuales”. En Paraguay, trabajaba en un laboratorio y no había trabajado como escort, sin embargo, como la oferta era muy grande, insistiendo que en Paraguay era mucha plata, por eso aceptó, quiso venir a probar.

Explicó que María le dijo que vivía en un departamento y que ella pagaba todos los gastos, por eso era que sacaba el 50% de la ganancia.

Ante el ofrecimiento de trabajo, le dijo a María que lo iba a pensar, que debía ver con quien dejaba a su hijo, y que una vez que dejó a su hijo con su hermana, decidió venir.

Hilda refirió que viajó en avión y que María le compró el pasaje, de hecho, llegó con María Sosa desde Paraguay a Chile. Aclaró que cuando hablaba con ella, María

estaba en Chile, pero le dijo que tenía que ir a Paraguay y que iba a aprovechar de comprar los pasajes y así, no se venía sola. María le mandó vía WhatsApp una foto del pasaje, con el día y la hora. Entonces, desde su casa, se fue en un taxi, sola y se encontró con María en el aeropuerto. Nunca la había visto, pero le dijo que estaría con su hijo y su hijita y Samantha le había dicho como andaría vestida para que se reconocieran.

Agregó que no traía dinero desde Paraguay y María no le dijo nada al respecto. No supo cuánto costaba el pasaje, pero María le dijo después que eran \$265.000. María le compró el pasaje, pero con la condición de devolverle el dinero, trabajando sexualmente. Hizo presente que finalmente, le pasó \$450.000 como costo del pasaje, hecho que no se explica como ocurrió. Cuando le pagó todo ese dinero, María le mostró el ticket aéreo, porque mientras lo estaba pagando, no sabía cuánto le había costado, solo cuando lo vio supo que había pagado de más y se sintió estafada, jodida. Era un pasaje de ida y de vuelta, porque le había dicho a ella que no se quedaría mucho tiempo, que se quería regresar a Paraguay antes de fin de año. Hilda señaló que se demoró unos 6 o 8 días en pagarle a María, periodo en el que tuvo que atender a muchos clientes por día, unos 6 o 5 clientes. Agregó que de todo lo que pasaba el cliente, le tenía que entregar el 50% a María.

Indicó que cuando llegó a Santiago estaba con María, y nadie (en migraciones) le hizo alguna pregunta.

Afirmó que apenas llegó, fueron directo al departamento que arrendaba María que quedaba cerca de metro Tobalaba, donde estaban las chicas y la instalaron ahí. Indicó que ella trabajaba con el nombre “Paola”, elegido por ella. Las otras chicas también usaban otros nombres. En ese momento, no realizó servicios sexuales, y luego le avisaron a unas chicas que debían trasladarse. Era en Santa Rosa 170 en Santiago, era un edificio. Así llegó al departamento 1005, lugar que servía para atender a clientes. Indicó que ella no eligió donde estar ni donde atender clientes, porque eso lo decidía María Sosa.

Describió el departamento cercano al metro Tobalaba como grande, con dos habitaciones, una matrimonial y una pequeña, un balcón, living y cocina y el de Santa Rosa también contaba con dos habitaciones, una matrimonial y la otra pequeña. Agregó que el domicilio de María estaba en el mismo edificio de Santa Rosa 170, pero en el piso 7, y aquello lo sabe porque cuando llegaron, fue con ella primero a su departamento y de ahí fueron a Tobalaba.

Indicó que recordaba que el departamento Tobalaba queda en la calle Luis Thayer Ojeda. Al llegar a ese lugar, María dio instrucciones y con las chicas se quedaron ahí, y dijo que estaban “Yani”, Paloma, Jazmín. Sabía que ellas trabajaban en el comercio sexual y desconocía como es que habían llegado a Chile. Indicó que dos o tres de ellas dormían en la pieza grande y que ella dormía en la habitación más pequeña, lo que también era decisión de María Sosa.

Señaló que estuvo hasta fines de noviembre de 2018 en ese departamento, porque tenía que viajar de regreso a Paraguay el 10 de diciembre, porque adelantó su vuelo, quería ver a su hijo que cumpliría 4 años y viajó en avión.

Hilda indicó que María la llevó al departamento 1005, porque era ella quien tomaba todas las decisiones, “ella nos traía, ella nos llevaba, ella decidía” afirmó.

Cuando regresó a Paraguay trabajó, indicando que tenía un negocio y que después de unos dos meses María Sosa le escribió (por WhatsApp) que, si quería volver, las puertas estaban abiertas y que ella la recibiría. Hilda dijo que cree que le dijo eso porque seguramente no tenía chicas, había chicas que no se quedaban mucho tiempo. Hilda le respondió que cualquier cosa le iba a avisar, que estaba con su hijo y con su esposo. Luego, en marzo de 2019 decidió regresar, porque al negocio que instaló, no le iba tan bien y le había preguntado si había trabajo para volver y María le dijo que si, y quedó en eso, que iba a volver.

En su segundo viaje, Hilda refirió que volvió a viajar por vía aérea y en compañía de María Sosa. Señaló que nunca vio el ticket porque ni siquiera se lo mostró, María hacía todo, incluyendo los check in. Al igual que en la primera oportunidad, debía devolverle el precio del pasaje, y esta vez le costó \$230.000, suma

que en Chile fue pagada. Esta vez, le advirtió a María que si el pasaje pasaba los \$250.000 no le iba a pagar ese dinero. En este segundo viaje, tampoco ingresó a Chile con dinero. Dijo que no recordaba la fecha exacta de ese viaje, pero que fue casi a fines de marzo de 2019.

En esa oportunidad, fue instalada directamente en el departamento de Luis Thayer Ojeda y ahí se quedó. Al igual que en la primera vez, el pasaje adquirido era de ida y de vuelta y María estuvo de acuerdo con que viniera solo por un tiempo. No intención no era quedarse, sino solo estar unos 3 o 4 meses, no quería estar más tiempo, por su hijo. María la llevó al departamento de Luis Thayer Ojeda en su auto, un Kia de color gris. Afirmó que sabía que ese auto era de María, porque ella pagaba.

En esa oportunidad, vio a otras mujeres, recordando a Lisi, Ana y Jeanette y después de un tiempo, llegó Rossana y Pamela. Sabía que Rossana era Yeruti y que Pamela era “S”. Indicó que a esa fecha (de su declaración) no sabía nada de Rossana pero que sabía de Pamela, sin embargo, no podía decir su domicilio.

Indicó que todas trabajaban en lo mismo, eran siempre paraguayas, y que Pamela estuvo como una semana, porque tuvo un roce con María, la otra niña se quedó hasta junio. El problema que tuvo Pamela fue porque a la chica le salió “un domicilio” y luego llamó a María, porque le dijo que no quería atender a ese cliente, porque era un adicto a la cocaína. Ella no aguantó y se fue. Aclaró que los domicilios eran llevar a las chicas a un hotel o a un departamento. Añadió que además de que el cliente era adicto, Pamela había salido el día anterior y no estaba para trabajar ese día.

En su segunda visita estuvo hasta fines de mayo de 2019. Tenía que volver, y la volvieron a llevar al departamento 1005. María la llevó y no le podía decir que no, y esperó ahí, hasta el día en que se fue, porque tenía pasaje de vuelta el 9 de junio.

Indicó que existían diferencias entre los departamentos, en el 1005 había máximo 4 chicas, pero en Tobalaba siempre 4 o 5 chicas. En este último, se le cobraba al cliente desde \$40.000, en cambio en el 1005 los servicios empezaban en los \$30.000. Indicó que en la primera vez ganó más dinero, porque había más flujo de dinero, y que por eso se demoró 6 días en pagar el pasaje, pero en la segunda ocasión, hubo menos

clientes y ya casi no había trabajo, por eso se demoró cerca de 20 días en pagar el segundo pasaje. Señaló también que en esa segunda oportunidad había otras chicas que trabajaban “full”.

Indicó que al regresar a Paraguay estuvo con su hijo y su familia, pero nuevamente volvió a dejar su trabajo, por el poco dinero que obtenía, así que luego de un mes y algo más, decidió volver a viajar. En esa tercera oportunidad, no mantuvo contacto con María, solo a mediados de julio volvieron a hablar y María le volvió a ofrecer comprarle el pasaje si ella quería volver y ella aceptó.

En su tercer viaje, el 26 de agosto de 2019, volvió a viajar en avión, pero esta vez sola. Debió cancelar -ya en Chile- \$460.000 por ese pasaje. María además le dijo que le enviaría dólares para que ella los retirara, como viático, por si le preguntaban en el aeropuerto, en migraciones, ella debía decir que ese dinero era para usar en turismo. Cuando llegó a Santiago, le entregó los 300 dólares a María y ella le dijo que el monto que le estaba cobrando, era por el costo del pasaje y además por el cambio del dólar. Hilda indicó que se demoró 17 días en pagarle el pasaje. Había poco trabajo, por eso se demoró en pagarle. En esta oportunidad, ya no fue a trabajar a un departamento sino a una casa, cerca de Metro Salvador.

Hilda contó que cuando llegó al aeropuerto la fue a buscar María Sosa en su automóvil Kia y la llevó hasta una casa en Fernando Manterola con Ruiz de Gamboa. Indicó que estuvo una semana en el departamento 1005, para ver si podía trabajar más, porque en la casa ya no estaba haciendo efectivo, porque tenía que pagar su cuenta. Indicó que estuvo en el 1005 un tiempo y luego en Ruiz de Gamboa, porque ella no tomaba esas decisiones sino María Sosa.

En la casa, vio a más chicas, citando a Jazmín y a otra chica que le decían “Bebota”, siempre todas paraguayas.

Indicó que en la casa los horarios eran iguales, de 9 de la mañana hasta las 2 de la madrugada y los viernes era “full time” hasta las 5 de la mañana, porque había más clientes, cree. Este horario era de lunes a lunes, y no tenían descanso. Solo los

domingos, descansaban una o dos horas. Cree que era para no perder clientes, y María tomaba esa decisión.

Hilda relató que tenía que avisar al salir y al volver en un grupo de WhatsApp, que se llamaba “Chicas súper poderosas”. María llamaba, les preguntaba a las demás si ya volvieron, cosas así. Además, había cámaras en la casa y en el departamento 1005 y también en el de Tobalaba.

María avisaba de la llegada de los clientes, en ocasiones apagaba los celulares y en otras los dejaba prendidos y si un cliente llegaba tarde, despertaba a las chicas, porque había que atenderlo. María tenía los celulares y decidían si se prendían o no. Solo los atendía María Sosa o la chica que trabajaba con ella, Tania, que también prestaba servicios sexuales y era la mano derecha de María, estaba con ella casi todo el tiempo, la ayudaba a atender los celulares. Era paraguaya también.

Agregó que María tenía unos 15 a 16 celulares, porque estaban muchas chicas y cada celular tenía un nombre de quien era. Tenía detrás un papel pegado que decía “Pao” y si llamaban a ese celular, era que el cliente se quería atender con ella. Se publicaba en varias páginas, fotos de las chicas y el número al cual tenía que llamar.

Las fotos de las publicaciones eran de cada una de las mujeres, María les sacaba fotos y las publicaba. En su caso, le sacó fotos la primera vez que vino a Chile y la tercera. En esas fotos tenía salir con ropa sexy o desnuda, y en poses sexys. Si no le gustaba la foto, María la borraba. Las fotos las publicaba en las páginas en donde se publicaban a las chicas, “mi privado”, “sexo.cl”, son páginas de internet. Se publicaba con el nombre que la chica se identificaba para trabajar. Sólo en “sexo.cl” tuvo que ir a firmar para autorizar las fotos, no recuerda muchos detalles, porque fue en el año 2018. Se indicaban además los servicios sexuales que cada chica prestaba, si sexo oral, vaginal, posiciones, algunas chicas anal, precisando que ella no hacía anal. Si llegaba un cliente que, por ejemplo, quería tener sexo anal con ella, ella le decía que no, que podía hacer lo que especificado o bien el cliente se iba.

Hilda refirió también que a veces los celulares sonaban todos a la vez, y le correspondió contestar a ella, que María le pasaba los celulares a más de una chica,

para que las llamadas fuesen contestadas, pero que la regla general era que María los contestara, ya que se hacía pasar por las chicas y coordinaba con el cliente. Luego, les daba aviso que iba un cliente para que lo recibieran.

Señaló que no se podía negar la atención a un cliente y María se enojaba cuando pasaba eso, porque a veces, si alguien no quería y se lo pasaban a otra chica, pero si el cliente se iba, María se enojaba. Preciso que María mantenía los teléfonos donde ella vivía.

Los valores de los servicios sexuales eran fijados por María, y tenían instrucción que, si el cliente se pasaba de la hora, tenían que cobrarle un adicional, y porque cosas, se cobraba adicional.

María sabía de la llegada y salida de los clientes porque había cámaras en la casa, en el pasillo, en la entrada y en el segundo piso y además en el grupo de WhatsApp debían informar si ya llegó, si pagó, el monto, y cuando el cliente se iba también.

Los clientes podían pagar por transferencia o con efectivo. Ella recibía el 50% de ello. Si pagaba con efectivo, cada chica lo recibía y al otro día en la mañana María pasaba y hacían las cuentas. Si pagaba con transferencia, se transfería a la cuenta de María o de su hermana, Miryan Sosa, o del novio de ella, Luis Araya. Dos cuentas eran Banco Estado y otra era Banco Santander, esta última era del novio de María Sosa. Añadió que sabe esa información, porque cuando un cliente hacía transferencia salían todos los datos de las cuentas ya que estaba anotado en una agenda. Cuando María Sosa iba a hacer los cobros del día siguiente, ahí les daba el 50% de lo que se pagaba en transferencia.

Hilda expresó que en la casa había una agenda, con los datos de las cuentas para transferir, y se anotaban con sus nombres y los servicios realizados.

Señaló que los domicilios eran sólo en la Región Metropolitana y que todas las chicas los hacían, costaban \$60.000 por una hora. María las llevaba en su auto hacia el lugar en donde se haría el servicio y ella también las iba a buscar.

Aseveró que, si los clientes les dejaban propina, también debían entregar a María la mitad de aquel dinero, y debían avisarle a María de ello. Cuando vino la primera vez, no sabía, pero luego, se lo contaron las chicas. Relató que tuvo un problema con María debido a las propinas, en que el cliente le pagó \$40.000 por el servicio, ella lo dejó en el grupo de WhatsApp y luego el cliente le dio \$30.000 como propina, y ella no dio aviso de ese pago. A los 15 días el cliente volvió María le preguntó cuanto le había dejado a la chica y éste le respondió que \$70.000. Tuvieron una discusión muy fuerte e Hilda señaló que negó en todo momento haber recibido más dinero. Encontraba que la situación de las propinas era muy injusta, que deberían ser de ellas, y se sintió muy mal al tener que entregar la mitad de la propina en cuestión. Indicó que María, al hacerse pasar por ella, fácilmente obtuvo la información.

Hilda dijo que María les daba preservativos, pero eran de mala calidad y a varias niñas se les habían roto en varias oportunidades.

Describió la casa de Ruiz de Gamboa como de dos plantas, abajo tenía tres habitaciones para trabajo, una sala y un baño. Donde se prestaban los servicios sexuales era abajo, dormían arriba, había tres piezas, había una grande, con 5 camas, la mayoría de las chicas estaban ahí, pero al estar todo ocupado cuando ella llegó, tuvo que ir a una habitación más pequeña con otra chica.

Luego, se le exhibieron cinco sets fotográficos, con imágenes del inmueble de calle Ruiz de Gamboa 029, que corresponden a **Otros Medios de Prueba N° 126**, y la testigo indicó, lo que sigue:

Set 1:

Foto 1: es el primer piso de Ruiz de Gamboa. La primera habitación, cama de una plaza y un espejo.

Foto 2: es el closet, estaba en dos habitaciones.

Foto 3: son los preservativos. Los compraba María Sosa de la marca Gusto. Eran los de mala calidad.

Foto 4: es la habitación N°3.

Foto 5: es la habitación N°3 también

Foto 6: es la sala junto a la pieza.

Foto 7: es la sala también. Indicó que se ve sobre la mesa la agenda, se ve de color negro, pero era azul marino, ahí se anotaba el registro de los clientes que se atendía y fue la que se llevó la PDI, el mismo día que fueron.

Foto 8: este era el closet de las niñas, donde tenían sus cosas personales.

Set 2:

Foto 1: es el pasillo donde está la cámara, que dirige hacia la sala de Ruiz de Gamboa. La primera vez, dijo que ella no sabía que había cámaras y en Ruiz de Gamboa tampoco sabía que había cámaras. Cuando se enteró después, vio que eran tres cámaras, y dijo “Dios mío, acá no hay nada que hacer” le pareció algo muy controlador. Añadió que María Sosa era la única que tenía acceso a las imágenes de las cámaras. Hizo presente que la cámara está en la segunda puerta arriba del marco.

Foto 2: era una ofrenda que se le hacía a una santa que era del trabajo sexual.

Foto 3: el televisor donde se veían las tres cámaras, de ahí se controlaba, esa “tele” a veces estaba prendida y a veces apagada, pero si María quería revisar, la prendía y la revisaba.

Foto 4: es la entrada principal, donde se recibía a los clientes, se ve la cámara sobre el marco de la puerta. María, por medio de su celular también podía ver lo que mostraban las cámaras. Las cámaras eran solo de video, pero las cámaras de 1005 eran también con audio.

Foto 5: es la cámara que está ubicada subiendo la escalera.

Foto 6: señaló que este lugar, queda entrando para acceder a la escalera, por el pasillo, se ve además de puertas, la cámara arriba.

Set 3:

Fotos 1 y 2: Era la cámara dirigida hacia donde dormían dos chicas en la casa de Ruiz de Gamboa, era la habitación principal donde dormían todas.

Foto 3: se ve el pasillo que llevaba a la cocina y al closet principal.

Foto 4: es el closet principal donde guardaban sus maletas y cuando lavaban ropa lo hacían ahí también.

Foto 5: el baño.

Foto 6: la cámara de la entrada principal arriba del marco.

Foto 7: es la entrada de la habitación donde dormían todas.

Set 4:

Foto 1: es la cocina donde hacían los almuerzos, la cena, el desayuno. Indicó que entre todas colaboraban, hacían una compra para la semana, y se turnaban quien cocinaba.

Foto 2: habitación N°1 en donde se atendían clientes en la casa.

Foto 3: la misma habitación.

Foto 4: habitación N°2 en la que se atendía a los clientes.

Foto 5: preservativos que se usaban cuando había que trabajar.

Foto 6: habitación en donde se trabajaba.

Foto 7: habitación 2 en donde se trabajaba.

Foto 8: cocina.

Set 5:

Foto 1: habitación en donde se trabajaba arriba en el piso 2, anteriormente, antes de que se habilitara el piso de abajo, “como hace un mes, antes que pasara todo esto” explicó.

Foto 2: habitación en donde estaban las cosas de las niñas, sus cosas personales, el closet. Está la agenda arriba del closet, la toallita húmeda.

Foto 3: cosas personales de Jannyré.

Foto 4: celular de una de sus compañeras.

Foto 5: celular de una compañera. Eran celulares personales, no de María.

Foto 6: celular de una compañera.

Foto 7: pasillo en donde entraban todos los clientes.

Luego, reconoció a María Sosa como la acusada en la sala de audiencias.

Agregó que su hermana de inicial “S” llegó a Chile por su intermedio, ella viajó porque también necesitaba de plata y decidió renunciar a su trabajo y venir. Cuando ella viajó su hijo tenía 8 meses. María Sosa también le compró sus pasajes. Se escribió con ella por WhatsApp. Su hermana realizó el viaje a Santiago en bus, porque María le dijo que el pasaje en avión era más caro y por eso su hermana optó por esa vía. María compró el pasaje y le cobró cerca de \$130.000.

Indicó que su hermana estuvo muy mal, pésimo, y que seguía estando mal. Que aquello se debió a que ella vino a encontrarse con cosas que no esperaban. Quizá por el trato, porque tuvo una discusión con María, no aguantaba estar acá tampoco. Le dijo que si ella no hacía todo lo que se tenía que hacer, que no le servía, que para que vino, que si no trabajaba. Su hermana le dijo que no hacía anal, oral sin condón y tampoco domicilios. Su hermana está emocionalmente mal. Solo quiere irse a Paraguay. Más de 15 días demoró su hermana en pagarle el pasaje. No recuerda si María le envió dinero.

Agregó que cuando su hermana llegó en Chile, por todo lo que estaba pasando en el país (19 de octubre) bajó el número de clientes, entonces no pudo trabajar. Su hermana no tenía dinero y los primeros días, tuvo que ella pagar todo.

Hilda declaró también sobre el procedimiento del día 27 de noviembre de 2019, Indicó que ese día, estaban todas ahí en el segundo piso, empezaron a salir las chicas en grupo, ella no entendía nada, les preguntó y una de las chicas le dice que si llegaban los de la PDI que dijeran que estaban trabajando ahí de limpiadoras. Las chicas se empezaron a salir del grupo de WhatsApp y a alborotarse. Ella también salió del grupo. Transcurridos cinco minutos, llegaron los de la PDI. Preciso que quien le dijo que llegaría la policía y que debía decirles que era limpiadora fue Mariana que ese mismo día se fue de la casa.

Indicó que ese día, los policías vieron la casa, y ella estaba en la ventana y la vieron. Nadie quería abrir, sin embargo, ella fue a abrir, y les dijo que solo vivía ahí, que no era la encargada, pero los dejó entrar, y los policías de inmediato les pidieron

sus documentos, y todas las tenían. Estaban Nicole, Mariana, “J”, “M”, su hermana y ella. Indicó que ella se quedó en la casa hasta que los de las PDI las llevaron hasta el lugar en donde debían declarar. Prestó declaración en la policía y en Fiscalía.

Por último (examen directo) indicó que estaba esperando la fecha para volver a su país, que extrañaba mucho a su hijo, y sus intenciones no eran quedarse mucho tiempo. Tenía el vuelo para el 21 de diciembre. Expresó que su experiencia en Chile no fue buena por muchas cosas personales.

A las preguntas del querellante INDH indicó que de la casa no salían, si querían salir, le tenían que pedir permiso a María Sosa, pero ya a la media hora, a la hora, ella llamaba. Cuando estaba en Tobalaba y en 1005, controlaba desde el celular. En la casa, no sabía. Expresó el año pasado (2018) fue a Valparaíso, María las llevó y las trajo. Sin ella, no pudo salir a ninguna otra parte del país.

Al contra examen de la defensa, indicó que María no invitaba a nadie, y que le preguntaba si tenía conocidas que querían venir.

Indicó que no fue obligada a prostituirse, y aceptó el porcentaje por los servicios. María no la forzó, siempre le decía que tenía las puertas abiertas y que la iba a recibir siempre. Tampoco le retuvo documentos, pasaporte o dinero.

Que, con posterioridad, dentro del desarrollo del juicio oral, se incorporó la **Prueba Documental N° 15**, correspondiente a Ficha de Identidad de la víctima H.C.

7.3.- “Sonia”.

Que, también en sede de garantía y de manera anticipada de declaró **“Sonia”**, de iniciales S.E.C., paraguaya, de 27 años a la época de su declaración, la que fue incorporada y exhibida en este juicio oral por medio de la videograbación descrita en **Otros Medios de Prueba N° 119**.

Al inicio de su declaración indicó que antes de venir a Chile vivía en Asunción con dos hermanas y su hijo, de 9 meses, el que estaba al cuidado de su hermana. Que en esa ciudad trabajaba en el restaurante de un sanatorio, de moza y manipuladora de

alimentos. Ganaba el sueldo mínimo de Paraguay, algo más de \$2.000.000 de guaraníes, serían como \$215.000 pesos chilenos.

Señaló que sabía que había sido citada por una investigación por el delito de trata de personas. Estuvo ejerciendo el comercio sexual en una casa en el centro de Santiago y Providencia, en Ruiz de Gamboa, en un domicilio ubicado en esa dirección en la comuna de Providencia.

Relató que llegó a Chile el 19 de octubre y salió el viernes 18 de octubre de 2019, desde Paraguay con destino a Chile. Ingresó por un autobús que salió de Asunción. Indicó que María le compró el pasaje, el que costaba 800.000 guaraníes desde Paraguay a Chile, acá era algo similar a \$80.000, aproximadamente.

Sonia expresó que María es quien la trajo a Chile para prestar servicios sexuales. La conoció a través de su hermana “H.C.”. Ella trabajaba con María en Chile, en servicios sexuales para ella. Tomó contacto por WhatsApp con María, unos días antes de su viaje, aclarando que María fue la que se comunicó con ella, por audios y textos por WhatsApp. En esos mensajes María le dijo que tenía el pasaje comprado para el viernes. Además, le dijo que el 50% era para la casa y el 50% para ella. Sonia señaló que fue a retirar el pasaje a una agencia en Paraguay, porque María le dijo que ya había comprado el pasaje y que lo fuera a retirar. Agregó que esa fue su primera salida del país.

La testigo señaló que sabía que venía a trabajar en servicios sexuales. Iba a trabajar con María, ella estaba a cargo y ella era la que manejaba todo.

Agregó que María le dijo que le compraría el pasaje, que estaba listo y que le tenía que devolver el pasaje con el dinero que iba a hacer, que le debía el pasaje y el cambio del dólar al llegar a Chile. Ella le cobró por el pasaje \$150.000 y se los bajó a \$130.000. dinero que sería devuelto trabajando en servicios sexuales.

Sonia indicó que viajó a Chile, porque tenía necesidad económica y necesitaba dinero, ya que tiene un hijo de 9 meses.

Indicó que retiró el pasaje, se subió al bus y el viaje duró 33 horas. Al ingresar a Chile indicó que venía en calidad de turista, siguiendo las instrucciones dadas

previamente por María. A Chile, únicamente trajo “sus ropas y cosas personales”. Alguien, un señor chileno, antes de pasar a Chile y al interior del bus, se le acercó y le pasó 300 dólares, antes de eso, este hombre le había preguntado su nombre. Ese dinero era para justificar el viático, como se iba a pagar el viaje a Chile. El hombre era alto y canoso y sabía que era chileno por como hablaba. Al llegar le entregó los dólares a María, pero ésta le dijo que le tenía que pagar el cambio, porque tuvo que cambiar de dólares a pesos chilenos.

Cuando llegó a Chile, a eso de las 5 de la tarde el día 19 de octubre, María la estaba esperando. Abordó su vehículo y se fueron hasta su casa. Su vehículo era marca Kia, no recuerda el modelo, color gris. María era quien conducía y en el interior estaba Tania, que era otra paraguaya que trabajaba con ella.

Indicó que fueron hacia el departamento de María a comer algo, que quedaba en Santa Rosa con Curicó, metro Santa Lucía. No sabe la comuna. Después se va al otro departamento que es el 1005, que quedaba en el mismo edificio. Era ahí donde trabajaban. Vio a más mujeres paraguayas de iniciales H, Y y A.

María le preguntó si hacía lesbianismo, pareja, anal, y ella le dijo que no, que solo hacía sexo normal, y ella le dijo que así no iba a ganar nada. En el auto cuando se fueron a su casa, fue que le habló sobre ello. Le dijo que no estaba preparada para lesbianismo, orgías o tríos, y que anal no podía, porque tiene una fisura anal. María le dijo que no iba a ganar nada.

Sonia refirió que el primer servicio sexual que realiza fue el lunes 21 de octubre, un lunes en la mañana. Conoció a su primer cliente a través de María, ella tenía las publicaciones y los números. Como María les sacaba fotos, las publicaba en una página y ella tenía los teléfonos. Ella atendía y les pasaba a los clientes. María les tomaba las fotografías, con una cámara, “eran fotografías sexuales, sexys” afirmó. Usaban ropa interior erótica que María tenía. Unos días después que llegó, le tomó las fotos. Al principio, no sabía dónde María las publicaba, pero ahora dice que sabe que fue en “privado.cl”, en “sexo.cl” y en otra que cree que se llamaba “chicas”. María daba las instrucciones sobre las posiciones que debían adoptar para las fotos.

Indicó que las publicaciones iban con números de teléfono, que eran contestados por María y que ella nunca los contestó, tampoco podía decir a que clientes atendía.

Agregó que cuando le decía a María que no iba a atender clientes ella se enojaba mucho. Relató que, en una oportunidad, debido a su periodo estuvo muy mal y adolorida, María le pasó cliente y le dijo que no lo iba a atender, y María le dijo “sabes bien para que viniste, no te hagas la tonta, para que viniste si no me sirves”. Sonia dijo que se puso a llorar, pero finalmente, no lo atendió. Eso fue lo único que habló con ella en privado. Llegó el día en que se sentía mejor y volvió a atender a clientes, porque necesitaba el dinero. De lo que ganó con el primer cliente, tuvo que entregar el 100%, porque le debía el pasaje.

Sonia indicó que ella sabía que venía a trabajar, pero no sabía que tenía que atender 6 o 7 clientes para poder tener plata, en un día, “para poder tener buena plata” aseveró. Eso no lo sabía, calculó que iba a ser como dos o tres personas.

Explicó que los servicios costaban \$40.000 la hora y la media hora \$30.000, y que siempre se dividía la mitad para María. Al cliente se le cobraba antes de recibir los servicios sexuales, cuando ya estaba en la habitación y antes de que pasara. Podía pagar en efectivo o por medio de transferencias, a la cuenta de María. Sabe que ella tenía anotado la cuenta en una agenda, así podían verla y le pasaban los datos al cliente.

Sobre lo que se incluía en el servicio, indicó que anal, americana, rusa, besos, caricias, y penetración. “Americana”, es sexo oral con eyaculación en la boca y “Rusa”, con el pecho. Dos contactos de penetración vaginal costaban \$40.000, uno \$30.000.

Cuando los clientes pagaban con efectivo, debían guardar el dinero y entregárselo a María al día siguiente, porque ella las visitaba para cobrarles, al día siguiente.

Dijo que no sabía cuántos teléfonos tenía María, pero creía que eran 12, 13 o 14, exactamente no lo sabe. Todos esos teléfonos los manejaba María. Algunas eran

con WhatsApp, de alta gama y otros eran sin WhatsApp, solo las llamadas. María realizaba el contacto con el cliente y atendía ella, luego le pasaba el cliente a las chicas. Cuando un cliente llegaba al domicilio, algunos preguntaban si eran las chicas o no, pero la mayoría pasaba. Sabía que venía un cliente, porque María les avisaba a un grupo de WhatsApp, en el que estaban 11 o 12 chicas, solo paraguayas. El administrador de ese grupo era María.

El horario en que se prestaban los servicios era de 9 de la mañana a 2 de la madrugada de lunes a lunes. “Eran las reglas de María” afirmó Sonia, aclarando que el viernes el horario se extendía hasta 4 de la mañana.

Sonia expresó que siempre estaban ahí esperando por clientes. Nunca tuvo un descanso sin espera de clientes, no salía a tomar aire, nada. María no quería que saliera por mucho tiempo. Tenían que avisar si salían y también al regresar por el grupo de WhatsApp. Podía salir a comprar personales, la comida. En su caso, pagaban las chicas por su comida, su hermana la invitaba la comida, y con el paso del tiempo, las chicas se colaboraban entre ellas. Ella no tenía dinero, por lo que su hermana le invitaba la comida. En el departamento, dormían y cocinaban. Dormían en la misma cama donde se hacían los servicios sexuales. En el departamento 1005 en Ruiz de Gamboa. Señaló que el departamento 1005 es muy lindo. Tiene una habitación más grande y otra más pequeña, una la sala, la cocina y el baño. En la habitación grande había una cama y en la otra, una cama más chica. Cuando llegó, había cuatro chicas, y luego una se trasladó a la casa, y quedaron tres. Una de las chicas dormía en la habitación pequeña, otra en la sala en un sofá cama y ella con su hermana en la pieza grande donde se prestaban los servicios.

Sobre la casa, de Ruiz de Gamboa, dijo que tenía un mal aspecto, “es muy densa”. Explicó que había sido remodelado todo para que se pudiera trabajar ahí, pero cuando llegó la casa estaba sucia, y le chocó el baño, muy feo. Ahí, había seis dormitorios y tenía dos pisos, en el primero, estaban tres piezas remodeladas para trabajar, y la sala para recibir al cliente; en el segundo piso, hay una sala y había tres habitaciones, una más grande y las otras más pequeñas. Indicó que antes, se prestaban

servicios sexuales solo arriba, pero que al final eso no era así. Porque eran muchas chicas, unas nueve chicas, todas paraguayas.

Sonia también declaró que en los domicilios había cámaras de vigilancia, en el departamento había dos, una en la sala, que luego ya no funcionó y María instaló una cámara que además tenía audio. En la casa de Ruiz de Gamboa, las cámaras estaban en el pasillo de abajo, en la escalera y en el pasillo de arriba. María las manejaba y veía desde su computadora. Ella decía que estaba todo el día en la casa y que las veía.

Indicó que el grupo de WhatsApp se llamaba “Chicas Súper Poderosas” y que ingresó a éste porque María la agregó.

Sobre las publicaciones, indicó que se publicaba tapando la cara y con el nombre de “Arelis” o “Zoeli”. Dijo no saber ni recordar el nombre de las demás chicas y que cree que su hermana fue publicada como Paola y Carmen, aunque puede precisarlo, porque casi no hablaban de eso.

Sobre las cuentas a las cuales los clientes podían hacer transferencias, indicó que eran del Banco Estado y del Santander, y que creía que las dos eran de María. Cuando se prestaban los servicios, al día siguiente se hacían las cuentas y María les cobraba el dinero. Siempre había que poner en el grupo el nombre y la cantidad de dinero por el servicio. Y cuando era transferencia, había que indicar que era transferencia.

Añadió que María llevaba registro y además había una agenda en donde se anotaban los servicios, agenda que era de María y de la casa, en donde se anotaban los servicios. Era una agenda grande, tapa color medio azul marino. Ellas se anotaban ahí todo lo que se trabajaba en el día.

Indicó que María compraba preservativos y se los entregaba, pero eran de muy mala calidad y a varias chicas se les rompió. Indicó que a ella no le pasó, pero a otras chicas si y que no hicieron nada.

Sonia precisó que estuvo en el departamento 1005 desde su llegada y hasta el 6 de noviembre aproximadamente, luego, se fue a la casa hasta el día 27 de ese mes.

Ese día, refirió que salió al mall con su hermana, previo aviso a María. Al regresar, se enteraron de que María se salió del grupo de WhatsApp y que tenía un problema, pero ella siguió atendiendo clientes. No sabían cuál era el problema, y al llegar a la casa, se enteraron por “Taty”, su mano derecha (que también atendía los teléfonos), que María fue a hacer una declaración, que estaba citada en la PDI, y que les mandaba decir que si llegaba la PDI a la casa, dijeran que eran empleadas domésticas, pero cuando llegaron ellos le preguntaron quien pagaba la luz, el agua y documentos, y ninguna tenía nada. Reiteró que fue Taty quien les mandó a decir el recado de María. Taty le cuidaba además el hijo a María, “era como su empleada” señaló. Taty le ayudaba a María con los teléfonos y con el hijo, ella vivía con María, en su departamento. Taty también es paraguaya.

Sonia declaró que sólo con posterioridad supo que María estaba detenida por el delito que ella cometió, por la investigación de trata de personas, que llevaba mucho tiempo. Lo supo por medio de la PDI, cuando fue a declarar. Indicó que no ha vuelto a tener contacto con María. Indicó que Taty la había llamado, a una de las chicas (de nombre “A”), que María iba a salir y que estaba todo solucionado, que por qué hablaban, que no era culpable de nada y que iba a salir en libertad, de la prisión preventiva.

Previo descripción de sus características, Sonia reconoció a la acusada María Sosa en la sala de audiencias.

Indicó que ese día 27 de noviembre la policía llegó cerca del mediodía, pidieron abrir el portón, entrar y que bajaran todas. Ninguna dijo nada, y ellos pidieron papeles, de la casa, el alquiler, la luz y el agua, internet. Preguntaron quién era la encargada y ella dijo María. “H” fue quien les abrió el portón y cree que fue quien firmó la entrada.

Luego, se le exhibieron los **sets fotográficos (Otros Medios de Prueba N° 126)**, los que fueron explicados por la testigo, de la forma como a continuación se consigna:

Set 1:

Foto 1: Es la habitación más pequeña de la casa de Ruiz de Gamboa, abajo. La cama es una plaza.

Foto 2: Es el ropero que había en la habitación más grande.

Foto 3: preservativos, marca Gusto.

Foto 4: es la habitación pequeña con una cama de madera, encima de la mesa hay preservativos, es el mismo anterior.

Foto 5: preservativos, misma marca.

Foto 6: la sala y el comedor de Ruiz de Gamboa.

Foto 7: la agenda donde se anotaban los trabajos, el internet y la televisión de la casa. Eran las chicas quienes se anotaban y fue esa agenda la que se llevó la policía.

Foto 8: El “placardcito” en donde guardaban sus cosas personales las chicas.

Set 2:

Foto 1: arriba el pasillo y las cámaras, de Ruiz de Gamboa.

Foto 2: El altar. Según María y las chicas era para traer plata y trabajo.

Foto 3: el televisor.

Foto 4: la entrada a la casa. En la parte superior, había una cámara.

Foto 5: escalera con la cámara. Solo había una escalera.

Foto 6: es la cámara del pasillo de abajo. Se ven dos puertas.

Set 3:

Foto 1: es la habitación donde dormían las otras chicas en Ruiz de Gamboa. Es la habitación que tenía una cama grande. Dormían como cinco chicas en la habitación. Tenía 3 camas.

Foto 2: es la misma habitación. Hay tres camas y una de dos pisos, serían cuatro camas.

Foto 3: el pasillo de arriba de la casa de Ruiz de Gamboa, segundo piso.

Foto 4: es el lugar donde colgaban sus ropas, cuando lavaban y guardaban sus maletas.

Foto 5: el sanitario, el baño, todas tenían acceso a ese baño. Los clientes también.

Foto 6: la entrada de la casa. Se ve una cámara.

Foto 7: la misma habitación anterior con las cuatro camas.

Set 4:

Foto 1: la cocina

Foto 2: la habitación de abajo del primer piso, destinada al trabajo.

Foto 3: la mesita de cigarrillos.

Foto 4: la segunda habitación en el primero piso de la casa. Nadie dormía ahí. No podían dormir, porque siempre tenía que estar lista para un cliente.

Foto 5, 6, 7 y 8: refiere que todas son fotos de Ruiz de Gamboa.

Set 5:

Foto 1: es la habitación que queda al lado del baño del segundo piso.

Foto 2: es la habitación que usaban las chicas

Foto 3: guarda silencio

Foto 4: es un celular no sabe de quien es.

Foto 5: Teléfonos celulares no sabe de quien son.

Foto 6: un teléfono. No sabe quién era la dueña del teléfono.

Foto 7: pasillo de debajo de la casa de Ruiz de Gamboa.

Sonia insistió que en el María exigía el pago de la mitad de lo obtenido con un cliente, incluidas las propinas. Y que, de esa regla, no se enteró por María, sino por su hermana.

Indicó que, sobre su negativa a hacer sexo anal, María le había dicho que tratara. Si llegaba un cliente para ella y éste quería anal, ella se negaba y se iba con otra chica que sí lo hacía, y María no perdía al cliente, solo ella. Indicó que cuando se fue a la casa de Ruiz de Gamboa todavía no había terminado de pagarle a María el dinero por el pasaje, se demoró más de un mes, y en ese tiempo, todo se lo quedaba María, ella no recibía nada. Aquello, hizo que sintiera impotente, porque ella vino para poder mantener a su hijo, pero desde que llegó no recibió nada y se sintió muy mal. Todo eso, no se lo manifestó a María.

Sobre las cámaras, no sabía y solo se enteró cuando llegó a la casa. Las chicas le preguntaron que cuanto le había cobrado María por el pasaje y al responderles, ellas le dijeron que María le había cobrado el doble.

Sonia declaró que conoció a una de las hijas de María que también hacía servicios sexuales, Sheila, y dijo que María tenía otra hija y un hijo. Sobre Miryan, dijo que no la conocía personalmente, pero sabía que era la hermana de María y que también trabajaba en servicios sexuales.

Explicó que pensaba que Chile era un país en donde podía salir adelante, pero su percepción de lo que vivió aquí la calificó de “terrible”, agregando que “vine a perder el tiempo, a hacer que otra persona ganara dinero”.

Se le exhibió la **Prueba Documental N° 48**, y dijo que reconocía el documento, que era “el DNI” que le dieron para poder pasar a Chile, y a su lectura indicó “Tarjeta Única Migratoria”, reconociendo su nombre, y que se leía también “Motivo: vacaciones. Tiempo de permanencia: 90 días.

Luego, a las preguntas del querellante INDH, indicó que sólo salía para enviar dinero a su hermana y que no tuvo paseos u otro tipo de salidas, durante su estadía.

También refirió que muchas veces quiso devolverse a su país y se lo dijo a María, pero ésta le respondió que antes tenía que devolverle el dinero del pasaje.

Al contra examen de la defensa, negó que conociera todas las condiciones del trabajo por medio de su hermana. Indicó que por día atendía solo a un cliente, porque estaba difícil la situación.

Sobre las publicaciones, dijo que nunca firmó nada, aunque sabía que tenía que firmar un consentimiento.

Sobre la casa de Ruiz de Gamboa, insistió en que María tenía cámaras de seguridad y que con ellas conocía los movimientos de las chicas y de los clientes. Afirmó “la casa siempre estaba abierta, aunque tuviéramos cámaras no estábamos seguras”.

Indicó también que no hizo relaciones de amistad con las otras chicas y que solo hablaba con su hermana.

Relató que María nunca le quitó sus documentos personales, ni expresamente le prohibió salir, pero “eran muchos límites” aseveró, porque debía avisar si salía y debía volver lo más pronto posible, por si llegaba un cliente. Y sabía también, que podía rechazar un cliente.

Que, por último, durante el desarrollo de este juicio y por medio de su lectura se aportó la **Prueba Documental N°49** consistente en una imagen de la Cédula de Identidad de Paraguay de Sonia (S.E.C.).

7.4.- Francisco Pino Faúndez.

Que compareció en calidad de testigo **Francisco Pino Faúndez**, un abogado de 43 años.

Previo a su declaración hizo presente que no se enorgullecía de haber sido cliente de servicios de prostitución, pero que así ocurrió y fue esa la forma en que conoció a Samantha.

Indicó que durante el mes de abril de 2019, buscó en páginas de servicios de escort y decidió llamar a una de las mujeres. Luego de una conversación sobre precios y servicios, la que no prosperó, al cabo de un rato, recibe una llamada de la misma mujer a la que llamó anteriormente y ella le dijo que no estaba aburrida y que salieran, cosa que hicieron. Cenaron y compartieron la noche juntos, y comenzaron una amistad, reconociendo el testigo que a él se sentía atraído por ella, le gustaba.

Luego, el día 8 de abril, Samantha le contó que había peleado con su amiga en donde vivía y que se iría a trabajar de escort a Providencia. Él le dijo que aquello podría ser peligroso, y que por cualquier cosa le mandara la ubicación, por eso él supo que estaba en la calle Luis Thayer Ojeda.

Un día en la noche la fue a visitar a ese lugar, y la vio muy cansada, y él le preguntó qué le pasaba. Fue ahí donde Samantha le dijo que tenía que trasnochar mucho, y en el periodo breve en el que hablaron, él se dio cuenta que la llamaban

constantemente del lugar. La llamaba una persona para que se devolviera, y ella así lo hizo.

Luego, la vio un sábado y fueron a almorzar al Dominó que queda cerca. Ella seguía muy cansada y le dijo que la hacían trabajar hasta altas horas de la noche y levantarse muy temprano, que tenía que realizar varios servicios al día, entre 10 y 15 diarios, que era algo tremendo y que quedaba muy cansada. Le contó también que tenía que dar la mitad de la plata, pero la comida era por cuenta propia. Él volvió a ofrecerle su ayuda, ante cualquier cosa, “por último pa’ sacarla de ahí” afirmó.

La semana siguiente a ese almuerzo, la vio porque se hizo pasar por un cliente. Luego de pasar “todo el protocolo”, pagó el dinero y vio que ella escribió en un WhatsApp “40 mil Pamela”, y después de una hora, lo mismo. Sin perjuicio de no ver más gente, escuchó voces y pensó que en el lugar había más mujeres. Luego, aclaró que para ver a Samantha llamó al número de las publicaciones, pidió por Pamela e hizo coordinaciones con una mujer que se hizo pasar por Samantha.

A los días de ese encuentro, recibió un llamado de Samantha en donde le dice que se había peleado con María y que le habían quitado \$800.000 que tenía guardados.

Sobre el lugar, el testigo vio que estaba en malas condiciones, desaseado, y con condones chinos señalando “hasta en eso se ahorran”. Indicó que era un departamento antiguo, en cuyo edificio había una conserjería y que no le pidieron identificación al entrar y que se dirigió hasta el piso 9.

Refirió que la cantidad de trabajo que tenía que hacer Samantha, era cercano a lo imposible, con tan pocas horas de sueño, y tantas personas por día.

El día que le dijo lo del robo, la fue a buscar y fueron juntos a hacer la denuncia y luego también, a realizar una o dos declaraciones más.

Sobre la persona para la que trabajaba, Samantha solo le dijo que se llamaba María, nada más, que tenía un hijo, que era paraguaya y que tenía un auto Kia plomo.

Sobre las publicaciones, aclaró que la primera vez ubicó a Samantha en skokka, y luego ella le dijo que estaba en “sexo.cl” como Pamela, ella misma le mostró fotos, y el testigo indicó que esa página “es de más pelo que las otras”.

Sobre la situación de Samantha el testigo señaló que era de vulnerabilidad en todo sentido. Ella no tenía redes, solo lo conocía a él, y su situación era de total desmedro, ya que estaba en ese lugar, en una especie de cautiverio, la comida y ropa era por cuenta propia, debía pagar la mitad de lo que ganaba, “no podía acceder a una vida distinta, no con ese yugo” afirmó. Samantha estaba obligada a seguir ese sistema, de otra manera no comía, estaba en un país extranjero, sola, no tenía otra opción.

A las preguntas de la querellante particular, indicó que en un primer tiempo él se hizo cargo de darle “cobertura” a Samantha, hasta que ella se fue con un pololo de nombre Alejandro, al que conoció. Lamentablemente, esta pareja la golpeó y tuvo que salir de ahí, recibiendo el trato de testigo protegido y siendo llevada hasta una casa de acogida.

Luego, a las preguntas de la defensa, el testigo Pino dio más detalles sobre la experiencia de Samantha en la salida del departamento de Luis Thayer Ojeda. Al efecto, expresó que los servicios que ella prestaba incluían visitas a domicilios, a hoteles, y que en una oportunidad le tocó atender “a un gallo “duro” de cocaína” en un hotel, violento, ella no hizo el servicio porque el sujeto estaba enajenado, y agregó, “eso es distinto de los que están publicado”. Agregó que además Samantha debía hacer cosas que ella no quería, como, por ejemplo, estar hasta altas horas de la noche, le dijo que llegaban varones en estado de ebriedad o drogados, o las dos cosas, malos olores, no se discriminaba, no se hacía un derecho de admisión. Ella se oponía, pero eran clientes igual y tenían que atenderlos.

Recalcó que cuando se fue del departamento, Samantha se sentía humillada, explotada, todo el esfuerzo que tuvo que hacer, y no sirvió de nada, porque todo lo que juntó para emprender una vida decente se fue. El testigo calificó de “infrachumanas” las condiciones en Samantha se encontraba con María, agregando que también era frecuente el uso de drogas o pastillas, para que las mujeres “rindieran”. Que no era rentable el beneficio que le reportaba ese lugar, ya que lo que ganaba era infinitamente menor comparado al sacrificio que tuvo que hacer, sin discriminación en la entrada,

prácticamente encerrada en el lugar, salía por el mínimo tiempo porque tenía que volver, a eso, se le agrega lo de la plata que se le desaparece.

El testigo indicó que, al inicio, Samantha no le contaba con tanto detalle sobre lo que vivía en el departamento, más allá de lo que él pudo ver, por eso en el almuerzo del día sábado, le dijo “cualquier cosa me llamai, pero no podís seguir webiando donde estai, esa cuestión es peligrosa, te puede pasar cualquier cuestión” y Samantha le contó con más detalle cuando él la saca de ahí. Indicó que ella se vino a Chile “porque le habían pintado una película distinta”.

7.5.- Peritajes psicológicos efectuados por CAVAS.

Que, se presentaron además las declaraciones de tres profesionales dependientes del Centro de Atención de Víctimas y Testigos de la Policía de Investigaciones de Chile (CAVAS), los que efectuaron pericias sobre análisis de daño en las víctimas de nombres “Samantha” y “Sonia”.

En primer lugar, prestó declaración en calidad de perito la psicóloga **Karen Andrea Schmidt Díaz**, quien perito a la afectada “Sonia” en diciembre de 2019.

En síntesis, explicó que se utilizó la metodología Cavas Inscrim, en sala espejo, entrevista, otro colega evaluando el trabajo y la presencia de un eventual sesgo. Se analizan los antecedentes de la carpeta investigativa, para chequear y hacer un análisis de fiabilidad de los datos en relación a su testimonio, y dio cuenta sobre los resultados de su tarea, destacando los siguientes aspectos:

Con relación al aspecto “funcionamiento psicológico”, dijo que al peritada no presentaba alteración ni trastorno. Tenía un tono anímico decaído y presentada una elevada sensación de desconfianza, observándose sentimientos de desesperanza, de angustia, mucha dificultad para confiar en otros y un funcionamiento tendiente a mostrarse como una adulta autónoma e independiente, pese a que después se observa una carencia de redes de apoyo y al hecho de haber y tenido ausentes a sus figuras materna y paterna en la infancia.

Con relación a aspecto “factores de vulnerabilidad”, la peritada refirió una precariedad económica importante, ella tenía un empleo con una baja remuneración que no cubría sus necesidades básicas ni las de su hijo. Por ese motivo evalúa la posibilidad de viajar a Chile, por esa inestabilidad socio económica en su país. Desde temprana edad no cuenta con sus padres, fue criada por agentes del Estado de su país, la única red cercana son sus hermanas y hermanos, pero dicha red comparte con ella las mismas condiciones de precariedad de ella, y se ven dificultades en ellos, de evaluar posibles situaciones de riesgo, ya que ellos mismos presentarían estas carencias y esta inestabilidad socio económica. Es una de sus hermanas quien le dice sobre la oferta de trabajo en Chile y es quien la pone en contacto con la acusada.

En cuanto a factores de vulnerabilidad de tipo personal, se observa una tendencia a reprimir sus sentimientos negativos, se fija metas a corto plazo. No cuenta con estudios académicos formales, lo que le impidió acceder a ofertas de trabajo formales, que le dieran mayor estabilidad, y en general, se observa esta necesidad de solventar sus gastos e manera independiente.

En relación con el relato de los hechos, la peritada contó sobre su experiencia y reportó que fue altamente estresante, debido a que nunca había ejercido la prostitución con anterioridad, tuvo varias diferencias con la empleadora (María) debido a que se negaba a prestar servicios como sexo anal o bien cuando estaba afectada por su periodo. Además, dado el control que ejercía María, con medios de cámaras y estando siempre muy pendiente, todo ello le generaba mucho estrés y tensión, sumado a la dependencia económica generada con la empleadora, todo lo cual provocó una sensación de atrapamiento en Sonia.

Sonia quería volver a su país, ya que lo que había imaginado (ganar dinero) no se estaba cumpliendo, el primer mes, todas sus ganancias fueron destinadas a pagar la deuda sin obtener nada. También sentía preocupación por contraer alguna enfermedad de transmisión sexual (ETS), porque los preservativos que le daba María no eran de buena calidad.

Por último, cuanto a la evaluación de daño psicológico: la peritada informa una alta percepción negativa de esta vivencia. Refiere una situación que generó muchos costos a nivel personal y familiar. La expectativa era mandar dinero a su familia y asegurar un mejor pasar a su hijo. Refiere que fue instrumentalizada por María, respecto de quien sentía mucho enojo y malestar, al percibirse usada por ella, al sentir una invisibilización de sus necesidades, de su seguridad y un elevando sentimiento de cosificación a nivel sexual, por la acusada y los clientes y la constante preocupación de adquirir alguna ETS. A nivel emocional, dicha situación, habría generado un decaimiento anímico importante, que se evidencia hasta la evaluación. Refiere episodios de llanto, siempre, no le había pasado antes, además de una elevada desconfianza con el mundo, un cambio en sus creencias, ya que el mundo es peligroso y negativo. Desea no salir más de su país, después de esa experiencia. Finalmente, se observa por medio de su relato una sensación de pérdida, a nivel emocional, en cuanto a la frustración que le genera haber confiado en otras personas y el daño que habría experimentado a partir de eso, y la pérdida a nivel económico, todo el esfuerzo que implicó, venir a Chile a dedicarse al comercio sexual, y no le retribuyó nada.

La perito dio cuenta también de la existencia de una victimización secundaria, toda vez que existen elevados sentimientos de miedo a la deportación a la exposición pública, un desgaste importante a la presión que siente al participar en esta instancia, (sentía que no ganaba nada al involucrarse en esta instancia judicial).

Se informó finalmente, que se trabajaron hipótesis a raíz de los indicadores de daño psicológico: la primera, es la simulación por fines gananciales, sin embargo, se descarta, dado que no se observa ningún beneficio, ni que está magnificando el daño que presenta, sino por el contrario, ella tiene tendencia al retraimiento, a la introversión y dificultad para expresar sus estados negativos. Una segunda hipótesis, es que el daño pudiera derivar de otras vivencias, y la perito expuso que, si bien se observa que en su historia vital hay eventos negativos, lo cierto es que ellos no alcanzan a explicar los fenómenos recientes (ni de contenido ni de temporalidad), por cuanto el daño apreciado es un daño agudo y reactivo, por lo que también se la

descarta, y finalmente, como tercera hipótesis, se tiene la que dichos indicadores sean derivados de los hechos a lo que ella refiere, hipótesis que cobra fuerza, debido a la concordancia con la fenomenología y la expresión de los indicadores. Reiteró la profesional que se trata de un daño agudo, reactivo y de nivel moderado.

Se le preguntó a la perito como se explicaba el viaje de Sonia si la hermana ya estaba acá explotada, y la psicóloga Schmidt indicó que es bastante común que las víctimas lleguen a esta situación por parte de conocidos que ya han sido captados. Está conectado a los factores de vulnerabilidad y la imposibilidad de ver factores de riesgo, debido a carencias de base, vitales. Ella se da cuenta de manera paulatina en Chile sobre las reales condiciones del trabajo que realizará.

Indagó en las carencias de infancia de Sonia, quien explicó que nace en un sector rural, su madre fallece de apendicitis, cuando ella tenía 5 años, y todos los hijos a hijas quedan con el papá, pero éste presentaba un estilo de crianza negligente y ausente. Se iba por días, quedándose los niños solos, y por ello, son derivados a la red de protección de infancia de su país, y son criados en servicios de aldeas, era una familia que acoge a sus hermanos, le entregan estudios, pero son familias de paso, y Sonia está en este sistema hasta los 19 años.

Agregó que el sentimiento de instrumentalización está asociado a la estrategia de utilizar o explotar a una persona. La cosificación se refiere al reducir a una persona, principalmente se ha estudiado en mujeres, y al efecto, conceptualizó que la cosificación era la reducción de la mujer a un objeto de placer para otros, negándole otro tipo de atributos asociados a su personalidad forma de ser, reduciéndola a un mero objeto. Sonia refirió que tanto la acusada como los clientes, la trataban de esa forma, dijo que en varias ocasiones las personas que llegaban no querían usar preservativos, o querían penetración bucal sin preservativos, y ella se sentía pasada a llevar sobre su voluntad en ese tipo de acciones.

Sobre si Sonia vivió alguna situación de engaño, la perito señaló que ella le refirió aquello debido a las deudas, esto es, que tenía una deuda con la acusada en donde ella no tendría un valor exacto de cuánto le debía, esto iba variando, en relación

a factores que no manejaba, la acusada aludía al cambio de dólar. Refiere una situación de confusión del pago final que le debía por los pasajes.

Añadió que lo anterior es concordante con la fenomenología de estos delitos, una de las características de estos delitos, da cuenta de la sensación de cosificación por parte de la víctima, en donde se ve reducida a un objeto que genera beneficios a otras personas y no a ellas. También es particular que las víctimas no quieran declarar, por la sensación de coparticipación, porque ella sabía que venía a ejercer comercio sexual. Los captores transmiten una corresponsabilidad. Hubo amenazas de silenciamiento, ojalá mentir y ocultar esta información, ya que se también puede salir perjudicada. Cuando llegó la policía sintió temor por esto, el miedo a la deportación y a la exposición pública, que esto fuera noticia. Si bien sabía a lo que venía, son las expectativas que tenía y las condiciones las que generan frustración. Las condiciones fueron cambiando, no tenía posibilidad de establecerse por su cuenta, de poder tener redes, por las dinámicas de control que existía por parte de su empleadora. Todo esto genera el daño psicológico que mencionó, atendido el cambio radical de las condiciones y el abuso de parte de su empleadora.

A una de las preguntas de la querellante INDH, explicó que Sonia le dijo que por su propio carácter y por la desconfianza que va desarrollando, no realizó acciones para conocer a las otras chicas o establecer relaciones de confianza con las otras chicas, salvo su hermana, quien estaba “acomodada” a las circunstancias.

Luego, compareció la psicóloga **Milena Andrea Rojas Balsells**, quien efectuó una pericia de análisis y evaluación de daño en la víctima “Samantha”.

Al igual que en el caso anterior, explicó que aplicó la misma metodología CAVAS Inscrim, y que se determinaron objetivos, como conocer el funcionamiento psicológico, factores de vulnerabilidad, conocer el relato y concluir por medio de la elaboración y estudio de hipótesis.

Sobre el primer aspecto, esto es, de funcionamiento psicológico, la perito refirió que Samantha tenía un juicio de realidad conservado, que es capaz de distinguir

fantasía de realidad y de expresar, organizar ideas y argumentarlas. Si observó en ella cierta dificultad en la valoración objetiva y realista de la realidad, esto por la interferencia de variables emocionales. A nivel emocional, si bien podía dar cuenta de su estado interno, así como de los estados emocionales de otras personas, se observó una disociación, ya que tendía a no reconocer los aspectos adversos que la estaban afectando, todo ello vinculado a la racionalización, porque intentaba prontamente asignarle una explicación lógica a un evento, para no contactarse emocionalmente. Con todo, advirtió, un importante sentimiento de indefensión y de abandono lo que se vincula con su historia vital y con la conformación de sus vínculos primarios.

Agregó que un rasgo característico de la peritada era desenvolverse en el mundo a través de una “fachada defensiva”, de mucha autosuficiencia e incluso de indiferencia, con una actitud de “a mí las cosas no me afectan”, se muestra a otros como muy segura, pero ello es solo un mecanismo de no reconocerse frágil.

En síntesis, a nivel cognitivo tiene un adecuado funcionamiento, tiende a tener dificultades en la valoración realista de la realidad, especialmente con ponderar claves de riesgo, en sopesar situaciones en las que puede verse expuesta, funciona bajo horizontes temporales breves, con una mirada a corto plazo, que se remite al presente.

A nivel social se observaron dificultades, que tiene que ver con una sensación de poca adaptación con sus pares. Es capaz de reconocer normas, hace una valoración propia de las normas, tiene tendencia a justificar ciertas conductas.

A nivel psicosexual, se la observa alterada, ya que incorporó un aprendizaje de que la sexualidad masculina solo busca de la propia gratificación. Ella utiliza a modo de supervivencia a instrumentaliza la sexualidad. Eso lo aprendió a lo largo de su vida.

Luego, la perito refirió los factores de vulnerabilidad previa que pudo pesquisar, que dijo son los elementos que propician o facilitan un hecho como el investigado, los que encontró presentes en varias áreas. Cuando se revisa la historia vital familiar, se tiene que existió violencia a temprana edad, fue testigo desde pequeña e interviniente de la violencia entre sus padres. Existe un contexto de mucha inestabilidad, tuvo que asumir el cuidado de otros. Ella señala que su madre tuvo una depresión muy

profunda por el fallecimiento de un hermano, por lo que tuvo que asumir labores de casa y cuidado de sus hermanos, lo mismo, respecto de su sobrino, su hermana tuvo un embarazo adolescente y conductas negligentes. Luego los padres se separan, cuando ella tiene 13 años. Le tocó vivir en distintos lugares. Deserta del sistema escolar, donde que nunca se sintió muy adaptada, reportó rendimiento deficitario y conflictos con pares y profesores. A los 16 años se independiza. Comienza a trabajar en un “table dance”, es un símil a un café con piernas. Empieza a ejercer el comercio sexual. Tuvo una situación confusa relacionada al tráfico de droga, consistente en que le vendieron todas sus pertenencias y es acusada de vender droga. Dice que la hermana le robó todas sus cosas y se fue. En resumen, es clara la inestabilidad familiar, a nivel de protección y cuidados, así como un inicio temprano en el comercio sexual y el contacto con drogas. Ella tiende a naturalizar situaciones de violencia. Como métodos de resolución de conflictos, para ella está justificado el uso de la violencia. Está en una situación de desprotección antes de viajar a Chile en marzo de 2018. Reportó que fue amenazada de muerte, en dos oportunidades, por unas barras bravas de su país y por eso, al surgir la opción de viajar a Chile, la toma.

Previo cita a los hechos vinculados a esta causa, relatados por Samantha, la perito hizo alusiones al daño psicológico que pudo encontrar. Hizo presente que en la peritada existe una baja percepción del daño. Ella no se percibe a sí misma como víctima, se siente como víctima del robo no de la trata. Dice que ya ha pasado un tiempo y que se sintió mal, pero que ya está en regresión. Dice que se sentía apoyada por una persona de URAVIT y por la gente de la casa de acogida. Existían otros estresores, como su inestabilidad habitacional, el encontrarse sin proyección laboral, el no saber si podía volver o no a su país. Esos estresores cobraban más relevancia con lo que le había pasado. Señala que María era como una molestia, una incomodidad, quería dejar atrás todo eso. Se pesquisa una baja intencionalidad acusatoria. Podría haber tenido un discurso más intencionado y no lo hace.

Sin embargo, ella cuando profundiza más en la entrevista, si logra hacer una asociación entre lo vivido y las dificultades percibidas. Surgiendo las siguientes

consecuencias. Por un lado, ella refiere sintomatología depresiva, como en los primeros meses de su salida; también señala mucha rabia, hacia María, por las condiciones en las que las tenía y por el robo del dinero, siente que eso la dejó muy desvalida (“me dejo a la deriva, sin dinero”); también está la percepción del perjuicio económico (que le costó tanto); victimización secundaria, mucho cansancio asociado a las muchas entrevistas y declaraciones, sentía que todo el proceso judicial entorpecía poder continuar con su vida. La valoración de esos cuatro indicadores de daño, a juicio de la perito Rojas son del tipo moderado, de tipo crónico y se observa que existe una fiabilidad, en estos indicadores. Cuando se contrastan los indicadores, el relato de los hechos, su funcionamiento psicológico, las pruebas aplicadas y la fenomenología, al hacer un contraste con otras fuentes, se encuentra corroboración, por eso es fiable.

Indicó que se descarta una hipótesis de ganancia secundaria, porque no hay intencionalidad acusatoria, ya que tiende a minimizar los daños.

Se descartó también que el daño encontrado fuere producto de otra vivencia porque, si bien ella trae un daño previo, los indicadores reportados tienen relación con los hechos, a nivel temporal y de contenidos, además ponderando el elemento de fiabilidad.

Por lo tanto, la descartar las hipótesis anteriores, cobra fuerza la hipótesis de que el daño en la peritada sea producto de los hechos materia de la investigación.

Indicó que, con todo, y a pesar de la incertidumbre, falta de redes, inestabilidad habitacional, y sensación de soledad, encontró apoyo en un amigo (anterior cliente), en personal de URAVIT y de la Casa de Acogida, además de retomar un vínculo con un culto religioso, todo lo que podía contribuir a que estuviera mejor, por lo que puntualizó que contaba con un pronóstico de recuperabilidad positiva.

Finalmente, declaró en calidad de perito, el psicólogo **Gonzalo Horstmeier Garote**, quien refirió haber participado como supervisor presencial en la pericia que realizó Milena Rojas a la víctima Samantha.

Indicó que su rol en la citada evaluación era velar a fin de que se mantuviera la neutralidad de la entrevista, evitar el sesgo y mantener los objetivos de la evaluación pericial. Hizo presente que cuando se realiza el análisis criminológico, su rol fue verificar que la perito haya realizado la información y haya efectuado las hipótesis iniciales conforme el caso y la fenomenología, objetivos que en la especie se cumplieron a cabalidad.

Señaló que las conclusiones de la pericia en cuestión fueron que la peritada mantenía un funcionamiento psicológico que permitió realizar la pericia conforme la metodología, que mantenía factores de vulnerabilidad de manera previa a los hechos y algunos que se mantenían como la baja escolarización. Que se pesquisaron otros factores relevantes como de preocupación por su inestable situación económica y habitacional, presencia de sentimientos de rabia, algunos elementos depresivos y victimización secundaria. Que, luego de analizar tres hipótesis de trabajo, se ratificó que los indicadores de daño presente en la peritada estaban asociados a los hechos investigados.

8.- Prueba de la defensa.

Que, durante el turno de la defensa en el probatorio, ésta rindió prueba nueva, consistente en la exhibición de un **video**, en el que se apreciaba un noticiario de una estación de televisión extranjera. La noticia que se observó databa de 3 de mayo de 2021 y hacía alusión a la problemática que le asistía a la familia de Laura (L.V.A.) con motivo de su fallecimiento, en extrañas circunstancias, acaecido en la ciudad de Iquique. Los familiares, una familia de escasos recursos, no sabía cómo poder indagar más sobre la muerte de Laura (madre de un niño de 4 años) y solicitaba ayuda para poder expatriar a Paraguay el cuerpo de la joven.

Luego, y ante la presencia de la Cónsul de Chile en Paraguay, declaró la testigo **Bernardina Chávez**, nacida el 6 de junio de 1988, de actuales 33 años, paraguaya, peluquera.

La deponente, refirió conocer a la acusada María Sosa, desde el año 2007, debido a que trabajaron juntas en Estaña, dedicándose ambas en esa época al ejercicio de la prostitución. Dijo que era su amiga, que conocía a su hermana y a sus hijas y que siempre tuvo con ella contacto por redes sociales.

Indicó que un día, una de sus hermanas con las que vivía, de nombre Hilda, le dijo que se iría a Chile a trabajar. Dijo que Hilda tenía un hijo de dos años, y que salía bastante, le gustaban mucho las fiestas, dejándole “encima” el hijo. Al saber sobre sus intenciones de ir Chile, a Iquique específicamente, la testigo indicó que ella no estuvo de acuerdo, porque ella se iba a quedar con la criatura. Entonces, como ella veía que por Facebook, María estaba en Chile, tenía un hijo pequeño, un novio chileno y estabilidad, decidió comunicarse con María, y le escribió diciéndole “será que mi hermana tiene posibilidad de irse”, y María le respondió “no hay problema amiga” y le entregó el número. Así fue como su hermana se fue junto a María, y trabajaron juntas, eso fue lo que le dijeron.

Agregó que a su hermana es inquieta, le gustan mucho las fiestas, le gusta el dinero fácil, vestirse bien, salía mucho, tenía mucho contacto. Quería irse a España, pero eso no se pudo y por eso decidió irse a Chile. Quería irse a trabajar, a “facturar”, se fue a trabajar de acompañante, algo así. Señaló que su hermana trabajaba en lo mismo en su país, pero ella necesitaba plata ya que tenía problemas con su marido. Cuando viajó, su hermana le dio una mensualidad y le entregó a su criatura. Luego, mandó a abrir un karaoke, con el papá de su hijo, en Paraguay con lo que ganaba en Chile. Como a ella le iba súper bien, se fue y volvió después de meses. Para navidad, se quedó unos meses y le dio “la locura” de volver a Chile, le dejó el karaoke, a su novio y volvió a Chile.

Señaló que su otra hermana “Soe”, perdió su trabajo y la empezó a pasar mal, estaba en problemas con el papá de su hijo y el bebé tenía 3 o 4 meses, ella veía que a

Hilda le iba bien y también le interesó irse. Sonia contactó a Hilda. Le dijo que quería irse a trabajar para poner un abogado en contra del papá de su hijo. Se fue y estuvieron juntas y estuvo un mes. Ella le dejó su bebe, y no alcanzó a darle mensualidad, por lo que el papá se llevó la criatura, y eso se lo avisó por video llamada. Ella reaccionó muy mal (“le entró un nervio”) y le dijo que quería volver a Paraguay a denunciar al papá de su hijo. Entonces le pidió dinero prestado a Hilda, pero ésta se niega, y como “la Soe” no quería tocar sus ahorros, a raíz de eso se fue a denunciar a María. Le ofrecieron dinero. Le pusieron psicóloga ahí. Por eso ella mintió. Ella solo quería regresar para poder solucionar el problema del marido. Ella quería que Chile le comprara el pasaje. Por eso cree que denunció a María. Ella no compró el pasaje.

Le preguntó a Hilda, y ella le dijo que la presionaron los policías para que firmara el papel, que si no firmaban quedarían detenidas, y por eso firmaron. Eso fue lo que le dijeron.

Negó que María le haya pagado los pasajes a su hermana Hilda, ya que dijo que María le había dado dinero, pero no para el pasaje, sino para el viático, y que le prestó dinero, pero no era mucho. A Sonia no, fue Hilda quien le dio para su pasaje. Indicó que Hilda salía mucho, a todos lados, y que lo sabía porque la llamaban siempre y por sus redes sociales.

Indicó que, al llegar a Paraguay, Sonia le contó que le habían ofrecido dinero y que constantemente la llamaban hasta que se aburrió y por eso cambió el número. Por su lado Hilda, que actualmente trabaja con ella en la peluquería, le dijo que estaba de acuerdo con que declarara por la defensa, porque ella firmó los papeles sin leer, que solo después de firmar supo que estaba haciendo una denuncia, pero que no quería hacer denuncias en contra de María.

Durante su declaración, se exhibieron además 8 **fotografías**, ofrecidas como **Otros Medios de Prueba**, las que la testigo reconoció y señaló que en todas ellas estaba su hermana Hilda, en distintas salidas que tuvo mientras estuvo en Chile, incluidas una en la playa y otra en una peluquería de Viña del Mar.

Dijo que su hermana Hilda ganaba mucho dinero, pero que a ella le enviaba un sueldo mínimo, semanal o quincenalmente le mandaba 500.000 guaraníes.

Al contra examen, indicó que ignoraba que Hilda había declarado que María le había comprado el pasaje, y que lo del pago del pasaje de Sonia, es decir, que lo había financiado Hilda y no María, era algo que no lo sabía directamente. Nunca supo de la entrega en el bus o por otra vía de 300 dólares a sus hermanas. Ignoraba también si es que María les daba instrucciones con relación a información en control migratorio.

También dijo que no sabía que sus hermanas tenían que entregarle la mitad de las ganancias y propinas a María, ni que era María quien compraba y les entregaba los preservativos.

Indicó que Sonia le envió dinero (2 millones de guaraníes) la quincena antes de regresar a Paraguay y que ya en Paraguay le pasó igual cantidad, pero no le dijo desde donde sacó el dinero que le mandó. Indicó que sus hermanas le contaron que estaban súper bien, aunque sin detalles, “nada por pasos”, señaló.

Agregó que, en relación con Sonia, fue despedida (previo a su viaje a Chile) porque le había dado depresión post parto y porque trataba mal a sus compañeras de trabajo. En Chile, siempre la vio súper feliz, hasta que le contó la situación con el padre de su hijo, que se la había llevado.

9.- Conclusiones.

Que, tal y como se dijo en el primer apartado de este considerando, resultó un aspecto no controvertido que, -al menos durante el periodo en que se desplegó la investigación que antecede a este proceso, es decir, entre febrero de 2017 y noviembre de 2019-, la acusada María Sosa Aquino tuvo a su cargo, varios inmuebles arrendados en la ciudad de Santiago, y que - al menos tres de ellos-, estaban destinados de manera principal al ejercicio del comercio sexual y a la vez, de residencia de distintas mujeres que desarrollaban tal tarea. Estos tres domicilios, fueron el de Luis Thayer Ojeda 127,

departamento 902, el de calle Ruiz de Gamboa 029, ambos de la comuna de Providencia y el de avenida Santa Rosa 170, departamento 1005, ubicado en la comuna de Santiago.

Que, ciertamente, una de las controversias principales que surgieron en este juicio, radicó en la naturaleza y características del comercio sexual vinculado a los domicilios de María Sosa, toda vez que según la defensa y la propia acusada en sus declaraciones, lo que aquí existió fue solo una ayuda dispensada por ella a un grupo de sus connacionales; o bien, que se trató de una especie de “sociedad”, en donde ella compartía un número considerable de conocimientos y estrategias en este rubro, pero cada mujer era soberana en relación a la actividad sexual que llevaba a cabo.

Sin embargo, a la luz de la prueba que se viene ponderando, dichas tesis no convencen como verosímiles, ya que, la primera de ellas, esto es, el de tratarse esta actividad de una simple ayuda, vino aparejado de una serie de condiciones, o de “reglas” -como calificó la víctima “Sonia” en su declaración-, que se alejan de lo que pudiera ser un mero préstamo de dinero, o incluso una oferta laboral. Porque, corresponde convenir que todo empleador que extiende una oferta de trabajo no está haciendo caridad, ni una obra altruista. Aquello no es ayuda, sino que el ofrecimiento de trabajo, definido por antonomasia, como una relación de subordinación.

No resulta creíble que, si la actividad que la acusada desarrollaba era de ayuda, tuviera que implementarla con tantos medios, ya que no sólo necesitaba de más de dos inmuebles, sino que de 17 celulares, pagar importantes sumas de dinero en forma mensual a páginas web de publicación de servicios sexuales, contar con un vehículo para transportes, enviar dinero, comprar pasajes, disponer de cámaras de seguridad, etcétera.

No es posible soslayar que María Sosa en varias oportunidades (recuérdese el tenor de los mensajes de WhatsApp que fueron introducidos como transcripciones o bien con imágenes de capturas de pantalla del grupo “Chicas Súper Poderosas”) daba instrucciones a las distintas mujeres, sobre por qué le había dado el número de celular a un cliente, que le tocaran la puerta a una de las chicas (después de finalizado un

servicio), que debían avisarle con más antelación sobre la falta de preservativos, todo ello, aunado además, a los innumerables mensajes de aviso de clientes en camino, para diversas mujeres.

Cabe considerar, además, que todas las mujeres que declararon durante el proceso, sea en sede policial, ante el Ministerio Público o en este tribunal estuvieron contestes en que todas ellas, cumplían (y debían hacerlo) con las instrucciones de María Sosa. Si se considera el relato de víctimas como Sonia, Hilda, Samantha, Jannyré, Araceli y Laura, todas ellas debieron pagar el costo de su pasaje (y en muchas oportunidades, pagando en exceso), deuda que no podía ser obviada, ya que era lo primero que debían cubrir las mujeres con su trabajo, antes incluso que su propia alimentación.

Todo ello, comprueba de manera sólida y palmaria, que la actividad de María Sosa no era de ayuda a sus connacionales, ni una fundación en ciernes, ni nada que se le parezca.

Ahora bien, ¿era esta actividad de comercio sexual, una sociedad de mujeres que trabajaban “para ellas” como refirió la encartada?

Nuevamente, las declaraciones de testigos (altamente verosímiles), peritos, la ingente prueba en imágenes, relativas a la forma en cómo se montaba y desplegaba el negocio, el tenor de la mensajería y los registros en diversas agendas, sumado a los movimientos bancarios y de información tributaria, por el contrario a lo que plantea la defensa, son indicios poderosos de la existencia de una verdadera empresa vinculada a la prostitución, en donde ciertamente, había una clara líder o gerenta, operativa y presente, en cada fase de su “industria”, a saber, la acusada María Sosa Aquino.

En efecto, era un **negocio**. Quedó suficientemente acreditado, con la Testimonial y Otros Medios de Prueba, especialmente en la coincidencia que existe en los relatos de las víctimas y las publicaciones (incluso las transcripciones de audios, en donde María Sosa le da información sobre los servicios a un cliente), que el horario en que se prestaban los servicios sexuales, era extenso, por regla general, desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de madrugada, pero que comprendía la posibilidad (los viernes)

de horarios “full time”, en donde se excedía con creces el horario ya referido. Así, además quedó acreditado con fotografías de la casa de Ruiz de Gamboa (Otros Medios de Prueba N° 112) en donde se apreciaron a clientes y a trabajadoras sexuales, incluso hasta las 5 de la madrugada.

Este horario era conocido por los clientes, debido a que se publicaban en varias páginas web de ofrecimiento de servicios de prostitución, tales como “sexo.cl”, “mi privado.cl”, “skokka”, publicaciones que además fueron incorporadas a juicio como Otros Medios de Prueba. Luego, la existencia de clientes no venía dado porque existiera un grupo ya conocido, o una especie de “cartera de clientes” (sin perjuicio de que si existían clientes frecuentes), sino porque existía un medio de publicidad suficiente y efectivo. De hecho, corresponde recordar en este punto, lo declarado por el testigo Frédéric Liabeuf y por las funcionarias Cassandra Avilez y Carolina Gatica, en cuanto a que era de tal magnitud el flujo de clientes, en un edificio residencial, que se debió abrir un libro de visitas exclusivo para el departamento 1005, constatándose la presencia de 567 clientes en poco más de cuatro meses del año 2017, e idéntica suerte corría la casa de Ruiz de Gamboa ya en el año 2019, tal y como lo pudieron apreciar los funcionarios policiales Juan Carlos Oliveros y Álvaro García, quienes realizaron vigilancias estáticas a dicho inmueble. Así también, lo avisaba la propia María Sosa a “las chicas” por medio de audios de WhatsApp (Prueba Documental N° 36), al decir que debían de aprovechar, porque los teléfonos no paraban de sonar “hay muchísimas llamadas”.

Efectivamente, (y salvo el periodo cercano a las manifestaciones de octubre de 2019), el flujo de clientes era importante, cuestión que era relevante, especialmente para quien coordinaba todo el proceso operativo, puesto que con ello obtenía el 50% de la integridad de las ganancias.

Durante su declaración, María Sosa intentó justificar la recepción de la mitad de las ganancias, en el necesario pago que debía realizar por concepto de arriendo y servicios básicos, sin embargo, no fue capaz de dar una explicación coherente, a la hora de sacar cuentas, puesto que argumentó que las mujeres le daban montos

voluntarios y no ciertos, y que, en varias oportunidades, ella debía cubrir con su propio dinero los gastos básicos que eran utilizados por todas.

Sabemos que, en un sistema como el nuestro, es el Ministerio Público quien tiene la carga de probar el contenido de su acusación, ya que quien soporta el juicio tiene incluso la libertad de mentir, empero, en el caso que nos convoca, pudimos conocer de un flujo importante de clientes, con varias mujeres en calidad de prestadoras “trabajando” simultáneamente, y con prestaciones que iban desde \$30.000 hacia arriba, lo que conduce a concluir que el negocio era rentable y de actividad permanente.

Varios de los testimonios que se pudieron conocer, dieron cuenta que la atención de clientes era demandante. Cabe recordar a Samantha que llegó a indicar que atendió a más de 7 u 8 clientes en un día, o Hilda que consideró un número similar, o su hermana Sonia, quien al ver frustradas sus expectativas, concluyó que para hacer “buena plata” debía de atender a 6 o 7 clientes por día.

Con todo, los movimientos de las cuentas bancarias de María Sosa y de su hermana, demostraron que el flujo de dinero con el que contaba la acusada, coincidente además en el ítem ingresos o depósitos con las sumas de los costos de los servicios sexuales, demostraban ganancias millonarias, conforme los flujos que mensualmente superaban los \$30.000.000 conforme lo relató en estrados la oficial de caso Nicole Salinas.

Con tales ingresos, además podía financiar los viajes propios (recuérdese Otros Medios de Prueba 8) y los pasajes a varias de las víctimas, así como el envío de dinero que, de manera constante efectuada a diversas personas en Paraguay, tal y como quedó demostrado con la Documental N° 72.

Que, logró establecerse también que ésta era la única actividad lucrativa de la acusada María Sosa, ya que, en efecto, se demostró que no tenía ninguna otra. Al efecto, cabe considerar el Documento N° 47, en donde se observa que la actividad declarada por la acusada no solo no la desarrollaba, sino que tampoco le generaba

ingresos (ni pagaba impuestos por ello). Tampoco se demostró, con las agendas, mensajería o vigilancias que haya ejercido la prostitución en el periodo investigado.

En efecto, este negocio era **administrado y controlado** por María Sosa, y consustancial a él, resultaba el tener a su disposición un número considerable de mujeres que hicieran las veces de trabajadoras sexuales. María Sosa era la única que **tomaba las decisiones** de su empresa (que claramente no era una sociedad con otras mujeres), y como se dijo, se hizo de bienes raíces y muebles, además de tecnología suficiente para coordinar las atenciones, la actividad de las mujeres y el cumplimiento de sus instrucciones. Imponía con claridad su autoridad, ya que como quedó evidenciado con las transcripciones de audios (de 22 de octubre de 2019, en Prueba Documental N° 36), María les decía que ella ponía el orden, que se ubicaran, que había cosas que ella no iba a permitir, y que sin ella (ya que tenía el control sobre las publicaciones) nadie las buscaría. Al efecto, cabe recordar los dichos de Hilda, que relató que María Sosa era quien tomaba las fotografías para las publicaciones y que aunque ella podía decidir qué posición adoptar, si la foto no le gustaba a María, la borraba y finalmente, quien decidía qué fotos se publicaban, en qué página y quien se hacía cargo de los pagos, era María Sosa, como quedó además corroborado con la prueba documental, consistente en correos electrónicos y pagos a las empresas “sexo.cl” y Servicios Digitales Ltda., que correspondía a “mi privado.cl”.

María Sosa, además, era quien decidía que mujer prestaba servicios en un determinado lugar u otro. Vivir en un determinado lugar, o incluso donde dormir, no era una decisión libre de las “trabajadoras” de María, ya que ella les instruía dónde debían estar alojando, dónde y cómo prestar los servicios, decidía quienes eran sus clientes, y además les imponía la obligación de dar aviso de sus salidas, lo que quedó ampliamente probado con el testimonio de las afectadas y además con las capturas de pantalla del chat de WhatsApp “Chicas Súper Poderosas”, tantas veces citado.

Que, con la consistente y coherente prueba de las acusadoras, se acreditó también que las mujeres eran publicadas vinculándolas a distintos números de teléfonos celulares, los que estaban en poder y control de la acusada Sosa Aquino,

quien haciéndose pasar por las afectadas, daba coordenadas y acordaba horas y prestaciones con las personas que llamaban en calidad de clientes (considérese los audios transcritos como Prueba Documental N°36 y la declaración del testigo Francisco Pino).

Cabe hacer presente que se incorporó a juicio un número importante de publicaciones de distintas mujeres cuyos números de teléfono eran los mismos objetos de las interceptaciones telefónicas conocidas durante las declaraciones de las oficiales de caso Carolina Gatica y Nicole Salinas y aportadas como evidencia documental o bien como Otros Medios de Prueba.

Que, dentro de las mismas condiciones en que el comercio sexual se ejecutaba, quedó demostrado que quien fijaba el precio de cada prestación era la acusada, ya que ella ordenaba los términos en que las mujeres se publicaban, acordaba tales montos con los clientes cuando ellos llamaban, y desde los primeros contactos con las afectadas, les informaba que el 50% de las ganancias iban destinadas a ella.

¿Qué mujeres eran las trabajadoras sexuales del negocio de María Sosa? Solo mujeres paraguayas. En los testimonios que el tribunal conoció de manera directa o bien por intermedio de la declaración de los funcionarios policiales que con anterioridad escucharon sus relatos (como lo fue en el caso de Araceli, Jannyré o Laura), todas ellas tenían una característica en común. Todas ellas explicaron que estaban con María (a quien incluso denominaron como “jefa”) porque se encontraban con muchas necesidades económicas. Todas ellas, salvo Samantha, tenían hijos pequeños a quienes mantener, u otras personas de las cuales hacerse cargo y, la totalidad de ellas reportó encontrarse en medio de una situación de precariedad de recursos. Todas decían que su búsqueda fue por una mejor situación, de que sus sueldos no alcanzaban para cubrir sus necesidades mínimas y que accedieron al “trabajo” por necesidad. Samantha, refirió de hecho, lo mal que se sentía de haber sido utilizada por una persona, que sabía sobre su “necesidad”, palabra que se repitió en las víctimas, cada vez que les preguntaban por la actividad de comercio sexual a la que se dedicaban.

Ahora bien, gracias a esos mismos relatos, y también a los aportes de las profesionales Milena Rojas y Karen Schmidt, el tribunal se pudo imponer que el elemento común en todas las trabajadoras de María era su **situación de vulnerabilidad**. Todas eran mujeres que en Paraguay pasaban zozobras, la gran mayoría con obligaciones vinculadas al cuidado de otros, con escasa o incompleta escolaridad, y con inexistentes o ineficientes redes de apoyo. Había cuentas que pagar, enfermedades que cubrir, hijos que alimentar y entre un trabajo precario que no cubría aun lo más básico o esencial para vivir, la posibilidad de tener “una suerte” o un pasar similar al de María, significó una oferta tentadora, que importaba sacrificios, pero nuevamente, la “necesidad” era más imperiosa.

Que, consustancial al negocio de comercio sexual montado por María Sosa Aquino resultó el tener a su disposición un número considerable de mujeres que hicieran las veces de trabajadoras sexuales. Para ello, captaba y facilitaba el ingreso al país de mujeres paraguayas en situación de vulnerabilidad.

Es así, que, con la Documental, Testimonial, Evidencia Material y Otros Medios de Prueba como fotografías y escuchas de interceptaciones telefónicas, logró determinarse que María Sosa financió, ya sea por el envío directo de dinero a las afectadas o bien por la compra del respectivo pasaje, el ingreso al país de mujeres originarias de Paraguay, para que ejercieran la prostitución, en la forma y condiciones que ella ordenaba. Así, se rindió prueba suficiente para acreditar que las víctimas de nombre Yerutí, Norma, Laura (LVA), Analía, Arnal, Jannyré, Araceli y Laura (LEA), ingresaron a Chile con la colaboración y gestiones de María Sosa y que dicha entrada al territorio nacional se realizó con el único objetivo de que ejercieran el comercio sexual en los inmuebles arrendados por María Sosa, y en las condiciones que ella les imponía. Así, se evidenció con las publicaciones en páginas destinadas al ofrecimiento de servicios de prostitución, con documental consistente en conversaciones de chat por la aplicación WhatsApp, y de anotaciones en agendas y cuadernos incautados por la policía, con imágenes extraídas desde las cámaras de seguridad de los inmuebles en

donde trabajaban y residían, y con el mérito de las declaraciones de funcionarios policiales y de otras afectadas tales como Samantha, Hilda y Sonia.

A modo de síntesis: En el caso de la víctima “Yeruti”, es claro que María Sosa financió su entrada al país, ya que le envió dinero el 2 de febrero de 2017 (Documento 72), y solo a los dos días después, ingresó a Chile. Fue publicada por María Sosa en la página “sexo.cl” (Prueba Documental N° 41 y Otros Medios de Prueba N° 37, 38 y 41) y ejerció la prostitución para María Sosa, en sus inmuebles tal como fue refrendado por las declaraciones de otras víctimas, como Samantha.

En el caso de la víctima “Norma”, también recibió dinero de parte de María (el 7 de diciembre de 2017 (oficio de Chilexpress ya citado), ingresó el 9 de diciembre de 2017 y fue recibida en los inmuebles de María Sosa, tal y como incluso quedó evidenciado en fotografías, que fueron exhibidas durante la declaración del testigo Álvaro García, pero se ratificó además con la evidencia documental 8 y 11 consistente en los registros oficiales de la policía en relación con sus movimientos migratorios. Norma, luego fue publicada en “sexo.cl” el 17 de enero de 2018.

En relación con “Laura”, de iniciales L.V.A., se probó que María le envió dinero el 26 de julio de 2018 (oficio de Chilexpress ya citado), y fue publicada en sexo.cl el 1 de agosto de 2018. Sin perjuicio de que no se aportaron otras pruebas sobre su ingreso a Chile, es claro que en efecto estuvo, porque, de hecho, la propia prueba de la defensa, la ubica en el país (de hecho, fallece en Chile este año), lo que es coherente, además, con las declaraciones de las oficiales de caso.

En cuanto a “Analía”, se acreditó el envío de dinero por parte de María el 4 de octubre de 2018 (oficio de Chilexpress ya citado), y su publicación en “sexo.cl” el día 12 de octubre de 2018 (Documento N° 42) y, además, que ejerció la prostitución a cargo de María Sosa, tal como quedó en evidencia con la declaración de Samantha y con las fotografías aportadas como Otros Medios de Prueba N° 58.

En el caso de la víctima “Arnal”, se comprobó, además, y gracias al oficio de Latam (Documental N° 18) que María Sosa le compró el pasaje aéreo en dos oportunidades, la primera vez el 7 de enero de 2019 y publicada en “sexo.cl” el 9 de

ese mes y año (Documental N° 42). Se probó, además, que ejerció la prostitución y que se publicó para ello, tal y como evidencian las imágenes de Otros Medios de Prueba N° 36, 48 y 57.

En cuanto a la víctima “Jannyré”, se comprobó por medio de la declaración de Nicole Salinas, que en el caso de esta víctima se utilizó el método del “retiro en ventanilla” para que la afectada pudiera adquirir el pasaje previamente pagado por María Sosa. Es así como Jannyré previo contacto con María, ingresó al país el 31 de agosto de 2019, fue publicada el 10 de octubre de 2019 (Documento N°41), y fue una de las víctimas rescatadas en el día en que se practicaron las diligencias de entrada y registro.

En el caso de la víctima “Araceli”, se comprobó, por medio de la declaración del funcionario Juan Oliveros, que al igual que en el caso anterior (además, su amiga) María usó el método del “retiro en ventanilla” para que la afectada pudiera adquirir el pasaje previamente pagado por María Sosa. Araceli llegó, según sus dichos, el 7 de septiembre de 2019, y es publicada en “sexo.cl” el 10 de ese mismo mes. En su caso, no sólo se exhibieron imágenes de sus publicaciones (Otros Medios de Prueba N°67 y 68) sino que, además, cabe considerar que fue una de las mujeres encontradas en el interior del domicilio de Ruiz de Gamboa el día en que se verificó la detención de María Sosa.

En cuanto a la afectada “Laura” (L.E.A.), se logró acreditar, con la declaración del funcionario Javier Cárcamo y de la oficial de caso Nicole Salinas, aunado además a la Documental N° 55, 65 y 65.4) que María le compró el pasaje en bus, que ingresó el día 2 de noviembre de 2019, y también fue una de las mujeres rescatadas desde los domicilios de María Sosa, específicamente en el departamento 1005 de Santa Rosa 170.

Que, en el caso de las víctimas Samantha, Hilda y Sonia, se logró acreditar también (conforme a la extensa y concordante prueba de la que se ha hecho análisis de manera precedente) que todas ellas se encontraban atravesando una situación económica compleja, sin más herramientas ni posibilidades que considerar el ejercicio

de la prostitución como una alternativa posible. Es así como las afectadas se pusieron en contacto con María Sosa, nombre que les fue proporcionado por otras mujeres (Yerutí en el caso de Samantha y por su hermana Bernardina, en el caso de Hilda y Sonia). Por su lado, Sosa Aquino reaccionó directa o indirectamente (personalmente o por intermedio de Yerutí por ejemplo) y ejecutó acciones que permitieran incorporar a tales mujeres a su red o grupo de proveedoras de servicios sexuales. Es por eso por lo que financió pasajes, fue en la mayoría de los casos a recogerlas personalmente a terminales de buses o aeropuerto, decidió en qué lugar se quedarían y les proveyó de cierta información sobre términos y condiciones en que las mujeres habrían de otorgar los servicios sexuales. Luego, decidió donde y como serían publicadas, controló los números telefónicos asignados en las publicaciones, se comunicó y asignó clientes y estableció **de entrada una deuda** con las afectadas, consistente en la devolución de los gastos correspondientes al viaje de ingreso a Chile.

Cabe insistir en que se logró probar, además, que María Sosa controlaba los movimientos e interacciones que tenían las víctimas entre ellas o con terceros, ya sea por medio de cámaras de vigilancia instaladas en el interior de los inmuebles que arrendaba y de comunicaciones vía mensajería o telefónicas, daba constantes instrucciones sobre permanecer en el lugar destinado al comercio sexual, retornar rápidamente si es que alguna víctima había salido a comprar, e inclusive, a qué hora debían iniciar el día, ya que las instruía a trabajar con mensajes tales como “los teléfonos ya están encendidos”. En la misma línea, María informaba qué cliente debía ser atendido por qué mujer, y además en qué lugar debía materializarse la prestación sexual, siendo ella quien de manera exclusiva trasladó a las víctimas hacia los “domicilios”, servicios consistentes en una prestación sexual en hoteles o residencias particulares y respecto del cual, María establecía un monto más alto.

La acusada, además, se encargaba de sostener comunicaciones con los clientes de forma posterior al servicio sexual, con el objeto de controlar si es que la víctima había recibido dinero extra, ya que si así se verificaba aquello, procedía a exigir el pago de la mitad de aquel monto o “propina”.

Tal y como se dio cuenta por medio de las declaraciones de los funcionarios Carolina Gatica, Nicole Salinas, Juan Oliveros Narea y el testigo Francisco Pino, aunado a lo declarado por las propias víctimas y a las fotografías apreciadas como Otros Medios de Prueba 112, las mujeres que se encontraban ejerciendo el comercio sexual bajo las órdenes de María Sosa, debían dormir y alimentarse en el mismo lugar en donde trabajaban, debían informar de cada salida (habitualmente por alimentos), debían entregar y reportar diariamente sus ganancias y debían atender a clientes en extensas jornadas habitualmente entre las 9 de la mañana y las 2 de la madrugada, incluyendo jornadas de 24 horas o “full time”, sin que se les reconociera un periodo o día de descanso conocido y determinado.

Todas estas acciones, evidencian un claro **sometimiento** de las víctimas a la voluntad de María Sosa con el objetivo de explotarlas sexualmente, dinámicas que distan del ejercicio voluntario o libre (o incluso asociativo) de la prostitución. El establecimiento de la deuda inicial por el traslado, el control intenso en cuanto a los desplazamientos y la disponibilidad en relación con los servicios, las jornadas y las condiciones en que las prestaciones sexuales eran otorgadas, sumado a que la mitad de las ganancias eran otorgadas a la acusada, son pruebas irrefutables de que el “negocio” montado por la acusada no era otro que la explotación sexual de las víctimas.

Que, se sugirió por la defensa en sus alegaciones y como parte de sus preguntas a los diversos peritos y testigos que las mujeres que estuvieron trabajando como prestadoras de servicios sexuales en los inmuebles de María Sosa, lo hacían libremente, sin que existieran verdaderas restricciones a su libertad de desplazamiento, ya que podían salir libremente y, además, podían elegir si rechazaban o no a un cliente, podían bajar las publicaciones o incluso irse del todo de los inmuebles, ya que María no las tenía encerradas ni con los documentos de identificación o migratorios retenidos.

Que, en efecto, todos esos aspectos que señaló la defensa resultaron ser efectivos, pero concluir de ellos que las mujeres eran libres, constituye un sofisma. Los

mismos hechos, pero vinculados a su verdadero contexto fáctico, ya no parecen ser una evidencia de la supuesta libertad plena que insinúa dicho interviniente. Tal y como se ha citado reiteradamente, las víctimas podían salir, pero solo les era admitido que salieran por tiempos breves. En verdad, no existía la prohibición de salida propiamente tal, sino la obligación de estar disponible para la eventual o inminente llegada de clientes. Por eso, era importante controlarlas, y saber dónde iban y cuando volverían, porque lo relevante era el negocio, que la mujer estuviera pendiente y dispuesta, si el cliente demandaba por sus servicios.

Que, desde ya suponer libertad, en la posibilidad de rechazar o no a un cliente, en el contexto de un ejercicio de la prostitución al que accedieron todas por necesidad, ya es bastante cuestionable. Pero, al efecto es absolutamente claro el relato de Sonia que refiere que el rechazo del cliente sólo traía consecuencias negativas para la trabajadora sexual, ya que María habitualmente ofrecía los servicios que se demandaban respecto de otra de las chicas, y así ella conservaba el porcentaje de la ganancia. Dio cuenta además de severas recriminaciones, en donde utilizaba herramientas manipuladoras ya sea haciéndolas sentir como malas madres (por no producir dinero para enviar) o bien, imponiendo el miedo, ya que les decía que las echaría a la calle, todo ello en conocimiento que ninguna de ellas tenía redes de apoyo, o alternativas de trabajo o de habitación distintas a las que tenían en ese momento. Personas con una vulnerabilidad alta, como era el caso de las trabajadoras que María buscaba, captaba, acogía o recibía, ciertamente no son personas libres, aun cuando puedan ir a un mall o un bar de tanto en tanto. Lo cierto es que quedó totalmente acreditado que todo el resto del tiempo, estaban a disposición del negocio de María Sosa, en condiciones de hacinamiento y con un alto control, llegando incluso a actos tan intrusivos como el ver actividades cotidianas por medio de cámaras al interior de los domicilios.

Cabe recordar también, los dichos del testigo Juan Santelices, que al invitar a las mujeres para que prestaran declaraciones en dependencias de la BITRAM, las jóvenes estaban preocupadas por dejar la puerta abierta, ya que no tenían llave, porque

siempre había gente, y si quedaba cerrado, no podrían volver a entrar. Hay que recordar, además, los dichos de Francisco Pino, quien dijo que las oportunidades en que vio a Samantha, mientras ella estaba en Luis Thayer Ojeda, de inmediato era requerida telefónicamente para que regresara, y reportaba estar cansada, por lo extenuante de su jornada. Toda la prueba es indiciaria de un control permanente, y no de libertad, ya que cuando existía un incumplimiento a las obligaciones, María Sosa imponía su autoridad, recriminándolas y amenazando con medidas que implicaban severas pérdidas en las afectadas.

En este punto, cabe hacer hincapié en la forma en cómo María generaba una deuda de entrada, con la que daba inicio al control que ejercía. De esa manera, se aseguraba que las víctimas estuvieran un tiempo al menos, trabajando a provecho propio, sin posibilidad (real o solo como representación) de poder moverse o instalarse en otro lugar. Sonia así lo declaró, que quería regresar a su país, sin embargo, María le dice que primero debe pagarle el pasaje. Que esta deuda inicial (elemento central y común respecto de todas las víctimas) no era el único método utilizado, pero sin duda, era una especie de “carta de presentación” demostrativa de quien estaba en condiciones de ser acreedor y de imponer las reglas del juego.

Por último, es efectivo que podían retirarse del todo, ya que María no les tenía retenidos sus documentos, pero nuevamente, aquello no puede ser analizado sino con el contexto de toda la actividad que María Sosa desplegó en los domicilios materia de esta investigación. El testigo Frederic Liabuef señaló que había un “recambio de chicas”; la propia víctima Hilda, indicó que estuvo en más de una oportunidad, y, por cierto, Samantha decidió irse y no regresar, pero nada de ello hace variar las condiciones en que estuvieron, durante el periodo en que “trabajaron” ejerciendo la prostitución para María Sosa.

De hecho, se cuestionó por la defensa el relato de Samantha por haber pasado “poco tiempo” en el departamento de Luis Thayer Ojeda ya que llegó a Chile el 30 de marzo de 2019, pero estuvo dos semanas en otro lugar, y luego, la denuncia data de 19 de abril de 2019. Es cierto que Samantha no estuvo el tiempo que permanecieron otras

afectadas, de hecho, Francisco Pino la ubica con María Sosa a partir del día 8 de abril y es cierto (conforme la testimonial rendida) que se hizo una denuncia el 19 de ese mismo mes. Ahora bien, ¿es posible sostener cuál es el plazo necesario que debe transcurrir para considerar que una mujer está siendo explotada sexualmente?, ¿qué es lo prudente si estamos hablando de graves atentados a la integridad y derechos humanos de las mujeres? Sin duda, calificar de “poco” un periodo de un día o más de un día en ese contexto, es un argumento que no se puede sostener ni desde la lógica, ni menos desde el Derecho.

Que, cabe señalar que las *pericias de daño* aportadas a juicio se consideraron como pruebas completas y consistentes entre sí, y con absoluta concordancia con la totalidad de los relatos vertidos en juicio. En un sistema como el nuestro, adversarial, suele asumirse que el testimonio del perito es clave, hasta decisorio. Sin duda, es importante, pero no implica que existan probanzas únicas y exclusivas para poder determinar la existencia de un hecho.

La defensa en este juicio sostiene que sin un peritaje en relación a la víctima “Hilda” es imposible considerar como acreditado un daño. Sin embargo, no se debe olvidar que “el rol del testimonio experto en juicio es entregar la interpretación de una información que exige un conocimiento especializado, con el objeto de explicitar sus significados *en términos comunes y exactos* dirigidos a generar la convicción del tribunal que, de otra manera, no podría generarse... Por lo mismo, el aporte central de los peritos normalmente se produce en el lenguaje de opiniones que surgen como consecuencia de la utilización de conocimiento experto para comprender ciertos hechos o fenómenos.” (Duce, Mauricio. Riego, Cristián. “*Proceso Penal*”, Edit. Jurídica, Santiago, 2009, pág. 417). Es decir, los aportes del perito no tienen en sí mismos un valor dirimente en relación con el resultado del juicio, sino más bien, integran el conjunto de antecedentes, aportando luces propias de su área a la tarea de análisis exclusiva de los sentenciadores.

En otras palabras, la decisión sobre qué hechos se dan por probados es exclusiva e indelegable del tribunal. Las probanzas rendidas, buscan que se genere convicción, en los términos del artículo 340 del Código Procesal Penal, y en ese contexto, especialmente cuando los hechos se vinculan a ciertos aspectos técnicos o especializados, es que los peritos, en tanto testigos expertos colaboran con el cúmulo de antecedentes que en un juicio ha de ser analizado y dilucidado. Sin embargo, como ya se ha dicho, teniendo presente, además, que en nuestro sistema existe libertad probatoria, no puede tener asidero que la falta de un peritaje no prueba el hecho, ya que éste puede ser demostrado por otros medios. “En efecto, la evaluación de la credibilidad de relatos de víctimas y testigos en juicio es algo que por excelencia corresponde de manera exclusiva al trabajo de los jueces llamados a resolver el caso, una de las funciones centrales de un juez de juicio es valorar la credibilidad de los relatos a partir de la información obtenida en juicio y percibida directamente. Admitir a un testigo experto para declarar sobre ello significa invadir la parcela de un trabajo que es de responsabilidad exclusiva del juzgador y, en alguna medida, sustituirlo en su función”. (Duce, Mauricio. Riego, Cristián. *“Proceso Penal”*, Edit. Jurídica, Santiago, 2009, pág. 435).

En ese orden de ideas, el tribunal pudo apreciar directamente la declaración video grabada de Hilda, además de conocer el contenido de su experiencia por medio de las declaraciones de las oficiales de caso. Se escuchó también la declaración de sus dos hermanas, destacando en todas ellas, la vulnerabilidad de base que compartían (como señaló la perito Schmidt). Todos estos antecedentes, sumado a la apreciación directa del tribunal y a las máximas de la experiencia, permiten concluir que efectivamente resultó dañada con motivo de los hechos materia de este juicio, en tanto, comparte una misma historia vital con Sonia y experiencial con las demás víctimas (cuyo daño fue objeto de pericias).

También la defensa, dejó entrever que la metodología aplicada por Schmidt y Rojas no fue la adecuada a la hora de realizar la pericia a Samantha e Hilda. Sobre el particular, cabe hacer presente que no es posible restar fuerza *per se* a la metodología

CAVAS-Inscrim porque es propia de Chile, o de una determinada entidad, dado que lo que corresponde hacer es escuchar a la psicóloga a cargo de la pericia, analizar en qué consistió su trabajo, y ponderar si éste contó con apoyo técnico propio de su especialidad, así mismo, si dicho estudio y exposición es capaz de permitir comprender por qué concluyó lo que concluyó. Luego, el tribunal valoró positivamente el trabajo de ambas profesionales, y lo consideró como un análisis completo, detallado, con metodología apropiada y constantemente citada en delitos sexuales (según al tribunal le consta por sus máximas de experiencia) y subsecuentemente, no logró apreciar ninguna desprolijidad o falta de rigor ni en el método, ni en sus conclusiones.

Que por último, en cuanto a la *prueba de la defensa*, cabe decir que más que sustentar una tesis alternativa en cuanto a que Hilda y Sonia mintieron (sin recibir algo a cambio) y decidieron denunciar falsamente a María, los dichos de la testigo Bernardina Chávez, vinieron a reforzar el convencimiento que tanto Hilda como Sonia son mujeres con una vulnerabilidad muy alta, y que no cuentan con verdaderas redes de apoyo y contención (aún la propia Bernardina, quien no cumplió su cometido de cuidar al hijo de Sonia, entregándoselo al padre, porque no tenía el dinero que su hermana le había dicho que le enviaría). No es posible -de su propio relato- darles mérito a sus dichos, por cuanto indica un determinado evento al principio para restarle fuerza al final, como por ejemplo, decir que Hilda se pagó el pasaje y no María y afirmar luego, que de verdad, no lo sabe. Se trató de un testimonio tan impreciso que no pudo establecer nada, salvo lo que ya se conocía (y en ese sentido lo corrobora), esto es, que vivían las tres mujeres a cargo de niños de pocos años, que todas tenían necesidades económicas y que todas miraron la experiencia de María, como una opción a tomar. Que, en el mismo sentido, las fotografías de Hilda (sin fecha) en nada aportan, ni restan a los hechos probados en este juicio.

11.- Hechos acreditados.

Que, tal y como se ha señalado reiteradamente, durante más de veinte jornadas de juicio oral, se pudo apreciar una gran cantidad de evidencias y de testimonios, escuchas telefónicas, transcripciones de audios, comunicaciones de mensajería por medio de sus capturas de pantalla, videgrabaciones, fotografías, cartolas bancarias, información de diversas entidades (SII, Latam, WOM, etc.), imágenes de publicaciones en páginas de ofrecimiento de servicios de prostitución, información emanadas de autoridades de Paraguay, entre otras, las que han sido valoradas por el tribunal como prueba suficiente para sustentar (en la forma como se indicará más adelante) los presupuestos fácticos contenidos en la acusación. Todos los medios de prueba, ponderados en este acápite, resultaron ser coherentes y concordantes, constantemente se vinculaban y corroboraban entre sí, y pese a la dificultad que importó su número y producción en el tiempo, logró generar convicción, más allá de toda duda razonable, sobre la efectividad de los siguientes hechos:

“Relación de los Hechos: Antecedentes Preliminares.

Al menos desde el mes de febrero de 2017 al 27 de noviembre de 2019, la imputada María Elizabeth Sosa Aquino, desde distintos departamentos ubicados en Av. Santa Rosa N° 170, de la comuna de Santiago, principalmente desde el departamento 704 del mismo edificio, ha promovido y facilitado la entrada a Chile de mujeres de nacionalidad paraguaya para que ejerzan la prostitución en nuestro país. En algunos casos, aprovechando la situación de vulnerabilidad de las víctimas, las ha recibido y acogido con fines de explotación sexual. Para ello arrendó primero un departamento ubicado en Av. Santa Rosa N° 170, Depto. 1005, comuna de Santiago. Luego, en el año 2018 arrendó con la misma finalidad el departamento ubicado Luis Thayer Ojeda N° 127, depto. N° 902, comuna de Providencia y finalmente en julio del año 2019 la casa ubicada en calle Ruiz de Gamboa N° 029, de la comuna de Providencia, manteniendo además durante todo ese tiempo el departamento de Av. Santa Rosa N° 170, Depto. 1005, comuna de Santiago. Una vez que promovía o facilitaba el ingreso a las víctimas a Chile o cuando las recibía o acogía con fines de explotación sexual, las inscribía en la página web sexo.cl y en otros sitios web, con la finalidad de ofrecer sus servicios sexuales, los que eran prestados en alguno de los domicilios antes indicados o en el lugar que la imputada determinara, manteniendo sólo ella el primer contacto

con los clientes, acordando con ellos el tipo de servicio sexual que cada una de las víctimas debía prestar. Para ello se hacía pasar por las víctimas, avisándoles a ellas con posterioridad lo que debían hacer. De la misma forma controlaba y vigilaba a las víctimas a través de cámaras de seguridad, debiendo prestar servicios sexuales todos los días de la semana por un valor de entre \$30.000 a \$50.000.- la hora, en los domicilios indicados o en los lugares donde la imputada determinara, generalmente en las comunas de Santiago o Providencia, evento en que el pago era de \$65.000 la hora. En el caso que los servicios sexuales se prestaran a domicilio la imputada trasladaba a las víctimas en el vehículo utilizado por ella correspondiente al vehículo Kia PPU JFPB 26, cobrándole a las víctimas por ello.

Las víctimas debían entregar al menos la mitad de los valores indicados a la imputada, además del valor del traslado, si correspondía. De la misma forma en los casos en que la imputada compraba los pasajes de las víctimas para su viaje a Chile, éstas debían pagar la deuda que cobraba la imputada por el pasaje, antes de recibir algún tipo de pago por los servicios sexuales que debían prestar.

PRIMER HECHO.

El día 04 de febrero de 2017, la imputada recibió a las víctimas de nacionalidad paraguaya de iniciales Y.C.F. de 19 años a esa fecha, luego de haber promovido y facilitado sus ingresos a Chile para que ejercieran la prostitución en nuestro país. En efecto, la imputada le envió a la víctima de iniciales Y.C.F. a Paraguay \$138.928 con fecha 02 de febrero de 2017, esto es, dos días antes del viaje a Chile. Luego la imputada publicó con fecha 15 de febrero de 2017, los datos de la víctima en la página web sexo.cl, con la finalidad de que ejerciera la prostitución, en nuestro país, principalmente en el departamento N°1005, de Av. Santa Rosa N°170, Santiago y en el domicilio ubicado en Luis Thayer Ojeda N° 127, depto. N° 902, comuna de Providencia.

Para ello señaló como nombre de fantasía para Y.C.F. “Rossana”.

SEGUNDO HECHO.

El día 09 de diciembre de 2017, la imputada recibió a la víctima de nacionalidad paraguaya de iniciales N.T.P. de 20 años a esa fecha, luego de haber promovido y facilitado su ingreso a Chile para que ejerza la prostitución en nuestro país. En efecto la imputada le envió a Paraguay la suma de \$167.280 con fecha 07 de diciembre de 2017, esto es dos días antes del viaje

a Chile. El día 17 de enero de 2018, la imputada publicó los datos de la víctima en la página web sexo.cl, con la finalidad de que ejercieran la prostitución, en nuestro país, principalmente en el departamento N°1005, de Av. Santa Rosa N°170, Santiago.

Para ello señaló como nombre de fantasía de la víctima “Jacky”.

SEXTO HECHO.

El día 28 de julio de 2018, la imputada recibió a la víctima de nacionalidad paraguaya de iniciales L.V.A. de 21 años a esa fecha, luego de haber promovido y facilitado su ingreso a Chile para que ejerza la prostitución en nuestro país.

En efecto la imputada el día 01 de agosto de 2018 publicó los datos de la víctima en la página web sexo.cl, con la finalidad de que ejercieran la prostitución, en nuestro país, principalmente en el departamento N°1005, de Av. Santa Rosa N°170, Santiago. Para ello señaló como nombre de fantasía de la víctima “Barbie”.

SÉPTIMO HECHO.

El día 17 de agosto de 2018, la imputada captó y trasladó a la víctima de nacionalidad paraguaya de iniciales H.C. de 22 años a esa fecha, aprovechando la situación de vulnerabilidad en que se encontraba específicamente una importante necesidad económica al tener un hijo menor de edad. En efecto la imputada compró los pasajes de la víctima desde Asunción a Santiago con fecha 13 de agosto de 2018, esto es cuatro días antes del viaje. El día 20 de agosto de 2018, la imputada publicó los datos de la víctima en la página web sexo.cl, señalando para ello como nombre de fantasía de la víctima “Pao”, con la finalidad de explotarla sexualmente, debiendo prestar servicios sexuales con los clientes que decidía la imputada, siendo vigilada y controlada por ella, incluso respecto de las propinas que recibía de los clientes.

Todo ello principalmente en el departamento N°1005, de Av. Santa Rosa N°170, Santiago y en calle Ruíz de Gamboa N°29, Providencia.

NOVENO HECHO.

El día 06 de octubre de 2018, la imputada recibió a la víctima de nacionalidad paraguaya de iniciales A.D.J.O. de 28 años a esa fecha, luego de haber promovido y facilitado su ingreso a Chile para que ejerza la prostitución en nuestro país.

En efecto la imputada el día 12 de octubre de 2018 publicó los datos de la víctima en la página web sexo.cl, con la finalidad de que ejerciera la prostitución, en nuestro país, principalmente en el departamento N°1005, de Av. Santa Rosa N°170, Santiago. Para ello señaló como nombre de fantasía de la víctima “Yayita”.

HECHO 11.

El día 07 de enero de 2019, la imputada recibió a la víctima de nacionalidad paraguaya de iniciales A.L.G. de 21 años a esa fecha, luego de haber promovido y facilitado su ingreso a Chile para que ejerza la prostitución en nuestro país. En efecto la imputada compró los pasajes de la víctima desde Asunción a Santiago con fecha 02 de enero de 2019, esto es cinco días antes del viaje.

El día 09 de enero de 2019, la imputada publicó los datos de la víctima en la página web sexo.cl, con la finalidad de que ejerciera la prostitución en nuestro país, principalmente en el departamento N°1005, de Av. Santa Rosa N°170, Santiago. Para ello señaló como nombre de fantasía de la víctima “Barbie”.

HECHO 12.

A principios del mes de abril de 2019, la imputada recibió a la víctima de nacionalidad paraguaya de iniciales S.G.R., de 19 años, quien había ingresado recientemente al país, esto es, el día 30 de marzo de 2019, para acogerla en el inmueble ubicado en Luis Thayer Ojeda N° 127, depto. N° 902, comuna de Providencia, aprovechando la situación de vulnerabilidad en que se encontraba, toda vez que no tenía donde vivir y necesitaba sustento económico.

De esta forma, la víctima debió prestar servicios sexuales con los clientes que decidía la imputada, siendo vigilada y controlada por ella. Con la finalidad de explotar sexualmente a la víctima, la imputada publicó sus fotografías el día 11 de abril de 2019 en el sitio web www.sexo.cl indicando como nombre de fantasía de la víctima “Pamela”.

HECHO 14.

El día 31 de agosto de 2019, la imputada recibió a la víctima de nacionalidad paraguaya de iniciales J.M.D. de 21 años, luego de haber promovido y facilitado su ingreso a Chile para que ejerza la prostitución en nuestro país. En efecto la imputada compró los pasajes para que la víctima viajara a Chile además de enviarle US 300 con la finalidad de exhibirlos a la autoridad

migratoria, instruyéndola para que indicara que venía a visitar una madrina a Chile, es decir para simular la calidad de turista que no tenía.

El día 10 de octubre de 2019, publicó los datos de la víctima en la página web sexo.cl, con la finalidad de que ejerciera la prostitución, en nuestro país, en el departamento N°1005, de Av. Santa Rosa N°170, Santiago y en la casa ubicada en calle Ruíz de Gamboa N°29, Providencia. Para ello indicó como nombre de fantasía de la víctima “Jany”.

HECHO 15.

El día 7 de septiembre de 2019, la imputada recibió a la víctima de nacionalidad paraguaya de iniciales A.I.G. de 18 años, luego de haber promovido y facilitado su ingreso a Chile para que ejerza la prostitución en nuestro país. En efecto la imputada compró los pasajes para que la víctima viajara a Chile además de enviarle US 300 con la finalidad de exhibirlos a la autoridad migratoria, instruyéndola para que indicara que venía donde una tía a Chile, es decir para simular la calidad de turista que no tenía.

El día 10 de septiembre de 2019, publicó los datos de la víctima en la página web sexo.cl, con la finalidad de que ejerciera la prostitución, en nuestro país, en el departamento N°1005, de Av. Santa Rosa N°170, Santiago y en la casa ubicada en calle Ruíz de Gamboa N°29, Providencia. Para ello indicó como nombre de fantasía de la víctima “Mirna”.

HECHO 16.

El día 19 de octubre de 2019 la imputada captó y trasladó a la víctima de nacionalidad paraguaya de iniciales S.E.C. de 27 años a esa fecha, aprovechando la situación de vulnerabilidad en que se encontraba específicamente una importante necesidad económica al tener un hijo menor de edad. En efecto la imputada compró los pasajes de la víctima para que viajara desde Asunción a Santiago el día 18 de octubre de 2019.

La imputada publicó los datos de la víctima en la página web sexo.cl, señalando para ello como nombre de fantasía de la víctima “Arelis”, con la finalidad de explotarla sexualmente, debiendo prestar servicios sexuales con los clientes que decidía la imputada, siendo vigilada y controlada por ella, incluso respecto de las propinas que recibía de los clientes. Todo ello principalmente en el departamento N°1005, de Av. Santa Rosa N°170, Santiago y en la casa ubicada en calle Ruiz de Gamboa N° 029, de la comuna de Providencia.

HECHO 17.

El día 02 de noviembre de 2019, la imputada recibió a la víctima de nacionalidad paraguaya de iniciales L.E.A. de 29 años, luego de haber promovido y facilitado su ingreso a Chile para que ejerza la prostitución en nuestro país. En efecto la imputada compró el pasaje para que la víctima viajara a Chile y le envió la cantidad de US 300 con la finalidad que los exhibiera al momento de ingresar a Chile, instruyéndola para que indicara a la autoridad migratoria una finalidad de turismo que no tenía. Luego, a su llegada a Chile le entregó los US 300 previamente enviados por la imputada. Todo ello con la finalidad de que ejerciera la prostitución, en nuestro país, principalmente en el departamento N°1005, de Av. Santa Rosa N°170, Santiago. Para ello señaló como nombre de fantasía de la víctima “Mirna”.

DÉCIMO NOVENO. Calificación Jurídica. Que, los hechos N° 1 (primera parte), 2, 6, 9, 11, 14, 15 y 17 constituyen delitos consumados y reiterados del artículo 411 ter del Código Penal y los hechos N°7, 12 y 16 constituyen delitos consumados y reiterados del artículo 411 quáter del Código Penal.

1.- Consideraciones sobre la normativa aplicable.

Que, el delito de trata de personas y de trata de personas con fines de explotación sexual, se incorporó en nuestro Código Penal mediante la ley 20.507, promulgada el 4 de abril de 2011, adecuando de esa manera, nuestra legislación a los estándares internacionales sobre la materia.

Se debe tener en cuenta, que el fenómeno de la trata de personas es un problema que supera las fronteras y, por ende, los países han debido adecuarse al proceso de globalización para acoger las demandas de los más vulnerables y generar instrumentos legales que permitan otorgar protección a estas víctimas. Es de suyo relevante para comprender la esencia de la esclavitud moderna, que el proceso de globalización es un eje central del fenómeno, en que la actividad económica y política han tomado nuevas formas al estar supeditadas a la estrecha interdependencia entre los países y a la

interacción de nuevos actores no estatales, que han ido surgiendo en el ámbito internacional.

Es así como la globalización genera múltiples factores que contribuyen a la proliferación de esta clase de ilícitos, ya que la estrecha comunicación entre los países permite reducir los costos de la migración, generando una gran masa de población migrante. Esta población es esencialmente vulnerable, concepto clave para entender el fenómeno de la trata de personas, y está dada por la lejanía de los migrantes con sus redes sociales de apoyo en el país de origen, por las dificultades con el idioma del país al que llegan, por la falta de redes de apoyo social en el país receptor, la falta de conocimiento de los derechos en el país al que llegan, entre otros problemas.

También es importante destacar que generalmente los migrantes provienen de situaciones precarias en su país de origen, los que les genera la necesidad de enviar remesas de dinero, exponiéndose frecuentemente a factores de riesgo y sacrificio para sostener a sus familias económicamente.

La vulnerabilidad es el factor principal que posibilita que estas personas se conviertan en víctima a un bajo costo para sus tratantes, donde un elemento clave es la violencia, que genera una relación asimétrica de poder y dependencia entre los tratantes y las víctimas, posibilitando así la explotación.

Es gravitante destacar que juega un rol importante la inequidad de género en la trata de personas y, sobre todo, en la trata sexual, ya que un número importante de víctimas son mujeres y niños, en su mayoría para fines de explotación sexual. Un factor relevante ha sido la feminización de la migración a nivel global, lo cual expone a un gran número de mujeres a convertirse en víctima de trata, al encontrarse en condiciones de vulnerabilidad. En efecto, al provenir muchas veces de sociedades discriminatorias en que el hombre ocupa un lugar superior y el rol de la mujer se encuentra limitado a labores como jefa de hogar, ocurre el fenómeno de la feminización de la pobreza, lo que conlleva a la feminización de migración, donde estas mujeres vulnerables buscan mejores oportunidades en otros países. La construcción de una sociedad con instituciones patriarcales y discriminatorias va a

tender a situar a esta en una posición de subordinación con respecto al hombre. Esto implica que se pueda justificar a nivel moral, la necesidad física del hombre de obtener sexo, en una relación de dominación física, monetaria e incluso violenta, sin importar los derechos o necesidades de la mujer. Por lo anterior, resultaba fundamental que los Estados elaboraran leyes que logren una efectiva prevención y penalización de conductas de trata de personas.

La trata de personas es una actividad lucrativa, su carácter transnacional y lo moralmente reprochable, al tratarse del comercio de seres humanos, la ha transformado en una problemática de preocupación internacional. Al respecto, los países han efectuado esfuerzos importantes por crear una legislación internacional en torno a la materia, resultando de relevancia, los siguientes:

“Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y que en Chile se establece como ley, mediante el Decreto N°789, promulgado el 27 de octubre de 1989, que define y condena toda forma de discriminación contra la mujer y obliga a los Estados parte a tomar las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

“Declaración sobre eliminación de la violencia contra la mujer”. Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1993, que define y condena la violencia contra la mujer.

“Convención de Belem Do Pará, o Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, que entró en vigencia a nivel internacional el 5 de marzo de 1995 y se promulgó en Chile mediante Decreto N°1640 del Ministerio de Relaciones Exteriores, el 11 de noviembre de 1998.

“Protocolo de Palermo, o Convención de las Naciones Unidas Contra la delincuencia organizada transnacional” y sus protocolos contra el tráfico ilícito de

migrantes por tierra, mar y aire y para prevenir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

El instrumento internacional más importante respecto a este tema es el citado Protocolo de Palermo, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional, que entró en vigor a nivel internacional en diciembre de 2003. Esto constituye un avance importante en la lucha contra la trata de personas, ya que aporta una definición completa de este fenómeno, así como los principales aspectos que permiten una adecuada protección a las víctimas, lo que deviene en que los países cuenten con una herramienta más completa al momento de elaborar leyes respecto de este delito.

Eso sí, que el protocolo de Palermo define en su artículo tercero letra a) como trata de personas, la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;

En cuanto al consentimiento, el mismo Protocolo de Palermo refiere en el mismo artículo 3 acápite b), que el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado a) del presente artículo, no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado.

Resulta menester destacar que aun cuando nuestra ley 20.507, no se indica de manera expresa que el consentimiento de la víctima no será tomado en cuenta cuando se haya incurrido en conductas de trata de personas, es un elemento que se debe analizar a la luz de los instrumentos internacionales vigentes en Chile, y determinar si se trata de un consentimiento libre, aceptado por una persona con plenas facultades

para tomar una decisión, o existen constreñimientos que limitan su voluntad y que pueden hacer que tome una decisión que en condiciones más favorables no hubiere tomado. Esto implica, como plantea el Protocolo de Palermo, que el consentimiento no debe ser tomado en cuenta cuando se ha recurrido a cualquiera de las formas descritas en la definición de trata para efectuar el delito, es decir, la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad.

Nuestro Código Penal en el artículo 411 quáter consagra el delito de trata de personas de la siguiente manera: “el que mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra capte, traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a esta, o extracción de órganos, será castigado con la pena de reclusión mayor en sus grados mínimo a medio y multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales”.

De las normas transcritas, se desprende que el delito en estudio se desarrolla en un proceso en el cual es posible distinguir cuatro etapas, que se resultan de utilidad para efectos de determinar la existencia de un delito de trata de personas con fines de explotación sexual y que son las siguientes:

a) Captación: la víctima puede ser captada mediante engaño, haciéndole promesas de trabajo que luego no son tales, o a través de otros medios (incluidos medios violentos como intimidación, coacción o abuso de poder).

b) Traslado: la víctima es trasladada desde su lugar de origen, que puede ser con o sin cruce de frontera y en ambos casos lo que se busca es provocar el desarraigo de la víctima para que quede en una situación de desprotección al no contar con redes personales, sociales y/o institucionales de apoyo.

c) Acogida: es el acto de recibir en forma transitoria o como destino final a la víctima.

d) Explotación: consiste básicamente en la utilización de una persona en provecho propio (económico).

Adicionalmente, se entiende por explotación sexual a aquella situación en que un tercero obtiene beneficios financieros, comerciales o de otro tipo a través de la participación forzada de otra persona en actos de prostitución, servidumbre sexual, actos de pornografía y la producción de materiales pornográficos.

2.- Calificación de hechos N° 1 (primera parte), 2, 6, 9, 11, 14, 15 y 17 constituyen delitos consumados y reiterados del artículo 411 ter del Código Penal.

Que, el artículo 411 ter del Código Penal, castiga a quien promoviére o facilitare la entrada o salida del país de personas para que ejerzan la prostitución en el territorio nacional o en el extranjero, con la pena de reclusión menor en su grado máximo y la multa de 20 unidades tributarias mensuales.

Se trata de un delito pluriofensivo, en que se afecta gravemente una multiplicidad de bienes jurídicos vinculados a la dignidad humana, tales como, la vida, la libertad, la seguridad personal y la libertad sexual y de trabajo.

Como ya se apuntó, este delito introducido por la ley 20.507 contempla una sanción para quienes participen en la trata de personas. Sin embargo, en este artículo el legislador, cuenta con menos requisitos a cumplir (o medios y finalidades) en relación con el artículo 411 quáter, por cuanto de igual manera (aunque con menor sanción) pretende reprochar con una sanción penal quienes faciliten o promuevan la prostitución.

Cabe apuntar que las expresiones o verbos rectores de promover o facilitar son comprensivas de acciones que facilitan o proporcionan algo, o “hacen posible la ejecución de algo” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua). Y es aquí en donde es relevante entender el contexto de la norma, ya que lo que pretende la normativa nacional e internacional es prohibir y sancionar a colaboren activamente en

el traslado de personas, para que éstas ejerzan la prostitución, no exigiendo que tenga un determinado fin, ni aún un beneficio propio para el tratante. No se debe perder de vista que la ley 20.507 no solo pretende sancionar la trata con fines de explotación sexual, sino todo tráfico o trato humano, inclusive tipifica expresamente el tráfico de migrantes en el artículo 411 bis del Código Penal.

En consecuencia, los únicos elementos que requieren ser acreditados son el haber dispensado de alguna ayuda o medio, o haber ofertado o promocionado el ingreso o salida del país y; que el objetivo de ese movimiento es que la persona ejerza la prostitución, sin que tampoco sea requisito del tipo que se compruebe su efectivo ejercicio.

Como se demostró en considerando de valoración de la prueba, quedó ampliamente demostrado que la acusada María Sosa Aquino ofreció otorgarles una oportunidad laboral ejerciendo la prostitución a su cargo, les pagó los pasajes (en bus o aéreos) a Yeruti, Norma, Laura (LVA), Analía, Arnal, Jannyré, Araceli y Laura (LEA), (víctimas de los hechos 1 (primera parte), 2, 6, 9, 11, 14, 15 y 17) y además colaboró a que ellas pudieran cumplir su objetivo de ejercer la prostitución (publicándolas en páginas web de ofrecimientos de servicios sexuales y/o disponiendo de medios y recursos para el efectivo ejercicio de la prostitución).

3.- Calificación jurídica de los hechos 6, 12 y 16.

Que, estos hechos, son constitutivos de un delito consumado y reiterado de trata de personas, ilícito contenido en el artículo 411 quáter del Código Penal, que requiere para su configuración que, mediante coacción, se capte, traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a ésta, o extracción de órganos.

Se trata de un delito pluriofensivo, en que se afecta gravemente una multiplicidad de bienes jurídicos vinculados a la dignidad humana, tales como, la vida, la libertad, la seguridad personal y la libertad sexual y de trabajo.

En relación con los verbos rectores, resulta ilustrativo el Manual Sobre la Investigación del delito de Trata de Personas, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el Delito, que contiene un glosario de las diversas conductas que resultan de relevancia para esta clase de ilícitos. Es así como cuanto al verbo rector captar señala el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa “atraer a alguien, ganar la voluntad” y conforme al Manual sobre la Investigación del Delito de Trata de Personas de la ONU, “la captación en la trata de personas presupone reclutamiento de la víctima, atraerla para controlar su voluntad para fines de explotación”.

En lo que dice relación con el traslado, el Diccionario citado, lo define como “llevar a alguien o algo de un lugar a otro” y el Manual de la ONU, lo entiende como “mover a una persona de un lugar a otro utilizando cualquier medio disponible (incluso a pie), enfatizando “el cambio que realiza una persona de comunidad o país. En este sentido este concepto se acerca con mucha precisión a la mecánica de desarraigo. Para efectos jurídicos se debe especificar que esta actividad puede realizarse dentro del país o con cruce de fronteras”.

Respecto a acoger o recibir, se define como “admitir en su casa a alguien” y según el Manual de la ONU, el término “se enfoca en el recibimiento de víctimas de trata de personas. El receptor las oculta en un escondite temporal en tanto se reanuda el viaje hacia el destino final o las recibe y mantiene en el lugar de explotación”.

Acorde a lo reseñado, María Sosa captó a sus víctimas, mediante contactos por redes sociales, o WhatsApp, y por ese medio, lograba hacer una oferta de trabajo tentadora, de ganar un monto de dinero considerablemente mayor al que les era posible a estas víctimas en su país dada su situación profesional, de educación, familiar, etcétera. Si bien, existieron indicios de que María daba “comisiones” o “porcentajes” por el “dato” sobre alguna paraguaya (como ocurrió con la conversación con un sujeto de nombre Freddy, e incorporado como Prueba Material), aquello no logró ser probado. Lo que sí se acreditó es que María ya contaba con cierto nombre, especialmente en el medio en que se genera el comercio sexual. Por ello, es explicable

que, por ejemplo, Hilda llegue a ella por intermedio de su hermana, quien había ejercido la prostitución con la acusada en España. Si sabía de alguien que tenía interés de ejercer la prostitución, ciertamente se contactaba con ella o encomendaba su contacto, como ocurrió en el caso de Samantha con la también víctima Yeruti. Por ende, la información sobre su actividad ya circulaba entre cierto grupo de personas (vulnerables) y es así que se dio lugar a un sistema de “boca a boca” que permitía a su vez el proceso de captación, cuyo fue el caso.

En cuanto a los medios comisivos que califican este tipo penal, se verificó en la especie el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. Fue acreditado en el transcurso de las audiencias de juicio Samantha, Hilda y Sonia provenían de familias disfuncionales y pobres, en donde no existía el debido aseguramiento de las condiciones de vida mínimas. Todas ellas, ya sea para cubrir necesidades vitales esenciales o bien para cubrir los gastos de mantenimiento de hijos, familiares o bien intentar cambiar el rumbo de su vida laboral, tomaron la decisión de abandonar su país y venir a Chile en búsqueda de mejores alternativas de vida. cabe reiterar aquí, que la palabra necesidad fue utilizada por todas las víctimas a la hora de relatar sobre sus razones para ejercer la prostitución. La falta de recursos, de redes de apoyo, sumado a una sensación de incerteza, hicieron que estas mujeres no lograrán ponderar adecuadamente los riesgos de la actividad en la que se estaban involucrando, ni adoptar otras medidas de autocuidado que fueran eficientes. De hecho, su situación de vulnerabilidad es tal, que hasta les impide considerarse a sí mismas como víctimas.

Por otra parte, su género y su calidad de migrante, por cierto, las dejaban en una situación aún más vulnerable, ya que desconocían el país, sus costumbres y sus leyes, y en todo momento estuvieran sujetas a control y sometimiento, lo que configura en ellas una situación de desarraigo que permite a su vez, que sean explotadas.

La fase subjetiva del delito dice relación con que debe existir una finalidad de explotación sexual, es decir la obtención de beneficios económicos o financieros, a través de la participación no voluntaria y continua, de otra persona en actos de prostitución, desprendiéndose de ello que los autores deben actuar con dolo directo, lo

que se acreditó por cuanto la acusada María Sosa, ejecutó constantemente actos tendientes a la captación, acogida, traslado y recepción de mujeres paraguayas, que implicaban hacer una oferta de trabajo, quedarse luego con la mitad de las ganancias, controlarlas en movimientos y en el ejercicio de la prostitución propiamente tal, controlándolas por medio de recriminaciones, pero por sobre todo, conociendo y tomando provecho de su situación de vulnerabilidad es que pudo explotar a las víctimas ya mencionadas, para así obtener réditos económicos.

VIGÉSIMO. *Iter Criminis.* Que, en cuanto al grado de desarrollo de los delitos, estos fueron consumado en cuanto la imputada logró dar término al curso causal de los acontecimientos en cada uno de los casos.

VIGÉSIMO PRIMERO. *Participación.* Que, la participación de la acusada María Sosa en los delitos arriba descritos resultó plenamente acreditada, con los mismos medios de prueba indicados, todo lo que permite establecer su participación en los ilícitos por los cuales fue acusada, en los términos del artículo 15 N° 1 del Código Penal.

VIGÉSIMO SEGUNDO. *Rechazo de las alegaciones de la defensa.* Que, en consecuencia, se desestiman las alegaciones de la defensa de ilicitud de la prueba a consecuencia de vulneración de garantías constitucionales, por estimar que tales circunstancias no se verificaron en la especie, y que por el contrario, las diligencias de entrada, registro e incautación de evidencias ejecutadas por la Policía de Investigaciones de Chile el día 27 de noviembre de 2019 lo fueron sin desapego a lo previsto en el artículo 205 del Código Procesal Penal, sin que tales actuaciones hayan vulnerado garantía alguna de la acusada.

De igual modo, se niega lugar, a la solicitud de absolución fundado en la supuesta inexistencia de los verbos rectores que exigen los tipos penales prescritos en los artículos 411 ter y 411 quáter del Código Penal, dado que como se ha razonado precedentemente, se logró acreditar de manera suficiente la promoción o facilitación para el ingreso de las víctimas a Chile, con el objeto de ejercer el comercio sexual, y además en relación a tres víctimas correspondientes a aquellas consignadas en los

hechos 7, 12 y 16 de la acusación, se logró probar cada uno de los presupuestos del tipo penal de trata de personas, a saber, la captación de las víctimas, la utilización de un determinado medio comisivo (en este caso, el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las afectadas) y la explotación sexual a la que fueron sometidas. Contrariamente a lo que expresara la defensa, la etapa de captación o de “contacto” en el delito de trata de personas se puede materializar en un número indeterminado de acciones, no exigiéndose por el tipo que el agente sea quien personalmente busque, llame y transporte directamente a las víctimas. Tal y como lo señala el artículo 411quáter, se requiere en una primera etapa que el agente “capte, traslade, acoja o reciba personas”, admitiendo entonces como destaca la doctrina que esta primera fase se complete con acciones tales como recibir a una persona, que surge voluntariamente y por medio del “boca a boca” en relación con la red de recursos existente. (*Orbegozo O., Izaskún. “La trata de personas y/o prostitución: perspectiva de género”, Editorial Académica Española, 2012, p. 21*).

Precisamente, dadas las características del fenómeno de la trata de personas, en donde de manera habitual, pero no exclusiva, se verifican esta clase de comportamientos, es que el legislador de la ley 20.507 utilizó verbos rectores alternativos y no copulativos, que abarquen de manera suficiente el contacto o captación inicial necesario, ya que se hace cargo de un fenómeno que se vincula con otros de tanta complejidad como la migración irregular, la instrumentalización de personas en condición vulnerable (mayoritariamente mujeres y niños) y el establecimiento de comercios tan reprochables como la explotación sexual, los trabajos forzados o la extracción ilegal de órganos, entre otros. Tal entendimiento, además, es el único que surge como armónico con la legislación internacional vigente y ratificada por Chile, normativa dentro de la cual destaca el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada”, cuerpo legal que precisamente en su artículo 3° prohíbe tener en cuenta el consentimiento dado por

la víctima a toda forma de explotación intencional, incluyendo la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual, conforme la letra a) del mismo artículo.

Subsecuentemente, las exigencias del tipo penal que según la defensa deben concurrir, no son admisibles de considerar en la especie, conforme la autoridad legal expresa de estas disposiciones internacionales, integrantes de la ley chilena desde la fecha de su ratificación y publicación, es decir, desde el 16 de febrero de 2005, según el tenor del Decreto 342 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Que finalmente, se rechazan las alegaciones de error de prohibición formuladas por la defensa, dado que, para que encontrarnos en dicha hipótesis se requería acreditar que el autor sabía lo que hacía, pero supuso erradamente que le estaba permitido. Luego, “lo determinante es la cuestión de si el autor tuvo la posibilidad de evitar el error, con sus capacidades y conocimientos individuales y en cumplimiento de los deberes jurídicos que le cabían en su posición” (Otto, Harro. *“Manual de Derecho Penal”*, Editorial Atelier, 2017, p. 342). En el caso que nos convoca y dado los conocimientos por su propia historia de vida, relatada a lo largo de su declaración, surge como poco verosímil que la acusada haya desconocido la antijuridicidad de su actuar, ya que, por el contrario, ella de manera mucho más palmaria que otras personas que no han tenido contacto con el comercio sexual, estaba en posición de informarse y conocer las consecuencias de un comportamiento como el que desplegó. No se vislumbra cómo pudo darse un error de prohibición, y ser éste además inevitable, razones que conducen al convencimiento que, por el contrario, si conocía el riesgo jurídicamente prohibido, y que lo ejecutó con pleno conocimiento de sus consecuencias, esto es, con dolo directo.

VIGÉSIMO TERCERO. *Motivos de Absolución por los delitos del artículo 411 ter del Código Penal relativo a los hechos 1 (segunda parte), 3, 4, 5, 8, 10 y 13.* Que, la absolución por el por estos delitos, obedece a la circunstancia que se estimó que la prueba fue insuficiente para establecer la descripción de la acusación.

En efecto, y sin perjuicio de contar con probanzas indiciarias en el caso de las demás afectadas, esto es, aquellas mujeres de nombres Lida, Catalina, Nilda, Marisel,

María, Ana Catalina, Liz y Ana Lía, no logró probarse por el Ministerio Público el efectivo despliegue de conductas de parte de la acusada para facilitar o promover el ingreso a Chile de dichas mujeres con el objeto de que se dedicaran a la prostitución, resultando su inclusión en un listado proveniente de la empresa “sexo.cl” (documento N°41) como insuficiente para sustentar la acusación en relación a estas presuntas víctimas. Respecto a la gran parte de ellas, no se contó con declaración alguna para conocer con certeza sobre su ingreso a Chile y sobre qué medios o recursos fueron entregados por la acusada además de la publicación en la página “sexo.cl”. No se contó con comprobantes de pasajes ni aun con comprobantes de dinero o información sobre movimientos migratorios que permitiera acreditar el ingreso al país y la facilitación o promoción de parte de la acusada.

Cabe hacer presente que en el caso de la víctima del hecho 3, existen envíos de dinero de parte de la acusada (acreditados con el Documento N° 72) pero éstos fueron realizados en fechas diversas a los que se consignó en la acusación. Si bien, puede ser indicio de vinculación, por congruencia, no puede darse por probado este hecho.

Que respecto de las víctimas de los hechos 5 y 8, existen envíos de dinero realizados por parte de la acusada, en las fechas en que se indica en la acusación, sin embargo, no se contó con ningún medio de prueba válido que permitiera corroborar sobre su efectivo ingreso al país.

VIGÉSIMO CUARTO. Prueba Desestimada. Que, las siguientes pruebas, si bien fueron analizadas por el tribunal, se estimó que no resultaron idóneos para sustentar los fundamentos de condena o absolución.

1.- Prueba Documental N° 32 y 33, consistentes en correos electrónicos de la empresa Google, informando sobre el uso de la cuenta de correo “manisosa”. Esta prueba resultó sobre abundante, ya que se presentó un importante número de publicaciones, oficios y antecedentes de información bancaria, respaldando este hecho.

2.- Prueba Documental N° 43, consistente en un Listado formato Excel de mujeres vinculadas a la agencia Preciosas. Dentro de la etapa de prueba, los intervinientes estuvieron contestes que este listado, estaba contenido en los Anexos de

uno de los Informes Policiales contenidos en la carpeta de investigación, sin embargo, dado el contenido de su información, (datos de ingresos y salidas al país especialmente), resultaba de vital importancia conocer como se había elaborado ese documento, por quién, con que fuentes se había realizado, entre otros aspectos, y si bien, declararon dos oficiales de caso y otros tres policías que participaron en diligencias, a ninguno de estos testigos se le hizo reconocer o analizar el mencionado listado. Por ello, y atendida la incompletitud e incerteza sobre su origen y elaboración, no se le asignará valor y se lo desestima.

3.- Prueba Documental 69 y 70 (Oficios de Gendarmería de Chile). Que en nada aportó al esclarecimiento de los hechos la información sobre la identidad de personas que efectuaron visitas a la acusada durante su prisión preventiva, y por tal razón, se la desestima.

4.- Otros Medios de Prueba N° 42, consistente en una publicación de una mujer apodada “Barbie”. Que, ninguno de los testigos que vio esta imagen afirmó con certeza de quien se trataba, ya que, además, por la mala calidad de la imagen, impide que se la compare debidamente con la imagen de otras víctimas, y ponderando además el hecho de que a lo largo del juicio se escucharon al menos tres mujeres que usaban el seudónimo de “Barbie”, dicha prueba por sí sola no fue capaz de acreditar la identidad de una víctima determinada, menos aún su actividad, y por ello, se la desestima.

VIGÉSIMO QUINTO. Audiencia dispuesta en el artículo 343 del Código Procesal Penal. Peticiones. Que, en la audiencia prevista en el artículo 343 del Código Procesal Penal, los intervinientes formularon las siguientes peticiones:

En primer término, el Ministerio Público indicó que tal y como se apreciaba de la acusación, a su juicio únicamente procede la atenuante de responsabilidad dispuesta en el artículo 11 N°6 del Código Penal, esto es, la irreprochable conducta anterior y que, por ende, mantiene sus peticiones de pena, es decir, la de 13 años de reclusión mayor en su grado medio y multa de 100 U.T.M., más accesorias legales, en tanto autora de delitos consumados y reiterados del artículo 411 quáter del Código Penal. Pidió que el tribunal tuviera especialmente presente lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal,

considerando las conclusiones de las pericias efectuada a las víctimas Samantha y Sonia. Asimismo, en relación con la condena que procede por los delitos consumados y reiterados del artículo 411 ter del Código Penal, pidió la pena de 7 años de reclusión mayor en su grado mínimo, multa de 20 U.T.M. y accesorias.

Para el evento de que la defensa pidiera la concurrencia de la circunstancia minorante del artículo 11 N°8 del Código Penal, se remitió a lo expuesto en sede de clausuras, reiterando que no se da ninguno de los presupuestos dados en la norma, ya que el día anterior a su presentación en el tribunal, se había despachado orden de detención en su contra, se rindió prueba para demostrar que un funcionario de Carabineros notició a la acusada de la existencia de dicha orden y que aun cuando compareció al tribunal no lo hizo para los efectos de confesar el delito, ya que, como señaló en la declaración que prestó en estrados, pensaba que comparecía con motivo de una deuda.

Que la querellante particular se adhirió a cada una de las peticiones que efectuó la fiscalía, haciendo hincapié en las pericias presentadas relativas al daño por el que tuvieron que pasar las víctimas que representa.

Que la querellante INDH mantuvo su petición de pena, es decir, la de 15 años de reclusión mayor en su grado medio, atendida la pena asignada al delito y al hecho de que únicamente concurre una circunstancia atenuante (la del artículo 11 N°6).

Hizo presente que en relación con una eventual petición de la minorante del artículo 11 N°8 del Código Penal aquella procede cuando existe una actitud activa de quien comete un delito, quien además se encuentra en posición de evadir la acción de la justicia. En este caso, la acusada no estaba en condiciones de eludir la acción de la justicia, toda vez que existía una orden vigente, y que enfrentada al tribunal no confesó en delito ni colaboró con la investigación.

En la misma línea, y para el evento de que la defensa solicite la atenuante del artículo 11 N°9 del Código Penal, la querellante también solicitó su rechazo, por cuanto no se ha verificado una colaboración de carácter sustancial. La acusada Sosa, a juicio de dicha acusadora, mostró una actitud refractaria al no entregar especies de

importancia para la investigación, como, por ejemplo, su teléfono, y las declaraciones que prestó durante la investigación buscaron eludir o justificar su actuar, antes que cooperar con el esclarecimiento de los hechos.

Finalmente, pidió que esta Sala tuviera en vista lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal, sobre la extensión del mal causado, la cantidad de delitos, el daño que en las afectadas ha de permanecer y que además se trata de vulneraciones a los derechos humanos de las víctimas, cuyo daño es crónico y permanente, en donde no solo existen secuelas asociadas al trauma sino también un profundo daño a su dignidad. De acuerdo con lo que permite el artículo 351 del Código Procesal Penal sobre reiteración, y existiendo la posibilidad de aumentar la pena en uno o dos grados, la querellante pidió que se aumentara la sanción en un grado y que en dicho rango se aplicara la pena máxima.

Por su parte la defensa, efectuó peticiones en torno a la concurrencia de circunstancias modificatorias minorantes. La primera, es que se considere como concurrente la atenuante de colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos, dispuesta en el artículo 11 N°9 del Código Penal. Para ello, dijo que la colaboración no debe ser analizada desde una óptica de participación, en tanto puede estar dada por varios factores. Su representada prestó declaración en tres oportunidades en fiscalía, contó cuál fue su función, dijo que contactos tuvo con ciertas víctimas, reconoció participación en actividades que se realizaban, reconoció las publicaciones, el arriendo de los departamentos, la recepción del 50% de las ganancias, entre otros aspectos y aquello no puede ser mirado como un antecedente vago, sino como una ayuda al tribunal para arribar a su decisión de condena. La acusada fue clara en mencionar como se efectuaron los contactos, y todo el desarrollo de las actividades que se consideraron durante el proceso. Así, la declaración prestada no es perjudicial para la investigación o pretendió desvirtuarla, por el contrario, aporta y colabora con la misma, y por ello para la defensa si existe una colaboración sustancial para que se reconozca que le favorece esta circunstancia atenuante.

De igual manera, pidió que se estimare como concurrente la circunstancia del artículo 11 N°8 del Código Penal, que es una norma que regula las consecuencias de una presentación voluntaria. A juicio de la defensa, la auto denuncia no está regulada en que se verifique en el mismo momento de la presentación, es decir, el 27 de noviembre de 2019. Efectivamente, ese día ya se había despachado una orden, pero lo cierto es que al día 27 no se había materializado, no se había hecho diligencia alguna por parte de las policías para concretarla. Entonces, cabe preguntarse, sin ejecutarse, ¿estaba en curso esa orden de detención?, como lo dijo el funcionario a cargo de las entradas y registros, de manera sorpresiva se enteraron de la presencia de la acusada en el tribunal y debieron armar los equipos rápidamente para constituirse en los domicilios. Esa orden pudo haber estado ahí varios días. Pero ella se presenta. Su defendida dijo que sabía de algún requerimiento, pero no conoce la entidad, sobre qué delito se trataba, lo que viene a reafirmar, lo dicho por María Sosa, es decir, sabiendo de un requerimiento pudo haber evadido, haber huido, pero su decisión fue otra, ya que lo que hizo fue concurrir hacia el tribunal, incluso va con su hijo pequeño a asumir su responsabilidad. Así, el día de su detención, no se le preguntó si quería prestar declaración. Sus pertenencias fueron entregadas a una tercera persona, que luego se las entregó a la policía. En consecuencia, la acusada no tenía control sobre mensajes o instrucciones posteriores.

Luego, pidió que se tuviera por concurrente la circunstancia reconocida por todos los intervinientes de irreprochable conducta anterior, dado que su representada no mantiene antecedentes penales ni en Chile ni en Paraguay.

Por ello, hizo dos peticiones diferenciadas, para el caso que el tribunal reconozca las tres atenuantes solicitadas o solo dos de ellas. Así, para los delitos del artículo 411 ter del Código Penal, con tres minorantes, solicitó que se imponga la pena de 541 días, conforme lo permite el inciso final del artículo 68 del Código Penal. Ahora bien, si el tribunal reconoce solo dos atenuantes, pidió que se le imponga la pena de tres años y un día, atendido lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 68 del Código Penal. En relación con la multa, pidió que se procediera a la rebaja prudencial de la

misma, por el ejercicio del artículo 70 del Código Penal, dado la presencia de varias circunstancias atenuantes y que para el pago de esta se otorguen parcialidades.

Luego, en el caso de las condenas por los delitos del artículo 411 quáter del Código Penal, pidió que el tribunal tuviera presente que en este caso existieron tres víctimas y que dos de ellas declaran por video grabación; que los informes psicológicos no son contestes en señalar la entidad, magnitud y permanencia del daño, así como sus consecuencias, por eso no se puede considerar una extensión superior, considerando la gravedad de los ilícitos. Si se accede al otorgamiento de tres atenuantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal, solicitó la imposición de una pena de tres años y un día, y si el tribunal accede a solo dos de ellas, la pena de cinco años y un día. En cuanto a la multa, indicó que, si el tribunal entiende que su representada debe soportar una pena de cinco años y un día, aquella será efectiva y por lo mismo, no podrá pagar la multa, solicitando desde ya que se le exima del pago de las multas. Ahora bien, si la pena resulta ser una de tres años y un día, pidió que se consideren las circunstancias minorantes para los efectos de una rebaja prudencial de las multas al mínimo, atendido el tiempo de privación de libertad de su defendida.

Finalmente, pidió que no se acceda a la condena en costas, considerando que su representada no resultó totalmente vencida y hubo hechos en que resultó absuelta.

En cuanto al cumplimiento de la pena, si el tribunal accede a las penas indicadas por la defensa con la concurrencia de tres atenuantes, es decir, a una pena de 541 días y otra de 3 años y un día, surge como posible la Libertad Vigilada Intensiva, dado que ambas penas no superarían los cinco años y se darían cada uno de los requisitos dispuesto en los artículos 15 y 15 bis de la ley 18.216. Para estos fines, aportó un “Informe Presentencial”, -de corte socioeconómico y psicológico-, destacando la presencia relevante de las redes familiares de la sentenciada y el hecho de contar con recursos psicológicos adecuados, sugiriendo como conclusión, que resulta adecuado el establecimiento de una condena en el medio libre.

En relación con la demanda civil, la defensa insistió en que se debió acreditar el monto de los perjuicios demandados, dado que la acción debe tener por objeto de

indemnizar y aquello no logró probarse adecuadamente. Por ello, indicó que respecto de la víctima Samantha se fijaran los perjuicios en la suma de \$800.000 (correspondiente al monto que la propia Samantha reclamó en su denuncia), y respecto de las demás afectadas, no existiendo como evaluar los perjuicios demandados, se fijara una suma prudencial.

Que las peticiones de la defensa precedentemente apuntadas contaron con la oposición del Ministerio Público, ya que la fiscal manifestó que no se dan ninguno de los presupuestos de las atenuantes invocadas, especialmente la del artículo 11 N°9 del Código Penal. Hizo presente que en este juicio se ha condenado por hechos que datan del año 2017, y que se dieron una multiplicidad de denuncias, debido a que las actividades ilícitas de la acusada se venían realizando por un largo tiempo. Con todo, en la audiencia de control de la detención se le preguntó a María Sosa si sabía de la existencia de una orden de detención en su contra y sobre la ubicación de su teléfono y ella guardó silencio. Fue necesario, después de la audiencia de formalización pedir el levantamiento del secreto bancario, ya que ella no colaboró con dichos antecedentes. Tal como expresó, la propia acusada en la declaración que prestó en este juicio no entregó la clave de su teléfono y nunca se obtuvo información en relación con dicho aparato. Además, en su declaración, dijo que es la primera vez que señalaba ciertos hechos, por lo que no se aprecia de qué manera pudo haber colaborado sustancialmente.

La fiscal Suazo destacó que, si bien el artículo 351 del Código Procesal Penal permite elevar la pena en uno o dos grados, aquello no es obstáculo de considerar que se trata de un número considerable de delitos y de víctimas. Finalmente, indicó que, para los efectos del eventual otorgamiento de penas sustitutivas, el tribunal tuviere presente que la acusada registra una investigación vigente por el delito de lavados de activos, en donde además tendrá una audiencia próxima, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el próximo 3 de enero de 2022.

A su turno, la querellante particular expresó que en la decisión de condena comunicada por el tribunal ya se establecieron los delitos y la procedencia de una

indemnización, relevando que el daño moral no puede ser cuantificado en documentos, por ello, solo puede considerarse las pericias de daño ya presentadas.

La querellante INDH se remitió únicamente a lo ya dicho, manteniendo sus peticiones de condena en los términos ya consignados.

VIGÉSIMO SEXTO. *Decisión sobre las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal invocadas.* Que, todos los intervinientes estuvieron contestes en reconocer la procedencia de la circunstancia atenuante dispuesta en el artículo 11 N°6 del Código Penal, esto es, la irreprochable conducta anterior. Que, únicamente cabe reconocer que no se hicieron valer durante el desarrollo de este proceso antecedentes pretéritos de la acusada que permitieran conocer de reproches penales anteriores, ni cualquier otro, razones por las que el tribunal reconocerá que la minorante en comento le favorece a María Sosa Aquino.

Que, en cuanto a la circunstancia prevista en el numeral octavo del artículo 11 del Código Penal, para que ésta concurra es necesario que “si pudiendo eludir la acción de la justicia por medio de la fuga u ocultándose, se ha denunciado y confesado el delito”.

En consecuencia, el legislador premia a quien de manera activa e inequívoca aliviane la labor de los tribunales, policías o Ministerio Público, no solo negándose a huir u ocultarse (teniendo objetivamente la posibilidad de hacerlo), sino que además tome un rol protagónico en el proceso, encabezando su propia denuncia y entregando información relevante por la vía de la confesión del ilícito perpetrado. En la especie, resulta cuestionable que se pueda considerar en primer término, que la acusada Sosa Aquino haya estado en condición de huir u ocultarse, debido a que durante el mes de noviembre del año 2019 ya era objeto de medidas intrusivas, tales como seguimientos e interceptaciones telefónicas y se desplegaba a su respecto y por cerca de dos años, investigaciones originadas por más de una denuncia. Se estableció también que el día 27 de noviembre de 2019, en horas de la mañana, recibió la visita de una persona que se identificó como carabinero en la consejería de su domicilio ubicado en Santa Rosa 170 de la comuna de Santiago, tal y como dieron cuenta las oficiales de caso Carolina

Gatica Urrea y Nicole Salinas Salinas, antecedente que fue refrendado por las imágenes que se exhibieron como Otros Medios de Prueba 80.

Así las cosas, no parece como plenamente posible que María Sosa Aquino haya estado efectivamente en la condición de poder desplazarse libremente para los efectos de ocultarse o esquivar la acción de la justicia, ya que, como se señaló reiteradamente por los funcionarios policiales que depusieron en estrados, el día 26 de noviembre de 2019 se despachó por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una orden de detención en su contra.

Pese a ello, quedó demostrado durante la declaración que la acusada Sosa prestó en esta sede, y gracias a los ejercicios previstos en el artículo 332 del Código Procesal Penal que el día de su presentación ante el tribunal de garantía el citado 27 de noviembre de 2019, si fue requerida en torno al otorgamiento de información de interés para poder esclarecer los delitos que había perpetrado, amparándose ésta en su derecho a guardar silencio. Si bien, es un derecho de todo imputado el ejercer dicha prerrogativa es irrefutable que el legislador penal premia a quien, -renunciando a tal derecho-, decide cooperar con la investigación, pero no solo confesando sus acciones, sino que además activando el actuar estatal, por la vía de una denuncia. Nada de aquello resultó probado, ya que incluso en este juicio, la acusada relató desconocer por qué se la buscaba, creyendo que aquello correspondía al cobro de una deuda con una institución de salud. Es decir, habría asistido al tribunal para imponerse de una supuesta situación desconocida, y una vez noticiada del estado procesal en el que se encontraba, nada hizo para aportar a la investigación, por lo que mal podría considerarse que se encuentra en la hipótesis del artículo 11 N°8 del Código Penal, rechazándose en consecuencia, esta petición de la defensa.

Que, en cuanto a la solicitud de tener por concurrente la atenuante del artículo 11 N°9 del Código Penal, esto es, la colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos, corresponde tener presente que para que ella proceda, debe haberse otorgado por el imputado(a) un aporte de valía, que permita tanto al ente persecutor como al tribunal representarse los hechos materia del proceso, resolver o superar dudas

o hechos oscuros, mitigar la carga del Ministerio Público, de manera que su intervención sea algo más que reconocer aquello que le acusa, para convertirse en una contribución esencial en la convicción que debe formarse en los sentenciadores.

Sobre este aspecto, si bien la acusada Sosa Aquino rindió más de una declaración ante el Ministerio Público durante el curso de la investigación y por más de una jornada en estrados, lo cierto es que sus dichos fueron claramente encaminados a demostrar que la realidad de los hechos era otra y no aquella que terminó siendo probada. Acusó constantes olvidos sobre el conocer la identidad de varias de las víctimas, tampoco recordó el haberles enviado dinero, indicó que la actividad que ella desplegaba era una práctica similar a una ayuda caritativa, toda vez que dijo que solo les “tendió la mano” a sus connacionales, antes que reconocer la actividad de explotación sexual que resultó acreditada. Como señaló el Ministerio Público, resultó necesario solicitar autorización judicial para el desarrollo de prácticas intrusivas como la entrada y registro e incautación de especies o el levantamiento del secreto bancario, oficiar a más de una institución o empresa, obtener la declaración de decenas de personas en calidad de testigos y peritos, para poder sustentar la acusación y permitir que los hechos que resultaron probados fueran fundamento de la condena que nos convoca. Hasta el último momento, la acusada intentó justificar su acción en la existencia de un negocio, en donde cada víctima trabajaba de manera independiente, todo lo cual antes que contribuir al esclarecimiento de los hechos, provocó más análisis y más alegaciones de las que hacerse cargo, tanto para todos los intervinientes como para el tribunal. Luego, tales acciones no pueden ser consideradas como una colaboración, menos aún, una de carácter sustancial, motivos que conducen a que esta petición de la defensa sea también desestimada.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. *Determinación de la pena.* Que, el artículo 411 ter del Código Penal castiga a quienes promuevan o faciliten el ingreso o salida del país de personas para que ejerzan la prostitución en el territorio nacional o en el extranjero, con la pena de reclusión menor en su grado máximo y multa de 20 U.T.M.

Que, en la especie, cabe hacer aplicación del artículo 351 del Código Procesal Penal atendida la reiteración de delitos, ponderando además que esta norma aparece como más favorable a la acusada que la regla prevista en el artículo 74 del Código Penal. Que, pudiendo el tribunal aumentar la pena uno o dos grados, se procederá a elevar la sanción dispuesta en un grado, quedando entonces el rango aplicable en la reclusión mayor en su grado mínimo.

Que, al concurrir únicamente la atenuante del artículo 11 N°6, por así obligarlo el inciso segundo del artículo 67 del Código Penal, se aplicará la sanción en su minimum, y por considerarlo más apropiado a las circunstancias particulares del caso (número de delitos y de víctimas y extensión en el tiempo del despliegue del ilícito), se impondrá la pena de 7 años de reclusión mayor en su grado mínimo.

Que, en cuanto a la multa, se consideró que el periodo que la acusada ha permanecido privada de libertad (de manera ininterrumpida desde el 27 de noviembre de 2019) han mermado considerablemente sus facultades económicas, por lo que se hará aplicación de la facultad que otorga el artículo 70 del Código Penal y se hará rebaja de la multa a un monto menor al mínimo legal, determinándola en la suma de 10 U.T.M. Se confiere desde ya el pago de 10 parcialidades iguales mensuales y sucesivas para su pago, debiendo enterar la primera de ellas al quinto día de ejecutoriado que sea esta sentencia, quedando su incumplimiento sujeto a las sustituciones previstas en el artículo 49 del Código Penal.

Que, por su parte, el artículo 411 quáter del Código Penal castiga a los autores del delito de trata de personas con la pena de reclusión mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cincuenta a cien U.T.M.

Que, haciendo aplicación de la regla de la reiteración prevista en el artículo 351 del Código Procesal Penal, se procederá a elevar la pena en un grado desde el mínimo asignado por la ley, quedando ésta en el rango de la reclusión mayor en su grado medio. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 del Código Penal, al concurrir una única minorante (la del artículo 11 N°6 del Código Penal) y al igual que en el caso anterior, se impondrá una sanción en el minimum del grado.

Teniendo además presente, que el delito de que se trata es pluriofensivo, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal y no sólo se considerará el daño concreto en las víctimas sino también que estos delitos (perpetrados por la acusada durante un periodo considerable de tiempo) importa un atentado grave a la tarea de los Estados en la defensa y protección de los derechos humanos, motivos por los cuales se le impondrá la pena de 12 años de reclusión mayor en su grado medio.

Que, por las mismas razones esgrimidas precedentemente, se hará rebaja de la multa de manera prudencial (y de igual forma en un cincuenta por ciento desde el mínimo legal), de acuerdo a lo permite el artículo 70 del Código Penal, y se fija ésta en la suma de 25 U.T.M., concediendo para que sea enterada la cantidad de 10 parcialidades iguales mensuales y sucesivas para su pago, debiendo enterar la primera de ellas al quinto día de ejecutoriado que sea esta sentencia, quedando su incumplimiento sujeto a las sustituciones previstas en el artículo 49 del Código Penal.

VIGÉSIMO OCTAVO. *Cumplimiento y abonos.* Que, conforme lo dispuesto en los artículos 1° y siguientes de la ley 18.216, atendida la extensión de las penas corporales recién determinadas en el considerando anterior, su cumplimiento será de forma efectiva.

Que, se le reconoce a la sentenciada, como abono a las penas corporales que ha de sufrir con motivo de esta causa, el periodo de 748 días, correspondiente al periodo en que ha permanecido privada de libertad y sujeta a la cautelar de prisión preventiva, todo ello de acuerdo a lo consignado en el respectivo Certificado extendido por la jefa de la Unidad de Causas de este tribunal.

VIGÉSIMO NOVENO. *Decisión en torno a la demanda civil.* Que, aunque fuere un aspecto tratado en el veredicto corresponde de igual modo consignar que la abogada Carolina Torres Bascur, actuando en representación de las víctimas Samantha, Sonia e Hilda intentó demanda de indemnización de perjuicios a título de daño moral como consecuencia de la afectación provocada en las víctimas a resultados de los delitos contenidos en los numerales 7, 12 y 16 de la acusación.

Que, como se viene señalando, a juicio de esta Sala se consideró suficientemente probados los presupuestos fácticos y del tipo penal del artículo 411 quáter del Código Penal en relación con dichas víctimas.

Que únicamente cabe agregar que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2314 del Código Civil, el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito.

Que, es claro que al hablar de daño moral nos enfrentamos a una afectación o dolor en la integridad de una persona, afectación o vulneración en la que no se encontraría de no haber mediado la existencia del delito o cuasidelito perpetrado por el autor. Es indispensable, en consecuencia, que se acredite una conexión cierta entre el delito y el daño y que exista una relación de causalidad que los vincule. También se debe tener presente que los bienes jurídicos que se afectan, por su carácter inmaterial y vinculados a los sentimientos e intereses de los seres humanos, hacen que el dolor moral sea incuantificable y por lo mismo, resulta difícil ponderar su estimación, a la hora de resarcirlos, por cuanto, en muchos casos, los daños no son susceptibles de solución o remedio alguno.

Que en el caso que nos convoca, el daño provocado (tal y como se dio cuenta con la prueba rendida) lo fue a la dignidad de estas víctimas, que se vieron instrumentalizadas y cosificadas mientras fueron víctimas de explotación sexual. Se trata en efecto, de una afectación a parte de su patrimonio más básico, dado que estos delitos constituyen un atentado a sus derechos humanos, y es deber del Estado propender a su reparación y prevención (Convención Belem do Pará).

En consecuencia, y en el entendido de que ninguna suma reparará con eficacia los perjuicios morales sufridos, se hará lugar a lo solicitado por la demandante y se fijará prudencialmente una indemnización en dinero, ascendente a la suma de \$10.000.000 para cada víctima.

Esta suma, se reajustará conforme la variación del I.P.C., hasta que se verifique su íntegro pago a cada una de las afectadas. Deberá ser enterada en un solo pago, dentro de los sesenta días siguientes a la certificación de ejecutoriedad de esta sentencia.

TRIGÉSIMO. Costas. Que, no resultando condenada por la integridad de los hechos contenidos en la acusación y por haber soportado la integridad del juicio oral privada de libertad, se presumirá a la sentenciada en estado de pobreza y en consecuencia se la eximirá del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 7, 9, 11 N°6, 14 N° 1, 15 N° 1, 18, 21, 24, 26, 29, 50, 68, 69, 76, 411 ter, 411 quáter y siguientes del Código Penal y 47, 295, 296, 297, 340, 341, 342, 344, 346 y 351 del Código Procesal Penal; **SE DECLARA:**

I.- Que se **ABSUELVE** a MARÍA ELIZABETH SOSA AQUINO, ya individualizada, de la imputación de ser autora de los delitos consumados y reiterados del artículo 411 ter del Código Penal y contenidos en los numerales 1 (segunda parte), 3, 4, 5, 8, 10 y 13 de la acusación.

II.- Que se **CONDENA** a MARÍA ELIZABETH SOSA AQUINO, ya individualizada, a sufrir las *penas de siete años de reclusión mayor su grado mínimo y doce años de reclusión mayor en su grado medio* por su responsabilidad en tanto autora de los delitos consumados y reiterados de trata de personas de los artículos 411 ter y 411 quáter del Código Penal, respectivamente, los que fueron perpetrados entre el 4 de febrero de 2017 y el 27 de noviembre de 2019 en esta jurisdicción.

Que no concurriendo los requisitos contemplados en la Ley 18.216, deberá la sentenciada cumplir íntegra y efectivamente las penas privativas de libertad recién impuestas. Le servirá como abono a tales sanciones los días que ha permanecido privada de libertad con ocasión de esta causa, es decir, la cantidad de 748 días.

III.- Que se **CONDENA** a MARÍA ELIZABETH SOSA AQUINO, ya individualizada, al pago de dos *multas* ascendentes a 10 y 25 U.T.M. cada una y a las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y

derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares, mientras duren las condenas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Código Penal.

IV.- Que se **HACE LUGAR** a la demanda civil intentada por la abogada querellante particular Carolina Torres Bascur y por ello se **CONDENA** a MARÍA ELIZABETH SOSA AQUINO, ya individualizada, al pago de \$10.000.000 a favor de cada una de las víctimas de iniciales S.G.R., H.C. y S.C., a título de indemnización del daño moral provocado a tales demandantes.

V.- Que se exime a la sentenciada del pago de las costas de la causa.

Oficiese, en su oportunidad, a los organismos que corresponda para comunicar lo resuelto. Otórguense las copias autorizadas que sean procedentes y regístrese.

Redactada por la magistrado doña Isabel Espinoza Morales

Se previene que la magistrado Geni Morales Espinoza no comparte el párrafo final de la página 308 y que termina en la página 309, toda vez que en concepto de esta juez la explotación sexual, especialmente de mujeres y niños también se produce en sociedades en que la organización patriarcal ha ido cediendo paso a sociedades más equitativas en materia de género, en las que igualmente la explotación sexual se produce precisamente porque quien detenta el poder o la capacidad -hombre o mujer- de someter a otro, va a ejecutar esta conducta para obtener ingentes ganancias económicas.

RIT 98-2021

RUC 1700398060-K

PRONUNCIADA POR ESTA SALA DEL CUARTO TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO INTEGRADA POR DOÑA GENI MORALES ESPINOZA -QUIEN PRESIDÓ-, POR DOÑA MARÍA INÉS COLLIN CORREA Y POR DOÑA ISABEL ESPINOZA MORALES, TODAS JUEZAS TITULARES.